



MINISTERIO DE DEFENSA

**CUADERNOS
de
ESTRATEGIA**

100

INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

PANORAMA ESTRATÉGICO 1998/99



Noviembre, 1998

FICHA CATALOGRÁFICA DEL CENTRO DE PUBLICACIONES

PANORAMA estratégico 1998-1999 / Instituto Español de Estudios Estratégicos. — [Madrid] : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 1999. — 276 p. ; 24 cm — (Cuadernos de Estrategia ; 100).

NIPO: 076-99-047-4. — D.L. M. -13216-99

ISBN: 84-7823-654-6

I. Instituto Español de Estudios Estratégicos. II. España. Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica, ed. III. Serie.



Edita: Ministerio de Defensa
Secretaría General Técnica

NIPO: 076-99-047-4

ISBN: 84-7823-654-6

Depósito Legal: M-13216-99

Imprime: Imprenta Ministerio de Defensa

Tirada: 950 ejemplares

Fecha de edición: Abril 1999

**DIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICA DE DEFENSA**

**Instituto Español de Estudios
Estratégicos**

Grupo de Trabajo número 5/98

PANORAMA ESTRATÉGICO 1998/99

Las ideas contenidas en este trabajo son de responsabilidad de sus autores, sin que reflejen, necesariamente, el pensamiento del IEEE, que patrocina su publicación.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

Por Javier Pardo de Santayana y Coloma

Capítulo I

VISIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL 1998

Por Federico Fernando de Bordejé y Morencos

Capítulo II

LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

Por Javier Pardo de Santayana y Coloma

Capítulo III

EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

Por Ricardo Álvarez-Maldonado Muela

Capítulo IV

LA ESTABILIDAD EN EL MEDITERRÁNEO

Por Pedro López Aguirrebengoa

Capítulo V

IBEROAMÉRICA

Por José Sánchez Méndez

EPÍLOGO

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En la Introducción al Panorama Estratégico del pasado año señalábamos el interés del Instituto Español de Estudios Estratégicos por realizar esta publicación y la vocación de presencia que ésta tiene dentro del conjunto de documentos de la misma índole ya existentes en el ámbito internacional. Por eso, en este segundo número constatamos con satisfacción que se ha tomado la decisión de traducir nuestro Panorama al idioma inglés, lo que facilitará sin duda su difusión más allá de nuestras fronteras y especialmente entre nuestros aliados. Ello nos mueve a recordar el objetivo que nos hemos propuesto: deseamos reflejar un punto de vista español sobre los acontecimientos del año y, como es propio de un "panorama", destacar aquellas zonas sobre las que se proyecta preferentemente nuestro interés, sin renunciar a una visión global del mundo. Por eso mantendremos capítulos específicos sobre la construcción de Europa, la reforma en la zona central y oriental de nuestro continente, la estabilidad en el Mediterráneo y la situación estratégica en Iberoamérica.

Para cubrir la totalidad del año 1998 y no retrasar la publicación, en esta ocasión se ha iniciado la aplicación de una fórmula consistente en cerrar las colaboraciones a treinta de noviembre, lo que permite ir adelantando los trabajos de traducción y edición, y completarlas luego mediante un epílogo que recoge la parte correspondiente al mes de diciembre, habitualmente rico en acontecimientos de interés. Como ya se indicó en el Panorama anterior, la mención que se hace del año siguiente, en este caso de 1999, se justifica por los comentarios de carácter prospectivo y la previsión de algunos acontecimientos de importancia ya programados para el año entrante.

Esperamos que la publicación del segundo número suponga una consolidación de nuestro Panorama y que éste tome carta de naturaleza en el ámbito de los estudios estratégicos, enriqueciendo dentro de España el conocimiento de los asuntos relacionados con la seguridad y la defensa, y facilitando a estudiosos y personas interesadas de otros países, y especialmente entre nuestros aliados, una visión española del mundo en que vivimos.

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO

CAPÍTULO PRIMERO

VISIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL 1998

VISIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL 1998

Por FEDERICO F. DE BORDEJÉ Y MORENCOS

PERSPECTIVAS EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

El año 1998 ha sido un año de esperanzas y sinsabores; Ulster, Oriente Medio, Kosovo, etc., muchas de ellas, por desgracia, sin cumplirse, quizá porque si la diplomacia preventiva funcionó en ciertas áreas en otras no, allí donde los regímenes o grupos implicados no estaban interesados en alcanzar ciertos compromisos. Por otro lado, se confirmó que las tendencias dominantes en esta década —la interdependencia mundial dentro de la diversidad de la escena internacional, el creciente afianzamiento de la democracia y pluralismo político, la difusión del poder y la incapacidad de Occidente para prevenir y controlar los acontecimientos, no sólo en las regiones inestables en desarrollo sino también dentro de sus propias áreas de influencia— fueron una constante.

Europa Occidental se vio sometida a un proceso de cambio, invirtiéndose el modelo de años anteriores al ceder los gobiernos conservadores el poder a otros progresistas, caso de Alemania, Suecia e Italia, pero sin haberse llegado a afianzar los criterios sobre política exterior y de seguridad, aunque hayan aumentado las estructuras de defensa colectiva —OTAN, UEO, OSCE, Consejo de Europa, Asociación por la Paz— se haya reforzado la UE y ampliado esta y la Alianza Atlántica. El nacimiento de la Unión Monetaria no ha evitado que prosiga sin afianzarse la solidaridad comunitaria, puesta de relieve en el reparto de los Fondos de Cohesión, que se pretende negar a los países miembros más pobres, en las divergencias advertidas en el contencioso greco-turco o en las indecisio-

nes en Kosovo. Prosiguen, asimismo con escaso peso para intervenir en los problemas del Oriente Medio o África y sin desarrollar una asociación duradera con Norteamérica que evite luchas innecesarias al entrar en vigor la nueva moneda. Por ello, para contrarrestar las tentaciones unilateralistas de Washington y construir un sistema multilateral económico y de seguridad, Europa debe ser más fuerte y coherente y con ideas claras, única forma de que los Estados Unidos se sitúen en una posición equilibrada y adecuada para afrontar los retos del próximo siglo.

Norteamérica, a pesar de haberse visto sometida a turbias polémicas de carácter interno, se consolidó como superpotencia en todas las esferas, de la política exterior a la económica y militar, imponiendo paulatinamente en el mundo su modelo. Esto indica que al otro lado del Atlántico se practica una política realista, pragmática, de firmeza y continuidad en la gestión y dirección de sus estructuras y directrices que, a pesar de sus errores, la conducen a imponerse como única protagonista en los asuntos mundiales, bien demostrado en su intervención en la cuestión palestina, pacificación del Ulster, los Balcanes, o en el África subsahariana.

Por el contrario, Rusia no superó el azote de su corrupción, viéndose gobernada por un líder enfermo, en pleno caos económico y sometida a una crisis moral y social, factores que pudieran incidir negativamente en Europa, situación agravada por su desacuerdo en materia de seguridad ante la ampliación de la OTAN.

En los Balcanes, la crisis de Kosovo demostró que continúa siendo una zona inestable y fuente de permanente violencia y tensiones; mientras, en el Oriente Medio, la esperanza de una paz duradera parece haber llegado con los acuerdos de Wye, aunque sea pronto para poder asegurarlo. La crisis iraquí, la tensión turco-siria y la colaboración turca con Israel indican también que pueden surgir en cada instante acontecimientos imprevisibles.

El Japón vive momentos de gran incertidumbre, demostrándose la necesidad de un cambio radical en su modelo económico, financiero y social. En el Sudeste asiático e Indonesia, la grave crisis financiera iniciada el pasado año continua estancada y sosteniéndose esos países gracias a la ayuda exterior, crisis provocada por practicar una política de liberalización económica dirigida y controlada por el Estado.

En cuanto a China, aunque se ha visto afectada moderadamente por la crisis de los "dragones", camina lentamente pero con pasos firmes en su

desarrollo económico financiero e industrial, practicando una política de apertura a lo "oriental", con modelos muy diferentes en la política económica y de inversiones con respecto a la social, estimándose que tardará algún tiempo en alcanzar una plena democratización y pluralismo político.

En la India, los partidos regionalistas ganaron posiciones mientras los estatales atrajeron el rechazo de los electores, produciendo con sus pruebas nucleares una escalada que indujo al Pakistán a imitarla, recrudeciéndose así la tensión entre ambos países. En Asia, si Occidente no fue capaz de frenar dicha escalada, en Irán se asistió a ciertas aperturas en su política interior y especialmente en la exterior, mientras en Afganistán y norte de África, principalmente en Argelia y Sudan, el islamismo radical ganó terreno, mostrándose el mundo incapaz de detenerlo.

En África Subsahariana, los conflictos no se apagaron: Sudan, Eritrea, Etiopía, Somalia, Sierra Leona, Guinea Bissau, etc, afianzándose Sudáfrica, Uganda y Nigeria como potencias regionales capaces de actuar e influir lejos de sus fronteras.

En Iberoamérica, la democracia continuó afirmándose, aunque sigan observándose en ciertos puntos maneras autoritarias o excesivamente personales, habiéndose visto afectada moderadamente por la crisis financiera mundial, en tanto que Cuba nos muestra una matizada apertura, impensable hace sólo un año.

En general, las turbulencias en Asia y Rusia han producido un lento enfriamiento de la economía mundial, perceptible si observamos, como ejemplo, que la UE ha rebajado su previsto crecimiento para este año. No se espera que se pueda frenar la caída de la economía japonesa o el desarrollo de Singapur y Hong Kong, que han entrado en la espiral de bajas, viéndose con temor la extensión de la crisis a Iberoamérica. Norteamérica y Europa salen mejor libradas, manteniendo una actividad económica animada, anunciando nuestro gobierno que España puede afrontar la crisis internacional porque tiene una sólida base económica, aunque no se subestimen los problemas.

Sin duda se asistió en 1998, como en 1997, a un auge de los conflictos en el llamado Tercer Mundo, disputas territoriales, étnicas, religiosas, económicas, etc, siendo su significado político y estratégico muy dispar. Es una realidad que los conflictos en las zonas periféricas se deben en gran medida a condiciones locales, por lo que no deben ser resueltos aplicando matrices similares a las aplicadas en enfrentamientos occidentales, y que

la fuerza militar de ese mundo ha adquirido más importancia en los cálculos de riesgo de un mediador o ante una intervención; no se ha olvidado todavía el fracaso americano en Somalia, que demostró que el coste de una intervención puede ser muy alto, ejemplo que quizás ha influido para no intervenir en Kosovo.

Dentro de esa globalización puede inscribirse la aparición en este año del Tribunal Penal Internacional para juzgar genocidios, agresiones, crímenes contra la Humanidad, etc, que llega con retraso, puesto que ya al finalizar el juicio de Núremberg se solicitó constituir un tribunal similar. No obstante, ciertos países como los Estados Unidos, Israel, China, India o Turquía lo rechazaron, sin duda, en el primer caso, por esa obsesión norteamericana de resistirse a participar en organismos donde no goce del privilegio del "veto", como lo ejerce en el Consejo de Seguridad.

AVANCES SUBSTANCIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

A comienzos del año, los Quince acordaron el reparto del poder en el futuro Banco Central Europeo y los criterios para la elección de su directiva, enmendando la desfavorable impresión que había dejado el debate del Consejo en Amsterdam, en junio anterior, que parecía indicar que la marcha hacia la moneda única se encontraba, en cierto modo paralizada, ante los diferentes puntos de vista alemán y francés. En cuanto a España, se puso ya de manifiesto que cumplía con los criterios de inflación y que el crecimiento de su economía, un 3,3 por ciento, se situaba una décima por encima de las previsiones oficiales.

No obstante, puesto que en cada encuentro al más alto nivel se confirmaba que la fecha fijada en Maastricht, 1 de enero de 1999, se respetaría, la marcha hacia la moneda única parecía ser a principios de año ineludible, porque sin el Euro, el mercado europeo permanecería débil e incompleto. Para ello era preciso abandonar las primitivas políticas financieras, que no pueden concebirse sin un reparto de soberanía monetaria a través de la creación de un Banco Central Europeo y de una política financiera con moneda única, como forma de asegurar la estabilidad de los cambios y la libre circulación de capitales.

En consecuencia, once países de los quince se encontraban preparados para entrar en el Euro, entre ellos España, hecho singular puesto que a finales de 1995 no alcanzaba ningún requisito. Mientras, Grecia con un 5,4% de inflación no cumplía y Dinamarca, Suecia y el Reino Unido se abs-

tenían de entrar en un primer momento. La Comisión destacaba el rigor del gobierno español, al otorgar a nuestro país unas mejores notas incluso que a Alemania e Italia, en tanto que Grecia y Suecia suspendían el examen. Así se puso de manifiesto que en España se había sabido combinar el rigor, austeridad, control salarial y relanzamiento económico con una moderada reducción del gasto público, aumento del empleo y mantenimiento de la paz social, erradicando la corrupción y demostrando la disciplina y claridad de la gestión económica.

Una cierta polémica surgió cuando Alemania, Holanda, Suecia y Austria propusieron que la ampliación de la UE deberían costearla los países del Sur pues, según Bonn, Alemania pagaba mucho y España recibía demasiado. Sin embargo, nuestro gobierno demostró que si las cifras se relacionaban con el PNB de cada país y con las aportaciones de cada socio, estas eran más o menos equivalentes al peso de sus economías. A esta polémica se unió la promovida por el próximo nombramiento del presidente del futuro Banco, al parecer dos candidatos, el holandés Duisenberg y el francés Trichet.

Mientras se iniciaban las negociaciones de ampliación, llamadas de "vía rápida", con Hungría, Chequia, Polonia, Eslovenia y Chipre, cuyo coste supondrá 75 millones de Ecus, y se anunciaba que el resto de los candidatos sufrirían una revisión de las medidas tomadas, la presentación de un borrador de reformas de la Europa Verde, que debían incluirse en el presupuesto comunitario de agricultura para el período 2000 al 2006 y que beneficiaba los productos de los países del centro y norte del continente, supuso una evidente discriminación hacia los del sur o mediterráneos.

La crisis del S.E. asiático impulsó a crear un fondo de 40 millones de Ecus para ayuda a los países de aquella zona, proponiendo España tanto organizar una reunión euro-asiática en el año 2002 como incrementar aquel fondo con ciertas sumas, al margen de lo que nos correspondiese, dejando bien claro nuestro gobierno en la 15 reunión de los quince con diez países asiáticos, en Londres, su deseo de que Asia fuera la nueva frontera de la política exterior española. En esa reunión se habló de todo, pero nada sobre derechos humanos y democratización, clara claudicación ante la presencia China.

Al no ser Europa indiferente a los problemas del Oriente Medio y África, tampoco podía serlo a los de Asia, razón por la que la participación de la UE en el Foro de la Seguridad Regional del S.E. asiático significó un primer paso, inscribiéndose el encuentro de Londres en la misma perspec-

tiva. Realmente, las amenazas a la seguridad de Europa también se sitúan en sus márgenes, de Marruecos al Próximo Oriente y mas allá, en Asia, que busca un contrapeso a la influencia china y norteamericana.

Un toque negativo a la integración lo ofreció el presidente Chirac al oponerse no sólo a la ampliación y a la reforma de la política agraria, sin una previa reforma institucional, sino al proyecto de creación de una zona de libre cambio con América, demostrando su posición nacionalista y olvidando que las ventajas superan sus desventajas: avance hacia una Europa política unida, mayor peso en el mundo, seguridad para el Viejo Continente y un mercado interno más amplio. Entre las desventajas, el riesgo de que la UE se transforme en un simple espacio económico y el ser mas difícil tomar las decisiones 25 países que 15.

Un hecho histórico se produjo el 1 de mayo en la cumbre de Bruselas, la aprobación de los once países que iban a formar parte del primer escalón de acceso al Euro. También tuvo lugar un debate sobre la constitución del BCE y otros temas importantes como: la coordinación de las políticas económicas, dado que, en un espacio tan integrado, las políticas presupuestarias tienen a la vez efectos positivos y negativos sobre las respectivas economías, permitiendo la coordinación maximizar los efectos positivos y minimizar los negativos; la política de cambio del Euro, puesto que el Consejo debe definir las orientaciones de esas políticas en conexión con la Comisión Europea y el BCE y, por último, la Europa Social, porque ante la diversidad de los índices de desempleo, las soluciones son de orden estructural, debiéndose buscar en los niveles nacionales.

En la mencionada cumbre se confirmó que cumplían los criterios de Maastricht —de 2,7 por ciento de inflación, un 5 por ciento de déficit público, un 60 por ciento de deuda pública y un 7,8 por ciento máximo los tipos de interés— Alemania, Austria, Bélgica, España (con 1,8 por ciento; 2,6 por ciento; 68,8 por ciento y 6,5), Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal; que cumplían pero no se incorporaban a la primera fase, Reino Unido y Dinamarca; y que no cumplían, Suecia y Grecia. En mayo, Dinamarca, en referéndum, proclamó y reiteró su “sí” al tratado de Amsterdam. Esta Unión Monetaria, el Parlamento Europeo la apoyó dos días más tarde, mientras los detractores del Euro le acusaban de ser un símbolo de globalización y, por tanto, un primer paso hacia una moneda única mundial y de ahí, a un gobierno planetario, olvidando que nos encontramos desde hace una década inmersos en el proceso de globalización, que es irreversible.

Parece cierto que con el Euro se espera no sólo acabar con el dominio del dólar, que no se corresponde ni con el peso de la economía norteamericana ni con el volumen de sus transacciones comerciales, sino que aporte a Europa beneficios y liquidez, eliminación de gastos, atracción de inversiones, etc, convirtiéndola en un mercado interior mayor que el norteamericano, tanto por el número de habitantes y PIB generado como en volumen de comercio. La nueva moneda puede alcanzar el 18 por ciento de las reservas mundiales, terminando, además, con siglos de conflictos sangrientos, aunque no conocemos cuando ocurrirá todo ello, si a corto, medio o largo plazo.

La designación de la dirección del BCE fue laboriosa, fijándose el 1 de junio su nacimiento, y nombrándose al candidato holandés como su primer presidente. El consenso fue difícil dado el enfrentamiento en este tema entre Chirac y Kohl, lo que ensombreció la cumbre y figurando entre sus seis miembros un español, crisis aquella que se apaciguó pronto en el encuentro entre ambos estadistas en Avignon.

Días después de dicha cumbre, la Comisión aplaudió los planes de empleo presentados por España para cumplir los compromisos contraídos en la pasada cumbre de Luxemburgo, mientras que no se llegó a un acuerdo con Washington para enterrar la ley Helms-Burton y cerrar, de paso, la aplicación de la ley d'Amato, que prohíbe invertir y comerciar con Libia e Irán, por lo que la cuestión volvió a paralizarse.

A petición alemana, apoyada por Holanda, Austria y Suecia, el Parlamento Europeo solicitó retirar los fondos de Cohesión a los países que habían accedido al Euro, lo que afectaba negativamente a España, Portugal e Irlanda. Aunque las decisiones de dicho Parlamento no tienen valor vinculante, si servían a Kohl como reclamo electoral en la próxima consulta de octubre. Unos meses después, dicho Parlamento dio marcha atrás, dejando la cuestión en el aire, quizás al advertir que el Tribunal de Cuentas comunitario apoyaba a España en su polémica contra esos cuatro países, que insistían en que aportaban demasiado a las arcas de la UE y recibían poco.

Este tema volvería a actualizarse en julio y octubre. En julio, al evocar Kohl el peligro de recalentamiento de las economías de algunos países "que se benefician de la solidaridad de la UE", reiterando que se cortasen las subvenciones, entre otras, a España. La respuesta de nuestro gobierno coincidió con la de la Comisión, que no podían ser causa de ningún recalentamiento dichos fondos y que "paguen más los que más tie-

nen”, por ser criterio de equidad y justicia. No obstante, en octubre la Comisión se inclinó por la tesis alemana, recomendando a este país que negociase a través del PAC, quedando, de momento, la cuestión apartada.

En la cumbre de Cardiff, en junio, que cerraba la presidencia británica, quedó asimismo en el aire la ofensiva de Kohl sobre la necesidad de un nuevo reparto de competencias, “pues de no hacerse se podría recortar la capacidad de maniobra de las instituciones comunitarias”. El presidente español replicó que lo que se necesita es una mayor integración política y económica y no anular o reducir competencias, aunque admitió que la ampliación exigía reformas para diseñar la Europa futura, que deberían discutirse en la próxima cumbre. Al mismo tiempo se logró aplazar para la primavera de 1999 el examen de los presupuestos comunitarios.

En España tuvo una gran repercusión política y social el plan de Fischer sobre las ayudas al aceite de oliva, por su consecuencia negativa sobre el empleo y porque contradecía el Tratado de Amsterdam, discusión no del todo apagada a pesar de haberse mejorado las cuotas del plan inicial.

El 1 de junio Austria alcanzó la presidencia de la UE, regresando así al escenario internacional después de tres décadas de aislamiento, siendo una de sus primeras propuestas incluir a Ucrania, Moldavia y estados de los Balcanes en la Comunidad, posibilidad contemplada en su día por Alemania con respecto a Ucrania.

Ya en el otoño, se descartó la idea austríaca de crear una Asociación para Europa en la que figurasen aquellos países que ni siquiera son candidatos a la UE, celebrándose más tarde en Portschach una nueva cumbre en la que se insistió en principios generales: política de empleo y de crecimiento, bajada de los tipos de interés, pilar europeo de defensa, ayuda a Iberoamérica, creación de la figura del “mister PESC”, etc. Con respecto a la UEO, los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, reunidos en noviembre en Roma, debatieron dos propuestas: la francesa, de integrarla en la UE, y la inglesa, de asignar la parte política a la UE y la militar a la OTAN, no alcanzando un consenso y dejando a la cumbre de Estados y Gobiernos, en Viena, en diciembre, la decisión final de continuar o desaparecer.

Por otro lado, a lo largo del año se produjeron acontecimientos muy importantes: solución al problema irlandés, con la firma en Stormont, el

Viernes Santo, de un acuerdo que ponía fin a la violencia y odio entre las dos comunidades del Ulster desde hacía 60 años; elecciones en Malta, ganadas por la oposición conservadora, que anunció inmediatamente su intención de reactivar las negociaciones con Bruselas, rotas en 1996 por los laboristas y, por último, las elecciones alemanas en octubre, que llevaron al poder a Schroder, prometiendo continuidad en política exterior, dejando ver que hubo cambio pero no de metas. No obstante la salida de Kohl —debido a sus 16 años de gobierno, haberse dejado seducir por la llamada “erótica del poder” y por su error de no haber dejado un claro del-fín— abre una nueva etapa en la UE, porque se piensa que se caracteriza por la ausencia de un claro liderazgo, en espera, quizás, de que Schroder haga su rodaje. Schroder, en su visita a Moscú, buscó liberalizar las relaciones ruso-alemanas de los estrechos vínculos personales que unían a Kohl y a Yeltsin.

Por otro lado, Francia, Italia y Alemania trataron al finalizar el año de ser los exclusivos representantes del Euro en el grupo G-7, mientras España y resto de países comunitarios abogan porque dicha representación la ostente la presidencia de turno de la UE, abriéndose un cierto enfrentamiento.

La cumbre de Viena finalizó en diciembre sin resolver el gran problema de la futura financiación de la UE, pues ni los defensores ni los adversarios de los Fondos de Cohesión hicieron concesiones, logrando España que la palabra “estabilización”, sinónimo de congelación del gasto, no figurase en las conclusiones y abriéndose vías de solución distintas a las de suprimir a los países más pobres dichos Fondos, cuestión que volverá a discutirse en la próxima cumbre, ya en 1999.

LAS NUEVAS MISIONES DE LA OTAN

Se abrió 1998 con la firma en la Casa Blanca de la Carta de Asociación con las tres repúblicas bálticas, que no supone un premio de consolación substitutivo de la entrada en la OTAN sino un paso hacia ella, aunque se excluye la intervención automática de los Estados Unidos ante una amenaza a la integridad, independencia y libertad de alguno de esos países, acuerdo que supuso un desaire para Rusia, que las había ofrecido un tratado similar.

Asimismo, se volvió a poner de manifiesto el Estrecho de Gibraltar como punto crítico o clave de responsabilidad del mando OTAN subregio-

nal, dependiente del mando sur de Nápoles, que se ubicará en España, único país con capacidad operativa en esa área y que substituye, en cierto modo, el mando británico en Gibraltar, que permanecerá como instalación británica. También se supo que España ingresará en la fuerza de alerta temprana de la Alianza, teniendo así acceso a la información de los aviones AWAC.

A su paso por Viena, el Comandante Supremo en Europa se preguntó la razón de no adherirse Austria a la Organización, puesto que no podía ser ajena a los conflictos en Europa, refiriéndose, sin duda, a la situación en Kósovo y Montenegro, a la greco-turca o a la problemática islámica en Ankara, para seguir manteniendo su tradicional neutralidad, fijada en el tratado de paz con Rusia en 1955. Para el general Clark, esa neutralidad no tenía sentido cuando ya no existen bloques ni incluso la URSS, estimándose que esa posición responde más a razones tradicionales que a políticas y estratégicas.

Por su parte, Rusia señaló que revisaría sus relaciones con la OTAN en caso de que se emplease la fuerza en la crisis iraquí y que Ucrania no solicitaría su adhesión, afirmación que no fue desmentida ni aprobada por Kiev, que firmó el año pasado en Madrid un tratado de asociación específica, participando en maniobras de la OTAN y en misiones de paz en los Balcanes. Lo que Moscú pretendía decir era que no estaba dispuesto a que avanzase más la expansión de la Alianza hacia el Este.

Esas declaraciones rusas se confirmaron cuando los presidentes Yeltsin y Lukashenko (de Bielorrusia) sellaron los principios de una política militar y de defensa común ante una agresión exterior y que respondía a contrarrestar el acuerdo Norteamérica-Paises Bálticos, advirtiendo a esas repúblicas que condenaba su acercamiento a la Alianza Atlántica.

Meses más tarde el Senado norteamericano ratificó por mayoría la ampliación de la Alianza a Polonia, Chequia y Hungría, abordándose, por otra parte, la posibilidad de enviar fuerzas a Albania para impedir la extensión del conflicto de Kósovo, tal como había solicitado Tirana y avalado Italia, reaccionando los restantes miembros con prudencia pues, de darse luz verde, podría interpretarse como un paso previo a una intervención en suelo serbio.

Ante la creciente actividad del Ejército de Liberación de Kósovo o UCK, la UE desestimó cualquier tipo de intervención militar para centrarse en diseñar un plan de amplia autonomía para la región, respaldada con la

amenaza de utilizar la fuerza. El problema de los Quince era alcanzar la unanimidad, pues Grecia e Italia se han mostrado siempre reticentes a reconocer a la UCK como interlocutor y a una intervención formal, mientras el Departamento de Estado USA, por su lado, recalca que la OTAN disponía de un plan de acción para el caso de producirse una catástrofe humanitaria en Kósovo, que desde hace meses sufría. En septiembre, ese plan se encontraba listo y permitió que en octubre se decidiese la tan traída y llevada intervención si Milosevic no cesaba la limpieza étnica y no retiraba sus fuerzas de la región, amenaza que le condujo a aceptar tales condiciones y que trataremos en otro apartado, siendo asimismo positivo que Macedonia accediese a estacionar en su suelo una Fuerza de Intervención Rápida de la Alianza.

De lo que no puede dudarse es que la OTAN ha dado cumplida respuesta a aquellos sectores que todavía se preguntan si tiene sentido mantener una organización que ya no dispone de adversario, pues como se ha demostrado, también, en 1998, la Alianza aparece como una organización disuasoria y brazo armado de la ONU en misión de pacificación en su zona de responsabilidad. Cumple así numerosos objetivos, sirviendo, como ejemplo, la supervisión de los acuerdos de Dayton en 1995, éxito que es en realidad un logro de los Estados Unidos pero que ha consolidado a la Alianza, despejando dudas sobre su utilidad y acelerando su credibilidad, que aumenta ante la ampliación a varios países antiguos, enemigos del Pacto de Varsovia, y por la capacidad de entendimiento de los europeos para crear una entidad europea de defensa. Esta evolución que se apoya en nuevas funciones políticas, militares, humanitarias y de interposición, que reduce, en la práctica, el papel de la OSCE, que a los rusos y otros gobiernos continentales les gustaría fortalecer.

Aunque la OSCE tenga un funcionamiento complicado, por requerir la unanimidad en sus decisiones, en general, ello favorece las negociaciones y prevención de los conflictos más que el recurso del empleo de la fuerza, por lo que tras consolidarse la OTAN sería preciso reforzar la OSCE.

A comienzos de diciembre, Francia y el Reino Unido presentaron un plan al resto de los países aliados miembros de la UE para crear una defensa europea que contemplase una capacidad militar autónoma, capaz de responder a eventuales crisis internacionales cuando no se encuentran directamente implicadas ni la OTAN ni los Estados Unidos. Ello supone la desaparición de la UEO, integrando sus responsabilidades militares en la UE, cuestión que Washington dijo apoyaba con entusiasmo pero mati-

zando que, en todos los casos, debería imbricarse y no desvincularse de la Alianza Atlántica.

NORTEAMÉRICA SE AFIANZA COMO ÚNICA POTENCIA MUNDIAL

Aunque la hegemonía norteamericana no es nueva, una conjunción de factores hace que, en 1998, continúe sin encontrar competidor, dominando cinco esferas básicas, económica, diplomática, militar, científica y hasta cultural.

Si analizamos sus indicadores macroeconómicos, su economía es la más sana y fuerte del planeta, con un crecimiento sostenido del PIB, una inflación cercana al 1,7 por ciento, un nulo déficit presupuestario y habiendo reducido el paro al 3,1 por ciento, el más bajo índice en 28 años. Aparece como signo negativo su desequilibrio comercial que, no obstante, se ve compensado con la entrada de capitales extranjeros. En cuanto al cuadro microeconómico, nos dice que sus empresas representan el tercio de las más importantes firmas mundiales, dominando sectores claves como el de las telecomunicaciones, informática, aeroespacial, etc. y también en productos de gran consumo, al mismo tiempo que ejercen una influencia determinante en los organismos internacionales como la ONU, FMI, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, Grupo G-7, etc y en las alianzas militares como la OTAN.

En la vertiente militar y estratégica, en 1998 los Estados Unidos continúan sin ver aparecer un enemigo de su talla, lo que les ha permitido disminuir los gastos que en los años setenta y ochenta les producía la carrera de armamento; esto ha provocado grandes críticas, entre otras, las de el ex-Secretario de Defensa Caspar Weinberger, aparecidas en su libro "The next war", en el que acusa a la administración Clinton de haber reducido demasiado los presupuestos de defensa, haber abandonado el proyecto "guerra de las galaxias", hecho concesiones a China, etc, olvidando las nuevas amenazas encarnadas en los fundamentalistas o rivalidades étnicas y religiosas, que jugarán un papel decisivo en los conflictos del futuro. También que las doctrinas del pasado han perdido gran parte de su valor, como lo demuestra el Pentágono al disponer un cambio en las que se encuentran en vigor y calificar a la nueva situación por la que atraviesa el mundo de "expansión de la incertidumbre", ante la dificultad para eliminar el peligro nuclear o la facilidad para introducirse en las redes informáticas más protegidas. No obstante, quizá aquellas críticas y las nuevas pers-

pectivas estratégicas y militares sean las que han motivado que en el presupuesto de defensa para 1999 aparezcan partidas especiales, cercanas a 1,3 billones de pesetas, para aumentar los niveles de alerta y de preparación de las fuerzas armadas.

En el campo nuclear, los ensayos efectuados por India y Pakistán, en junio y julio, han demostrado a Washington que para nada sirve imponer sanciones contra la proliferación sin el concurso de las demás potencias nucleares y que ningún sistema internacional de inspecciones lograra abolirla.

En otro aspecto, el concepto "nuevo orden mundial", bautizado así por el presidente Bush tras la guerra del Golfo, tendente a alcanzar la paz y cooperación entre las naciones, ejerciendo Norteamérica el liderazgo e interviniendo en las crisis para hacerlas bascular del lado más conveniente a sus intereses, parece no haberse logrado, a pesar de que la Secretaria de Estado, Madelaine Albright, las haya reafirmado en este año. Y no se ha logrado porque los acontecimientos desdichan la bondad de dicho concepto, al proseguir e incrementarse en 1998 los nacionalismos exacerbados, los conflictos de todo tipo y la ausencia de paz y estabilidad en amplias zonas del mundo.

Desde el comienzo del año, los Estados Unidos se vieron dominados por la sombra de un nuevo watergate y por la figura implacable del fiscal Starr, quien desde hacía tiempo investigaba las denominadas obscuras tramas inmobiliarias del matrimonio Clinton en Little Rock y posteriormente las aventuras eróticas del presidente, iniciadas con el culebrón Lewinsky, campaña con gran repercusión en la prensa nacional. El asunto alcanzó toda su virulencia en junio, culminando con su testificación ante el Gran Jurado, en donde Clinton reconoció parte de los cargos que se le imputaban y con la publicación, en septiembre, del informe del fiscal, difundido, incluso, por Internet, abriéndose así el camino a la aprobación por el Congreso de la formación de una comisión judicial que investigue y dictamine sobre una posible destitución.

Pero lo paradójico es que esa situación no restó popularidad al Presidente como estadista, tal como se ha demostrado en las elecciones del 3 de noviembre para la renovación en el Congreso, pero sí su apreciación como persona, implicando, de paso, un desgaste político y la posible erosión de una institución, en sus poderes y privilegios, que puede alcanzar a sus sucesores en la Casa Blanca. En ese acoso tuvo un destacado papel el partido republicano, que se negó a aprobar créditos solicitados por el

presidente para atenciones sociales, reclamando, a cambio, un fuerte descenso de los impuestos, situación que felizmente se superó al aprobarse por unanimidad los presupuestos para el año fiscal siguiente.

Pese a todo ello, nadie discute a Clinton sus grandes logros en política interior y exterior, aunque en este año tuvo que hacer frente a múltiples y graves problemas: la apertura de una nueva crisis con Irak causada por la cuestión de las inspecciones; imposibilidad de frenar la política de colonización israelí en Cisjordania y Jerusalén, incluso tras el esperado y a él debido acuerdo de Wye; la delicada situación en los Balcanes que afecta a Kosovo y, en parte, a Albania y Montenegro con el enigma del futuro; los conflictos en África o las desestabilizaciones financieras en Rusia, Japón e Iberoamérica.

Pero, sin duda, su éxito más importante se advirtió, como ya hemos mencionado, en el campo económico, que ha llevado a decir que si en los años setenta surgió el mito del modelo japonés, a finales de este siglo aparece el mito de un nuevo y mejor modelo, el norteamericano, aunque los "dragones" asiáticos y economías similares e, incluso, el Japón, no estén preparados para adoptarlo si antes no cambian sus estructuras y ponen en orden sus casas.

En la visita de Clinton a Berlín, éste reafirmó que Europa era el eje de la política exterior norteamericana y que la ampliación de la OTAN, profundizar en los intercambios y extender la democracia apoyando a países débiles como los del Cáucaso o Balcanes, eran sus propuestas para fundamentar esa colaboración, constituyendo la OTAN la base de una política de seguridad común "pues si hoy las amenazas son más difusas, no por ello menos ciertas". Esa visita coincidió con la reducción del despliegue militar en el Golfo, en donde solamente quedaron 17000 hombres, aunque advirtiendo a Saddam Hussein que los Estados Unidos no bajarían la guardia.

Un acontecimiento capital fue la visita del presidente a China, en el mes de junio, país al que Washington ve como un enorme mercado potencial, pero también como una futura superpotencia que, más o menos tarde, intentará disputar la hegemonía mundial; razón que hace necesario establecer diálogos y lazos en múltiples esferas, sin dejar de controlar, por ello, su evolución. En esa visita Pekín no consiguió que se accediera a uno de sus grandes objetivos, ingresar en la Organización Mundial del Comercio.

Los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, en agosto, con cerca de 260 fallecidos, se atribuyó al integrista y

multimillonario saudí Bin Laden, exiliado en Afganistán bajo la protección de los talibanes, dado que fue quien financió el levantamiento afgano contra los ocupantes rusos. Washington acusó a Sudan y a Afganistán de colaborar en esos atentados, ordenando Clinton el ataque a objetivos en ambos países, acción que suscitó apoyos, como el de España, pero también numerosas repulsas.

El acoso contra Clinton prosiguió en diciembre, al aprobar el Comité Judicial de la Cámara Baja los cargos de perjurio ante el Gran Jurado y obstrucción a la Justicia y al Congreso, oyéndose no solamente voces que pedían su dimisión sino que el propio Comité Judicial, controlado por los republicanos, votaban para su proceso de destitución.

Un proyecto de gran trascendencia, al que la opinión pública norteamericana no prestó gran atención y que, en cierto modo, nos afecta, fue el debate en marzo, en la Cámara de Representantes, del plan Young sobre el futuro de Puerto Rico, que implica: convocar un "referéndum" en el que los isleños decidan si prefieren convertirse en el 51 Estado de la Unión, tesis que apoyó un 46 por ciento en la consulta de 1993; acceder a la independencia, que obtuvo un modesto 4,4 por ciento; o continuar como actualmente, Estado Libre Asociado, respaldado por un 48,6 por ciento en la mencionada consulta de 1993. Un referéndum no vinculante, celebrado a mediados de Diciembre, condujo al electorado puertorriqueño a mantener el actual estatus, al obtener la llamada "quinta columna", o voto en blanco, el 50,2 por ciento de los votos, mientras los anexionistas recibían un 46,7 por ciento, duro castigo a las aspiraciones de integración en los Estados Unidos.

Un éxito personal del presidente fue el lograr que los líderes palestino e israelí se reuniesen en Wye, cerca de Washington, para dialogar y llegar a un acuerdo que pareció alcanzar la unanimidad de ambas partes. No obstante, es muy pronto para conocer sus resultados reales, pues los acontecimientos y declaraciones posteriores conducen, más bien, al pesimismo. Finalmente, en diciembre Washington advirtió que el proyectado plan europeo de defensa no debería desligarse de la OTAN, plan que estudia crear un pilar de defensa a caballo entre la UE y la OTAN, con el fin de contar Europa con medios militares propios para hacer frente a crisis dentro de su ámbito. A este respecto, España defendió la idea de diluir a la UEO en la UE, de acuerdo con la iniciativa franco-británica, aunque existen problemas, como qué pasará con Turquía, miembro de la OTAN, o con los países neutrales, como Suecia, Austria, Finlandia e Irlanda, miembros de la UE pero no de la OTAN.

Refiriéndonos a Canadá, a lo largo de 1998 continuó candente el problema de la posible secesión de Quebec, rechazada por los electores en 1980 y 1995 por varias razones: existencia de una fuerte minoría de inmigrantes anglófonos, la actitud federalista de las etnias indígenas, la indecisión de muchos francófonos que se sienten tan canadienses como quebequeses, y porque, de alcanzarse la separación, se abrirían diferencias de intereses y culturas entre el Este y el Oeste anglófono entre provincias nuevas y viejas. Hay otras provincias, como Alberta o la Columbia Británica, que pretenden volver al pasado, esto es, a poner en vigor el Tratado que en otros tiempos las ligaba a la Corona británica, provincias que quieren seguir siendo canadienses pero que amenazan con la secesión en caso de que la alcance Quebec. Finalmente, tampoco puede ignorarse el continuo incremento de las comunidades asiáticas, cuya influencia económica y política aumenta y con el despertar de China podrían constituir auténticas comunidades culturales y lingüísticas, complicando aún más el panorama. En las elecciones legislativas de diciembre, el Partido Liberal logró más votos que los independentistas, aparcándose de nuevo el problema, aunque el presidente Boudard volvió a enarbolar la bandera independentista.

DE UNA APARENTE NORMALIDAD AL RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA EN LOS BALCANES

Mientras a principio del año la ONU entregaba a Croacia los último territorios ocupados por los serbios en 1991, la llamada región danubiana por Zagreb, que desde 1996 controlaba las Naciones Unidas, se resolvía la crisis del gobierno de la república serbo-bosnia con la elección de un primer ministro moderado y dispuesto a colaborar con Occidente.

Al mismo tiempo, el Alto representante internacional, el español Westendorp, establecía una moneda única, tras no haber llegado a un acuerdo las tres comunidades bosnias; una medida más para convertir a ese país en un verdadero estado, al contar ya con pasaporte, bandera única y ciudadanía común, aunque su mayor éxito fue aislar a los radicales croato-bosnios, que respondían a los intereses de Zagreb, como los ultras serbios a Belgrado.

Por ello, en 1998 queda como problema pendiente, en Bosnia, el futuro de Brocko, único puerto fluvial a orillas del río Sava y ubicado en la frontera entre Bosnia, Croacia y Serbia que, desde 1992, controlan estos últimos y que reclaman las tres comunidades.

Pero la gran asignatura pendiente ha seguido siendo el millón trescientos mil refugiados en su derecho, según los acuerdos de Dayton, de regresar a sus hogares; de ellos, 400.000 ya lo han hecho y otros 200.000 se espera lo hagan este año, aspecto, entre otros, muy negativo para que se pueda hablar de paz y reconciliación.

En la elección de la presidencia tripartita, sólo salió reelegido el bosnio Izetbegovic, pues en Banja Luka salió derrotado el candidato pro-occidente y en la república de Spak ganaba un radical, victoria de los duros que plantea incertidumbres, pues tanto el serbio como el croata elegidos pretenden la secesión, modificando los acuerdos de Dayton.

Realmente, Bosnia no ha sido el único fracaso occidental en la antigua Yugoslavia. Salvo la próspera Eslovenia al norte, el resto de las repúblicas y regiones se debaten entre la incertidumbre, el caos y el autoritarismo. Croacia, bajo el gobierno muy personal e intransigente de Tudjman, vive una situación nada envidiable. Al norte de Serbia crece la tensión en la Vojvodina con mayoría húngara. En Montenegro los serbios ven perder posiciones y poder. Por su parte, Macedonia se convierte en un estado "colgado en el vacío", acosada por Grecia, Serbia y Bulgaria. Mientras, Albania, vital para Europa por su posición geográfica, aunque no sea candidata a integrarse en la UE, sale lentamente de sus pasados desórdenes.

Pero los problemas derivados de la aplicación de los acuerdos de Dayton pasaron a un segundo plano ante la grave crisis o guerra civil que sufre Kosovo.

Kosovo, la más pobre de las repúblicas serbias, a quien en 1989 se suprimió su autonomía, esperaba iniciar los pasos para alcanzar una independencia pacífica y negociada o edificar un estado paralelo con su propia cobertura educativa, sanitaria y judicial, lo que rechazó Belgrado. Tras varias semanas de advertencia y el fracaso de las conversaciones entre Milosevic y el líder moderado albanés Rugova, en marzo inició Belgrado la represión en dicha provincia, acompañada de una política de limpieza étnica, desafiando a la comunidad internacional y sin que preocupara al líder serbio la afirmación norteamericana de que no toleraría un baño de sangre. Tampoco escuchó el ruego de la Unión Europea de enviar un mediador y devolver a Kosovo la autonomía perdida, argumentando, repetidamente, que se trataba de un problema interno que debía resolver Serbia.

Estudiado el conflicto por los Quince, solamente Francia, Alemania y España apoyaron una posible intervención armada, ante la oposición de

Grecia e Italia de ir más allá, poniéndose una vez más de manifiesto la carencia de una política común, ajena al ámbito económico, capaz de garantizar la seguridad en el Continente. Aunque se quiso dar al mundo la impresión de unidad en este tema, la realidad fue que la UE adoptó una actitud de máxima cautela, elaborando un comunicado muy ambiguo pues, si bien recordaba la necesidad de apoyar un estatuto para Kosovo, se olvidaba de mencionar la palabra “autonomía”. Y eso en un momento en que en Serbia se celebraba un “referéndum” para consultar a la población si deseaba la mediación internacional, verdadera farsa pues, como se esperaba, el resultado, que se conocía de antemano, fue un rotundo no. Tampoco sirvió la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores, en Londres, para analizar la cuestión, pues solo supuso que el Consejo de Seguridad se convocase para estudiar la crisis, fracasando, asimismo, una iniciativa regional promovida por Bulgaria.

Ante una hipotética agresión serbia, Albania solicitó en abril el despliegue de las fuerzas de la OTAN en su territorio como factor de presión y seguridad, mientras el Grupo de Contacto calificó la situación en Kosovo de alto riesgo, acordando: congelar los fondos Yugoslavos en el exterior, establecer un diálogo sin condiciones por parte de ambos adversarios, poner freno a la llegada de nuevas inversiones a Serbia, etc, medidas que desaprobó Rusia, país que desde el primer momento apoyó, sin tapujos, a Belgrado.

Alcanzado junio, mientras Clinton recordaba que no volvería a suceder lo acaecido en Bosnia —declaración a la que se unió el primer ministro británico Blair, en esos momentos presidente de la UE— la realidad era que, tras esas palabras, más de 100.000 kosovares vagaban por los bosques y pueblos enteros se incendiaban, lo que movió a la OTAN a estudiar acciones de fuerza. Como se vio, esas acciones se limitaron a vuelos de reconocimiento dentro de las maniobras “Halcón Decidido” (“Determined Falcon”), en las que participaron aviones españoles. Esa actitud la reprochó el Secretario General de la ONU, al señalar lo peligroso que era una intervención sin el respaldo de la ONU, postura sostenida en la cumbre de Cardiff por nuestro ministro de Asuntos Exteriores.

Ya en el verano, los Quince renunciaron a negociar con la guerrilla del UCK un alto el fuego, reafirmando su apoyo a Rugova y su rechazo, una vez más, a la independencia, porque, según Atenas, la escisión de Kosovo sería la mecha que encendería un conflicto en Macedonia o en la Vojvodina, con imprevistas derivaciones.

Finalizando el verano, la OTAN volvió a planear utilizar la fuerza ante el temor de una "catástrofe humana", en unos momentos en que finalizaba la resistencia organizada de la guerrilla, al conquistar los serbios Junik, el último bastión separatista. Pero puede decirse que dicho final se debió, en gran parte, a los propios errores de la UCK, entre otros, tratar de neutralizar a Rugova, que había propuesto sin éxito transformar Kosovo en un protectorado internacional, conquistar Orahovac y haber declarado que iniciaría operaciones en Macedonia que con Kosovo y Albania debían constituir la gran Albania. Con su alusión a Macedonia, quisieron hacer creer que la expansión del conflicto era inevitable, con el fin de provocar la intervención de la OTAN, sin advertir que, con ello, Occidente reconsideró sus planes de intervención militar, dando así "luz verde" a las operaciones serbias de limpieza. Más tarde se quiso refrenar la orgía de sangre y fuego y la Secretaria de Estado, Albright; la OTAN y el artífice de los acuerdos de Dayton, Holbrooke, resucitaron la amenaza de intervenir militarmente, aún conociendo que sin la aquiescencia de Rusia y sin mandato del Consejo de Seguridad era imposible, razón para que Milosevic no cumpliera sus palabras ni promesas.

No obstante, ante la decisión terminante de la OTAN de iniciar operaciones aéreas, Holbrooke logró en Belgrado que Milosevic aceptara la retirada de sus fuerzas y la llegada de inspectores internacionales que lo verificaran, retirada que todo da a entender ha sido efectuada. No obstante, a petición de Macedonia la OTAN desplegará fuerzas en ese país.

Pese a todo, se puede afirmar que, a medio plazo, la solución pasa por la redefinición del marco estatal yugoeslavo pues Milosevic teme menos el problema en esa provincia que la evolución política de Montenegro, que controla la costa serbia por la que sale al exterior o entra el comercio de Belgrado. Para mantener la ficción de que seguía existiendo Yugoslavia, en 1992 se concedieron a Montenegro privilegios desorbitantes, entre ellos disponer de casi un tercio de los escaños en la Cámara Baja y la mitad en la Alta del parlamento serbio, lo que permite al actual presidente de esa República bloquear todo intento de Milosevic de reformar la Constitución en detrimento de esa región y blindar su actual poder, por lo que dicho personaje es más peligroso que los de Bosnia o Kosovo.

Sin duda, Montenegro no aceptará perder su estatuto actual de estado casi soberano para convertirse en una simple provincia como lo fue hasta 1941 y para ello juega con la baza, vital para Belgrado, de poseer, como ya hemos visto, el único litoral sobre el Adriático.

En diciembre, Washington acusó a Milosevic de ser la causa, no la solución, de la crisis en el S.E. europeo, mientras este vio en la decisión de los mediadores internacionales, de que el mando de la UCK participase en las negociaciones de paz, como un ataque “grosero a Yugoslavia”.

LA ENCRUCIJADA TURCA

Una decisión inquietante que tomó el gobierno a principios del año fue la de procesar al ex-ministro Erkeban y a cinco dirigentes del ya ilegal partido del Bienestar, quienes no podrán formar parte de ninguna asociación ni ser parlamentarios durante cinco años. Fueron acusados de incitar a la sociedad turca a la rebelión, decisión que lanzó a la calle a miles de seguidores, aunque será el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, como pretenden los procesados, el que podría rebatir la sentencia; así lo hizo cuando condenó la disolución del Partido Comunista Unificado, dos semanas después de ilegalizarse el del Bienestar, por vulnerar el artículo 11 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos que autoriza la libertad de Asociación.

Con respecto al islamismo turco señalaremos que, mientras en Turquía Ataturk relegó el Islam porque obstruía la secularización del Estado, convirtiéndose en un mero referente histórico y, por tanto, sin inmiscuirse en la vida política y legislativa, en Argelia y en el resto del mundo musulmán los islamistas pretenden que los preceptos religiosos o la Ley Coránica rijan la vida política, aunque sin leyes que la desarrollen. Pero en ciertos países, como Argelia o Siria, los militares lo rechazaron, pues, aunque se podían imponer o se impusieron democráticamente, sabían que acabarían con la democracia una vez en el poder y, de paso, con los privilegios acumulados por el estamento castrense en aquellos países.

En ese contexto, la aprobación en el Parlamento de celebrar elecciones legislativa y locales el 18 de abril del próximo año, dos antes de lo previsto, podría conducir a que los activistas islámicos, reagrupados en el Partido de la Virtud, volvieran a alcanzar la mayoría, regresándose a un preocupante futuro, con la posible reacción de las fuerzas armadas de nuevo.

Sus relaciones con la UE prosiguen deterioradas, no presentándose Ankara en Bruselas para reanudar el diálogo paralizado desde el pasado diciembre, al acusar a los Quince de ambigüedad en sus declaraciones y propuestas y sin olvidar el veto griego para que Turquía no reciba los 400

millones de dólares que acordó el Tratado de Unión Aduanera, hiriendo así el orgullo otomano.

A este respecto, recordaremos que durante la visita a España del presidente Demirel, en marzo pasado, S.M. el Rey le expresó su apoyo para el ingreso de Turquía en la UE, proclamando que era consciente de la voluntad turca de participar en la consecución de una Europa unida y que España reconocía, sin reservas, su vocación europea y su legítima aspiración a la integración, aplicando los mismos criterios que a otros candidatos; visita que la prensa nacional ligó, en parte, a la venta de armas, provocando reacciones encontradas.

Asimismo, en 1998 el problema kurdo fue constante motivo de actualidad, especialmente al haberse trasladado las operaciones al norte de Irak, conflicto que se sostiene por las precarias condiciones económicas y sociales del Sudeste de Anatolia. De ahí que Ankara se disponga a aplicar a la zona el proyecto GAP, que incluye la construcción de 35 presas y centrales hidráulicas que permitirá la industrialización y desarrollo de una competitiva agricultura, elevando el nivel de vida de los kurdos, proyecto que afectará negativamente a Siria e Irak. La detención en Italia del líder kurdo Ocalan enturbió las relaciones entre ambos países, al negarse Roma a su extradición.

Otro grave problema que gravita en la política turca es el que provoca la división de Chipre, aumentando la tensión este año al anunciar el presidente Demirel que la decisión de abrir la UE negociaciones con los grecochipriotas cerraba la puerta a una posible reunificación, y que reconocer únicamente a ese gobierno era una forma equivocada de iniciar conversaciones. A este hecho respondió, sin lugar a dudas, el que en enero, Ankara y el gobierno turcochipriota —no reconocido internacionalmente pero que controla el 37 por ciento de la isla con un 20 por ciento de su población— establecieran las bases para una integración política y económica y para aunar esfuerzos tendentes a presionar a los organismos internacionales en el logro de un autogobierno.

Ese largo conflicto con Turquía y su probable ingreso en la UE centró la campaña presidencial en la zona griega, ganada por el ya presidente, el conservador Clerides, en unas elecciones en las que no primaba tanto la cuestión ideológica como la capacidad del elegido para negociar con Ankara, con el fin de constituir un estado federal, ingresar en la UE y participar en un programa conjunto con Grecia. Nadie duda que ese conflicto envenena desde hace años la prevista ampliación de la UE y la ausencia

de Turquía en la ya mencionada reunión de marzo, especialmente preparada para ella; y preocupa no solo por el peligroso vacío que deja ese país en Europa, ante su difícil encaje en la Comunidad, sino por la capacidad turca para complicar la integración de Chipre. No se olvide que Atenas amenaza con vetar la prevista ampliación si se accede a las pretensiones turcas, prevaleciendo finalmente la advertencia griega. La propuesta turca de crear en la isla una Confederación de “dos estados” no fue aceptada por el gobierno griego, por considerar que así se haría eterna la división, se oficializaría la ocupación de la zona norte de la isla y no se reconocería la propuesta de las Naciones Unidas para resolver el contencioso, aunque Atenas tampoco ha buscado apaciguar el conflicto al permitir la instalación en su suelo de la oficina del PKK kurdo.

La tesis griega es que no se opone al papel que debe jugar Turquía en Europa, pues no deben establecerse barreras étnicas o religiosas; y si los turcos estiman que tienen derechos sobre el mar Egeo, que presenten su caso ante el Tribunal de Justicia Internacional, como lo hizo Grecia.

UN DIFÍCIL AÑO PARA RUSIA Y SU MUNDO

Aunque el plan económico diseñado por Yeltsin para lograr un crecimiento sostenido en 1998 incluía doce objetivos básicos, se vio rechazado por la Duma ante la dificultad de recaudar los impuestos necesarios para alcanzar esos objetivos y porque no se aproximaban a la realidad económica del país, aconsejando recortes de 4.600 millones de dólares, planes y presupuestos que no se aprobarían de momento.

Ante esa difícil situación, Yeltsin no dudó en destituir en marzo a todo su gobierno, argumentando la necesidad de profundizar en las reformas y mejorar el nivel de vida de la población. Occidente se preguntó si sería un nuevo episodio teatral para salir, como fuera, de la crisis o una maniobra de más largo alcance.

El nombramiento, a finales de aquel mismo mes, de Kiriyenko, un joven tecnócrata de 35 años, para ponerse al frente del ejecutivo, acompañado por una severa advertencia a la Duma para que no lo rechazara, parecía resolver la crisis política. Ese gobierno debería acabar con la evasión de capitales, pagar los atrasos a militares y funcionarios, engordar las arcas del estado, que en 1997 solo recaudaron el 57 por ciento de los impuestos previstos, elevar el PIB que había caído un 50 por ciento desde el hundimiento de la URSS, ofrecer seguridad a los inversores extranjeros, etc,

planes excelentes en los que parecía ignorarse la escasa o nula disponibilidad de medios. El programa, paradójicamente, se presentaba antes de ser ratificado Kiriyenko por la Duma, dominada por comunistas y nacionalistas opuestos al presidente y sus reformas.

Esta ratificación supuso un verdadero duelo entre Yeltsin y las Cámaras, produciéndose dos sucesivos rechazos, debidos, en gran parte, a personajes como Berezovski, hasta hacía dos años el gran sostenedor del presidente pero al que ahora combatía al conocer las condiciones de la privatización de la principal empresa petrolera estatal que hasta allí controlaba.

El fantasma de nuevos comicios, tal como había amenazado el presidente, hizo reflexionar a los diputados, al advertir que podrían perder sus sabrosos emolumentos y prebendas, de la dacha al coche oficial. Fue así como Kiriyenko accedió al poder en 3ª votación, dejando bien claro Yeltsin quien mandaba en Rusia, colocando un primer ministro fiel y manejable que creía le allanaría el camino a las presidenciales del año 2000. En esos comicios se deberá contar con el general Lebed que, como gobernador de la extensa región siberiana de Krasnoyarsk, alimenta sus ambiciones, dado que esa región es el barómetro electoral del país.

Los grandes derrotados de esa crisis fueron el comunista Ziuganov, el citado Berezovski y Chernomindin, director de un gran imperio económico basado en el monopolio de empresas estatales, mientras que el ultranacionalista Yirinovski había permitido aquel nombramiento. Pero lo que el joven tecnócrata no debía olvidar era que, desde 1992, Yeltsin había roto el viejo sistema político y el futuro del país estaba cada vez menos determinado por una correlación de fuerzas entre reformadores y comunistas; y, cada vez más, por una lucha por el poder real entre las diferentes fuerzas económicas, árbitros de la política al financiar campañas, otorgar prebendas y controlar los medios de comunicación.

Sumergida Rusia en una profunda crisis financiera y económica, se pensó que su salvación sólo podía provenir de las ayudas de Occidente y del FMI pues, de no recibirlas, el clima social, muy enrarecido, como lo demostraron las huelgas de mineros en mayo, podía hacer saltar el régimen y contagiarse del efecto indonesio, que obligó a Suharto a abandonar el poder. De ahí que el FMI, para evitar una bancarrota, decidiese entregar los 670 millones de dólares concedidos pero congelados desde enero, mientras se nombraba vicepresidente a Chunais, padre de las privatizaciones, del que se esperaba demasiado y cuyos planes preveían: aumen-

tar la recaudación de impuestos, eliminar el fraude, reducir los gastos públicos en 7.000 millones de dólares, adoptar un nuevo código fiscal, reducir la burocracia estatal, salvar al rublo de una devaluación, etc, mientras Occidente, que ya tenía comprometido 72.000 millones de dólares, se mostraba cansado de otorgar créditos. Pero el espectro de las cabezas nucleares, mezclado con un posible caos social, movió al FMI a volver a entregar cerca de tres billones de pesetas.

Un nuevo derrumbamiento de la bolsa de Moscú en agosto, ante el temor de una devaluación del rublo y la huida de capitales extranjeros —que aseguraban que los dineros del FMI sólo servían para tapan agujeros y no para inyectarlos en la economía— unido a la depreciación del Yen japonés, condujo a que el dólar se fortaleciera como moneda refugio, mientras el grupo G-7 lanzaba inútiles advertencias. Esa situación provocó que en agosto se devaluase el rublo en un 30 por ciento, suspendiéndose de paso, durante 90 días, los pagos de la deuda, calculada en 28,7 billones de pts. Esa devaluación, que los Estados Unidos criticaron y recomendaron no sirviese de modelo a otras economías de la zona, aunque fue una medida arriesgada era correcta ante la sangría que sufrían las reservas monetarias nacionales para mantener artificialmente alta su moneda.

Como se esperaba, al finalizar agosto caía el gobierno Kiriyenko, incapaz de poner en orden una economía heredada. Le substituyó Chernomirdin, mal acogido por la opinión pública, que recordaba su desastrosa gestión, introduciendo, antes de verse confirmado por la Duma, el control de precios, emisión de nueva moneda sin conocer lo que valdría mañana y dando marcha atrás en las reformas con la vuelta a nacionalizar la banca, mientras Chunais, último reformador y negociador con el FMI, era despedido. Daba la impresión de que Rusia regresaba a los tiempos de la economía dirigida ante su inadaptación a la economía de mercado, quizás por mantener vivas las profundas raíces y metodología soviéticas.

Ese caos condujo a Yeltsin a ceder parte de su poder y prerrogativas a la Duma y gobierno, como el cese de ministros, mientras Chernomirdin se veía rechazado por las cámaras, que sí aceptarían a su sucesor, al ministro de Asuntos Exteriores Primakov. Calmado de momento el clima político, la crisis de Kosovo supuso un respiro a un Yeltsin muy enfermo, que volvía a pregonar que la no intervención de la OTAN se le debía en gran medida. Pero la realidad, al finalizar el año, es la paulatina degeneración de la crisis con un Yeltsin hospitalizado, abandonando el presidente del FMI, a Moscú sin ofrecer ayuda.

En política exterior, en los primeros meses del año Rusia buscó un cierto protagonismo en la crisis iraquí, pretendiendo hacer ver al mundo que se había superado, en gran parte por su intervención diplomática. Más tarde, en su reunión con Kohl y Chirac, Yeltsin les propuso la creación de un eje París-Moscú-Bonn, idea que los estadistas europeos no aplaudieron.

En su visita a Japón, el presidente se comprometió a firmar el tratado de paz antes del año 2000, aunque existen problemas pendientes para que las relaciones sean cordiales, como la discutida soberanía sobre las islas Kuriles del sur, ocupadas por la URSS en 1945 y reclamadas reiteradamente por Tokio.

Con respecto a su área de influencia, Rusia trata de definir hoy sus intereses vitales declarando prioritarios dos escenarios, Europa y el Oriente Medio hasta el Pakistán, puesto que cuanto acaezca en esas áreas repercute en su propio territorio. En relación con la CEI, le será difícil extender su influencia más allá de unos límites modestos pues, como se vio en la pasada cumbre de 1997, los países miembros reclaman replantear el funcionamiento de la Comunidad, por considerarla inútil e ineficaz en su fórmula actual, dada la gran diversidad de intereses. Si para unos es un marco que no les satisface, para otros debería ser un crisol de integración; puntos de vista que no son otra cosa, para Moscú, que un “complot occidental” para hacer saltar a la Comunidad, pues así lo puso de relieve Moscú en la cumbre de presidentes de las repúblicas asiáticas, celebrado en enero de este mismo año 1998.

Un problema que Rusia sigue sin asimilar es el que le provocan *los países Bálticos*, que atraviesan una difícil transición. De las tres repúblicas, Lituania es la que presenta menos inquietudes a Moscú. En Letonia, donde la cuestión étnica es más acusada —junto al 57 por ciento de letones conviven un 40 por ciento de rusófonos— el fracaso de la política de integración parece puede superarse en 1998 con la victoria de los partidarios de esa integración en el “referéndum” celebrado en octubre y que facilitará el ingreso de ese país en la OTAN y en la UE. Por su parte, en Estonia la integración no presenta problemas, pero prosigue manteniendo con Rusia unas relaciones tensas, sin que se haya firmado todavía un tratado de fronteras.

Una zona muy sensible para Moscú es la del *Cáucaso*, en la que se mezclan tendencias nacionalistas, rivalidades étnicas y religiosas y, especialmente, intereses económicos cruzados. Si a finales de 1996 la paz parecía imponerse en *Chechenia*, en mayo se deterioraron las relaciones al

poner fin el gobierno checheno a las negociaciones con Moscú ante la falta de cumplimiento de lo pactado. El presidente checheno se negó a garantizar la seguridad del oleoducto Baku-Novorosisk que, a lo largo de 153 km, atraviesa ese territorio secesionista, aunque ello suponga una falta de ingresos en las arcas del nuevo estado.

En *Georgia*, en 1998 se produjo el segundo atentado sufrido por el presidente Shevardnadze, acusando unos al ex-presidente Gamanjundin y otros a Rusia. Aunque Shevardnadze pretende hacer de su país el centro neurálgico de la política caucásica, mediante una alianza con Ucrania y Azerbaiyán, sus complejas relaciones con Rusia lo frenan a causa del petróleo. Mientras Moscú pretende una única salida del crudo del Caspio por un oleoducto que acabe en Novorosisk, Georgia ha firmado este año contratos internacionales para que parte de dicho crudo transcurra por un oleoducto que desemboque en Sujumi, litoral georgiano del mar Negro.

Por otro lado, la política georgiana sigue dominada por dos acuciantes problemas: el primero, con la autoproclamada república de Abjacia, zona separatista que Georgia acusa de estar apoyada por Moscú, como lo demuestra la retirada de forma unilateral de las fuerzas rusas de interposición, bajo el mandato de la ONU; el segundo lo constituye otra región secesionista, Osetia sur, donde las negociaciones para poner fin al conflicto parecen estancadas, lo que prueba la carencia de una política con respecto a las regiones.

En cuanto a Armenia, la dimisión de su presidente Ter Petrossian este año puso en peligro el proceso de paz en Nagorno Karabaj, saliendo reforzado el primer ministro, firme opositor a dichas negociaciones.

Azerbaiyán es el país caucásico con más futuro si continua monopolizando la producción de crudo y gas en la zona. En 1998, se piensa, ha quedado resuelta la salida del crudo con la iniciación de un nuevo oleoducto, vía Georgia, evitando así su exportación por Novorosisk pues, mientras no se resuelva el conflicto de Nagorno Karabaj, la salida a través de Turquía es imposible dado que ese oleoducto había de atravesar Armenia. Por otro lado, prosiguió su contencioso con Rusia por el estatuto que se le debe dar a las aguas del mar Caspio, pues mientras Azerbaiyán y Turkmenistán abogan por considerarlas como alta mar, Rusia e Irán exigen el de mar territorial.

Las nuevas repúblicas de Asia Central han proseguido, a lo largo de 1998, afirmándose en una independencia que no habían buscado y un

pasado demasiado reciente que les impuso sacrificios, en nombre de intereses económicos y de defensa de la antigua Unión Soviética.

En *Kazajstán*, si su política exterior parece brillante, en 1998 se deterioraron el clima social y las relaciones interétnicas a causa de una ley que refuerza el papel de la lengua kazaja, impulsando la emigración de rusófonos. En este país se decidió abrir la primera embajada española en el área de Asia Central.

Por su parte, *Turkmenistán* continúa sometida al poder absoluto de su presidente Nyazov, negándose a entrar en un frente antitalibanes por necesitar a estos para llevar a cabo el proyectado oleoducto que debe atravesar Afganistán. La construcción de un gaseoducto hacia el Indico y su posible enlace con Turquía tropiezan con la negativa norteamericana, dadas las inversiones que deben realizarse en Irán.

Uzbekistán, que se considera la heredera del imperio Tamerlan y pretende erigirse en potencia regional dominante, continuó este año su acercamiento a los Estados Unidos, su despegue de Rusia, aumentó el flujo comercial con Corea del Sur y Japón, y al mismo tiempo ha disminuido sus intercambios con la CEI, apareciendo como un firme adversario de los talibaneses.

En cuanto a *Tayikistán*, finalizó su guerra civil, viéndose obligada a seguir en la estela de Moscú, integrada en la unión monetaria que agrupa a Rusia, Bielorusia y Kazajstán, aunque todavía en 1998 no lo ha ratificado, clara señal de las reticencias que existen sobre una excesiva dependencia de Moscú.

Con *Ucrania* las relaciones siguen siendo difíciles, no habiendo ratificado en 1998 el tratado que puso fin al contencioso de la flota del mar Negro y al estatuto de las bases navales de Feodosia y Sebastopol. A pesar de haber sido el primer país de la CEI en adherirse a la Asociación Para la Paz de la OTAN, su política en este año ha sido fluctuante, pues, para atraer los votos rusos de Crimea, se apresuró Kiev a firmar en febrero un acuerdo con Moscú para incrementar las consultas políticas e intercambios. En todos los casos, aparece como un país inestable ante la constante lucha por el poder de los grandes clanes industriales de las cuencas de los ríos Don y Dnieper, y aunque, en esa lucha, los grupos del Don han desaparecido de la escena política, tal como se ha visto en las elecciones de mayo, la lucha se centra ahora en el interior del propio grupo del Dnieper, del que proceden todos los ministros y más de 200

altos cargos. Se espera que en el ejercicio fiscal 1998-99 aparezca un enorme déficit.

En *Bielorrusia* a lo largo del año se afirmó el poder personal de su presidente, cuya política suscita recelos en los círculos neoliberales de Moscú, siendo acusado de someter al país a un dirigismo económico obsesivo.

ÁFRICA MEDITERRÁNEA ENTRE EL FANATISMO Y LA ESTABILIDAD

Dentro del mundo musulmán del Mediterráneo, dos países adquirieron un mayor protagonismo, *Argelia* y *Marruecos*.

En *Argelia*, dada la reserva y total desinformación que alimenta el gobierno del Frente Nacional de Liberación, mero encargado de aplicar las directrices emanadas por las fuerzas armadas, es difícil evaluar la verdadera situación que gira alrededor del hecho fundamentalista.

El gran problema de cómo alcanzar la democratización continuó sin resolverse en 1998. Para unos, solo se conseguirá neutralizando el integrismo, mientras que, para otros, lo esencial es establecer una alternancia política, aunque se beneficien, en un primer momento, los fundamentalistas. Pero la realidad es que en Argel solo cuentan tres factores: las FAS, que tratan de mantener su hegemonía; el FIS, que busca suplantarlas a través de la violencia, y las fuerzas socialistas del FFS, que estiman que el poder debe asumirse por la vía electoral, pues el resto es una oposición difuminada y sin arraigo popular.

Se abrió el año con los 600 asesinatos acaecidos en la primera semana del Ramadán, cifra sin precedente desde 1992 en el que se inició el conflicto, hecho que conmovió al mundo musulmán, que consideró una blasfemia realizarlos en esas fechas y movió a la UE y a los Estados Unidos a solicitar el envío de una comisión. Argel estimó esa petición como una intromisión en sus asuntos internos, aunque accedió a la visita de una "troika" comunitaria. Esta se limitó a recabar información para el posterior envío de ayudas, si bien encontró una falta total de colaboración y transparencia en las autoridades que, animadas por la prensa, acusaron a Francia, Suecia y Reino Unido de mantener santuarios terroristas del FIS en sus respectivos países.

Ante los escasos resultados obtenidos, los Quince anunciaron el viaje de una delegación del Parlamento Europeo, que tampoco tuvo éxito, negándose a recibir un mensaje del FIS para no enrarecer el ambiente.

La existencia de esas redes islamistas en Europa no debe confundirse con la presencia musulmana en el Viejo Continente, que está originando una cierta inquietud a nivel popular ante una más que probable inmigración masiva procedente del Sur. El problema es que, mientras otras minorías se integraron adquiriendo plenos derechos tras siglos de conflictos, la presencia musulmana sólo alcanza a dos o tres generaciones; y aunque las últimas, nacidas ya en el Continente, han absorbido en parte la cultura europea y su dinamismo, es aun pronto para que sus referencias religiosas, étnicas y mentales evolucionen con rapidez y se adapten al entorno occidental en el que viven. No obstante, se percibe que esas nuevas generaciones afincadas en Europa tratan paulatinamente de librarse de toda forma de dependencia religiosa, dando vida, incluso, a una cultura islámica laica que contribuirá a la construcción de la nueva Europa.

Meses después de la visita de los eurodiputados, Argel recibía la de una misión de la ONU encabezada por Mario Soares, que supuso un avance para conocer algo de la verdad de lo que allí sucedía, al poderse desplazar a las áreas de las matanzas.

El asesinato de un carismático cantante beréber desencadenó graves disturbios en la zona beréber, ya soliviantada por la decisión del ejecutivo de imponer la lengua del Corán o árabe en todo el país, olvidando que su introducción solo se remontaba a 1963, año de la independencia. La lengua del Corán es apenas conocida por la mayoría de los Argelinos entre 30 y 60 años, por ser el francés el medio mas utilizado; por el contrario en la Kalibia o área beréber, con un 20 por ciento de la población argelina, el francés es prácticamente desconocido, solicitando sus moradores que se respete su lengua e identidad cultural de más de 13 siglos.

Un hecho importante que destapó la prensa fue la lucha por el poder que se desarrolla en el seno de las fuerzas armadas, no ocultándose la rivalidad entre los generales Lamari, jefe del Estado Mayor, y Betchin, consejero del presidente Zerual. Es la expresión de la disputa de una candidatura en las próximas elecciones, anunciadas por sorpresa por el presidente para 1999, sin que se conozca aún las verdaderas razones de esa convocatoria. De esa lucha, en el otoño se retiró Betchin por sufrir un acoso incesante, dejando la vía libre a su rival, aunque también es muy posible que sea finalmente un civil el que acceda a la jefatura del estado. No obstante, la dimisión en pleno del gobierno causó perplejidad, indicando que existe una lucha por el poder en busca de un candidato creíble que satisfaga a todos.

Marruecos. Se estima que la llamada de atención que efectuaron en enero los integristas radicales al Rey, teniendo a su líder en arresto domiciliario desde hace ocho años por negarse a reconocer la autoridad religiosa del monarca, y solicitar una apertura para evitar al reino una situación similar a la argelina, pudo ser la causa que condujo a Hassán II, un mes más tarde, a comprometerse a establecer y consolidar un régimen democrático y pluralista basado en la monarquía. El Rey es consciente, no sólo de que el porvenir de Marruecos depende de su sucesión y de la consolidación de la democracia, sino del apoyo que dio la oposición al “sí” en el referéndum de una nueva constitución, que instaló un régimen bicameral, y de que en las elecciones de 1997, llamadas de la “transparencia”, los islamistas moderados decidieron participar en el juego político.

Esas razones fueron las que llevaron a Hassán II a tomar una decisión histórica: encargar la formación del gobierno al socialista Yusufi, quien había pasado la mayor parte de su vida en el exilio, finalizando así una situación incierta que se arrastraba desde las elecciones del año pasado. En ese ejecutivo no entraron los nacionalistas del Istiqlal, por estimar que los resultados electorales se habían manipulado, aunque la enemistad manifiesta entre ese partido conservador y los socialistas entraba en el juego del monarca. El Rey había demostrado su deseo de ver crecer en el país a tres grandes bloques, el conservador, el centro y una izquierda tolerante y constructiva.

Si hasta mediados del año Yusufi encontró dificultades para poder cumplir las promesas electorales, como la relativa a los Derechos Humanos, en otoño pudo vencerlas y poner en libertad al “cheik” Yasin, cabeza de los fundamentalistas “Justicia y Caridad” y uno de los casos más emblemáticos en materia de Derechos Humanos. Posteriormente, Filali afirmaría en Madrid que en seis meses no quedarían presos políticos en Marruecos.

Dentro de ese clima, en abril se abrió en Rabat la IV Cumbre Hispano-marroquí de alto nivel, en la que se aparcó el tema de Ceuta y Melilla pero no el próximo referéndum del Sahara, en el que España, según se dijo, mantendrá la más estricta neutralidad. Nuestro presidente aprovechó el encuentro para tratar el nuevo acuerdo pesquero con la UE, que afecta a más de 500 barcos españoles, al caducar el actual dentro de año y medio.

Con respecto al futuro del Sahara, es un conflicto en el que se ventilan intereses económicos y geopolíticos al encontrarse en una zona prioritaria para la seguridad de Europa e implicar directamente a Argelia, país con el que Marruecos, en el fondo, se enfrenta para alcanzar la hegemonía regio-

nal. A España le afecta dada la inclusión del archipiélago canario en esa misma zona.

La misión de la ONU encargada de organizar y supervisar un referéndum, previsto inicialmente para diciembre de 1998 y posteriormente pospuesto, prosiguió en este año 98 el levantamiento del censo, habiéndose identificado 147.350 posibles electores en ambos lados de la frontera. Cometió el grave error de permitir que fuera el Polisario y Rabat los que presentaran listas de posibles votantes, cuando se conoce que cada parte intenta aportar un censo a su medida e interpreta de forma diferente el plan de paz, que bascula entre la autodeterminación e independencia y la integración en Marruecos como región con amplia autonomía.

Para no dañar nuestras relaciones con Rabat, España se ha inhibido, mientras la Liga Árabe y la OUA miran a otra parte (Oriente Medio, Sudan, ex Zaire). Hassán II intentó en la cumbre de la OUA, reunida a mediados del año en Burkina Faso, que esa Organización expulsase a la República Saharaui, reconocida por 31 países africanos. Finalizó la reunión sin consenso, prosiguiendo Rabat fuera de la institución sin escuchar los ruegos de Mandela, al mismo tiempo que alentaba la formación de un partido nacionalista saharauí, a pesar de estar prohibidos en el reino las formaciones regionalistas, una acción más para asegurarse Marruecos un desenlace favorable en la disputa del territorio. La visita de Annan a la zona para desbloquear el plan de paz no parece haya gustado a Rabat, que desconfía de las listas levantadas por Minurso, advirtiendo que dicho plan puede provocar disturbios en el Sahara.

En este año la política en *Egipto*, controlada por el partido Nacional Democrático de Mubarak, se vio afectada por la permanente confrontación con los islamistas del sur del país, la represión contra su vertiente política "Hermanos Musulmanes" y los problemas socioeconómicos provocados por la liberalización de empresas públicas.

Las fuerzas de seguridad han reducido el terrorismo integrista con la creación de una policía turística. La aparente tranquilidad que se vivió este año —recuérdense los trágicos sucesos acaecidos en 1997— pone de relieve que, aunque persiste, el problema se encuentra muy controlado y circunscrito a dos regiones del alto Egipto.

No obstante, hay varios factores que contribuirán con el tiempo a debilitar el terrorismo en su forma actual: su creciente impopularidad; la severidad de la represión, que se apoya en un estado de emergencia en vigor

desde hace 30 años; el nacimiento de un nuevo partido escindido de los "Hermanos Musulmanes", que se presenta como no confesional, pluralista y de corte occidental, se compromete a respetar la actual constitución y considera al Islam más como una cultura que como confesión religiosa; finalmente, la política de concesiones a las autoridades religiosas oficiales del Al Azhar, retirando obras y publicaciones que atenten contra la religión y buenas costumbres.

Durante 1998 España relanzó sus relaciones con *Libia*, prácticamente congeladas desde 1994 en el nivel de diálogos y contactos a alto nivel, aunque Trípoli siga manteniendo una gran deuda por impagos a empresas españolas. Por otro lado, Libia e Italia cerraron las heridas que produjo el pasado colonial, con la firma en julio de un acuerdo sobre terrorismo y permiso de regreso de 20.000 antiguos colonos expulsados por Gadafi en 1970.

Finalmente, recordaremos que España solicitó a la OTAN más atención para el *Magreb*, pues el dialogo con el sur mediterráneo es tan importante como con el Este de Europa. En la reunión de Luxemburgo nuestro presidente anunció que en 1999 se abriría un seminario en Valencia en el que participarían los países de la OTAN y seis de la cuenca mediterránea. Quedaban ausentes, de momento, Egipto y Argelia, aunque el primero ha reiniciado este mismo año sus contactos, plasmados en unas maniobras navales efectuadas en octubre con marinas de la Alianza.

EL ORIENTE MEDIO, FOCO PERMANENTE DE TENSIONES, RIVALIDADES Y CONFLICTOS

A lo largo de 1998, la zona se vio sometida a grandes tensiones, conflictos y cruces de intereses muy dispares. El ya eterno problema palestino-israelí continuó sufriendo altibajos; en Afganistán, la guerra civil prosiguió con clara ventaja de los talibanes y con posibles repercusiones sobre los países de Asia Central; en Irán, aumentó la sorda lucha entre reformistas y conservadores radicales; en Irak, se abrió una segunda crisis con Norteamérica, que pudo haber conducido a una nueva guerra; Jordania y Arabia Saudí, ante el interrogante de la sucesión de sus respectivos monarcas; el problema turco, que involucra a cuatro países con la aproximación turco-israelí y que repercute negativamente en Siria, etc., etc. son claros exponentes de la complejidad en dicha área.

Con respecto al *conflicto palestino*, conviene señalar que el nacionalismo israelí ha demostrado que no difiere de otros nacionalismos, pues no duda en negar a los demás lo mismo que ellos reclaman, convencidos de su legítimo derecho a la tierra de sus padres porque la Biblia les otorga tal legitimidad. De ahí que desde 1945 Israel se impusiera como objetivo político y estratégico mantener unas fronteras lo más amplias posibles, pareciendo ignorar que en un mundo globalizado éstas han perdido gran parte de su valor al ser permeables a los flujos económicos de ideas y personas. Sus sucesivas guerras de anexión han supuesto una desgracia para los judíos, al engendrar la ocupación los comienzos de la colonización, que aceptaron los sucesivos gobiernos, sometidos a las presiones de los "Halcones", como Dayan, Igal Alon y Sharon, desde los laboristas, que hasta 1977 permanecieron fieles a la teoría de no abandonar las tierras conquistadas, hasta los conservadores del Likud. No obstante, en 1993, antiguos nacionalistas, como Simón Peres e Isaac Rabin, se convencieron de que era preciso poner fin al conflicto con los palestinos, originándose dos tendencias en la sociedad judía: los defensores de fórmulas de entendimiento y compromiso territorial y los anexionistas a ultranza, que encarnan los ortodoxos radicales e intransigentes. Estos, no sólo se niegan a que pueda existir un nacionalismo palestino sino que piensan que aceptar la idea de una doble legitimidad minaría los propios fundamentos del sionismo, puesto que los palestinos árabes tienen derechos como individuos pero no como colectividad. Por esta razón no se plantearon, en su día, que pudieran aspirar a la autonomía e independencia, derecho reconocido en los acuerdos de Oslo.

Así estaba la situación, con estancamiento del proceso de paz desde marzo del pasado año y la neutralización de los esfuerzos del enviado especial de la UE en la zona, el español Moratinos, al aprobar Tel Aviv una lista de intereses vitales para retener en Cisjordania el 80 por ciento de los territorios ocupados. Tales esfuerzos se intensificaron cuando Netanyahu no cedió en enero a la tímida presión de Clinton para dividir el segundo repliegue en etapas, con una entrega inicial del 13 por ciento de las áreas anexionadas, lo que habría facilitado el regreso de Arafat a la mesa de negociaciones.

En la visita de Netanyahu a Madrid, poco después de haberla efectuado el líder palestino, acusó a la UE de adoptar una posición más próxima a las tesis palestinas y anunciando, de paso, que le gustaría reunirse en Madrid con Arafat, así como que se iba efectuar la retirada de fuerzas de la zona de seguridad del Sur del Líbano, ocupada en 1985, si Beirut ofrecía garantías. Esa retirada se efectuó, en parte, en abril, dándose así

cumplimiento a una resolución de las Naciones Unidas. Fue una decisión unilateral, puesto que Siria anunció, a su vez, que su retirada del Líbano iría unida a la de los israelíes del Golán.

La intransigencia de Netanyahu, a quien no le debilitó la reelección del presidente Weizman, contrario a su política, así como la benevolencia del líder palestino frente al terrorismo de Hamas, hizo ver lo difícil que era alcanzar un entendimiento. Tampoco se veía clara la congelación de la política de colonización, a pesar de que ese proceso no responde a una necesidad demográfica sino, más bien, a un proceso político nacionalista.

El fracaso del encuentro de ambos líderes en Londres, que respaldaba Washington y que levantó muchas expectativas —aunque Egipto expresó su pesimismo en el V Foro del Mediterráneo celebrado en Palma de Mallorca— pareció confirmar que el calendario previsto en Oslo se encontraba paralizado y en “ruinas”.

Un nuevo impulso al diálogo lo intentaron dar los Estados Unidos con los encuentros en Washington. Allí Tel Aviv presentó un nuevo plan, tras pasar el 9 por ciento ó 10 por ciento y convertir otro 3 por ciento ó 4 por ciento de los territorios cedidos en zona industrial palestina bajo control israelí en materia de seguridad. Este plan lo rechazó Arafat, quien no llegó a conversar personalmente con su rival. Mientras, en Israel se asistía a la represión de las manifestaciones palestinas en el 50 aniversario de su éxodo, iniciado al finalizar la guerra de 1948.

Durante el verano, mientras Netanyahu superaba tres mociones de censura y un proyecto de ley del Parlamento para su disolución y anticipo de las elecciones previstas para el año 2000, por no ser vinculantes, en el otro lado dimitían dos ministros palestinos porque en un reajuste ministerial, gobierno que curiosamente cuenta con 30 carteras, más que en China —Arafat mantenía dos titulares y antiguos camaradas de la época del exilio en Túnez, sospechosos de corrupción—. Al mismo tiempo anunciaba que, de no efectuarse la retirada en las fechas previstas, estaba determinado a fundar un estado independiente en 1999.

Un enésimo intento de entendimiento se alcanzó en octubre, al lograr el presidente Clinton reunir a ambos líderes en la plantación Wye, cerca de Washington, nueva versión de las negociaciones de Camp David que en 1979 estableció la paz entre Egipto e Israel. La reunión se abrió en un clima de tensión y desconfianza, y después de nueve días de conversaciones se firmó un acuerdo que podía resumirse en “territorio a cambio de

seguridad". Israel accedía a abandonar el 13 por ciento de Cisjordania pero quedando pendiente problemas vitales, como el futuro de Jerusalén, política de asentamientos, derechos de los refugiados, puertos y aeropuertos, etc, por lo que no satisfizo a nadie, dudándose, incluso, de que lo acordado se llevase a cabo. El grave atentado de Hamas, el 6 de noviembre, que retrasó la ejecución del acuerdo, hizo ver que el problema seguía, prácticamente, muy estancado. Aunque el Parlamento israelí aprobó el citado acuerdo, este se paralizó en diciembre por causa de sangrientos enfrentamientos, así como por varios puntos del acuerdo relativos a la liberación de presos, expansión de los asentamientos, etc. Tel Aviv condiciona la retirada a sus condiciones, que rechaza Arafat: clima enrarecido en vísperas de la llegada de Clinton.

La visita de Clinton a Israel y Palestina en diciembre, en medio de una gran violencia en las calles, tuvo escasos resultados al mantener Tel Aviv sus exigencias. Y eso aunque el presidente le otorgara 1.200 millones de dólares si cumplía los acuerdos de Wye y advirtiendo asimismo Arafat, en la propia Gaza que, por su parte, se disponía a cumplir sus compromisos.

Otro motivo de inquietud en la región lo origina *la alianza turco-israelí*, establecida en 1995 y muy poco divulgada, pues cambia la relación de fuerzas en el área. La opción turca se explica por la pérdida de su privilegiada posición de avanzada de la OTAN frente a la URSS y ante un posible Oriente Medio fundamentalista. Esas razones han impulsado a Ankara a jugar un nuevo papel, convertirse en potencia regional, señalando al integrismo como un peligro para su seguridad. Por otro lado, su alianza con Israel le asegura el apoyo del "lobby" judío norteamericano en el Congreso, que hoy es también portavoz de Ankara en los Estados Unidos. La alianza es, así mismo, muy favorable a Tel Aviv, al verse Siria amenazada por el norte.

Es bien conocido que las relaciones turco-sirias siempre han sido tensas por el apoyo que Damasco otorgaba al PKK kurdo. Esto motivó en octubre serias advertencias turcas, con el peligro de abrirse un nuevo conflicto armado. La situación quedó resuelta poco más tarde, al comprometerse Assad a no suministrar armas ni dinero y a ejercer un control del PKK que garantizase la seguridad en las fronteras.

Por otro lado, a Siria le inquieta el proyecto turco GAP para Anatolia al afectar al curso del río Éufrates que nace en Turquía y atraviesa Siria e Irak. A pesar del tratado del 1987 sobre esas aguas, firmado por ambos países, en 1990 se puso de manifiesto aquel temor cuando se llenó la

presa Ataturk; y además, porque cuando se concluyan las obras, sobre el 2010, Siria verá disminuir a la mitad el caudal del río al pasar por su territorio, mientras Irak perderá un tercio, con unas aguas de baja calidad ante el previsto uso masivo de fertilizantes y pesticidas para el desarrollo agrícola del SE de Anatolia.

Asimismo, *las relaciones sirio-israelíes* siguen deterioradas, al haberse congelado el acuerdo suscrito en 1996 entre el presidente Assad e Isaac Rabin para retirar estas fuerzas del Golán a la línea de alto fuego de junio de 1967, así como para cumplir las recomendaciones de Washington sobre seguridad, aceptadas por ellos en 1995. Para negociar en la actualidad, Netanyahu exige se cumplan dos condiciones: mantener una estación de prealerta en el Golán, una vez devuelto, a cambio de que Siria instale otra en Israel, petición que Damasco rechaza por creerla innecesaria, dado que los satélites americanos ofrecen a Tel Aviv todo tipo de información. La otra condición es que, por provenir el agua del Golán de Turquía, agua que suministra casi un tercio del consumo israelí, se incluya en las negociaciones a Ankara, que por su parte rechaza, por considerar se trata de un problema que no le afecta.

El bloqueo del equipo de inspectores de la ONU en *Irak*, iniciado en octubre del 97, abrió una grave crisis en enero, poniendo de nuevo al mundo al borde de otra guerra del Golfo. La escalada aumentó cuando el presidente de la UNSCOM acusó a Saddam de disponer de armas de destrucción masiva y este decidió expulsar del país a los inspectores de nacionalidad norteamericana y el cese de las inspecciones. Esa medida motivó que Washington desplegara en la zona fuertes contingentes militares de mar, tierra y aire, aunque sin lograr reconstruir la anterior coalición, tensión que condujo a una reunión en París de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Estados Unidos y Rusia. Al finalizar aquella, Primakov comunicó que Bagdad aceptaba el regreso de todos los inspectores, incluidos los norteamericanos, evitándose el ataque pero sin apagarse la crisis. Nuestro gobierno expresó su apoyo a las decisiones del Consejo de Seguridad y dijo que no pondría obstáculos al uso de nuestras bases.

En tal ambiente, las declaraciones no cesaron. Riad dejó entrever que apoyaría un ataque centrado contra Saddam. Israel afirmó su derecho a contraatacar si volvía a ser blanco de los misiles "Scud" iraquíes. Moscú insistía en que una agresión contra Irak supondría un ataque contra los intereses vitales de Rusia y podría desencadenar la tercera guerra mundial, etc, aunque el problema no era tanto atacar o no como qué hacer des-

pués de una crisis más simple que la del 90-91, puesto que no se había invadido, esta vez, ningún país.

A finales de febrero, el Secretario General de la ONU, Annan, visitó Bagdad, presentando las condiciones del Consejo de Seguridad: ningún palacio presidencial podía ser un santuario; la UNSCOM no sufriría limitaciones en tiempo y espacio en sus trabajos y libertad del Consejo de Seguridad para formar los equipos de inspectores sin discriminar a sus miembros americanos. Respirando el mundo entero cuando Annan alcanzó un acuerdo que incluía aquellas condiciones, que Clinton aceptó, pero sin bajar la guardia hasta ver que se cumplía lo firmado.

Pero fue precisamente en esos días cuando se conoció que la FAO, OMS y UNICEF, organismos de la ONU, habían permitido la venta a Irak de productos médicos que servían para fabricar el temible "antrax", y que Alemania y Francia habían colaborado tecnológicamente con Irak para la construcción de armas químicas y para ampliar el alcance de los misiles "Scud" de fabricación soviética. Incluso el presidente Bush llegó no sólo a bloquear en el Congreso la aplicación de sanciones a Irak sino que le concedió una nueva línea de créditos. Solamente cuando Saddam ocupó Kuwait, el arsenal químico irakí suscitó alarma en el Pentágono, convirtiéndose el régimen baasista en la bestia negra que había que abatir.

Si bien Saddam salió fortalecido de la crisis, el verdadero vencedor fue Annan, al obligar a Saddam a regresar al punto de partida sin obtener garantías sobre el levantamiento de las sanciones.

Esa misión de Annan coincidió con un informe de la Escuela de Guerra del ejército americano que señalaba que la estrategia de doble contención frente a *Irán* e Irak convertía en crónica la inestabilidad en la región y que a Washington le convenía más la cooperación con todos los países de las zona, como forma de aumentar la estabilidad y disminuir los costes que implicaba un fuerte despliegue militar.

En la primavera el Pentágono redujo su presencia militar en el Golfo, en tanto que la ONU y Bagdad acordaban finalizar las inspecciones dentro de dos meses. Esas buenas intenciones desaparecieron al descubrirse que 95 misiles se habían cargado, en su día, con el mortal gas nervioso VX. Finalizando el año, la crisis, no del todo apagada, volvió a reabrirse, al volver Saddam a romper su colaboración con la UNSCOM si no se reconsideraba el levantamiento del embargo y composición de esa comisión

internacional. Volvió así a oírse ruido de sables, aunque la maniobra de Irak ante la ONU obligó a Clinton a cancelar la opción de fuerza.

La vida política en Irán se vio dominada, en 1998, por ecos y derivaciones de las elecciones presidenciales que dieron el poder a Jatami, poniéndose de relieve el fracaso del clero radical y el peso electoral de las mujeres. El nuevo presidente, que controla los poderes ejecutivos y legislativos pero no el judicial ni el Consejo de los Guardianes —en manos del Guía y Jefe del Estado, el ayatolá Jameini, que continua siendo el supremo árbitro del régimen y quien vigila el cumplimiento de las leyes del Islam— intenta conciliar la religión con la modernidad, tratando que el Corán y la moralidad islámica no choquen con las libertades individuales, derechos humanos, etc, algo muy difícil de llevar a cabo.

En el plano exterior se consolida el acercamiento a Rusia y Egipto y la reconciliación con las monarquías del Golfo, manteniendo estables sus relaciones con Siria y sin mejorar con Turquía, a pesar de un acuerdo sobre suministro de gas. Irán mira con precaución el desarrollo de la guerra civil afgana que, a finales del verano, hizo subir la tensión en esa frontera, no descartándose una posible intervención en aquel país. Esta situación junto al llamamiento al diálogo con Washington lanzado por Jatami en la cumbre de la Confederación Islámica —con favorable respuesta de la Secretaria de Estado, quien alabó que el presidente iraní hubiera pedido disculpas por la toma de rehenes en 1979— parecen confirmar, contrariamente a la voluntad del Guía, que Jatami desea sacar a Irán de su aislamiento. De ahí que Norteamérica y Europa se jueguen mucho pues, si prosiguen las sanciones, se reforzaran los partidos de la autocracia religiosa a costa del establecimiento de un Estado de Derecho. Se considera un hecho positivo que Washington haya retirado a Irán de la lista de productores de droga.

El nuevo clima, impensable hace dos años, se puso de manifiesto en abril, cuando intelectuales y medios de comunicación abrieron un debate sobre el futuro del país, cuestionando la supeditación de la política a la religión y solicitando la separación de las instituciones. En esta vertiente fue noticia el arresto del alcalde de Teherán, acusado de financiar con fondos públicos la campaña electoral de Jatami, juicio cerrado con una condena de cinco años y veinte de inhabilitación para ocupar cargos, proceso que, en realidad, fue un golpe dirigido al sector reformista.

Un acontecimiento impensable fue el nombramiento como Vicepresidente del Ministro de Interior horas antes de ser destituido por el Parla-

mento acusado de apoyar al alcalde de Teherán durante el juicio. Sin embargo ese mismo Parlamento aprobó por mayoría el nombramiento de un nuevo Ministro de Interior que era otro hombre de confianza de Jatami.

La conquista de *Kabul* y otros puntos por los talibanes afganos en años anteriores fue posible por el patente apoyo pakistaní, que pretende ver instalado un régimen amigo y hasta cierto punto vasallo en Afganistán; también, por la discreta mirada a otra parte de Washington, al apoyar el proyecto de la sociedad UNOCAL de construir un gaseoducto que una Turkmenistán con Pakistán y que implica que los talibanes ocupen solamente el Este afgano. Esas victorias fueron las que les ha movido a solicitar a la ONU que se les reconociese como gobierno legítimo pues, por el momento, únicamente Pakistán, *Arabia Saudí* y Emiratos Árabes les reconocen, mientras el resto del mundo, incluida la ONU, sostiene la legitimidad del depuesto presidente Rabbani.

En 1998 han suscitado inquietud al aplicar un integrismo duro y por haberse negado a erradicar el cultivo de adormidera, así como por acoger a ciertos islamitas radicales a los que Washington acusa de alentar y financiar numerosos atentados contra intereses norteamericanos. El temor a una victoria total de los talibanes, que controlaban el 85 por ciento del país y han alcanzado la frontera de Uzbekistán en agosto, movió a Moscú a cambiar de política con respecto a Tayikistán, por miedo a que, a medio plazo, provoquen aquellos una desestabilización en su flanco sur.

Aunque en abril talibanes y oposición firmaron una tregua con el fin de iniciar conversaciones en Islamabad, auspiciadas por la ONU, un mes más tarde se suspendieron, incapaces unos y otros de dirimir sus diferencias, al no existir una voluntad de diálogo. La enorme tensión con Irán, que condujo a Arabia Saudí y Pakistán a mediar para evitar un conflicto armado, responde más a un recelo religioso y étnico que se profesan ambos regímenes, pues Teherán, fundamentalista chii, teme pueda afectar a su carácter de potencia regional; y también que amenace, en algún modo, los futuros oleoductos provenientes de Asia Central que deben atravesar obligatoriamente Afganistán.

En este año tuvieron lugar las intervenciones quirúrgicas del rey Fahd de Arabia Saudí quien, en 1995, sufrió una embolia cerebral. Aunque figura como Jefe de Estado, el gobierno recae en sus hermanos del clan Suderí. Este país junto con Pakistán, medió en la crisis irano-afgano, pues Teherán teme, en el fondo, verse atrapado en un avispero como hace años lo fueron los rusos. Ambos países apadrinan a los estudiantes religiosos y

aunque Riad inicie un cierto distanciamiento de los talibaneses, prosigue enviándoles armas y dinero, por lo que Teherán, como Washington, les acusa de haber creado un monstruo que se les ha vuelto peligroso e incontrolable. Por otro lado, la cumbre del Consejo del Golfo se centró en asuntos relativos a la seguridad en la zona.

DEL AUGE REGIONALISTA EN LA INDIA A LA QUIEBRA INDONESIA

En las elecciones generales desarrolladas en el primer trimestre en la *India* fracasó la coalición gubernamental de 14 partidos, así como los más tradicionales, indicando el creciente rechazo de la población a la clase política. Aparecieron como verdaderos ganadores los partidos regionalistas, proliferación de siglas que puede suponer un factor de pluralismo y, por ello, de democracia, si se muestran coherentes y estables.

Pero la sorpresa que deparó la India fue la de sus tres ensayos nucleares subkilotónicos y subterráneos, los primeros desde 1974, seguidos dos días después por otros dos en el desierto de Rajastán, con lo que dijo finalizaba su programa nuclear. La condena internacional fue unánime y mientras China argumentaba que esas pruebas ponían en peligro la paz en la región, Washington anunciaba sanciones y pedía al Pakistán que no respondiera con ensayos similares. Quedó demostrado que si el antiguo mundo bipolar se había volatilizado, los riesgos de guerra nuclear limitada se acrecentaban. Diez días después Pakistán realizaba cinco pruebas de bombas de fisión, como las indias, recibiendo idénticas condenas, entre ellas la de España.

Si la India no ha firmado el Tratado de No Proliferación se debe, en su opinión, a su carácter discriminatorio, al consagrar el monopolio de los cinco grandes. De ahí que propugne vincular la prohibición de ese tipo de pruebas al desarme total, aunque se piensa si es esto realmente lo que desea la India o presenta ese argumento como excusa para disponer de su propia opción nuclear. Tal como sucedía con Pakistán, pues en septiembre dijo que firmaría el Tratado, al que faltarían todavía otras firmas para entrar en vigor.

Ambas pruebas enseñaron que si la ONU se limitaba a deplorarlo, Occidente era incapaz de evitar la carrera de armamentos entre enemigos poco estables. Clinton recibió numerosas críticas en su propio país por haber perdido los Estados Unidos su influencia en Islamabad, fiel y leal amigo

durante la Guerra Fría. Sin embargo, ello se debe al Congreso, que puso fin a la colaboración militar para proseguir con sus programas nucleares.

Esos ensayos nos hacen recordar que, aunque estamos inmersos en un proceso de globalización, existen realidades geopolíticas que vulneran la proclamada universalidad. Por otro lado, es bien conocido que otros países aspiran a dotarse de tales armas, porque saben que las condenas y sanciones por tal causa son poco efectivas y porque se sienten amenazados por vecinos más poderosos, en recursos y población, y ven en ese arsenal un medio de supervivencia, al disponer de una disuasión creíble.

La tensión indo-pakistaní se incrementó peligrosamente en agosto, asistiéndose a choques armados muy violentos en las fronteras de Cachemira. Esa violencia cesó repentinamente al cabo de un mes, pero no así las mutuas declaraciones, que continúan alentando el enfrentamiento a pesar del posterior encuentro de sus respectivos Jefes de Estado.

Más hacía el Este, en *Indonesia*, el gran incendio en Sumatra, su caos económico y la sequía debida al "Niño", originó una hambruna en la parte oriental del archipiélago, coincidiendo con la reelección en marzo, y por 7.^a vez, de su anciano presidente. Suharto impuso como vicepresidente a su fiel Habibi, nombramiento que se tomó como un desafío al FMI y a las previstas reformas, conduciendo a una situación social explosiva y a la caída de la rupia a su nivel más bajo desde 1987. Era paradójico que en enero el gobierno hubiese recurrido a aquella institución internacional y anunciase cancelar 150 proyectos, desmantelándose empresas públicas en manos de familiares y amigos, reduciéndose las subvenciones y estableciendo una política de ajuste, para inmediatamente dar marcha atrás y rechazar los acuerdos de enero, presentando un presupuesto poco realista, con cambios artificiales de la rupia. Se esperaba, por todo ello, que finalizase 1998 con una inflación superior al 50 por ciento y un crecimiento negativo.

Un nuevo convenio suscrito en abril con el FMI, el tercero en seis meses, incluía 117 medidas para evitar un caos social, cerrándose, como prueba de buena voluntad, 14 bancos. Medidas que no iban a impedir una explosión social. Esta se inició el 4 de mayo, alcanzando su cénit el 12, fecha en la que el ejército abrió fuego contra los estudiantes de la Universidad de Trisakti, en Yakarta, produciendo la muerte de seis. Al día siguiente la capital vivía una jornada de sangre y fuego en la que se produjeron más de 500 muertos, volviendo a servir de blanco la comunidad china, que es el 3,5 por ciento de la población y controla el 70 por ciento

de los activos comerciales. Mientras, Suharto asistía en el Cairo a la cumbre del Grupo de los Quince. Esos sucesos, que rápidamente se propagaron a otras islas, condujeron a la invasión del Parlamento por los estudiantes, momento en el que el ejército y Washington forzaron la dimisión del presidente, lo que éste hizo el día 21 del mismo mes. Tomó el poder su fiel Habibi, pero apareciendo en la sombra el hombre fuerte, el general Wiranto, jefe de las fuerzas armadas, quien inició una purga en los altos mandos, cayendo, entre otros, el general Subiarto, yerno del presidente dimitido y jefe de las fuerzas de intervención. El clima de crispación social se reprodujo en noviembre, conduciendo a la investigación de la fortuna de Suharto y al anuncio de elecciones en junio de 1999.

En febrero nuestros Reyes visitaron las *Filipinas*, participando en los actos del Centenario de su independencia, reiterando el Rey el compromiso de España en el futuro del archipiélago. Tres meses después, las elecciones presidenciales daban el poder al populista Estrada, conocido actor de cine que saltó posteriormente a la política, dotado de un enorme tirón popular.

El sangriento Pol Pot, responsable de la muerte de un tercio de la población de *Camboya*, entre 1975-79, murió en un rincón de la jungla donde le habían confinado sus ex camaradas para purgar un arresto por vida, estimándose que fue asesinado por estos para evitar su juicio público, tal como solicitaba insistentemente Washington, pues temían verse involucrados aquellos en el genocidio. En las elecciones a finales de agosto, que según los observadores fueron claras y honestas, la oposición acusó de haberse cometido fraude en los resultados, temiéndose una vuelta a la guerra civil.

En febrero, la Convención Institucional de *Australia* se pronunció por romper los lazos históricos que les unen al Reino Unido, para convertirse en una República en el año 2000. El primer ministro prometió organizar un referéndum a tal fin en 1999. El presidente lo elegiría el Parlamento, aún cuando la mayoría de la población pretende que se elija a través de las urnas y que, de no ser así, ve preferible continuar con el estatuto actual.

LA BÚSQUEDA DE NUEVOS MODELOS EN EL EXTREMO ORIENTE

Después de 23 años de crecimiento ininterrumpido, en 1998 el *Japón* entró oficialmente en recesión económica, retrocediendo un 0,7 por ciento su PIB anual en el ejercicio 1997-98, que finalizó en marzo. Eso era algo

esperado, puesto que desde hace años se había agotado el modelo japonés, agravado por la seria crisis financiera de todo el SE asiático. La crisis no era sólo económica sino estructural, y los problemas heredados de la época especulativa se añadían a los ajustes provocados por el caos en el sistema financiero, existiendo, por ello, argumentos para explicar que la segunda economía del planeta obtuviera tasas de crecimiento negativo.

El programa de acción económica global presentado en marzo, ascendiendo su coste a 1,16 billones de yens, iba acompañado de una petición al Parlamento de reducción de impuestos, a lo que se enfrentó la oposición en nombre del rigor presupuestario. De ahí que se temiera que si el plan de relanzamiento de marzo fracasaba se asistiría a nuevas devaluaciones del yen, lo que incidiría sobre el yuan chino, abriéndose una nueva crisis financiera que arrastraría al resto de las monedas asiáticas.

Pero fue en junio cuando la morosidad bancaria y las quiebras en sus participaciones industriales pusieron contra las cuerdas al sistema financiero, acordándose, para paliar ese caos, lanzar un nuevo plan de saneamiento que incluía la creación de una agencia de supervivencia bancaria.

La dimisión del primer ministro Hashimoto, en julio, al no haber podido resolver la crisis financiera, condujo al poder al ministro de Asuntos Exteriores Obuchi, en un momento en que caía el yen a su más bajo valor frente al dólar de los últimos ocho años, aumentaba el desempleo y se asistía a nuevas crisis en sectores como el inmobiliario, mientras se desaceleraban los precios de consumo interno. Para nada sirvió la recomendación del FMI de pedir al gobierno más valentía para superar la recesión y considerar, tras comprobar el plan Obuchi, que aumentar la demanda era la única forma de detener la crisis, pues cuando caía la demanda interna, los stock empresariales aumentaban y muchas sociedades iban a la quiebra.

A lo largo del verano se vio que la solución a medio plazo pasaba porque el Japón imprimiese más rapidez a las reformas estructurales, tal como solicitaba Washington y los gobernadores de Bancos Centrales, entre ellos el de España, como miembro del Banco Internacional de Pagos, pues no bastaba la medida adoptada en julio de nacionalizar temporalmente la banca a través de instituciones puente, sometidas a la supervisión del Estado. Pero además de los planes de reformas, Tokio necesitaba ayudas del FMI, Banco Mundial y Reserva Federal o del G-7, que condicionaban ese apoyo a la previa solución de los problemas financieros,

especialmente en relación con la acumulación de créditos bancarios incobrables y a un recorte fiscal para estimular el consumo y reactivar la economía.

La incertidumbre que rodeó al mundo político japonés empeoró la situación de los mercados de divisas y de las bolsas mundiales, prosiguiendo la depreciación del yen y la recesión. Los analistas afirmaban que lo único que podía aportar Tokio a la crisis asiática eran más problemas. En octubre se inyectaron al presupuesto extraordinario de 1998 otros 10 billones de yens, al conocerse que la economía se contraería en un 1,8 por ciento. El año se cerró sin acuerdos concretos para un verdadero relanzamiento, aunque el Banco Mundial y el FMI estiman que las últimas medidas tomadas por Tokio pueden mejorar la situación, colaborando a que el crecimiento económico en 1999 de Asia Oriental alcance un 4,8 por ciento.

Pero sin guerra fría ni amenazas de *China* o Corea del Norte a corto plazo, el Japón se pregunta qué papel debe desempeñar en la región que no sea el de mero subordinado a la estrategia americana. Si con China subsiste el contencioso sobre la isla petrolífera de Senkaku, habiéndose negado a firmar durante la visita de Jiang a Tokio, en noviembre, un comunicado pidiendo disculpas por la ocupación japonesa de China de 1931 a 1945, con Corea del Norte teme su posible arsenal nuclear, puesto de actualidad en el verano cuando un misil de largo alcance sobrevoló el espacio aéreo nipón. Con respecto a Rusia, ya mencionamos sus diferencias.

En 1998 Norteamérica observa con precaución el futuro de China, preguntándose cuándo se convertirá en el super Japón comercial al mismo tiempo que en una potencia militar de primer orden. Sin duda China trata de ganar ya un prestigio internacional y afirmarse como potencia mundial, tanto política como económica y militar, aplicando un modelo de crecimiento que se basa en pasar de un sistema fundamentado en la agricultura y pequeñas empresas a otro industrial sofisticado en el que figuren tecnologías de punta y doble uso, como la aeroespacial, electrónica e informática, base de una capacidad militar. Para ello tiene necesidad de acudir a las grandes multinacionales occidentales, pensando que, además, pueden convertirse en elementos de presión. Una General Electric, Ford o Boeing, son susceptibles de imponerse a veleidades proteccionistas de un Congreso y neutralizar las objeciones de los defensores de los derechos humanos, de los partidarios de la no proliferación y de los ecologistas, además de permitirles hacerse con una tecnología y experiencia como contrapartida al acceso a su inmenso mercado pudiendo incluso crear si ya no lo hay,

un “lobby” en Washington similar al israelí. No obstante, el camino será largo, pudiendo decirse que, por lo menos hasta el 2050, centenario de la fundación de la República Popular, no terminará realmente China con su retraso económico y cambio total de sus estructuras.

En el ámbito internacional, en 1998 Pekín prosiguió diversificando sus relaciones con el fin de que no fuera Washington —con el que se ha mejorado mucho a raíz de las visitas de Al Gore en 1997 y de Clinton este año— su interlocutor exclusivo, mirando con recelo el eje Tokio-Washington y manteniendo congelada la cuestión de Taiwán, isla con la que, paradójicamente, ha aumentado espectacularmente sus intercambios comerciales. Con respecto al Tibet, China nunca negociará su independencia, zona donde bajo dominio chino existe un mayor desarrollo que en los tiempos del Dalai Lama, alcanzando la renta cerca de los 3.000 dólares, lo que supera a la media nacional. Un problema añadido al Tibet es el que provoca la región occidental china musulmana de Xinjiang, donde la colonización masiva ha conducido a que la minoritaria etnia uigur, de origen turcomano, haya pasado a un segundo plano, razón de que aumenten los movimientos separatistas.

En marzo la Asamblea Nacional aprobó la reestructuración de la Administración del Estado, que rebaja a 29 los 40 ministerios existentes, con el fin de simplificar la compleja burocracia, de garantizar la eficacia de las decisiones tomadas y el pleno desarrollo de una economía de mercado, al descubrir que la gigantesca e inútil estructura comunista implicaba gastos insostenibles, de difícil control y sería nido de corrupciones.

En aquellas mismas sesiones se designó al hasta entonces primer ministro Li Peng, conocido por la represión estudiantil de hace años, como Presidente de dicha Asamblea. Se convierte así en el segundo hombre fuerte, al haber sido ratificado Jiang Zemin como Presidente de la República durante otros cinco años, Secretario General de Partido y Presidente de la Comisión Militar, mientras Zhu Rongjin, tecnócrata protegido de Jiang y su probable sucesor, pasaba a ser Primer Ministro. En su programa, prometió ahondar en las reformas iniciadas por Xiaoping y eliminar los últimos vestigios de planificación, reestructurar las empresas públicas, que conducirán a once millones de trabajadores a la calle, reformar la administración de la que es autor, industrializar el país siguiendo el modelo coreano, dar prioridad a la reforma bancaria suprimiendo la actual dispersión, lo que le ocasionará resistencias al ser los bancos locales feudos de los caciques provinciales, reducir la inflación, lograr la paridad del yuan y ser admitido

en la OMC. Sin duda tratará de crear un gobierno socialista moderno, lejos de los modelos del pasado, aunque el nombramiento de Li Peng deja ver que los reformistas no han podido acabar con los restos de la línea dura que añora tiempos pasados.

Con la visita de Clinton en junio, nueve años después de Tiannamén, no queda nada del boicot político y empresarial que Washington quiso aplicar a China, pues la mejora de relaciones fue un objetivo de Clinton en su reelección: “no podemos aislar a China”. En su visita, el presidente norteamericano destacó la responsabilidad común en el futuro del mundo, recordando “cordialmente” a Jiang los derechos humanos, las libertades religiosas y la situación en el Tibet, finalizando su viaje con un acuerdo de 47 puntos entre los que destacan los relativos a la seguridad y defensa.

Sin duda el problema de las dos chinas se agudizará en un próximo futuro, pues el partido de Kuomintang va perdiendo influencia en Taiwán mientras aumenta el Demócrata Progresista, que agrupa a los nacidos en la isla y partidarios de la independencia. No obstante, la visita de una delegación a Pekín en noviembre para reanudar las conversaciones cortadas en 1995, fue un hecho positivo. Y aunque ambas partes en el fondo desean la reunificación, difieren de como establecerla, pudiendo añadirse que la relativa victoria de Kuomintang en las elecciones de diciembre favorecerá las condiciones para la reunificación que Pekín urge.

La oposición al gobierno de Hong Kong ganó las elecciones, aunque el complicado sistema electoral no dio el poder a los demócratas vencedores, demostrándose que, aunque Pekín controla Hong Kong, el espíritu democrático no ha muerto y podría servir de estímulo y ejemplo al resto de China. Sin embargo, ese puerto va perdiendo paulatinamente su antigua función internacional, al ir ocupando Shanghai su lugar como motor del desarrollo chino, algo que ha comprendido bien nuestro Ministro de Hacienda, en su visita, en noviembre, a ese país.

A comienzos de 1998, el Presidente de *Corea del Sur*, Kim Young Sam, reflejó la triste situación por la que atraviesa el país, “que corre el riesgo de hundirse en la crisis más grave desde la guerra de 1951-58”, sin ocultar a su pueblo los sacrificios que debe soportar. Esa crisis puede ofrecer un crecimiento negativo, sometiendo al país a violentas tensiones sociales, aunque choca con un Parlamento controlado por la oposición que le ofrece un estrecho margen de maniobra. Prosiguen sus difíciles relaciones con Corea del Norte y sin resolver el trazado de las aguas territoriales con el Japón.

En enero *Corea del Norte* reconoció por primera vez la situación límite en la que vive su pueblo ante la hambruna, como consecuencia de las graves inundaciones en pasados años y los tifones de 1997. Por otra parte, en marzo Kim Jong Il solicitó reanudar las conversaciones cuatripartitas tendentes a una reunificación, al haber fallado las anteriores celebradas en Ginebra, aunque impone como condición la entrega de petróleo a cambio de dar fin a su programa nuclear, tal y como se comprometió con Clinton. Sin embargo, la provocación que supuso el lanzamiento de un misil balístico, que sobrevoló el Japón para caer en el Pacífico, hace temer que los buenos deseos vuelvan a ser letra muerta.

PAULATINA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO EN IBEROAMÉRICA

Aunque en 1997 se alcanzaron los mejores logros económicos desde hace un cuarto de siglo, en 1998 la realidad no fue la misma, pues con el fin del proteccionismo del Estado y la llegada de capitales extranjeros que favorecen la oferta monetaria aumentó el riesgo inflacionario, presentando en conjunto las balanzas por cuentas corrientes un déficit de 60 mil millones de dólares a comienzos del año. Tal deterioro hizo pensar que sus condiciones financieras eran muy similares a las del Sudeste Asiático, temor que saltó en agosto, pudiendo incidir esa situación en un aumento del paro y añadirse a las tensiones provocadas por la guerrilla, narcotráfico y delincuencia que, sin duda, influyen en las decisiones que toman los inversores extranjeros. En conjunto, se estima que Iberoamérica y el Caribe tendrán el próximo año un crecimiento del 0,6 por ciento, debido especialmente a la crisis del Brasil, reduciendo el Continente en 1998 el crecimiento de su PIB al 2,5 por ciento, frente a un 5 por ciento en 1997.

En la Cumbre de las Américas celebrada en abril en Santiago de Chile, los 34 presidentes asistentes reafirmaron su voluntad de dar impulso al nacimiento de un Área de Libre Comercio de Alaska a Tierra de Fuego. Esa determinación motivó que en agosto se reanudasen en Miami los contactos para establecer, hacia el año 2005, el mayor bloque comercial del mundo, proyecto que quedará congelado mientras el Congreso norteamericano no dé vía libre a lo que también reclama el presidente Clinton pues, al igual que los sindicatos, teme que ese tratado afecte negativamente a los trabajadores y empresas norteamericanas, incapaces de competir con una mano de obra barata.

Pero realmente se estima que lo que Washington desea es transformar el conjunto del hemisferio en una gran zona de libre cambio, que implica la eliminación de las tarifas aduaneras que todavía protegen sectores productivos Iberoamericanos y la ruptura de Mercasur, que recientemente firmó un acuerdo con la Unión Europea que no fue del agrado de los Estados Unidos.

En 1998 *México* sufrió numerosas convulsiones, nuevas violencias en Chiapas, ataques especulativos al peso con caída de los precios del petróleo, finalización del monopolio político del PRI, etc, a lo que se unió el recorte del presupuesto federal en enero y la cancelación de numerosos proyectos públicos.

Realmente, Chiapas es una región rica en reservas madereras, petróleo y minerales. La marginación del indígena y su proximidad a Centroamérica la convierten en un enclave estratégico en el que se mezclan las acciones de la guerrilla zapatista y las de los grupos paramilitares con la estrategia del diálogo y la negociación en busca de la paz y del restablecimiento del orden.

Ante la propuesta de la UE de elevar una denuncia ante la OMC, el presidente Clinton postergó una vez más en enero la entrada en vigor de la parte más controvertida de la ley Helms-Burton, prometiendo revisar las sanciones a *Cuba* si Castro demostraba el deseo de respetar los derechos humanos, esta ley sigue siendo una fuente de tensiones entre Norteamérica, Unión Europea, Japón y Canadá.

Un acontecimiento histórico fue la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en aquel mismo mes, viaje al que Washington prestó una gran atención, mientras nuestro gobierno anunciaba que marcaría un antes y un después, y que tanto la visita del Presidente como la de los Reyes no era inmediata. En general, el discurso de bienvenida pronunciado por Fidel Castro se consideró impertinente e inoportuno, así como la falsa versión que ofreció sobre la conquista de América por los españoles, dado que no era el momento adecuado para recordarlo, como tampoco dirigirse al Papa mencionando las cruzadas, la inquisición o a Galileo.

Claro es que Juan Pablo II supo responder y además censurar la violación de los derechos humanos, pedir la libertad de los presos políticos y solicitar a los Estados Unidos que reconsiderase el embargo, recordando a Castro que la democracia era el proyecto político más humano, que la Iglesia no se identificaba con una cultura particular y que el embargo no era la única causa de sufrimiento de la isla.

Aunque España había ya abierto una Casa de la Cultura y nombrado un agregado militar, hasta abril no anunció el nombramiento de un nuevo embajador, finalizando una situación anómala que duraba ya 16 meses. Después de la visita del Papa nuestras relaciones mejoraron, siendo muestra de ello: la entrevista de Castro con una delegación de empresarios de la CEOE; la escala del buque escuela "Juan Sebastián de Elcano" a La Habana, del 2 al 5 de junio, escala que no se hacía desde 1953, visitando Castro el buque; visita del Ministro de Industria, concertando acuerdos de cooperación en los campos de la energía y formación profesional; entrevista de Castro con S.M. el Rey y con el Presidente del Gobierno en Oporto, durante la VII Cumbre Iberoamericana, prolongada con su estancia en Madrid, donde se acabó de sellar la reconciliación; y finalmente, la estancia en Cuba del Ministro de Asuntos Exteriores para preparar la visita de S.M el Rey y del Presidente el próximo año.

En febrero se abrió la XIV Conferencia de San José de los *países centroamericanos*, en donde se puso de relieve el papel que juega la UE en la región, prestando su apoyo a la paz y reconciliación e impulsando la democratización, habiendo otorgado Bruselas, desde 1984, más de 1.500 millones de dólares no reembolsables. En esas relaciones lo básico para la UE es el diálogo político, pues esos países necesitan tanto ayuda y oportunidades como encontrar puntos de encuentro en lo que les separa. Esa fue la razón de que el Parlamento Europeo solicitase la extensión a esa zona del Sistema de Preferencias Generalizadas para sus productos industriales, habiendo dado un paso la Eurocámara con las ayudas que figuran en su presupuesto para 1998. Pero, tras sufrir los efectos devastadores del huracán Mitch, los problemas de la región son terribles, especialmente en Honduras y Nicaragua, países que han solicitado la condonación de sus deudas y urgente ayuda internacional pues, desgraciadamente, los daños han retrasado 30 años su desarrollo y bienestar.

En *Nicaragua*, uno de los países menos ricos del área, se recrudeció la tensión con Costa Rica al ratificar San José un tratado fronterizo con Colombia por el que se reconoce a Bogotá la soberanía sobre las islas de San Andrés y Providencia en el Caribe, que Nicaragua reclama como suyas. Un contencioso que se añade a otro, los derechos de navegación en el fronterizo río San Juan.

En cuanto a *Panamá*, la cuestión dominante fue el futuro de las propiedades y de la presencia americana en el canal. Pero puesto que en virtud del acuerdo Carter-Torrijos de 1977 Panamá recuperará la soberanía

del canal el año 2000, la evacuación de las bases entrañará perjuicios económicos al empleo de 5.000 panameños y el dejar de recibir 30 millones de dólares anuales. Por otro lado, al no disponer Panamá de ejército no pueda garantizar la seguridad de esa vía marítima tal y como lo estipula dicho tratado, Washington ha pensado establecer un centro internacional anti-droga, sin pagar ningún tipo de alquiler, manteniendo fuerzas, lo que ha motivado que el presidente panameño anunciase este año que no ve ninguna ventaja en que prosiga esa presencia.

En *Colombia* las elecciones presidenciales dieron el poder al conservador Pastrana. En sus primeras manifestaciones ofreció reunirse con la guerrilla, para marchar seguidamente a Washington, donde establecería un nuevo tipo de relación.

Desde hace tiempo el FAR, ELN y el ELP habían anunciado su intención de negociar un alto el fuego, aunque sin someterse a condiciones previas, treguas o promesas de dejar las armas. Esa posibilidad la transmitió el ex presidente Samper a nuestro Gobierno en su visita a Madrid en febrero, conduciendo a la firma, un mes después, del preacuerdo de Viana, congelado inmediatamente.

Esos contactos se reanudaron en Maguncia, propiciados por las conferencias episcopales alemana y colombiana y, como era de esperar, en julio los grupos paramilitares de represión de la guerrilla solicitaron participar en el diálogo. Aunque en agosto y octubre hubo nuevos contactos, presentando el ELN propuestas al Congreso para convocar la Convención Nacional que exige el grupo armado antes de hablar de paz, al finalizar el año se produjeron nuevas violencias sin avanzarse nada, porque se estima que tanto el FARC como el ELN sólo aspiran a seguir controlando una buena parte del país.

En *Venezuela* se asistió a lo largo del año a un creciente malestar social que condujo a Chávez a la presidencia de la nación, demostrándose la profunda crisis de los partidos tradicionales y siendo una señal de alarma para el Continente tras lo ya visto en las democracias iberoamericanas con los casos de Fujimori, Bucaran y Cubas.

Por su parte, en *Perú*, el acuerdo de paz con *Ecuador* siguió siendo durante el primer semestre objeto de permanentes conversaciones. Radicaban las dificultades en la solicitud de Quito de obtener libre y soberano acceso al Amazonas y en la rectificación fronteriza que fijó el protocolo de Río de 1942, franja de 78 kms que permanecía sin señalizar y que motivó

en 1995 un choque armado de alarmantes proporciones. Esa situación provocó en agosto nuevas tensiones, con el peligro de reabrirse las hostilidades. El contencioso afortunadamente fue resuelto en el otoño, al aceptar ambos Presidentes los hitos fronterizos citados en el mencionado protocolo, poniéndose fin a una disputa histórica. El acuerdo se firmó en Brasilia, con la presencia de S.M. el Rey de España.

La otra cuestión se relacionó con la posibilidad de lograr el actual Presidente Fujimori un tercer mandato el año 2000, no previsto en la Constitución. En esa situación, sorprendió que el primer ministro Valle Riera, que accedió en junio al cargo como independiente —en una decisión personal de Fujimori considerada audaz por tratarse de un crítico suyo— anunciase en julio que la reelección del presidente se sometería a referéndum y que el ejército saldría de la Universidad, ocupada el año anterior como medida para fortalecer la democracia. Dijo también que de no accederse a sus peticiones dimitiría, lo que ejecutó en agosto, una vez superada la segunda crisis con Ecuador, al comprobar que no tenía el respaldo del presidente en sus propuestas de democratización. El Congreso terminó por rechazar el mencionado referéndum al rectificar una ley de interpretación de la Constitución de 1993, que en materia electoral no tenía en cuenta el primer mandato de Fujimori de 1990 a 1995.

En *Brasil*, donde en octubre fue reelegido el Presidente Cardoso en plena crisis económica, fue noticia la adjudicación en julio a la empresa española Telefónica de las más importantes sociedades de telefonía fija y móvil del país.

En agosto, Mahuad asumió la presidencia del *Ecuador* y en *Paraguay* lo hizo Cubas. En el caso de Paraguay, la decisión de liberar al general Oviedo, íntimo amigo, aliado político e impulsor de su llegada al poder, motivó la condena del Congreso y que se afirmara “Cubas gobierna pero Oviedo manda”. La actitud del mandatario fue calificada de “golpe jurídico”, elevándose un recurso de inconstitucionalidad contra tal decisión. En diciembre, el Tribunal Supremo ordenó que Oviedo regresase a la cárcel, decisión que el presidente se negó a cumplimentar.

La lucha por la sucesión del presidente Menem en *Argentina* dominó durante meses el panorama político, que finalizó con su renuncia a la reelección.

En *Chile*, ante la falta de apoyo en el Senado, no se pudo enmendar la Constitución para poner fin a la influencia de las fuerzas armadas, que

ocupan nueve escaños en ese alto organismo. Pero sin duda, el mayor acontecimiento fue la detención en Londres del general Pinochet por una causa promovida por un juez español, que obligó a nuestro gobierno a pedir la extradición. Tal detención por otra parte podría complicar y hasta hacer retroceder la transición chilena. Si los jueces de la Alta Corte de Londres se pronunciaron contra dicha extradición, el Tribunal de la Cámara de los Lores decidió que sí se concediera su traslado a España, decisión que ratificó el Ministro del Interior. Comenzaron así una serie de nuevas presiones sobre Londres, cuyo final se conocerá en 1999.

Finalmente, en octubre se celebró en Oporto la *VIII Cumbre Iberoamericana* en la que se apoyó el dialogo colombiano y el acuerdo entre Perú y Ecuador, aunque se vio ensombrecida por la detención de Pinochet.

LUCHA DE INFLUENCIAS EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA

Un acontecimiento señalado fue el periplo de Clinton a un continente que hasta ahora no había recibido gran atención de los Estados Unidos. Visitó Uganda, Ruanda, Botswana, Sudáfrica, Ghana y el Senegal, siguiendo la estela del presidente Carter hace veinte años. La visita estuvo acompañada de la aprobación por el Congreso del Acta de Crecimiento y Oportunidades para África, esto es, la posibilidad de concluir tratados ventajosos con 28 países subsaharianos y poder ampliar algún día la Zona de Libre Comercio. El acta suprimirá las barreras arancelarias a 1.800 productos de ese continente.

En esa visita, Clinton anunció su intención de aumentar las importaciones, reforzar la asistencia técnica, ofrecer incentivos a la inversión norteamericana; anular la deuda bilateral con los estados más pobres y crear un foro económico de reuniones anuales con dirigentes, sin duda al advertir que África supone un mercado de cerca de 700 millones de habitantes aún poco explotado y dotado de inmensas riquezas.

Pero también esa visita tenía un componente político y estratégico, la sustitución de Francia como tutor tradicional en gran parte del continente. La preponderancia francesa entró en crisis al demostrar su incapacidad para evitar los genocidios de Ruanda y Burundi, y en sostener a Mobutu y Lissouba, así como por su impotencia para frenar la devaluación del franco africano. Basta recordar las palabras de Clinton, "una nueva generación de africanos trata de desembarazarse de las antiguas políticas que no han dado resultado", y sus esfuerzos por crear una Fuerza Interafricana de Paz

o la paulatina implantación de sus multinacionales en la esfera petrolífera y de los minerales en Angola, Camerún, Gabón o Nigeria. Sin ese relevo, que cada día se acentúa, hubiera sido impensable la victoria de Kabila o la caída de Lissouba en manos de N'gueso con apoyo angoleño, castigando estos el apoyo del primero a los independentistas del enclave de Cabinda, su gran fuente de petróleo. Sin embargo, Clinton excluyó Angola en su viaje, quizás, por continuar en guerra civil con Unita, aunque sabe Washington que Angola se ha convertido en un importante elemento geopolítico en la región.

Fue sin duda esa línea de acción norteamericana la que condujo a Chirac en diciembre a celebrar en París la XX cumbre franco-africana, que motivó críticas al asistir jefes de Estado, como Kabila, acusados de genocidio en unos momentos en que por tal causa se procesaba a Pinochet en Londres.

Actualmente Norteamérica considera a Botswana, Ghana y Mozambique como socios seguros, unos por sus logros económicos y otros por sus esfuerzos democráticos. A esta lista se añaden algunos países francófonos como el Senegal y Malí, por su importancia estratégica, así como Ruanda tras el genocidio. Cuenta además con aliados tradicionales, como Uganda, cuyo presidente Museveni es uno de sus principales peones en la zona y con gran influencia en la política de sus vecinos, Eritrea y Etiopía, por contribuir a contener el régimen islámico de Jartúm, aunque estén enfrentados en una guerra semiabierta. Y especialmente Sudáfrica, país que Clinton pretende convertir en socio privilegiado, potenciando el eje Washington-Pretoria. Por el contrario, se ha excluido de esa lista a Kabila, que conquistó el poder con ayuda norteamericana pero que ha demostrado este año a los Estados Unidos que mantiene idénticas actitudes deficitariamente democráticas a las del presidente zaireño derrocado, aunque no se olvida que el ex-Zaire actual es capaz de consolidar o desestabilizar la mitad del continente.

En cualquier caso, con ese viaje se dio a entender que Washington aprecia la aparición de nuevos líderes capaces de abandonar la fórmula hasta ahora vigente del partido único y economía dirigida, para optar por el pluralismo y libre mercado, sin que a Norteamérica le importe conocer si llegan al poder por golpes de estado o elecciones amañadas. Tal vez por ello Clinton dejó entrever que no quiere llegar tarde a África, como sucedió con Iberoamérica, para hacer de ella su nueva frontera y adelantarse, sin duda, a la Unión Europea que estableció recientemente un Acta similar a

aquella, la llamada Convención de Lome. La renegociación de este acuerdo se está llevando a cabo en Bruselas, pues su vigencia finaliza el año 2000 y simboliza la ambición europea de establecer relaciones en las que no prevalezcan únicamente intereses económicos. Se oculta, sin embargo, que se espera sea un medio para mitigar los flujos migratorios, si se logra mejorar las condiciones de vida en África. No obstante, muchos dudan de que dicha Convención se mantenga, puesto que los organismos internacionales piden su sometimiento al nuevo orden mundial impuesto por el GAAT en 1993 y por el nacimiento de la OMC, que implica el final de las políticas comerciales preferenciales.

La cumbre de la OUA, reunida en Burkina Faso en junio, no resolvió ningún problema: contencioso del Sahara, conflicto etíope-eritreo, etc, comprometiéndose únicamente a modernizar el continente, pero sin expresar cómo y con qué recursos. Semanas más tarde, en la XII Cumbre de Países No Alineados, reunidos en Sudáfrica, se habló de todo sin concretarse nada: globalización económica, derechos humanos, protección del medio ambiente, desarme, etc., etc., y sin condenarse las represalias norteamericanas contra el Sudan y Afganistán por los atentados contra sus embajadas, tal como solicitó Jartúm.

Pero si se efectúa un recorrido por las distintas zonas de África, 1998 fue pródigo en acontecimientos. En el *Sudán* se incrementó la guerra civil iniciada en 1983, habiendo fracasado las negociaciones comenzadas en Nairobi y seguidas en Addis Abeba, en las que se ventilaba la posible autonomía, el año 2001, de la zona sur del país, de predominio animista y cristiano.

Asimismo, en este año aumentó la virulencia del conflicto *etíope-eritreo*, motivado por la ocupación eritrea de la región del Tigre hace cinco años, cuando ambos países se separaron, y que Addis Abeba no ha cesado de reivindicar por considerar que en su día se lo atribuyó la división provincial de la colonización italiana. Conflicto, por otra parte, que no ha logrado detener el plan de paz auspiciado por Washington y que le incitó a crear la Fuerza Africana de Interposición que evite el envío de fuerzas occidentales, pues no guarda Norteamérica un buen recuerdo de su intervención en *Somalia*. En este país continua sin lograrse la reconciliación nacional entre los 16 grupos incontrolados que dominan, cada uno, una porción del territorio. Prosigue latente el problema que suscita la secesionista Somilandia, al norte, sin que los esfuerzos de la ONU hayan servido para nada ante la imposibilidad de poner de acuerdo a los jefes de tantas facciones.

En *Guinea Bissau* se produjeron en junio enfrentamientos entre grupos rebeldes y leales al presidente Vieira, apoyado este por tropas senegalesas y de *Guinea Konakry*. En este país, para acabar con los golpes de estado se constituyó un gobierno de tecnócratas, algo raro en África, que definió un plan de desarrollo para quince años. Por su parte, en *Liberia* se mantuvo la situación muy estable, solicitando S.M. el Rey de España al presidente Taylor su mediación para el rescate de misioneros españoles atrapados por los rebeldes en Sierra Leona.

En *Sierra Leona*, las fuerzas de la ECOMOG, a cuyo frente figura Nigeria, ocuparon la capital Freetown, logrando acabar con la Junta Militar que el pasado año derrocó al presidente electo. Una intervención en la que Lagos pretende convertir a *Nigeria* en una gran potencia regional y que se deba recurrir a ella ante cualquier conflicto. En esa guerra civil se entremezclan numerosos intereses, pues Kuwait, Libia, Nigeria, Ucrania, Unión Europea y Norteamérica han participado, de una u otra forma, teniendo mucho que ver su riqueza en diamantes, aunque se den causas más complejas. Tras la guerra del Golfo, Kuwait inició la expansión del Islam por el África negra, poblando Sierra Leona de mezquitas, mientras Libia, a través de la guerrilla, buscaba controlar ese proceso. Una guerrilla también armada y adiestrada por Taylor, que siempre soñó con una Gran Liberia que incluyera a Sierra Leona. Realmente, tanto el gobierno militar que duró hasta 1996 como el efímero primer gobierno democrático, se vieron apoyados por la UE y Washington; la primera para no perder su acceso a sus importantes caladeros y la segunda por sus necesidades de bauxita, rutilio y otros minerales estratégicos básicos para la industria espacial y militar. Pero al acabar la Guerra Fría y surgir el integrismo islámico, Norteamérica trató de cortar su avance, razón por la que, cuando la junta militar se hizo con el poder apoyada por la guerrilla y por los países que respaldaban a esta, Washington recurrió a Nigeria, ansiosa de adquirir un papel preponderante en la zona.

La súbita muerte en junio del dictador nigeriano, general Abacha, condujo al poder el presidente de la Junta Militar, general Abubakar, quien disolvió el gobierno un día después de la muerte del principal opositor —muerte nada clara— prometiendo democratizar el país. La desaparición de Abacha tranquilizó a Washington, pues últimamente, al convertirse en líder religioso, pareció iniciar una política de corte islámico en un país de fuertes inversiones estadounidenses. Por otra parte, en su intento de alcanzar un puesto en el Consejo de Seguridad, organizó la fuerza africana

de paz o ECOMOG, para así frenar el proyecto norteamericano de constituir una fuerza semejante.

En *Guinea Ecuatorial*, que se ha convertido en un modesto productor de petróleo —tesoro que debería salvar al país de la pobreza, pero que explota su presidente para que sea codiciado por las multinacionales— se abrió el año con el proceso a miembros del movimiento para la autodeterminación de la isla Bioko o Fernando Poo. Esta situación indujo a nuestro gobierno a anunciar que seguiría de cerca el proceso de democratización y respeto de los derechos humanos. Sin duda alguna, la descolonización española se llevó a cabo con premura y englobó en un mismo país dos provincias muy dispares: una dominada por Bubi (Fernando Poo o Bioko) y otra continental, por los Fang (Río Muni o Mbini). Así que lo que sucede en Guinea Ecuatorial, además de falta de democracia, es un choque de razas o tribus.

Una decisión que tomó Obiang en septiembre, y que debe ser motivo de reflexión, se relaciona con su deseo de convertir el idioma francés en oficial, al mismo nivel que el español. Esto es sin duda por haber pecado España de falta de pragmatismo, al contrario de lo que sucede con la política exterior francesa o americana, pues mantener unos principios a ultranza puede afectar a corto plazo a nuestro prestigio, afianzamiento e intereses en esa región.

Un hecho que conmovió a todo el continente fue el intento en el *Congo* de derrocar a Kabila por tutsis bayanmulengos de origen ruandés, rebelión que Kabila esperaba y que le condujo en febrero a destituir al Jefe de Estado Mayor. No podía permitir que la mano derecha de Uganda y la izquierda de Ruanda estuvieran al frente de las fuerzas armadas congoleñas. Fracasada la mediación de siete jefes de estado africanos, el conflicto se internacionalizó al intervenir fuerzas angoleñas, zambias y de Namibia al lado de Kabila, Uganda y Ruanda apoyando a los rebeldes. Estas intervenciones indujeron a Mandela, en la Cumbre de los No Alineados, a buscar una salida negociada, sin que los enfrentamientos hayan cesado. La impotencia de Occidente para desbloquear la situación, como otras veces en ese continente, obligó al Secretario General de la ONU, Annan, a mediar en el ex Zaire buscando un alto el fuego entre los países implicados.

A lo largo del año, el presidente de *Uganda*, Museweni, asentó su influencia en la región de los Grandes Lagos y África Oriental a costa de sus adversarios keniatas y zaireños, contribuyendo a ello el que el país

sea base de organismos humanitarios occidentales. Durante la visita de Clinton se acordó la instalación de una base norteamericana. El éxito de ese país, que goza del beneplácito de Washington dependerá del mantenimiento de su actual solidez político-económica, que le convierte en el "tigre africano" o "milagro ugandés". Su actual problema, una vez neutralizadas las guerrillas, es la progresiva aparición de grupos fundamentalistas, antiguos partidarios del presidente Obote.

En enero fue reelegido presidente de Kenia Moi en unas elecciones nada claras que supusieron una lección para la oposición, pues, de haber ido unida en coalición habría triunfado ampliamente. En Ruanda y Burundi prosiguió el caos económico, sometidos a unos ejércitos que controlan la vida de ambos países y evitan que prevalezcan formas democráticas. Ello no fue obstáculo sin embargo para que Clinton visitara el primero, debido a razones estrictamente estratégicas, por dominar la encrucijada, capaz de proyectarse tanto sobre el Este y Oeste africano como hacia el Norte o Sur.

Por primera vez desde su independencia, en enero el ejército salió a la calle en Zimbabue para reprimir manifestaciones contra la política del presidente Mugabe. Namibia fue noticia en España al garantizar su Primer Ministro, en su visita a Madrid, que sus caladeros seguirían abiertos a nuestras flotas pesqueras, debiendo recordarse que somos el primer inversor de la UE en ese Estado.

En la inauguración en febrero del Parlamento de Sudáfrica, Mandela hizo un llamamiento en favor de la "acción afirmativa" como único medio para superar la política de segregación racial. Pidió a los blancos, como regeneración moral, que saldaran sus deudas con la comunidad de color, devolviendo a ésta todo cuanto le deben. Asimismo, en el Congreso del CNA afirmó que no se presentaría a la reelección el próximo año, designando como sucesor a Moeki.

La vida política se desarrolló bajo la perspectiva de celebrarse elecciones en 1999, en las que solamente jugarán un papel relevante el Congreso Nacional Africano y el Partido Nacional Blanco de Clerk. Este se ve desfavorecido al fracasar su política, y el CNA aupado por las encuestas y contando, cada vez más, con minorías impuestas en todas las esferas.

CAPÍTULO SEGUNDO

LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

Por JAVIER PARDO DE SANTAYANA Y COLOMA

BALANCE DEL AÑO 1998

El año 1998 señala un nuevo hito en el proceso de construcción europeo con la culminación, por parte de once de los quince países de la Unión, del proceso de convergencia necesario para llegar a la adopción de una moneda única el 11 de enero de 1999.

Ciertamente, el objetivo de una moneda común para Europa reviste tal importancia en su significado actual y en su potencialidad hacia el futuro que cada paso que conduce hacia él constituye un jalón histórico. No será por tanto 1998, como no lo fue 1997, la única fecha marcada por el signo del esfuerzo europeo en pos de la unidad monetaria.

El valor del acontecimiento, en lo que se refiere al paso dado en 1998, tiene varias facetas: la primera viene aureolada por el éxito que supone haber logrado que un tan amplio núcleo de países haya superado el reto de alcanzar las exigentes condiciones impuestas para asegurar la viabilidad del proyecto. Los resultados son significativos en lo que tienen de cumplimiento de una etapa y también como logro común de un esfuerzo convergente de los europeos. Es por tanto un éxito de disciplina interna y de capacidad de convergencia, es decir, de integración. Hacia afuera de nuestro continente, el paso dado añade grandes dosis de credibilidad a la unión de los europeos y estimula la reflexión respecto a la repercusión que puede tener en el ámbito mundial la presencia de Europa como gran potencia económica dotada de una personalidad definida. En relación con

el proceso de ampliación, el hecho es oportuno en cuanto significa la consolidación de una parte fundamental del gran proyecto de la construcción europea antes de que se produzca la entrada de nuevos miembros. En este sentido estimula y refuerza también el proceso de extensión de la Unión. En cuanto a la presencia de los países del sur en el grupo fundador, con la única excepción de Grecia, es un hecho significativo que ridiculiza las actitudes arrogantes de algunos países del centro y del norte de Europa y favorece al conjunto en la medida en que constituye un saludable factor de equilibrio continental.

Ante un suceso de tanta trascendencia como éste al que acabamos de referirnos, que por sí sólo justificaría ampliamente un balance extraordinariamente positivo para el año 98, parece inconsecuente aludir a cualquier tipo de decepción. Y sin embargo, hay que decir que el éxito en el terreno económico se ve una vez más empañado por los escasos avances conseguidos en el terreno político. La atonía ya observada durante el año 1997 en este sentido, reflejada en los resultados de la cumbre de Amsterdam, ha continuado en la cumbre de Cardiff y en buena parte de 1998. Sólo en la recta final del año parece haberse reaccionado en busca de una solución al status de la UEO e incluso de una cierta atención a la posible definición de una política exterior y de seguridad común.

Desde fuera de Europa se ha llegado a ver nuestro continente como un espacio en decadencia, quizás por el alto grado de envejecimiento de su población y su escasa vitalidad demográfica, en contraste con el vigor mostrado por otros actores. La adopción del euro como moneda única y la caída del pedestal que han sufrido los llamados "dragones" del Pacífico e incluso la economía japonesa habrán obligado seguramente a reconsiderar aquella opinión. Pero la falta de impulso en el proceso europeo de unión política seguirá siendo percibida en el exterior como un signo de debilidad.

Poco habría que objetar a la adopción de un ritmo pausado en el avance de la construcción europea si no fuese por dos circunstancias: una de ellas es la prevista incorporación de nuevos miembros a la Unión, lo que aconseja avanzar en el desarrollo del proceso de tal forma que los problemas de fondo a los que se refirió ya este Panorama Estratégico el pasado año estén resueltos en lo esencial antes de que se incorporen los nuevos problemas que originará la ampliación. Otra circunstancia muy importante es el cáncer de los Balcanes, hecho que constituye un grave lastre para el proyecto europeo y está demandando soluciones que apelan

a nuestra capacidad para resolverlo. La sensación de urgencia generada por esta última circunstancia es percibida por la opinión pública como una incapacidad de la Unión Europea y puede dar lugar a que se deteriore el prestigio de las instituciones y aun de las Fuerzas Armadas. La misma OTAN puede sufrir también las consecuencias del escaso impulso que se observa en el ámbito político europeo.

Sólo ya a punto de terminar el año, se han producido algunos avances concretos en la solución del problema que plantea la necesidad de determinar definitivamente el papel y la ubicación orgánica de la Unión Europea Occidental (UEO) para que Europa pueda contar con el instrumento que la permita actuar eficazmente en el campo de la seguridad y la defensa con su propia identidad, sin dañar el enlace atlántico. Escaso ha sido el progreso conseguido en la definición de una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). El nombramiento de un "Míster PESC" podría contribuir a activar el desarrollo de esta medida.

Cabe preguntarse cuál puede ser la causa de tal situación. Por diversas circunstancias, durante 1998 no ha dado el juego deseado la relación entre Francia y Alemania, países que tradicionalmente han constituido el "motor de Europa". Por otra parte, puede ser que la fascinación por el euro y la capacidad que a éste se le atribuye como futuro generador de impulso para el proceso europeo hayan tendido a dejar en sus manos gran parte de la iniciativa. Tampoco puede descartarse como uno de los factores del estancamiento una actitud acomodaticia ante las dificultades que indudablemente presentan las medidas que requiere el llegar a una verdadera unión política. Lo más probable es que a la combinación de todas estas causas se añada la falta de convencimiento de determinados países. En todo caso, está claro que el origen de la falta de impulso que acusamos está en un déficit de voluntad política. Para la opinión pública, tal situación refleja cierta insensibilidad de la Unión Europea hacia todo aquello que no tenga una traducción directamente económica.

La cumbre informal celebrada en Pörtlach a finales del mes de octubre pretendió relanzar algunos de los proyectos que durante el año habían acusado este estancamiento. Es de esperar que las conclusiones de la reunión dejen de ser simples buenas intenciones y pronto se conviertan en actuaciones concretas, de tal forma que se recupere la credibilidad de la voluntad política de los europeos y se pueda avanzar en los importantes aspectos de la política exterior, la seguridad y la defensa.

En tal sentido iba orientada la iniciativa asumida por la presidencia austríaca de organizar en Viena una reunión de los ministros de Defensa de la UE, algo que, curiosamente, nunca se había producido hasta entonces. El hecho ha sido de por sí significativo, pues señala la posibilidad de instaurar un desarrollo institucional ya existente en otros ámbitos de la Unión sin necesidad de esperar al establecimiento de una PESC para iniciarlo. Este fue, precisamente, el mensaje español. Ha quedado así abierto un diálogo que hay intención de proseguir.

No han llegado a ser objeto de decisión dos propuestas presentadas respectivamente por Francia y el Reino Unido, en las que estos países abordaban cuál habrá de ser el papel de la UEO en una futura "arquitectura" de seguridad y defensa. La diferencia de enfoque entre ambas tiene el carácter tradicional, si bien la postura francesa parece ahora mostrarse más inclinada de lo habitual a reconocer el papel estelar de la OTAN. La reunión de Ministros de Exteriores y de Defensa de la UEO en Roma, celebrada sólo días después de la ya citada de los Ministros de Defensa de la UE en Viena, no se ha significado sobre ninguna de las dos propuestas, cosa que era de esperar, pues la elección de la propuesta inglesa supondría la desaparición de la UEO, y no parece lógico que ésta propugne su autoeliminación. España, partidaria de que la UEO sea el pilar defensivo de la UE y el pilar europeo de la OTAN, insistió en la idea de proceder al desarrollo institucional de la defensa europea en los términos expresados en Viena. La conclusión final de Roma fue que no debe desperdiciarse la oportunidad que ofrece la cumbre de la Alianza, que celebrará durante 1999 en Washington, como el momento adecuado para cerrar el proceso de articulación de la arquitectura de defensa europea.

Mientras tanto, la OTAN ha seguido avanzando en su reforma. Durante todo el año se ha debatido el nuevo concepto estratégico, que será presentado en la ya citada cumbre de Washington. Ya se hallan muy avanzados los estudios relativos a los grandes asuntos: las misiones fundamentales ("core missions") y las nuevas misiones, la cuestión del mandato, la estructura de las fuerzas militares. El tema de la racionalización del 4º nivel de mandos se ha resuelto con la desaparición de éste, y está pendiente el desarrollo del acuerdo de coordinación entre los mandos OTAN de Europa (SACEUR) y del Atlántico (SACLANT) sobre el "corredor atlántico" entre la península Ibérica y las islas Canarias, que se basa en los conceptos de "supporting-supported" y "cross boundaries". Los acuerdos de coordinación entre los mandos españoles y los mandos OTAN permanecen en suspenso hasta que se produzca la implantación de la nueva estructura mili-

tar. En cuanto al concepto CJTF, se analizan los resultados de los ejercicios de validación efectuados, principalmente los del "Strong Resolve", en el que España tuvo tan importante participación.

Tras haberse descolgado del nuevo proyecto otánico de estructura militar, Francia permanece en una posición algo incómoda y confusa, como si hubiese perdido peso específico. La impresión general es que por las circunstancias de todos conocidas nuestro país vecino perdió una buena ocasión y que más adelante convendrá buscar otra oportunidad que le permita contemplar la integración sin excesivo costo político. Queda ahora por ver si los cambios de gobierno que se han producido en Alemania e Italia introducen algún cambio importante en la política de seguridad y defensa de estas naciones, aunque se supone que seguirán una línea no muy distinta de la acostumbrada.

Mención aparte merecen las naciones llamadas "neutrales", sujetas al lastre de la tradición ante una posible incorporación a la estructura de seguridad y defensa europea. Pese a que parten de una situación teóricamente más próxima a las instituciones europeas y "euroatlánticas" que los países del antiguo Pacto de Varsovia, encuentran dificultades donde éstos hallaron motivo de entusiasmo. Así Austria, que podría estar deseosa por abandonar una neutralidad que le fue impuesta y por unirse a un club tan importante como es la OTAN, ha rechazado su posibilidad de acceder a formar parte de ella. Ciertamente busca cómo encajarse en la UEO y que incluso promovió la celebración en Viena de la primera reunión de Ministros de Defensa de la Unión.

En el diálogo mediterráneo, la OTAN ha conseguido algunos avances. En su Colegio de Defensa ya se ha realizado un curso para Generales al que asistieron representantes de los países de ambas orillas. En él quedó claro que los países norteafricanos tienen básicamente la idea de que para cuestiones de dinero hay que hablar con Bruselas y para las cuestiones de seguridad hay que referirse al marco del "proceso de Barcelona". Pero el proceso iniciado en la ciudad española ha avanzado poco. La UE está tropezando con muchas dificultades. Ciertamente se contaba con que el proceso de paz en el Oriente Medio hiciese viable el diálogo y que tal proceso ha sufrido un enorme parón durante 1998. Argelia, Libia y Oriente Medio constituyen un lastre excesivo para que aquella importante iniciativa rinda pronto sus frutos.

Al término de 1998, se tiene la impresión de que se está alejando el horizonte de las primeras nuevas adhesiones a la Unión Europea. Como

fechas posibles se habla ahora del 2006 y del 2009 y no del 2002 o 2003, como eran las inicialmente propuestas. Este retraso respondería, a juzgar por el informe de la Comisión, a que el ritmo de progreso de los candidatos es inferior al previsto. Por otra parte, las nuevas fechas se acomodarían mejor a las exigencias de una reforma institucional previa y a la preocupación existente por la carga que supone la financiación. También se facilitaría así la solución del problema planteado entre España, que aunque mantiene una actitud muy positiva hacia la entrada de nuevos miembros no desea que ésta se financie a costa de los fondos de cohesión, y Alemania, que pretende reducir a toda costa su aportación actual.

El año ha sido pródigo en conflictos en la región balcánica. Las elecciones en Bosnia revelaron que las actitudes han cambiado poco y que, por tanto, la tutela exterior deberá mantenerse por mucho tiempo. El conflicto de Kosovo y los incidentes ocurridos en Albania muestran la inestabilidad remanente en la zona y también la conveniencia de una decidida acción preventiva en aquella región, así como la necesidad de imponer la presión de la fuerza para poner coto a ese nuevo "Sadam Hussein" que reta a la comunidad internacional desde la capital de Serbia.

Finalmente conviene reseñar la participación de la UE en el Foro de Seguridad Regional del S.E. Asiático y la renegociación en Bruselas de la Convención de Lomé. Ambos acontecimientos revelan esfuerzos incipientes por parte de la Unión por ir aproximándose al establecimiento de una política global.

EL EURO

El proyecto europeo parte de la constatación no sólo de una identidad geográfica sino principalmente de una identidad cultural, dentro de la cual la conflictividad y la variedad no son sino algunos de sus rasgos característicos. Efectivamente, pese a que su historia es una sucesión de conflictos internos y su geografía natural y humana se significa sobre todo por los contrastes, Europa es consciente de su propia personalidad.

Una característica de esta personalidad europea, especialmente si la comparamos con la norteamericana, que se expresa habitualmente en términos económicos, es que en nuestro continente el debate político suele expresarse en términos sociales. Por eso es digno de reflexión el hecho de que, a la hora de dar forma institucional a la identidad de Europa, se haya optado por una construcción basada principalmente en la articulación eco-

nómica. Este enfoque parece indicar que los europeos son conscientes del valor que tiene la economía como elemento vertebrador de la sociedad y como factor creador de unas condiciones ambientales estimulantes y generadoras de iniciativas en otros ámbitos.

El largo proceso de construcción de la Europa económica culminó cuando, el día 2 de mayo, los Jefes de Estado o de Gobierno ratificaron la decisión del Consejo de Economía y Finanzas de la Unión, que había dado su visto bueno la víspera a la lista de países que formarán parte de la Unión Monetaria a partir del 1 de enero de 1999. Los efectos más directos de esta decisión recaerán sobre el comercio, la inversión y el movimiento de los europeos, pero indudablemente no serán éstos los únicos campos en los que se producirá una beneficiosa repercusión.

Sólo uno de los quince países de la UE no logró cumplir oportunamente con las condiciones macroeconómicas, aunque es cierto que en algunos otros casos se aplicó la "contabilidad creativa" para alcanzar los mínimos. Sólo Grecia no llegó a aquéllas, y lo hizo de forma clamorosa, pues no cumplió con ninguno de los criterios exigidos. Se espera, sin embargo, que la reciente incorporación de su moneda al Sistema Monetario Europeo y el esfuerzo que está realizando el gobierno de aquel país para impulsar sus proyectos económicos la permitan entrar en la Unión Monetaria en una segunda fase.

Otros tres países han quedado fuera del Club del Euro, pese a la buena marcha de su economía. De ellos, Dinamarca, cuya no incorporación tenía por base un referéndum celebrado en 1993 que reflejó una vez más la actitud recelosa de los daneses hacia las iniciativas europeas, ha ratificado luego, también en referéndum, el Tratado de Amsterdam. En Suecia, el proyecto de unión monetaria no cuenta con el respaldo mayoritario de la población, que achaca a la entrada en la UE el origen de la crisis económica que sufrió aquel país en los años 92 y 93. Ciertamente es que allí tampoco se contaba con que la operación de convergencia alcanzase el éxito que finalmente ha obtenido y que los requisitos incumplidos han sido la necesaria adaptación de su Banco Nacional al Banco Común y la obligada pertenencia al Sistema Monetario Europeo. En el Reino Unido, la situación resulta algo ambigua pues, si por una parte este país se ha demarcado inicialmente de la operación en un gesto de "euroescepticismo", también ha manifestado su intención de favorecer la unificación de la moneda europea. Lo más probable es que tanto Gran Bretaña como Suecia acaben por participar en la Unión Monetaria hacia el año 2002. Con-

cretamente, Gran Bretaña ha anunciado ya que pondrá en marcha un plan de transición hacia el euro. En todo caso, la nueva moneda europea acabará imponiéndose por la fuerza de los hechos, pues una vez que entre en circulación será imposible sustraerse a su empleo en el ámbito de la UE.

Los casos que se acaban de citar son una buena muestra de las dificultades propias del proceso de unión. Aunque la flexibilidad con que se está desarrollando sea precisamente una de las claves del éxito hasta aquí conseguido, una de las líneas de acción que deberá adoptarse en el futuro consistirá en procurar la desaparición de las excepciones, para simplificar así el “puzzle” europeo. Esto es especialmente aplicable al campo de la seguridad y la defensa.

De todo este proceso debe destacarse la valentía demostrada por Europa en su conjunto, valentía que corre pareja con la confianza en sus propias posibilidades. Poco se ha hablado de las incógnitas y los riesgos a los que se exponen los quince países de la Unión con un paso tan revolucionario como es la adopción de la moneda única, pero sí ha quedado claro que nos espera un futuro de trabajo y de sacrificio, y que el camino hacia adelante, como se han esforzado en recalcar repetidamente los alemanes, ha de estar presidido por el máximo rigor en materia económica.

Afortunadamente, el fruto de los esfuerzos hasta ahora realizados se ha dejado ya sentir, de tal forma que no parece que haya que temer demasiado la impaciencia de la espera. Las naciones europeas son conscientes del beneficio que les ha reportado el obligado saneamiento de sus economías. La crisis asiática, su repercusión en Iberoamérica, y la caótica situación financiera de Rusia, con la amenaza incluso de una recesión, han llegado atenuadas a Europa gracias al excelente tono de su economía. No puede haber sido más oportuno el esfuerzo realizado en pos de los criterios de convergencia.

Con frecuencia se reprocha al proceso europeo un déficit de pálpito humano. Este déficit se refiere a aspectos de carácter filosófico relativos a la identidad más profunda del ser europeo, y también a una preocupación por la justicia social. En este último aspecto España muestra especial sensibilidad como consecuencia de su alto porcentaje de paro laboral. Pero también en esto vemos un efecto beneficioso de la vertebración económica de Europa. La mejora de las economías se está confirmando como una de las claves para la recuperación de puestos de trabajo. Por otra parte, el reiterado llamamiento de la opinión pública a las instancias comu-

nitarias en el sentido de que se dedique una mayor atención a este asunto ha provocado ya diversas iniciativas. Resulta gratificante constatar que el Plan de Empleo presentado por el gobierno español ha sido el que mejores comentarios ha merecido de la Comisión Europea, juntamente con el francés, y que el ritmo español de creación de empleo es actualmente superior al del conjunto de las demás economías europeas.

Otros acontecimientos de la mayor importancia entre los sucedidos durante 1998 han sido la creación del Banco Central Europeo (BCE) y la designación de su presidente, amén del debate sobre el establecimiento de las medidas de coordinación de las políticas económicas. El BCE, pieza clave de la implantación del euro, asumirá un fuerte protagonismo, ya que le corresponderá una buena parte de la orientación de la política económica europea, principalmente en lo que se refiere al mantenimiento de la estabilidad de precios y a las operaciones en los mercados de divisas. También se ocupará de la emisión de moneda.

La designación del primer presidente del BCE dio lugar a una agria disputa entre Francia y Alemania, saldada con el nombramiento del holandés Duisenberg y con una fórmula de circunstancias que recortaría su mandato para ceder el puesto a un presidente francés en el 2002. De esta forma se evitó el veto con el que amenazaba el presidente del gobierno galo. Este lamentable episodio perjudicó al canciller germano en sus expectativas electorales y dañó seriamente al eje franco-alemán, además de sacar a la superficie algunos de los peores reflejos de las prácticas políticas tradicionales.

La posibilidad de dar representación exterior al euro ante foros como el G-7 y el FMI ha sido explorada por los responsables de economía de los Once con escaso éxito. Unos países creen que para ello basta con la figura del presidente del BCE y otros consideran que la presencia de tal representante perturbaría el funcionamiento de alguno de estos foros o que al euro debe dársele una dimensión más inclinada hacia la política económica.

La Unión Monetaria vertebrará el potencial europeo para consolidar el proceso de unión y lanzarlo hacia nuevas metas, y conformará la personalidad de un nuevo gigante económico que competirá como número dos con los Estados Unidos. La población que hay detrás de ella se eleva a 372 millones de habitantes, con un PIB de 1.125,6 billones de pesetas, frente a los 269 millones de norteamericanos y a los 991,2 billones de su PIB. Como vemos, el balance numérico es favorable a los europeos que,

sin embargo, no disfrutaron de la compacidad que proporciona una unión política tan consolidada como la de los EE.UU. ni del vigor con que se desarrolla la economía norteamericana.

LA CUMBRE DE CARDIFF Y LA INFORMAL DE PÖRTSCHACH

La cumbre celebrada durante el mes de junio en Cardiff transmitió una imagen de desacuerdo e inoperancia. Y no es de extrañar, pues se aplazaron los dos grandes asuntos, es decir, la financiación para el período 2000-2006 y la reforma institucional.

La reunión transcurrió bajo el peso de los condicionamientos impuestos por la cercanía de las elecciones alemanas. Kohl, entonces canciller, adoptó una postura radical en favor del "justo retorno". Las dificultades económicas resultantes del esfuerzo de integración de la antigua Alemania Oriental llevaron al canciller germano a poner sobre el tapete la cuenta del debe y el haber y a propugnar un reparto más justo de las cargas, que según su opinión, serían claramente perjudiciales para su país, ya que éste recibiría menos de lo que obtendría del sistema. La actitud alemana se vio secundada desde el primer momento por Austria, Suecia y los Países Bajos. La tesis defendida por estos países, alejada del espíritu de solidaridad que inspira la construcción europea y que constituye el fundamento de los fondos estructurales y de cohesión, conduciría a la introducción de nuevos criterios que perjudicarían notablemente a los países actualmente beneficiarios.

Desde el comienzo de la cumbre España luchó denodadamente por evitar la adopción de decisiones parciales, por las que parecía inclinarse inicialmente el Reino Unido, y puso de relieve que las modificaciones propugnadas por Alemania penalizarían el esfuerzo realizado por aquellos países que aún se encuentran lejos de alcanzar una convergencia real aunque ya hayan alcanzado la convergencia exigida por la Unión Monetaria. La solución propuesta por España consistía en adoptar una decisión global y un enfoque progresivo, de forma que los países más ricos pagasen más. El problema de fondo es el peligro de que evolucione el espíritu europeísta desde la solidaridad al criterio del coste-beneficio, lo que supondría además una vuelta a la nacionalización.

La salida adoptada no solucionó nada, pero sirvió al menos para dar tiempo a la reflexión y al diálogo, en espera de que, pasadas las elecciones germanas y con Alemania en la presidencia de la UE, la negociación per-

mita llegar a una fórmula que se ajuste mejor al espíritu y a la letra de la Unión. Pero como las elecciones europeas se celebrarán una semana después de la cumbre en que esto ha de decidirse, es más que probable que los jefes de gobierno quieran que los electores afines se presenten a aquéllas avalados por el triunfo de sus respectivas tesis. La solución tomada en Cardiff respecto al acuerdo financiero pospone éste hasta una cumbre extraordinaria que debe desarrollarse el mes de marzo de 1999, con la idea de cerrar el compromiso en la cumbre de junio de ese mismo año.

Hay que añadir que a finales de noviembre, y como solución al problema de la financiación, la Comisión de la UE presentaría la idea de congelar el gasto hasta el año 2006, manteniendo un tope determinado por la media de los desembolsos entre 1993 y 1999. La reacción ante esta idea dividió a los países de la Unión. España rechazó la solución propuesta pues, aunque su gobierno estaba de acuerdo con el principio del rigor, consideró inaceptable congelar los gastos en un promedio que, además de ser bajo, había de afrontar el coste de la ampliación. Nuestro país admitiría como punto de partida los gastos de 1999, pero garantizándose el desarrollo de las políticas comunitarias y dejándose al margen las partidas destinadas a la ampliación de la Unión.

En lo que se refiere a la reforma institucional, la influencia del clima electoral alemán llevó también al canciller a alinearse con posiciones próximas a las de los países más euroescépticos, pero finalmente se acordó celebrar en octubre una cumbre informal, a partir de la cual se constituiría un grupo de "representantes personales" para elaborar un plan específico de reforma que debería estar listo en la cumbre de Viena de diciembre, es decir en un plazo realmente breve. De esta forma se neutralizó el plan francés, consistente en crear un "grupo de sabios", detrás del cual se sospechaba la intención de colocar al ex-presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors.

Puede decirse que, pese a dejar en el aire las principales decisiones pendientes, y en algún caso precisamente por ello, los resultados de la cumbre de Cardiff resultaron beneficiosos para España, cuyo deseo era que se abordase la Agenda 2000 globalmente, de forma que no se adelantasen decisiones parciales. En sus aspectos más positivos, la cumbre evitó algunos movimientos no deseables y sirvió para establecer un calendario que debe permitir iniciar un proceso ordenado, aunque no deja de ser preocupante, con vista al futuro, que Alemania, país destinado a ejercer el liderazgo europeo, hable un lenguaje de coste-beneficio más bien que de

solidaridad, y que pretenda que el coste de la ampliación se haga a costa de unos fondos que están transformando las zonas menos privilegiadas de Europa.

La cumbre informal de Pörschach, celebrada a fines de octubre bajo la presidencia austríaca, sirvió para calibrar la actitud de los nuevos jefes de gobierno de Alemania e Italia, que generaron expectativas en relación con su actitud ante los grandes temas europeos. En ambos casos se producían circunstancias novedosas que planteaban ciertas dudas. En el caso alemán, la incorporación de los Verdes al gobierno introducía la incógnita de hasta qué punto podrían apreciarse variaciones en la línea tradicionalmente seguida por los germanos. En el caso italiano, se trataba de la primera actuación en un foro internacional del primer ministro D'Alema, ex-comunista. Tanto para el uno como para el otro, la cumbre de Pörschach constituyó una ocasión adecuada para demostrar cómo el gran proyecto europeo constituye un lugar de encuentro donde los excesos ideológicos ceden el paso al sentido común y a las soluciones razonables y eficaces. El ambiente internacional compartido y la convergencia en una tarea común a largo plazo tienden a suavizar y moderar los discursos nacionales en aras del consenso. Para España, la insistencia generalizada en la necesidad de impulsar una política de crecimiento, fomento del empleo y reducción de los tipos de interés sirvió para confirmar que la línea que aquí se está siguiendo no difiere de la orientación propugnada ahora por los Quince. Es más, esta coincidencia revela hasta qué punto se están acercando en su enfoque las políticas nacionales, cualquiera que sea la etiqueta de los gobiernos. En este sentido, la cumbre informal de Pörschach ha demostrado que existe una notable sintonía entre los actuales líderes europeos.

Las conclusiones de la cumbre se refieren a dos grandes grupos de asuntos. Por una parte están los temas de carácter económico, entre los que destacan la conveniencia de una bajada de los tipos de interés (sin que esta orientación pueda interpretarse como una interferencia en lo que corresponde a decisiones propias del BCE y de los Bancos Centrales nacionales) y la intención de apoyar la economía de los países Iberoamericanos, que sufren las repercusiones de la crisis financiera internacional. Por otra parte están los temas de política exterior y de seguridad, respecto a los cuales se insiste en el interés existente por materializar el acuerdo de contar con una figura visible que encarne la política exterior europea ("Mister PESC") y por dar vida al "pilar europeo" de la defensa.

De estas conclusiones parece deducirse que los cambios que se han producido en los gobiernos de algunos de los países más importantes de Europa no sólo no deben suponer un frenazo o un cambio de orientación en el camino emprendido sino que, por el contrario, pueden contribuir a dar un nuevo impulso a algunas decisiones ya tomadas pero cuyo desarrollo se encontraba estancado. Queda por ver si tan buenas intenciones acaban por convertirse en realidad y si, efectivamente, se relanzan los aspectos más políticos del Tratado de Maastricht.

LA REFORMA INSTITUCIONAL

Ya durante el primer trimestre de 1998 se produjo un debate sobre el calendario y el procedimiento para preparar la reforma institucional. Tal como se ha dicho, el presidente Chirac lanzó la idea de crear un "grupo de sabios" con el supuesto objetivo de impulsar el proceso. El presidente del Parlamento Europeo pareció considerar idóneo este procedimiento para acelerar los planes de reforma; las elecciones europeas que tendrán lugar en la primavera de 1999 contribuirían a superar las resistencias encontradas a la hora de contemplar posibles cambios en profundidad. Pero la idea francesa pretendía abordar la construcción de la Europa de los Estados, para lo cual habría que definir cuáles serían las atribuciones que habrían de reservarse los gobiernos nacionales. Como ya hemos comentado, detrás de esta presentación muchos adivinaron una maniobra que finalmente no prosperó.

En el mes de marzo, el presidente de la Comisión Europea anunciaba la celebración de una conferencia intergubernamental como procedimiento para realizar una reforma institucional bien elaborada. Desde un principio, Santer había sido partidario de adoptar una actitud prudente, basada en la experiencia, y dar tiempo a que se completase la ratificación del Tratado de Amsterdam. El proyecto de conferencia fue preparado por el Comisario de Asuntos Institucionales, y abarcaba los cuatro puntos clásicos: el de los votos y los vetos, que plantea el justo reparto de los primeros entre los países grandes y los países pequeños y la supresión de los segundos en determinadas áreas; el de la definición y desarrollo de una política exterior y de seguridad común; el de la flexibilización de las directivas para lograr una mejor adaptación de éstas a las circunstancias y características propias de cada nación; y finalmente, el de perfeccionar el carácter democrático de las instituciones europeas. Ya hemos visto las decisiones concretas que a este respecto fueron tomadas en la cumbre de Cardiff, en el

sentido de crear un grupo de "representantes nacionales" y establecer un calendario de trabajo.

Quiere esto decir que, una vez más, Europa opta por avanzar prudentemente, sin forzar el tiempo, aunque ello pueda impacientar a muchos y ponga en cierto riesgo el deseable desarrollo de algunos procesos. La conferencia tendrá lugar en torno al año 2000, fecha en la cual se habrá completado la ratificación del Tratado de Amsterdam. Es de esperar que, mientras tanto, el nombramiento de un "Míster PESC" genere algunos avances en el campo de la política exterior y de seguridad común, principalmente después del impulso dado en la cumbre informal de Pörschach, aunque varios países se oponen a la idea de que aquel cargo tome excesiva relevancia y prefieren que su perfil sea el de un alto funcionario. Esta es la razón por la que sigue sin ser resuelto este asunto, que en el año 1997 parecía ya encaminado. Es más, está aún por ver si la figura de un "Míster PESC" llega realmente a concretarse.

No se pueden negar las dificultades que se presentan al abordar un asunto tan complejo por su propia naturaleza como es el establecimiento de una política exterior y de seguridad común, aun teniendo en cuenta que lo que se pretende en este caso es simplemente lograr un consenso sobre las principales líneas orientadoras de esa política en determinadas áreas seleccionadas y no un acuerdo exhaustivo. Se constata que por la vía de los hechos ya se han conseguido algunos logros. Por ejemplo, lo que se definió en Barcelona no fue otra cosa que una política común para alcanzar la paz y la estabilidad en el Mediterráneo, y se hizo con tanto éxito que las decisiones consiguientes implicaron incluso a los países nórdicos en su financiación. Respecto a Kosovo, la Unión Europea ha definido como línea política a seguir el apoyo a una solución autonómica preferiblemente a otra independentista.

LA IDENTIDAD EUROPEA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

En su reunión de mayo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea Occidental emitió una declaración ("Declaración de Rodas") en la que define a la UEO como parte integrante "del desarrollo" de la Unión Europea, a la que proporciona capacidad operativa, especialmente en el contexto de las misiones tipo Petersberg. Esta expresión de la relación entre las dos instituciones europeas, aunque es todavía muy inconcreta, permite establecer una estrecha conexión entre ellas en espera de que llegue a

determinarse la definitiva ubicación de la UEO. Con parecido enfoque pragmático aborda la Declaración de Rodas la definición de una política de defensa común. La UE aboga por la identificación de "bloques útiles", como son los aspectos de relación cívico-militar ya experimentados en la gestión de crisis, y preconiza la consideración de trabajos ya realizados, que pueden pasar también a formar parte del "material de construcción". La Declaración aplaude los avances conseguidos en el intercambio de información clasificada entre los dos organismos, así como otros logros de carácter práctico.

En el terreno militar, el progreso sigue de forma tenaz gracias a la eficacia de los Estados Mayores, según un proceso que va en gran parte de abajo a arriba, como consecuencia del desarrollo natural de las Grandes Unidades que se han creado. Así por ejemplo, EUROFOR ha adquirido conciencia de su propia identidad y tomado ya el pulso a sus capacidades operativas en el ejercicio "Eolo 98", que se desarrolló en el sur de Francia durante el mes de junio. Gracias al impulso del General Ortuño, su primer Jefe, esta unidad se encuentra ya en una avanzada fase de organización, en la que se están definiendo sus posibles relaciones con el Eurocuerpo y con el Cuerpo de Ejército de Reacción Rápida de la OTAN, y se abordan los problemas que plantea la generación de fuerzas.

En contraste con la tenacidad que se observa en el campo militar y con el progreso obtenido en este ámbito, en la UEO parece percibirse una cierta resignación en espera de que se produzcan las circunstancias y las condiciones adecuadas para que lleguen a cristalizar las decisiones que deben sacarla de la situación de relativa ineficacia que con frecuencia se le atribuye.

También, tal como expresa la Declaración de Rodas, la UEO asume un papel en cierta forma subsidiario del de la OTAN, al subrayarse que su contexto propio es el de las misiones tipo Petersberg y el de aquellos conflictos que no requieran especial contundencia. Esta definición, que constituye en parte un reconocimiento de las limitaciones de la organización europea, supone de por sí un avance en lo que tiene de concreción con respecto al nivel de actuación de la UEO. Sin embargo, se suscita la duda de si la lentitud con que parece abordarse el proceso de consolidación de la UEO como elemento integrante de la construcción europea está a la altura de las exigencias de una realidad que se manifiesta de forma dramática en los Balcanes y golpea las conciencias con la crudeza de las imágenes televisivas. La OTAN resuelve gran parte del problema, pero se per-

cibe una clara demanda en el sentido de una respuesta europea más ágil y contundente a la hora de afrontar los conflictos que se originan en nuestro continente.

Esta preocupación llevó a los Ministros de Exteriores y Defensa de la UEO a intentar dar un impulso a este asunto, cuya solución definitiva debe encontrarse antes de la cumbre de la OTAN en Washington. El mayor obstáculo procede de la insistencia británica en que se disuelva prácticamente aquella organización.

La relación OTAN-UEO ha seguido progresando en aspectos prácticos y operativos como, por ejemplo, en los procedimientos de trabajo y en las consultas para la preparación y conducción de operaciones de la UEO con medios y capacidades OTAN. Con la prevista celebración el año 2000 de un ejercicio de gestión de crisis con la OTAN culminará este interesante trabajo, que contribuye de forma práctica y concreta a la visibilidad de la identidad europea en el seno de la Organización Atlántica. De la misma forma, la participación de la UEO en el proceso de planeamiento de la OTAN y el ofrecimiento hecho a ésta por la UEO en el sentido de proporcionarle información procedente de su Centro de Satélites, contribuirán a señalar la importancia y el beneficio que pueden derivarse de esta aportación.

Uno de los rostros que mostrará la identidad europea será el de su industria de defensa. En este sentido, 1998 es testigo de un suceso importante: en diciembre de 1997 se había producido ya una declaración firmada por los jefes de estado y de gobierno de Francia, Alemania y Reino Unido, y apoyada por los jefes de gobierno de Italia y España, cuyo objetivo era facilitar la reestructuración de las industrias aeroespacial y de electrónica de defensa europeas. Pues bien, el 20 de abril de 1998, los ministros de Defensa de esos cinco países se reunieron para, ampliando aún más el campo de interés de aquella iniciativa, discutir sobre la reestructuración de la industria de defensa. Fruto de esta reunión fue la Carta de Intenciones firmada el 6 de julio siguiente con idéntica finalidad por las mismas autoridades (en realidad, por parte de Gran Bretaña firmó en esta ocasión el Subsecretario de Estado), a las que se sumó el ministro sueco. En ella establecen con bastante detalle un marco cooperativo. Se prevé que los acuerdos y pactos que puedan derivarse de la Carta de Intenciones queden finalizados entre julio y diciembre de 1999.

Muchas naciones observan con cierta prevención estas interesantes iniciativas con el temor de que sus industrias queden ahogadas por la pre-

potencia de los grandes. Será preciso que estos últimos se den cuenta de que deben respetarse los intereses nacionales de todos los países.

Tal es el caso de la agencia de armamentos OCCAR, creada el año 1996 por Alemania y por Francia, países a los que se unieron después Italia, Reino Unido y Suecia. Esta agencia se ha ido consolidando, en parte a expensas del Grupo de Armamento de Europa Occidental (WEAG). El hecho de que la entrada en la OCCAR esté sujeta a la aceptación de las condiciones acordadas previamente por los miembros actuales y el recelo al que ya nos hemos referido dificultan la incorporación de nuevos países.

En cualquier caso, durante la reunión celebrada en noviembre por la UEO en Roma, y de la cual ya hemos hecho mención, se acogió favorablemente la idea de crear una "Agencia Europea de Armamentos" como posible solución definitiva. También se aprobó un plan maestro para desarrollarla. La multiplicidad organizativa da idea de las dificultades que se encuentran a la hora de encauzar el problema.

En cuanto a los gobiernos, éstos deberán reconocer que la base industrial y tecnológica de la defensa es un activo de importancia estratégica y proporcionar un marco estructural y legal que facilite la supervivencia y desarrollo del sector, que actualmente se orienta hacia el establecimiento de programas cooperativos y hacia una política de privatización y fusiones.

LOS EEUU ANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA

El año 1998 registra un hecho significativo en lo que se refiere a la actitud de los Estados Unidos respecto a nuestro continente: la visita efectuada por el presidente Clinton a Berlín en el mes de mayo, durante la cual definió a Europa como eje de su política exterior. El interés creciente de los EEUU por la cuenca del Pacífico y la tentación aislacionista, siempre viva en el mundo político norteamericano, dan especial valor a esta definición pública. La activa intervención diplomática de Washington en el conflicto de Kosovo y la continuidad de su presencia militar en el área balcánica confirman la validez de aquella definición.

Al reafirmar el vínculo de su país con Europa, considerada ésta como eje de la política exterior norteamericana, el presidente Clinton basó la acción común en cuatro puntos: la reforma de la OTAN como base de la seguridad común, que debe defender unas fronteras más amplias y contar con los medios necesarios para afrontar los nuevos retos (conflictos regio-

nales o culturales, proliferación de armas de destrucción masiva, etc); una ampliación que no ignore los intereses de Rusia y Ucrania; el incremento de la prosperidad de la asociación con Europa, y la extensión de la democracia y el impulso a la cooperación global en sus múltiples facetas.

Refiriéndonos más concretamente a las relaciones entre los EEUU y la UE, enturbiadas por las leyes Helms-Burton y D'Amato-Kennedy, durante 1998 se han perfeccionado y clarificado gracias a una hábil maniobra del presidente Clinton, que resolvió el rechazo europeo a las mismas sin provocar reacciones contrarias en su país. Como es sabido, Europa no admite el principio de "extraterritorialidad" que aquellas leyes establecen, aunque es sensible al principio de defensa de los derechos humanos en que teóricamente se inspiran. El problema afecta a otros ámbitos que merecen la preocupación europea en lo que se refiere a la seguridad y la defensa, como es el caso del peligro de proliferación de armas de destrucción masiva. Si sobre Europa recae el compromiso de no permitir que sus empresas trafiquen con propiedades confiscadas por las autoridades cubanas, también corresponde a Europa la obligación de penalizar las conductas de aquellos países que pudieran caer en la tentación de desarrollar aquel tipo de armas. Esta preocupación ha aumentado con motivo de las pruebas nucleares realizadas durante el año 1998 por India y Paquistán.

Respecto a la creación de la Unión Monetaria Europea, la actitud norteamericana ha sido generalmente discreta, lo que no quiere decir que dicha Unión sea acogida allí con entusiasmo, sino más bien todo lo contrario. Una excepción llamativa fue la del presidente del Congreso quien, en un artículo publicado en Estados Unidos y en el Reino Unido, invitó a este último país a integrarse en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en vez de hacerlo en la Unión Monetaria Europea. La argumentación reunía un compendio de los riesgos que pueden señalarse a la aventura europea, como son los que derivan del hecho de que se acometa la trascendental instauración de una moneda única cuando están aún pendientes reformas estructurales, y señalaba cómo el éxito económico de los Estados norteamericanos se apoyó en haber unido sus monedas, aranceles, etc cuando ya se contaba con un grado notable de cohesión política. También surgieron voces en Canadá haciendo ver al Reino Unido que su grado de afinidad con aquel país y con los EEUU era mayor que con las naciones europeas. Frente a estas ideas, que en el fondo encubren un rechazo a la consolidación de Europa como una gran potencia mundial en competencia con Norteamérica, en la otra orilla del Atlántico surge ahora

como contrapunto otra línea de pensamiento más favorable que, quizás ante el hecho consumado, prefiere señalar los beneficios que aportarán la existencia de la Unión Europea y su moneda única.

RUSIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

El año 1998 ha visto confirmarse algunas de las hipótesis más pesimistas respecto a la evolución del proceso ruso de democratización. Justo es suponer que tan negativa evolución no habrá sorprendido a nadie. A diferencia de lo que sucede en la mayor parte de los países del antiguo Pacto de Varsovia, la sociedad rusa carece del recuerdo histórico de unos tiempos de libertad. La transformación mental y el cambio de actitudes que requiere la normalización democrática no pueden producirse en el plazo de unos pocos años, sino que seguramente exigirán el paso de varias generaciones. De aquí que el solo hecho de que transcurra el tiempo sin que la situación rompa de forma explosiva pueda considerarse ya de por sí una buena noticia. La enorme capacidad de sufrimiento del pueblo ruso constituye el principal seguro ante la larga prueba que le espera.

Durante 1998 se han producido dos acontecimientos realmente reveladores de la gravedad de la situación en que se encuentra Rusia. Las crisis de gobierno no sólo han demostrado las enormes dificultades con que tropieza aquella nación a la hora de resolver algunos problemas tan básicos como el de pagar a sus funcionarios y a sus soldados sino, fundamentalmente, la incapacidad de sus dirigentes para controlar mínimamente la situación y para realizar una política decidida y coherente que permita progresar hacia la solución de los problemas más esenciales. Los pasos dados han llegado hasta la inconsecuencia y han revelado los peores aspectos del grave estado en que se encuentra sumido el país, como la supervivencia del pensamiento antiguo, el espectáculo del enfrentamiento entre el presidente y la Duma y de unos parlamentarios movidos más por el interés de conservar sus puestos que por el bien de la nación, y una política caótica, que lucha entre la perentoria necesidad de eficacia para poder salir de una espiral fatídica y los perturbadores estímulos de unas prácticas viciadas.

Otro acontecimiento significativo, e íntimamente relacionado con las crisis de gobierno a las que acabamos de aludir, ha sido la crisis financiera. El aspecto más penoso de ésta fue la forma en que Rusia reaccionó ante un problema de tamaña gravedad. Frente al interés generalizado en la

comunidad internacional por ayudarla a salir de su situación y el esfuerzo concreto del Fondo Monetario Internacional por apoyar su recuperación, la respuesta rusa fue decepcionante, presentando como solución interna del problema un conjunto de medidas en gran parte contraproducentes. El deterioro llegó a su apogeo en el mes de agosto, con el abandono del único plan de reforma que se había mostrado coherente y el retorno a prácticas que debieran haber sido ya definitivamente superadas. El desplome del rublo alcanzó entonces cotas de catástrofe, hasta el punto de repercutir negativamente en los mercados financieros mundiales, si bien la influencia de la economía rusa en éstos no es tan grande como podría suponerse. Todo ello ha hecho que al problema de las crisis se haya sumado el del desprestigio de las instituciones rusas.

En términos prácticos referidos al proceso de construcción de Europa, y dentro del nuevo espíritu inspirador de las relaciones internacionales, la situación rusa aconseja que la Unión Europea considere prioritario el apoyo a la evolución democrática de Rusia, aunque este apoyo no encuentre la respuesta que sería de esperar por parte de la clase política de aquel país, donde parece prevalecer la nostalgia y también la corrupción del poder de tiempos del comunismo. En las actuales circunstancias, el apoyo debe ir acompañado de la imprescindible firmeza.

La crisis rusa debe propiciar una cierta aceleración de los procesos de aproximación a la Unión de los países que aspiran a ser miembros de ésta, tanto si ya han sido nominados para el acceso como si son simplemente aspirantes. La índole misma de los problemas por los que está atravesando Rusia deben favorecer el abandono de los usos y maneras heredados del comunismo. Por otra parte, la debilidad rusa debe suavizar algunas presiones. La dependencia que tiene actualmente Moscú de la atención y la generosidad internacionales para lograr la estabilidad y el progreso que a todos conviene y que todos desean tiende a impulsar al gran país eslavo a buscar una buena y fructífera relación con Europa y con los EEUU en todos los ámbitos. La ya de por sí difícil construcción de la Unión política y de sus futuros mecanismos de seguridad y de defensa no puede tropezar con excesiva resistencia por parte rusa. Esta circunstancia deberá permitir una mayor comodidad a la hora de instaurar un sistema que ni Europa ni los EEUU desean construir en contra de Rusia, sino en buena armonía con ella. La larga duración que se augura al proceso de normalización democrática en aquel país hace probable que cuando esta normalización se produzca la construcción de Europa haya avanzado significativamente. En todo caso, también esta consideración aconseja impul-

sar con mayor brío la definición de la identidad europea de seguridad y defensa y su traducción en términos concretos.

La actitud rusa en los conflictos generados a lo largo del año ha sido razonable, teniendo en cuenta que nadie podía esperar una adhesión abierta y entusiasta a la política norteamericana en cada ocasión, aunque no fuera más que por mantener una imagen de gran potencia. Debe reseñarse cómo la firma en enero de una Carta de Asociación entre los Estados Unidos y los Países Bálticos provocó con carácter inmediato el establecimiento de un Pacto Militar entre Rusia y Bielorrusia. En el contencioso entre los Estados Unidos e Irak, por no decir entre Irak y las Naciones Unidas, la postura rusa no difirió demasiado de la francesa; puso el énfasis en la insistencia en la negociación, lo que permitió a Moscú erigirse en la parte “serena y civilizada” y distanciarse lo suficiente de los EEUU sin llegar a romper la baraja. El desenlace de los acontecimientos no dio lugar a que se pudiera comprobar la firmeza de su postura, respaldada sin duda, no sólo por una cuestión de principio, sino también por sus propios intereses.

Parecida ha sido la actitud moscovita ante el conflicto de Kosovo. En este caso el rechazo a la intervención de la OTAN resultó más perturbador, y contrasta con la cooperación mostrada en el ámbito de las actuaciones de la OSCE, como por otra parte era de esperar. La postura rusa en este asunto ha sido coherente con el interés de Moscú por aparecer como protector de Belgrado, lo que no ha sido obstáculo para destacar una fuerza a Albania, aunque por su entidad no pasase de tener un carácter testimonial, con objeto de participar en las maniobras realizadas en aquel país durante el mes de agosto.

En todo caso, la situación rusa debe constituir una gran preocupación para Europa desde el punto de vista de la seguridad y apela lógicamente a la necesidad de mantener una actitud de vigilancia. Ni aun el peor de los escenarios posibles, que podría ser el regreso al poder de los comunistas y la consiguiente vuelta a algunos usos y costumbres de antaño, convertiría a aquel país en una verdadera amenaza, aunque sí que introduciría algunos riesgos. El grado de postración de la nación es tal que ni aun en ese caso los riesgos serían excesivamente preocupantes, desde el punto de vista militar. Es más, la involución repercutiría seguramente en un hundimiento aún más profundo y tampoco se puede pensar en un retorno puro y duro al pasado. Pero las instituciones políticas y de seguridad europeas y “euroatlánticas” no pueden dejar de hacer las previsiones oportunas

ante cualquier posibilidad desagradable, al tiempo que tienden la mano y ofrecen su apoyo a aquel gran país.

En su situación actual, sólo la capacidad nuclear, por muy deteriorada que pueda estar, mantiene a Rusia en su condición de gran potencia militar. Por tanto no parece lógico esperar que Moscú haga demasiadas concesiones en este terreno.

LA CONFLICTIVIDAD EN EUROPA

Poco después del derrumbamiento del Pacto de Varsovia, la OTAN empezó a señalar la aparición de nuevos riesgos, que emergen al amparo de la nueva situación estratégica, muchos de ellos como consecuencia de la confusión propia de una situación de transición que incluye zonas de penumbra y rincones oscuros favorecidos por el deterioro de las instituciones y por las crisis económicas. El año 1998 ha visto algunos signos indicadores de la realidad de estos riesgos, que ya afloraron en años anteriores. No nos referimos solamente a la emergencia de conflictos de carácter cultural o religioso. El peligro de la proliferación de armas de destrucción masiva, conocido en el ámbito de los expertos en asuntos de seguridad y defensa pero escasamente percibido por el gran público, pasó a la primera plana de la actualidad cuando India y Pakistán se enzarzaron en un demostración de su capacidad nuclear realizando una serie de pruebas. Entonces resurgió el espectro ya casi archivado de la amenaza que tuvo en vilo a la Humanidad durante más de cuarenta años y que parecía haber quedado enterrado con los escombros del famoso muro de Berlín. Pero también han apuntado otras modalidades distintas, que se asomaron a la opinión pública en noticias perecederas pero hicieron recordar la posibilidad de que en alguna ocasión nos encontremos con la desagradable aparición de algunas de las armas de la nueva panoplia. El problema de las mafias, del crimen internacional y el ya citado de la proliferación de armas de destrucción masiva fueron objeto de especial atención para la reunión de la Asamblea de la OTAN que tuvo lugar en Barcelona durante el mes de mayo. Un experto soviético en el arma biológica señalaba en el "New Yorker", con motivo de la alerta británica ante la posible introducción de ántrax, hasta qué punto puede ser preocupante la diáspora de los científicos rusos. Esta misma preocupación puede aplicarse ante los casos observados de exportación clandestina de materiales radiactivos.

Los ataques terroristas a instalaciones norteamericanas han situado a los EEUU en primera línea de vanguardia. En Europa se ha dado un importante paso institucional al decidirse que Europol se ocupe también de combatir esta lacra, que supone un factor de desgaste y desestabilización, un elemento de contradicción en una sociedad democrática y un foco de conflictividad exportable y explotable por determinados grupos o naciones para debilitar a los países prósperos, avanzados o poderosos.

Pero para Europa, la constatación de que el mundo en que vivimos está todavía lejos del anhelado horizonte de paz siguió situándose principalmente en los Balcanes, no sólo porque el conflicto de Bosnia se ha mantenido larvado bajo la paz impuesta, sino también porque en aquel volcán se han abierto nuevas bocas que muestran el magma generador de problemas que encierra aquella conflictiva zona de Europa. La negativa influencia de esta realidad sobre la construcción de una unión política en nuestro continente es uno de los factores que deben ser tenidos constantemente en cuenta y constituye un lastre considerable. Lastre físico, que drena recursos y absorbe una buena parte de nuestro esfuerzo, y lastre moral, que desprestigia a Europa y apela a nuestra conciencia de europeos.

En Bosnia, los resultados conseguidos durante 1998 son ciertamente inferiores a los objetivos pretendidos, sobre todo porque las elecciones allí desarrolladas bajo los auspicios de la OSCE han revelado una escasa transformación de las actitudes. Aunque el solo hecho de que aquéllas se hayan podido realizar, y que se hayan desarrollado con relativa normalidad, es ya de por sí un gran avance cualitativo, el triunfo de los ultranacionalistas constituye una enorme decepción por mucho que se considerase previsible. El resultado de los comicios hizo descartar la reducción de Fuerzas cuya posibilidad venía barajando SFOR. Solamente la continuidad de Izetbegovic y la presencia del moderado Radisic, juntamente con alguna ausencia, atenuaron levemente el fracaso. Tampoco puede decirse que se haya conseguido un avance ni tan siquiera suficiente en el retorno de los refugiados. Todo ello pese al encomiable esfuerzo realizado en todos los aspectos por la OTAN y la OSCE y por la Unión Europea, cuyo representante, el español Westendorp, ha logrado algunos progresos importantes, sobre todo en la instauración de medidas con gran contenido simbólico para la unificación.

Kosovo ha marcado la actualidad a lo largo de todo el año. Siendo bien conocido el potencial de inestabilidad de aquella región, cabe preguntarse cómo Europa no había tomado las medidas adecuadas para evitar el con-

flicto; también habrá quien, ante su duración, advierta un problema de ineficacia por parte de los europeos e incluso de los norteamericanos. Ya nos hemos referido a algunas de las carencias a las que pueden atribuirse estos efectos, pero en esta ocasión no podemos dejar de tener en cuenta que la intervención constituye un caso de injerencia en asuntos internos por razones humanitarias. Además, aunque la primera reacción fue bastante rápida, la acción diplomática se vio enseguida complicada por la radicalización producida en el lado kosovar, que se tradujo en la actuación de guerrillas y debilitó la posición del interlocutor natural, el Sr. Rugova, que quedó parcialmente descalificado ante parte de la población por su carácter moderado. La oposición rusa a una intervención militar de la OTAN tampoco facilitó las cosas. La tenacidad de la Alianza, que superó la merma de credibilidad sufrida por el largo compás de espera que se produjo después de la operación disuasoria "Determined Falcon", acabó por doblegar al presidente serbio.

De este conflicto, como también de la crisis que tuvo lugar en el Golfo en la primera parte del año, se deduce una consecuencia sumamente positiva e interesante: la combinación del diálogo y la fuerza es eficaz ante el fanatismo, y constituye ya una fórmula conocida y aceptada por la comunidad internacional. Así lo proclamó el Secretario General Sr. Annan tras su éxito en Irak. Ahora el problema que conviene resolver es el del mandato; sería deseable que cualquier intervención de este tipo contase con la autorización de las Naciones Unidas, pero hay que evitar que este importante trámite conduzca a la ineficacia.

Un interesante aspecto del conflicto balcánico durante 1998 ha sido el juego de las distintas instituciones de seguridad y defensa: Naciones Unidas, OTAN, UE, UEO y OSCE, todas las cuales han sido útiles, cada una dentro de su propio ámbito. De esta forma el citado conflicto se convierte en banco de pruebas para lo que ha venido en llamarse la "arquitectura de seguridad europea". También está sirviendo para establecer una relación de cooperación con Rusia en estos asuntos, aunque tal cooperación sea difícil en algunas ocasiones.

Un acontecimiento que reviste el carácter de "histórico" ha sido el que, por primera vez desde la segunda Guerra Mundial, Alemania haya ofrecido a la OTAN fuerzas de combate. Así lo hizo para una eventual intervención militar en el conflicto de Kosovo. La circunstancia de que este gesto fuera respaldado por el nuevo canciller alemán, y el hecho de que esto suceda teniendo en cuenta que Schroeder ha de gobernar con el apoyo de los

Verdes, hace aún más significativo este gesto, que está en la línea de una normalización de la actitud germana.

Bosnia y Kosovo no han sido los únicos focos balcánicos. También se han producido disturbios en Montenegro y Albania ha dado nuevas pruebas de inestabilidad, aunque la actuación preventiva en este país ha mantenido la conflictividad contenida dentro de ciertos límites. Como es sabido, la UE proporciona una contribución sustanciosa a la reconstrucción del país, en donde está establecido el MAPE (Multinational Advisory Policy Element). A este esfuerzo se suma la OSCE, en las funciones que le son propias, y algunas naciones según un esquema bilateral. La OTAN apoya la reorganización de las Fuerzas Armadas albanesas bajo control democrático.

Indudablemente, la zona balcánica dará todavía a Europa muchos dolores de cabeza. La prioridad política seguirá siendo el aislamiento de los conflictos para evitar su extensión. La curación y la recuperación de aquellas regiones que ya fueron objeto de cirugía serán procesos lentos y penosos. He aquí un ámbito que bien merecería el establecimiento de una política exterior común europea.

Fuera del ámbito de los Balcanes, la situación ha mejorado. Los países aspirantes al acceso a las instituciones europeas o "euroatlánticas" han seguido esforzándose por merecerlo, reduciendo los motivos que pudieran dar lugar a futuros conflictos. Basten como muestra la histórica visita a Hungría efectuada en enero por el presidente rumano, presidida por el espíritu de la reconciliación, y el acuerdo entre Hungría y Eslovaquia para poner fin al contencioso que mantuvieron durante quince años sobre el Danubio. También pueden reseñarse como hechos positivos sucedidos durante 1998 el encauzamiento pacífico del problema de Irlanda del Norte, que afecta a las relaciones entre el Reino Unido y la República de Irlanda, la entrega a Croacia de la Eslavonia Oriental, y los cambios políticos en Malta y Eslovaquia, así como el resultado del referéndum en Letonia, que acercan estos países al proyecto europeo. En cambio, las relaciones entre Turquía y la UE siguen en la situación de deterioro a la que nos referimos el pasado año en este Panorama Estratégico.

EL AÑO ESTRATÉGICO ESPAÑOL EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA

Aunque pueda sonar a tópico, el año bien puede calificarse de "histórico". La celebración del aniversario de 1898 y del cuarto centenario de la

muerte del rey Felipe II han aportado algunas impresiones interesantes para calibrar el tono de España y el concepto que los españoles tenemos de nosotros mismos, un siglo después de la pérdida de las últimas colonias de nuestro imperio y cuando ya nos encontramos cerca del comienzo de un nuevo milenio. En este sentido se percibe un talante optimista, de mayor confianza en nuestras posibilidades, y también una buena disposición para asumir el papel que corresponde a nuestra nación y las responsabilidades que ello trae consigo. Tal parece ser el sabor que deja la reivindicación experimentada por la figura de Felipe II, que puede tomarse como el fruto de la voluntad española de quebrar, simplemente con la verdad histórica, la ominosa presencia de la Leyenda Negra. Parecida impresión se recibe al constatar la importante presencia española en Iberoamérica un siglo después de la famosa efemérides. Esta presencia se muestra con un perfil de modernidad que torna anacrónicos los clásicos reproches de relación retórica y permite esgrimir datos tan concretos, prácticos, expresivos y reconfortantes como el hecho de que España se haya convertido en el primer inversor europeo en Mercosur, y que este hecho se haya producido en sectores tan significativos como la energía, la banca, la construcción y la telefonía. La inversión en Iberoamérica alcanzó ya en 1997 un 52,5 por ciento de la inversión total española en el exterior.

En Europa, la inclusión de España en el grupo de los países que han sido capaces de reunir las exigentes condiciones necesarias para acceder a la Unión Monetaria supone para nuestro país la llegada oportuna a una cita con el futuro, rompiendo así la tradición inveterada de sumarse casi siempre al progreso con cierto retraso o de una forma particular y diferenciada. La brillante ejecutoria presentada en esta ocasión por España, superior a la de varios de los grandes países del continente, suma al acierto de la oportunidad el prestigio añadido de haber demostrado un nivel de desarrollo y una capacidad notable para acometer empresas que requieran vitalidad, organización, disciplina y rigor. Por ello nuestra nación ha merecido el respeto de la comunidad internacional y se sitúa en el grupo de los mejores.

El momento histórico de la convergencia no puede ni debe ser considerado simplemente como el de consecución de una meta sino, sobre todo, como el de un buen comienzo para realizar una tarea: la de estabilizar y hacer habituales unos parámetros económicos que deberán consolidarse en el futuro. Esto quiere decir que lo más difícil está aún por hacer, y que en consecuencia no cabe la relajación. Más que una meta se ha alcanzado un buen punto de partida.

Quizá no se valore suficientemente la importancia que tiene el proyecto europeo para la estabilidad de nuestro país. Las veleidades y los bandazos en materia de política económica no serán ya posibles. Los objetivos son conocidos, y los métodos, para ser considerados adecuados, tendrán que ir dirigidos a su consecución. La experiencia adquirida y los éxitos conseguidos descalificarían procedimientos utópicos, revolucionarios u opuestos a aquéllos que dieran tan buenos resultados.

El año 1998 ha presenciado algunas batallas en el seno de la UE en las que España ha defendido tesoneramente sus intereses. Ya hemos visto su reacción ante la pretensión de algunos de los países "ricos" de renacionalizar la financiación. En el terreno agrícola, cuyo peso económico es cada vez menor pero que activa una especial sensibilidad en la población, se debatió el problema de las subvenciones al aceite de oliva, llegándose finalmente a una fórmula que, si bien no satisfacía plenamente el "desideratum" español, se aproximaba mucho más a éste que al planteamiento inicial del comisario europeo competente. En lo que se refiere a otro de los problemas con mayor repercusión en la opinión pública española, el de los ataques franceses a los camioneros españoles, las protestas de nuestro gobierno ante la UE y ante el gobierno francés hicieron que este año cambiara radicalmente la situación. En conjunto, aunque pudiera parecer que este tipo de conflictos presentan una cara de la UE poco favorable, no llegan a ocultar los grandes beneficios que ésta proporciona. Basta con recordar la situación en que se encontraban los olivares españoles antes de nuestra entrada en las Comunidades europeas o el progreso que han experimentado nuestras infraestructuras. Por ello, no es de extrañar que los españoles se cuenten entre los europeos más favorables a la introducción del euro como moneda única de la UE. Sin embargo, tendremos que irnos haciendo a la idea de que habrá que aceptar algún grado de cofinanciación nacional de las subvenciones agrícolas, ante las dificultades que existen para recaudar más del actual tope del 1,27 por ciento del PIB y como consecuencia del acceso de nuevos países a la Unión.

El interés estratégico que suscita el territorio español sigue vigente en la actual situación y ante las nuevas misiones de los ejércitos. Buena prueba de ello ha sido, durante 1998, la solicitud norteamericana de que se extienda al puerto de Tarragona la autorización de atraque de barcos con propulsión nuclear, petición ésta que ha sido bien acogida en principio por el gobierno español. También lo prueba el interés mostrado desde los EEUU por la potenciación de la base de Rota, cuya importancia se

extiende a la Alianza Atlántica, y que contrasta con la de Gibraltar, ya prácticamente vacío de contenido militar.

En política exterior resulta llamativo el prestigio adquirido por nuestros políticos, militares y diplomáticos, sin olvidar la creciente pujanza de nuestros hombres de empresa y nuestros científicos. En 1998 se ha seguido recurriendo a nombres españoles para tareas internacionales de alta responsabilidad. Los excelentes resultados del esfuerzo de convergencia han permitido la inclusión de un economista español dentro del reducido grupo de dirigentes del Banco Central Europeo. Todas las encuestas realizadas durante el año 1998 revelan la creciente percepción por los españoles de que el papel de España crece en la escena internacional.

La vitalidad que revelan tales encuestas se refleja en el grado de iniciativa que se observa en ese mismo escenario. En la pugna por preservar los intereses nacionales de España nuestros representantes propusieron una fórmula constructiva de carácter general buscando soluciones más justas en orden a la futura financiación de la UE, para lo cual se incluían elementos de progresividad. El rechazo expresado el 19 de noviembre por el Parlamento Europeo al intento alemán de que se retirasen los Fondos de Cohesión a los países que se integran en la Unión Monetaria refuerza considerablemente la tesis española. Ante la crisis financiera, nuestra nación reaccionó con prontitud proponiendo una respuesta global al Fondo Monetario Internacional, a la Unión Europea y a los Estados Unidos, y dio ejemplo de solidaridad aumentando su participación en el FMI en 3.000 millones de dólares para atender a las situaciones de emergencia. Mas en lo que España se ha mostrado especialmente beligerante y ha ejercido un verdadero papel de líder ha sido en el apoyo a las economías iberoamericanas. Para ello propuso a los Siete la creación de un fondo de apoyo a la estabilidad económica de aquellos países. En la cumbre de Pörschach España, además de proponer la celebración en Madrid, el año 1999, de una cumbre extraordinaria sobre el terrorismo y el crimen organizado, fue también promotora de la idea de ejercer la solidaridad con Iberoamérica para evitar que ésta se vea afectada por la crisis financiera internacional. La propuesta española, coronada por el éxito, dio pie a que quedase patente el interés de Europa por aquella región. Pero hay que destacar sobre todo el papel de España ante la Unión Europea como líder de la iniciativa de ayuda económica a los países centroamericanos afectados por el huracán "Mitch" y de la propuesta de condonación o alivio de su deuda externa. Estas intervenciones fueron avaladas moralmente por la decisión del gobierno español de contribuir con una aportación de 27.500 millones de pesetas que incluye la

condonación de 8.430 millones de la deuda hasta el año 2001. Esta medida sintoniza con la fulminante y generosa reacción del pueblo español, que una vez más ha dado muestras de su sensibilidad y de su profundo sentido de la solidaridad. Tan vigorosa proyección de energía, que ha incluido una interesante aportación militar y cuya expresión definitiva fue la presencia del Príncipe de Asturias acompañado por el Vicepresidente del Gobierno en la zona afectada por la catástrofe, es también una prueba de vitalidad y de sentido histórico del conjunto de los españoles.

Párrafo aparte merece la propuesta sobre Gibraltar, que da fe de la permanente voluntad española de resolver el contencioso con el Reino Unido. El anacronismo de la permanencia de una colonia en territorio español se hace aún más llamativo y sorprendente ante la proximidad del nuevo siglo y ante la condición de aliados de los dos países, España y Gran Bretaña. Llega incluso a extrañar que la situación de Gibraltar, y los lamentables episodios que acompañan a la historia de la colonia, como la artera apropiación del istmo, no provoquen un cierto sonrojo en la culta sociedad británica cuando estamos a punto de entrar en el siglo XXI y Europa se encamina hacia su unión política.

Frente a los conflictos surgidos en nuestro continente durante 1998 España ha demostrado buenos reflejos. Lo mismo ocurrió a comienzos del año durante la crisis del Golfo, ante la cual la actitud española resultó atinada. El éxito con que se saldó el episodio para el secretario general de las Naciones Unidas vino a dar la razón a la combinación aplicada por nuestro país de solidaridad con los aliados y fe en la posibilidad de una solución propiciada por aquel alto organismo internacional. En el conflicto de Kosovo, nuestra nación no dudó en favorecer el juego de la diplomacia y la fuerza: los aviones españoles tuvieron un importante papel en la demostración aérea "Determined Falcon" y en las maniobras realizadas por la OTAN durante el mes de agosto en Albania participó una compañía de Infantería de Marina. En el contingente internacional que vigilará el cumplimiento de las condiciones impuestas a Serbia habrá un grupo de observadores de nuestra nación. Ante la posibilidad de una intervención sobre territorio kosovar, España ofreció la participación de cuatro aviones F-18 y de un C-130. En cambio, no respondió afirmativamente a la petición de cascos azules que hicieron las Naciones Unidas para el Líbano. Esta decisión, aparentemente contradictoria con el interés mostrado por el Presidente del Gobierno hacia los problemas de aquella zona en su visita a Israel, se justifica por la coincidencia de la petición con la crisis de Kosovo, que podría acabar exigiendo el envío de fuerzas terrestres.

Por lo que a Bosnia se refiere, el consejo de ministros español prorrogó en junio por otros doce meses la participación española en SFOR, que sigue alcanzando altas cotas de eficacia militar y también de rendimiento para nuestra acción exterior.

El ofrecimiento hecho por España en el Cuestionario para el Planeamiento de la Defensa (DPQ) de la OTAN, en el sentido de liderar una División Multinacional a la que aportaría una Brigada, se mantiene en espera de que la Organización Atlántica aborde la reestructuración de sus Fuerzas una vez concluida la de sus Cuarteles Generales. La OTAN tomó nota de este ofrecimiento y lo considerará a la hora de diseñar esas nuevas Fuerzas.

La anunciada entrada de España en la NAEW (Fuerza de alerta temprana a bordo de aeronaves) se produjo a final de año por acuerdo del consejo de ministros español. Nuestro país ya ha contribuido durante 1998 a los gastos de operaciones, mantenimiento y modernización de aquella Fuerza y su presencia se concreta con la aportación de unos 50 oficiales y suboficiales. Es de suponer que esta contribución a la NAEW propicie la previsión de órbitas sobre nuestro territorio en caso de crisis en el norte de África, lo que constituiría un interesante factor de disuasión y apoyo.

Durante el año 1998 han proseguido los trabajos para constituir el Mando Subregional Suroeste en Retamares (Madrid). Las dificultades surgidas para la financiación de la infraestructura, por las repercusiones de la falta de acuerdo entre griegos y turcos sobre el paquete de capacidad correspondiente a la estructura de mando de la Región Sur, han sido superadas por la decidida voluntad española de impulsar este programa, estándose ya en condiciones de cumplir los plazos previstos. Ya se cuenta con el borrador de los términos de referencia, y en noviembre fue designado el Teniente General español que desempeñará la Jefatura. La fuerte demanda internacional por enviar personal al Cuartel General refleja el interés que conceden nuestros aliados a este Mando.

Durante el año 1998 también se lograron considerables avances en la puesta a punto de la Fuerza de Maniobra. El esfuerzo de reorganización del Ejército, que no ha experimentado descanso desde el comienzo de los años ochenta, no sólo ha permitido recuperar algunos retrasos sino que en algunos aspectos ha impulsado a España hacia posiciones bastante avanzadas; todo un logro, teniendo en cuenta las muchas dificultades generadas por las limitaciones presupuestarias con que vienen desenvolviéndose las Fuerzas Armadas en los últimos años. Una de las tareas realizadas por

éstas durante 1998 ha consistido en la definición y negociación de los puestos que corresponden a mandos españoles en los cuarteles generales de la OTAN. Algunas de las últimas disposiciones legales facilitarán esta operación gracias a la flexibilidad que proporcionan y a la clarificación que aportan en cuanto a equiparación internacional.

Finalizado el año, sigue abierta la posibilidad de que se dote de cierta capacidad CJTF al Mando Subregional con sede en España. Esta posibilidad se basa en la conveniencia de equilibrar las capacidades de respuesta en la Región Sur, en cuya parte occidental se aprecia una menor densidad de mandos.

El acuerdo hispano-italiano para organizar una fuerza anfibia multinacional entre los dos países se ha materializado ya con la activación que tuvo lugar en Barcelona el día 23 de noviembre. A la especial preocupación por el Mediterráneo mostrada insistentemente por España, Francia e Italia, origen de varias unidades y diversas iniciativas (y a la que se sumara ya Portugal, presente en EUROFOR) se une ahora el interés que se percibe por parte alemana.

De los ejercicios en los que España ha participado durante 1998 destacaremos el denominado "Strong Resolve", por haberse realizado en nuestro país, por su entidad (ha sido el mayor ejercicio realizado hasta ahora por la Alianza), por su importancia para la validación del concepto CJTF y por confirmar una vez más la capacidad de España para el apoyo como nación anfitriona (Host Nation Support).

El Ministro de Defensa decidió este año integrar la enseñanza militar superior, que se desarrollará en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Los próximos cursos se celebrarán ya según la nueva fórmula. Este cambio radical debe imprimir un impulso considerable a la acción conjunta de las Fuerzas Armadas.

La catástrofe producida por el huracán "Mitch" en los países centroamericanos aconsejó el aplazamiento de los Coloquios Iberoamericanos que se iban a celebrar durante el mes de noviembre en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en Madrid. Esta iniciativa española, acariciada desde hace tiempo por aquel Centro, había quedado ya registrada en la última cumbre iberoamericana. Su institucionalización tiene un gran potencial de futuro como foro de intercambio y convergencia del pensamiento militar y estratégico dentro de nuestro ámbito cultural, y presenta un especial interés por la influencia que debe tener este pensamiento

como factor de cambio en la positiva evolución actual de los países americanos que comparten nuestra cultura, así como por la posibilidad que ofrece a España y Portugal de trasladar al marco iberoamericano muchos de los conceptos, ideas y experiencias adquiridos en el ámbito de la Alianza Atlántica, cuyo Colegio de Defensa mantiene ya desde hace tiempo reuniones de este tipo a las que asisten prácticamente todos los países europeos.

En el proceso de profesionalización y modernización de las Fuerzas Armadas españolas, el paso más importante dado en 1998 ha sido la remisión al Congreso de la Ley del Reglamento de Personal. Esta ley establece la base para unas Fuerzas Armadas dotadas de personal de tropa totalmente profesional. Fija el final del plazo para alcanzar el cien por cien de la profesionalización de la tropa en el 31 de diciembre del 2002, o antes si fuera posible. Esta última observación abre el camino a la tentación de adelantar la fecha a costa de una nueva reducción, en contradicción con las evaluaciones hechas por los cuarteles generales, que ya vieron reducido el objetivo de fuerza de 180.000 por ellos propuesto con carácter de mínimo, a un total de 170.000. Sólo con una modernización adecuada puede llegar a pensarse en alguna reducción razonable a partir de un modelo ya muy refinado que ha exigido enormes esfuerzos de planeamiento y de adaptación y que responde a un concepto estratégico totalmente puesto al día y coherente con nuestros compromisos internacionales.

El presupuesto de Defensa para el año 1999 reconoce la necesidad de apoyar el esfuerzo de profesionalización. A ello va destinado el incremento experimentado, que se evalúa en un 3,5 por ciento, por lo que se produce un aumento de las previsiones de gasto en el capítulo de personal de un 6 por ciento respecto a 1998. El nulo aumento del capítulo de inversiones resulta francamente preocupante, aunque se palia con la financiación por el Ministerio de Industria de los tres grandes programas (Leopard, Eurofighter y fragatas) que luego compensará en varios plazos anuales el Ministerio de Defensa. Esta fórmula, que acude en auxilio de la industria de defensa española, parte de la cual se encontraba en situación muy precaria, permite también un cierto avance en la modernización, sin la cual el esfuerzo emprendido de profesionalización carecería de sentido. Por el momento, la cifra defendida por el Ministro de Defensa español para que se produzca la armonía entre ambos esfuerzos, y que se sitúa en un razonable 1,3 por ciento del PIB, sólo constituye un objetivo que aparece todavía en una perspectiva bastante lejana.

CAPÍTULO TERCERO

EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

Por RICARDO ÁLVAREZ-MALDONADO MUELA

INTRODUCCIÓN. MARCO DEL ESTUDIO

Por las razones aducidas en el "Panorama Estratégico 1997-1998" vamos a considerar ubicadas en Europa Central a Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Rumania y en Europa del Este a todas las ex-repúblicas europeas de la disuelta Unión Soviética, entre ellas, naturalmente, a Rusia.

Por su importancia geopolítica nos vemos obligados a dedicar la mayor parte de este trabajo a la Federación Rusa ya que su actual inestabilidad interna es un factor de riesgo de alcance mundial, cuya magnitud impone un análisis en profundidad de su situación en 1998. Y como no es posible disociar la Rusia Europea del resto de la Federación Rusa, hemos de considerar a este inmenso país en su conjunto, pese a la extensión de su componente asiático.

EUROPA CENTRAL

Como dijimos, incluimos en esta región a los cuatro países de Vise-grado: Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia y, además, a Eslovenia y a Rumania pese a su carácter geográfico predominante balcánico.

Este mosaico de Estados de población heterogénea está enmarcado dentro de fronteras artificiales que encierran dentro minorías de naciones

vecinas, lo que es motivo de agravios históricos, algunos todavía no cicatrizados.

La desorientación que produjo los sorprendentes cambios que se sucedieron a partir de 1990 hizo que todos estos países precesionaran en distintas direcciones, hasta que finalmente decidieron encaminar su futuro hacia Occidente. El regreso a Europa, de la que se sentían parte substancial y de la que solo los avatares de la Historia reciente había separado, fue la consigna lanzada por sus dirigentes políticos. El radical cambio de la situación propiciaba el reencuentro de las Europas separadas y, como corolario, la ampliación hacia el este del espacio geopolítico europeo.

Todos estos países materializaron a Europa en sus dos instituciones más consolidadas: la Unión Europea y la Alianza Atlántica, con su pilar europeo y respaldo norteamericano.

En la primera, buscan solución a sus problemas económicos y en la segunda, sólidas garantías a su seguridad, aparte de las ventajas políticas que reporta la pertenencia a ambas organizaciones.

En política exterior estos son los primeros objetivos que persiguen todos ellos y a su logro han antepuesto sus reivindicaciones históricas.

El condicionante de “buenas relaciones de vecindad”, exigido para ingresar tanto en la OTAN como en la UE, ha propiciado la firma de una serie de tratados y acuerdos bilaterales entre naciones colindantes con los que se pretende saldar los litigios de fronteras y de minorías pendientes.

Pese a ello, los problemas no están todavía resueltos ni en Transilvania donde hay 1.7 millones de habitantes de origen húngaro ni en Eslovaquia donde viven 600.000. En Eslovaquia no se han promulgado todavía las leyes de protección a la minoría magiar que prescribe el Tratado suscrito con Hungría. En Transilvania, húngaros y rumanos se miran con recelo, están a la defensiva y tienen un punto sensible de enfrentamiento en la ciudad de Cleij, cuya Universidad en lengua magiar permanece cerrada para evitar conflictos.

Mientras a nivel oficial las relaciones entre Bucarest y Budapest son “mejores que nunca”, y se ha decidido la construcción de una autopista entre ambas ciudades, a nivel popular la situación sigue siendo tensa, alegando los nacionalistas rumanos que el Gobierno está fomentando la “magiarización” de Transilvania por permitir cárteles bilingües.

Todas las naciones de Europa Central son actualmente democracias parlamentarias con numerosos partidos que abarcan todo el espectro político, lo que obliga, generalmente, a gobernar en coalición. En casi todos ellos subsisten partidos comunistas de ideología atemperada y dirigentes políticos procedentes del antiguo régimen.

En Eslovaquia es donde la implantación de una verdadera democracia está ofreciendo mayor resistencia. En mayo de 1998, el Primer Ministro Vladimir Meciar anuló el referendun convocado para elegir Presidente de la República y asumió la Jefatura del Estado. Meciar es un ex-comunista reconvertido al nacionalismo radical. Eslovaquia continua en entredicho tanto en la UE como en la OTAN por no reconocer determinados derechos a la oposición y demorar, como dijimos, la aplicación de las leyes de respeto a las minorías. En septiembre de 1998 se han celebrado elecciones legislativas en las que el frente opositor a Meciar resultó vencedor, lo que podría significar un cambio de política más aceptable para Occidente.

Aparte de los indicados, son dignos de destacar los siguientes acontecimientos de carácter político:

En marzo de 1998 se produjo en Rumania una crisis de Gobierno que tardó tres meses en resolverse, con repercusiones negativas en la economía y proyectando al exterior una imagen de inestabilidad contraproducente.

En la República Checa, en noviembre de 1997 tuvo que dimitir el Primer Ministro por un escándalo de financiación ilegal.

En Polonia, se aprobó una Constitución, la primera de la etapa democrática, que tiene en cuenta el peso e influencia de la Iglesia Católica en el país. Pese a ello, esta no ha quedado satisfecha por su ambigüedad respecto al aborto. El clero polaco no parece encontrarse a gusto en un régimen democrático aconfesional. Hay que considerar la actuación entre bastidores del papa polaco Juan Pablo II, que tanto influyó en el acercamiento de Polonia a Occidente y sirvió de palanca para derribar el régimen comunista.

En Eslovenia, tras la elección del Presidente Milan Lucan en noviembre de 1997, la democracia sigue consolidándose, pero sin una base económica sólida, la estabilidad política que confiere un régimen democrático es difícil de mantener.

A excepción del de Polonia, en el período 1985-95, el PIB de todos estos países descendió ininterrumpidamente. La recuperación se inició seis años después de haber comenzado el proceso de transformación de una economía estatal dirigida a otra de libre mercado. El coste de este proceso ha recaído principalmente en obreros y funcionarios que, defraudados, añoran, en parte, el régimen anterior. Los préstamos del FMI y del Banco Mundial concedidos a algunos de estos países han impuesto en ellos una disciplina económica que soporta con estoicismo una población empobrecida, aunque algo aliviada por una economía sumergida.

Las naciones de economía más floreciente son Eslovenia, cuya renta per cápita en 1997 era ligeramente inferior a la de Grecia, y la República Checa. Aunque esta última en 1998 ha pasado por una fase de estancamiento.

Las de economía más débil son Rumania y Eslovaquia. Menos estas dos últimas, todas las demás superaban en 1997 en renta per cápita a Rusia. Pese a la debilidad de su economía, Eslovaquia ha demostrado que el nuevo estado separado de la República Checa es económicamente viable.

El principal proveedor y cliente de Europa Central es la UE y, de los estados que integran esta última, la República Federal Alemana. Rusia es su primer proveedor de recursos energéticos.

La República Checa desde 1995 y Polonia y Hungría desde 1996 pertenecen a la OCDE, lo que se interpreta como reconocimiento a su buena marcha económica. Sin embargo, la crisis rusa del verano de 1998 podría ralentizarla.

Menos en Hungría, el tanto por ciento del PIB destinado a la defensa superó el 2 por ciento, porcentaje que va a tener que aumentar para actualizar el material, en su mayoría de origen soviético, y compatibilizarlo, los que ingresen en la OTAN, con el de sus futuros aliados.

El ingreso en ella, del que son fervientes partidarios casi todos sus dirigentes políticos, no suscita en algunas naciones de Europa Central, principalmente en la República Checa, gran entusiasmo popular, según han puesto de manifiesto referendos y encuestas. Sí es mucho mayor el que promueve la adhesión a la UE, a cuyo Consejo de Ministros pueden asistir desde 1994, con voz pero sin voto, sus representantes.

El futuro ingreso de todos estos países, tanto en la OTAN como en la UE, será objeto de análisis posterior detallado.

LOS PAÍSES BÁLTICOS

En 1998 todavía quedaban pendientes de resolver los problemas de frontera que Estonia y Lituania tienen con Rusia, así como los de las minorías de origen ruso que habitan en estos países.

En Letonia, la nacionalización de la minoría rusa (que ya no posee pasaporte soviético) ha creado serios problemas ya que, para obtener la ciudadanía letona, la Ley exigía un gran dominio del letón, lo que impedía a 700.000 habitantes del país (un 28 por ciento de la población) de origen ruso acceder a ella. El referéndum celebrado en octubre de 1998 a favor de la integración de la minoría rusa constituye un paso hacia la solución de este problema.

A partir de 1996 se inició la recuperación económica de los tres países, particularmente de Estonia, de cuya evolución el FMI quedó muy satisfecho por el aumento de su PIB con un crecimiento de más del 3 por ciento y por la disminución de la inflación. Estos resultados hicieron que Estonia fuera incluida en el grupo de los seis primeros países que iniciaron conversaciones con la UE para su ingreso en ella.

Los principales clientes y proveedores de Estonia son la UE y Finlandia. En las otras dos Repúblicas bálticas, la UE, principalmente Alemania. En las tres, Rusia ya figura en tercer lugar y con mucho menor volumen.

Las tres Repúblicas han rechazado un modelo de seguridad presentado por Rusia a cambio de su renuncia a ingresar en la OTAN. Esta, aunque alega que para aceptar su adhesión tienen previamente que resolver definitivamente los problemas de rectificación de fronteras y de minorías rusas que tienen pendientes, en el fondo vacila en la conveniencia de llevar a cabo la ampliación hasta el seno del Golfo de Finlandia.

El 16 de febrero de 1998 los tres Presidentes de las Repúblicas bálticas firmaron en Washington una "Carta de Asociación" con los EEUU. Aunque este documento no contiene garantías militares explícitas, su texto incluye el respaldo a la aspiración de estos tres estados a ingresar en la OTAN y en él se establece la constitución de un "Consejo de Defensa", aparte de otros de carácter político y económico.

Como actualmente solo dos países de los dieciséis aliados han apoyado la candidatura de estos tres países, la "Carta de Asociación" no es más que un sustitutivo a su incorporación, por mucho que se comprenda

“la inquietud de estos países respecto a Rusia y su legítimo deseo a integrarse en las instituciones occidentales”.

LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI)

De los doce estados que integran la CEI, solamente cuatro se encuentran en la Europa del Este: Ucrania, Bielorrusia (Belarus), Moldavia y Rusia, aunque esta última con tres cuartas partes de su territorio en Asia.

Los tres eslavos, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, comparten etnia, cultura e historia, lo que hace que sus pueblos sean más proclives que los del resto de la CEI a un proyecto común de futuro. Inclination muy acusada entre Bielorrusia y Rusia.

Ucrania se encuentra dividida entre rusos y rusofilos por un lado y ucranianos occidentales nacionalistas por otro. En Ucrania, la querencia hacia el hermano mayor ruso contrarresta la atracción hacia occidente y el equilibrio mantenido entre ambas previene el desgarramiento.

Rusia, el hermano mayor, esgrime astutamente el señuelo energético para atraer hacia sí a los dos más pequeños.

Moldavia, ex-rumana y con población mayoritaria de esta etnia, vacila en volver al seno de la madre patria, a lo que se oponen frontalmente los rusofilos y ucranianos del Transdniester.

De los cinco países de Asia Central, antiguo Turquestan Ruso y de las tres Repúblicas Transcaucásicas, trataremos más adelante al analizar la política exterior de la Federación Rusa.

En la CEI, fuera de Rusia, hay unos veinticinco millones de rusos: los llamados “pies rojos”. En la CEI, la cultura y el idioma rusos son preponderantes. Ultimamente se manifiestan migraciones de rusos hacia Rusia, principalmente desde Asia Central.

La situación económica sigue siendo tan critica en la CEI como en Rusia. Esta intenta, con éxito desigual, mantener su influencia. Sobre los objetivos de Rusia, en lo que denomina “el extranjero cercano”, nos extenderemos mas adelante.

Ucrania

Este país, el de mayor extensión y población de la CEI después de Rusia y Kazajstan, ha conseguido arreglar sus diferencias con aquella,

entre ellas, el espinoso asunto de la soberanía de Crimea, así como concertar favorables acuerdos económicos.

Desde que consiguió la independencia, el PIB de Ucrania ha decrecido a un promedio del 10 por ciento anual. Su renta per cápita es muy inferior a la de Rusia, aunque el Banco Mundial estima que un tanto por ciento muy elevado de su PIB real no se contabiliza en las estadísticas.

La existencia de una economía sumergida y la permanencia en las empresas estatales de personal innecesario que percibe su salario explica, en cierta medida, la ausencia de graves tensiones sociales, aunque se suceden las huelgas de los mineros del Donbass, a los que el Gobierno suele tardar en pagar.

En 1996, Ucrania parecía seguir una política acorde con las recomendaciones del FMI pero, poco a poco, el entonces Primer Ministro Pavel Lazarenko, que tuvo que dimitir en julio de 1997, se fue acomodando a medidas graduales menos drásticas y frenó la política de privatizaciones.

La influencia económica rusa se manifiesta en Ucrania principalmente por las actividades en ella de la poderosa compañía rusa "Gazprom", que controla nada menos que el 25 por ciento de la producción mundial de gas, que exporta a Ucrania y cuenta allí con el apoyo gubernamental. Por Ucrania pasan además muchos de los oleoductos y gaseoductos que suministran energía a Europa Central.

El régimen político ucraniano es marcadamente presidencialista. El Presidente de la República, Leonid Kuchma, ha ido fortaleciendo su poder, llegando a situar a los Ministros de Exteriores, Defensa, Interior e Información bajo control personal.

En las elecciones legislativas celebradas en mayo de 1998, el Partido Comunista fue la formación política más votada, de forma que la actual Cámara de Diputados es de tendencia mucho más izquierdista que la anterior.

En general, los ucranianos opinan que las reformas impuestas por el FMI podrían sacar de apuros al país a largo plazo, pero que a corto sólo producen estrecheces y sufrimientos a los más necesitados. De ahí el resultado de las últimas elecciones.

1997 fue un año particularmente difícil para la economía de Ucrania y los resultados de 1998 pudieran ser peores. En septiembre de 1998, el FMI concedió a Ucrania un crédito de 2.000 M\$ para que pudiera eludir los problemas financieros con los que se enfrentó Rusia el mes anterior.

Últimamente, el Gobierno Ucraniano ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo programa para sanear su depauperada económica. Como en otras ocasiones, su plena aplicación dependerá de cómo encaje el pueblo su coste social.

Bielorrusia

El hombre fuerte de Bielorrusia es Alexander Lukashenko, Presidente electo desde 1994. Dos años más tarde, Lukashenko, mediante referéndum que la oposición tildó de antidemocrático, consiguió modificar la Constitución, lo que le confirió mayores poderes y prolongó su mandato hasta el 2001. “El Soviet Supremo” fue sustituido por la “Cámara de Representantes”, cuyos escaños fueron ocupados, en gran parte, por los diputados que no se habían opuesto a los designios del Presidente. Este, de talante autoritario, no ha vacilado en emplear expeditivamente a la policía para reprimir manifestaciones contrarias al Gobierno.

Lukashenko aspira a reunificar Bielorrusia y Rusia. El primer paso fue la creación de la llamada “Unión de Repúblicas Soberanas de Rusia y Bielorrusia”. Los siguientes fueron acuerdos bilaterales que estrecharon más los lazos existentes entre ambos estados de la CEI.

Lukashenko está al frente de la Comisión de Cooperación Económica que agrupa a Bielorrusia, Rusia, Kazajstán y Kirguizistan desde marzo de 1996.

De todos los países de la CEI, Bielorrusia es el único país que ha experimentado un ligero aumento del PIB los dos últimos años. Su tasa de desempleo es también la más baja y su renta per cápita en 1977 del orden de la de Rusia, lo que significó que estuviera por encima de la de todos los países de la CEI. Siendo Rusia el primer proveedor y principal cliente de Bielorrusia, la crisis rusa del verano de 1998 ha tenido que tener consecuencias negativas, todavía no evaluadas, en su economía.

A la “Carta de Asociación” firmada en Washington entre los EE UU y las tres Repúblicas Bálticas ex-Soviéticas respondieron Boris Yeltsin y Alexander Lukashenko, acordando en Moscú los principios de una política militar común y la organización de la defensa ruso-bielorrusa ante la posibilidad de una agresión exterior. Bielorrusia es el país de la CEI más próximo al enclave ruso de Kaliningrado, donde Rusia mantiene su presencia militar.

Moldavia

En diciembre de 1996, en las elecciones presidenciales, el candidato de tendencia prooccidental fue derrotado por el actual Presidente de la República Petru Lucinski, un reputado rusófono.

Resuelto el problema de la República secesionista del Transdniester, las relaciones entre el Transniester y el resto del país han quedado normalizadas, dejando a Moldavia configurada dentro de sus fronteras de 1990.

En lo económico, las esperanzas de una recuperación se han desvanecido: el PIB ha decrecido, el nivel de vida disminuido y el paro aumentado.

Dada la dependencia de Moldavia de Rusia y la rusofilia de la clase dirigente, solo la improbable defección de Ucrania de la CEI y su acercamiento a Occidente podría arrastrar a Moldavia en esta dirección.

Por otra parte, en las elecciones legislativas celebradas en marzo de 1998, la candidatura más votada fue la comunista, seguida de la Convención Demócrata, que aboga por un estado independiente y soberano pro-ruso.

LA FEDERACIÓN RUSA

Composición y organización política

Aunque se llame "federación", el estado ruso regido por la Constitución de 1993 no es propiamente un conjunto político federal, porque los 89 entes autonómicos que lo forman (repúblicas, territorios, regiones y distritos) no tienen idénticas competencias, siendo además de muy variada extensión, riqueza y población.

En cuanto a población, se compone de un 80 por ciento de habitantes de etnia rusa y de un 20 por ciento de origen diverso. El saldo demográfico neto de la primera es negativo, pese al retorno a la Federación Rusa de muchos rusos procedentes de otros estados integrados antaño en la Unión Soviética.

Las diferencias de riqueza entre los distintos entes federados son abismales. La república más pobre, la de Dagestan, tiene un PIB cuyo valor es la séptima parte del de la región petrolífera de Tiemen. Muchos de los entes ricos por sus materias primas se muestran reacios a ayudar a los desposeídos de ellas.

Las regiones menos accesibles, por las deficiencias de la red viaria, se encuentran cada vez más marginadas, lo que se acusa particularmente en el Extremo Oriente, donde el empobrecimiento se debe en gran medida a su aislamiento. El poder central, muy debilitado desde la desmembración de la URSS, se muestra incapaz de corregir los desequilibrios regionales.

El mal ejemplo que dio la disolución de la URSS ha acentuado las tendencias centrífugas que se acusan en la Federación Rusa desde su creación. Y, como reacción, actualmente se está manifestando otra centralista.

A los poderes autonómicos se les ha otorgado distintas competencias fiscales. De los 89 entes autonómicos, una veintena tienen diferentes conciertos económicos con Moscú, lo que les permite retener impuestos e imponer tributos, les confiere mayor poder político y crea dificultades a la recaudación federal.

Tras la crisis económica de agosto de 1998, a la que siguió el cambio de Gobierno que llevó al poder como Primer Ministro a Yevgueni Primakov, este denunció el "separatismo económico" de los Gobernadores regionales que habían adoptado medidas no ajustadas a las leyes federales, entre ellas, la negativa a pagar los impuestos debidos al Gobierno Central. Primakov ha llegado a recabar de la Duma la promulgación de una ley que permita destituir a los cargos políticos regionales que no cumplan la legislación federal. La réplica de muchos gobernadores fue que, en vez de amenazar con medidas coactivas, lo que el Gobierno Federal tenía que hacer era tomar disposiciones coherentes para solucionar la crisis y evitar que los impuestos fueran dilapidados por funcionarios corruptos de Moscú y que, como no lo estaba llevando a cabo, ellos tenían el deber de salvaguardar la supervivencia de sus conciudadanos.

A diferencia de la Constitución Soviética, la rusa de 1993 no concede a los entes autonómicos el derecho a la autodeterminación y, por consiguiente, a la secesión. De ahí la importancia que, como precedente, tiene la solución definitiva del conflicto de Chechenia donde, desde mucho tiempo atrás, existe un inextinguible sentimiento independentista. Dicha solución, como es sabido, ha quedado aplazada hasta el año 2001.

El actual Presidente electo de Chechenia, Asian Masjadov, que como representante del ejército rebelde checheno firmó el armisticio de 1996, se muestra cada vez más conciliador, pero es presionado por el jefe guerrillero Shamil Bassev. Sin embargo, todos los políticos responsables chechenos están condicionados por la ineludible necesidad de reconstruir

su arruinado país y para ello, actualmente, la única tabla de salvación que tienen a mano es la explotación del oleoducto que lleva el petróleo del Caspio al Mar Negro a través de Chechenia, negocio en que, junto a las compañías petroleras rusas, participa la chechena "Yunko".

Moscú confía en que la presión económica que puede ejercer haga desistir a los gobernantes chechenos de obtener la independencia y se conformen con una amplia autonomía que quepa dentro del marco constitucional de la Federación Rusa. Mientras tanto, se ha establecido un cinturón de seguridad en la frontera para que las partidas de guerrilleros no operen ni contaminen la región del norte del Cáucaso, especialmente en Dagestan, donde existe una minoría chechena. Dentro de Chechenia, la situación la perturba la existencia de grupos radicales islámicos que en julio de 1998 atentaron contra el Presidente Masjakov que, milagrosamente, resultó ileso.

En noviembre de 1998 ha surgido una nueva amenaza de separatismo en la República de Kalmakia, cuyo Presidente Kirsan Iliumjinov se mostró partidario de una separación "parcial" de la Federación Rusa, convirtiendo a Kalmakia en "miembro asociado". Iliumjinov alega que "de facto" Kalmakia ya ha sido excluida de la Federación Rusa, ya que no ha recibido consignaciones del presupuesto federal desde hace muchos meses.

El llamado "separatismo económico" de las regiones más prósperas de la Federación es uno de los principales problemas con que tiene que enfrentarse Primakov.

Situación Interna

La situación política, económica y social de la Federación Rusa en el año 1998 no ha mejorado. Al contrario, las esperanzas de una "moderada" recuperación económica se han desvanecido. Aparte de a causas internas, ello ha sido debido, principalmente, a dos factores externos: la hecatombe financiera asiática y la caída del precio de los hidrocarburos. A finales de 1997, el FMI vaticinaba el inicio de la recuperación económica rusa. Este pronóstico ha resultado estar totalmente equivocado.

Se puede decir que el año político se inició en Rusia el 19 de enero de 1998 con la vuelta de Boris Yeltsin a su despacho del Kremlin, tras haber permanecido durante cuarenta días apartado de la Presidencia, una vez más, por motivos de salud. Como en ocasiones anteriores, el Presidente

de la Federación Rusa no resignó sus poderes tal como dispone la Constitución, sino que se llevó consigo el maletín con las claves del “gatillo nuclear”.

Su vuelta a la arena política se estrenó con una dura recriminación a su Primer Ministro Viktor Chernomirdin por no haber cumplido su Gobierno la promesa hecha a funcionarios del Estado, miembros de las FAS y jubilados de recibir sueldos y pensiones atrasados antes del 31 de diciembre de 1997.

La tensión entre Yelsin y Chernomirdin que, además de Primer Ministro, era jefe del partido gubernamental “Nuestra Casa es Rusia” y candidato a la Presidencia en las próximas elecciones, tuvo como colofón la destitución de este y con él la de todo el Gobierno y la sorprendente designación para sustituirle de Serguei Kiriyenko, joven tecnócrata de 35 años aupado hacía poco al cargo de Ministro de Energía y Combustible.

Pese a la postura de la Duma (dominada por los comunistas de Guenadi Ziuganov y los ultranacionalistas del atrabiliario Vladimir Zirinovsky), contraria a la ratificación del nombramiento de Kiriyenko, al final acabó cediendo. Con ello, la Duma siguió su línea de conducta habitual, no llegando a hacerse el “harakiri” por temor al resultado de unas elecciones legislativas anticipadas y perder sus miembros actuales los privilegios de que gozan.

Según las declaraciones de Yeltsin, los motivos de la destitución de Chernomirdin eran el malestar del pueblo por no mejorar su situación y la falta de dinamismo del Gobierno en llevar a cabo el plan de reformas trazado por Chubais: estricto control financiero, reestructuración industrial, principalmente de los monopolios de gas y de petróleo, pago de deudas fiscales, nueva legislación impositiva y un presupuesto equilibrado.

La interpretación que se dio a esta crisis de Gobierno era que Chernomirdin, quizás por su elevado coste social, no se había atrevido a llevar a cabo el reformismo radical con terapia de choque que la situación requería.

Kiriyenko formó Gobierno en abril de 1998, manteniendo en el Gabinete, entre otros, al Ministro de Defensa General Sergenev y al de Asuntos Exteriores Primakov, lo que era síntoma de continuidad en la política exterior y de defensa.

El acceso de Kiriyenko al poder, como adalid de la reforma, fue bien acogido por el FMI, que mantenía bloqueado un tramo de 670 M\$ de un

total de 10.000 M\$ prestados a Rusia para el período 1996-98. El FMI se escudaba precisamente en el fracaso de la política fiscal del ejecutivo ruso para congelar el préstamo, pero ante el prometido cambio abrió la mano. Pero ello solo significó un leve respiro. Rusia necesitaba mucho más. De ahí la negociación de un nuevo e importante crédito.

La concesión de este por parte del FMI y del Banco Mundial, que alcanzó el elevado monto de 22.600 M\$ en julio de 1998 y que se preveía desembolsar en los próximos dieciocho meses, estaba condicionada a la puesta en marcha de un paquete de reformas que la Duma no se avino a aprobar.

En agosto de 1998 la tormenta económica arreció aún más: los bancos en Rusia prestaban su dinero al 50 por ciento; la mayor parte de los trabajadores y funcionarios del Estado no cobraban sus salarios desde hacía más de seis meses; el rublo, pese a estar amparado por una paridad controlada, valía la mitad que en 1996 y la vigésima parte que en 1992; la inflación acumulada desde enero de 1998 alcanzaba ya el 35 por ciento y, pese a lo gastado por el Banco Central Ruso en sostener su moneda, tuvo "de facto" que devaluar el rublo al ampliar en más de un 30 por ciento su banda de fluctuación.

Los 4.800 M\$ del primer tramo del crédito de 22.600 de FMI y del Banco Mundial, entregados por estas entidades financieras para rescatar a Rusia del marasmo económico, se evaporaron en el inútil empeño del Banco Emisor Ruso de sostener su moneda.

El 24 de agosto de 1998 Boris Yeltsin destituyó a Serguei Kiriyenko, que había luchado por acometer las reformas que su antecesor Chernomirdin no hizo más que demorar. Paradójicamente este último fue encargado por Yeltsin de formar gobierno.

La actuación de Yeltsin en esta crisis, pese a ser hombre de temperamento imprevisible, ha sorprendido a los más expertos analistas, que no podían prever un giro tan pronunciado respecto a la motivación que le indujo a sustituir a Chernomirdin por Kiriyenko cinco meses antes.

Se sospecha la intervención soterrada de la nueva oligarquía capitalista rusa en la provocación de esta crisis, en la que destaca el primer magnate de las finanzas rusas y de los medios de comunicación social del país: Boris Berezovski.

Chernomirdin, una vez encargado de formar Gobierno, negoció con la Duma un plan anticrisis que consideraba la nacionalización de la banca y

de las empresas estratégicas, la protección estatal de los monopolios de materias primas y otras medidas estabilizadoras que representaban un cambio radical a la orientación de la política económica seguida por el Gobierno anterior. Pretender que con dicho plan el FMI autorizaría la segunda entrega del crédito otorgado en julio de 1998 a Rusia era intentar la cuadratura del círculo.

Chubais, negociador del crédito indicado concedido por el FMI, fue destituido de su cargo, pese al indiscutible éxito de su gestión.

Aparte del mencionado plan anticrisis, también se negoció con las dos Cámaras del Parlamento un pacto de carácter político cuya finalidad era otorgar a estas un mayor control del ejecutivo y limitar los poderes que la Constitución de 1993 otorga al Presidente de la Federación Rusa; entre ellos se encuentran la potestad de encargar y aprobar la formación del Gobierno, la de destituir a los ministros, la facultad de disolver la Duma si en tercera votación se niega a ratificar el nombramiento de un Primer Ministro propuesto por el Presidente y la de intervenir en la gestión de la política económica.

Pese a todas estas concesiones en pro del protagonismo político de la Duma, sus diputados comunistas, ultranacionalistas y reformistas rechazaron por mayoría, el 30 de agosto, la ratificación de Chernomirdin como Jefe del Gobierno. La persistencia de Yeltsin en mantener a Chernomirdin como su candidato dio lugar a una nueva negativa de la Duma siete días más tarde.

El temor a un tercer fracaso, lo que hubiera acarreado la disolución de esta, con el consiguiente vacío de poder en unas circunstancias económicas y sociales muy difíciles, obligó a buscar una solución de compromiso.

La solución se llamó Yevgueni Primakov, Ministro de Asuntos Exteriores desde 1996, de 70 años de edad, hombre del antiguo Partido Comunista Soviético y miembro del Politburó en tiempos de Mijail Gorbachov, que fue quien le promocionó en su carrera política dentro del Partido. Primakov es, sobre todo, un buen diplomático, hábil negociador y capaz de desenvolverse en las situaciones más difíciles.

La claudicación de Yeltsin, por primera vez, ante la Duma ha supuesto para el omnipotente Presidente un doloroso revés. Su pérdida de poder ha quedado en evidencia.

La aceptación, el 12 de septiembre de 1998, de la candidatura de Primakov obedeció a la necesidad de arbitrar una solución puente para llenar

el vacío de poder producido tras la destitución de Kiriyenko el 23 de agosto anterior.

Pese a la mayoría obtenida por Primakov en la Duma (317 diputados de los 450), le ha sido difícil formar un Gobierno conjuntado. El 26 de septiembre se produjo la dimisión del recién nombrado Vicepresidente Alexander Shojin, del partido "Nuestra Casa es Rusia". Los comunistas también se mostraron reticentes a ofrecer a Primakov un apoyo incondicional.

La política seguida hasta ahora por Primakov puede tildarse de equívoca: hacia el exterior hace promesas reformistas, pero hacia el interior, forzado a afrontar la realidad social y económica, ha tenido que autorizar la emisión de papel moneda sin cobertura, para pagar salarios atrasados, desbloquear cuentas bancarias y volver a subvencionar a parte de la ruinosa industria. También ha emprendido el camino de renacionalizar sin alarmar: las nuevas subvenciones se ofrecen para condonar deudas, adquiriendo el Estado el correspondiente capital de las empresas subvencionadas.

Para colmo de males, a poco de acceder Primakov al poder se descubrieron irregularidades en la gestión de los créditos concedidos por el FMI, lo que no estimula a este a desbloquear la entrega de los 4.300 M\$ del segundo tramo del último crédito.

Si el panorama económico es sombrío el social es desolador, con millones de ciudadanos que no reciben las cantidades que el Estado les adeuda. Según diversas fuentes, más del cincuenta por ciento de ellos viven por debajo del mínimo vital.

En el terreno social, lo más destacable en 1998 han sido las repetidas huelgas de los mineros del Kuzbass (Siberia Occidental) y del Extremo Oriente Ruso, que han cortado durante días varias líneas férreas tan importantes para el intercambio de mercancías dentro de la Federación Rusa como las del transiberiano y transcaucásico. El 7 de octubre de 1998, el Partido Comunista consiguió movilizar en todo el país a varios millones de trabajadores que se manifestaron contra Yeltsin y reclamaron los salarios que se les adeuda.

Pese a que el pronosticado estallido social hasta ahora no se ha producido y de que el pueblo ruso sigue haciendo gala de su proverbial aguante, lo cierto es que cada vez tiene menos fe en las reformas y en los reformadores, lo que podría traducirse en una abultada bolsa de votos para los comunistas en las próximas elecciones legislativas.

Hay que añadir que las privatizaciones incontroladas, en la difícil y todavía inacabada transición a la democracia partitocrática, han sido el origen de muchas fortunas, con la creación de una poderosa oligarquía de la que forman parte políticos corruptos involucrados en negocios privados. Por otro lado, la burocracia no ha logrado aún soltar el pesado lastre de los tiempos soviéticos, la corrupción contamina a gran parte de la administración y la actividad del crimen organizado es omnipresente.

Para desarrollar cualquier actividad profesional hace falta tener las espaldas cubiertas por un respaldo "protector", oficial o particular. En Moscú la maledicencia, propala que el mejor protector de la ciudad es el propio alcalde de la capital, Yuri Luzhtor, uno de los candidatos a la Presidencia de Rusia en las elecciones del año 2000.

Ante el panorama del crudo invierno que se avecina, en que la carestía de alimentos es, en parte, debida a la cosecha de grano de este año, que ha sido la peor de los últimos cuarenta, los EE UU han concedido a Rusia un crédito de 600 M\$ al 2 por ciento en 20 años, para adquirir alimentos de primera necesidad a los agricultores norteamericanos. Parte de dicha cantidad llegará a Rusia en especie. Washington se ha comprometido a enviar gratis 1.500 toneladas de trigo y 100.000 toneladas de alimentos. Los EEUU han tenido en 1998 enormes excedentes de cereales.

A los múltiples problemas que tiene Rusia hay que añadir el de los atentados de carácter político. El 21 de noviembre de 1998 fue asesinada la diputada del partido liberal Galina Starovoitona en San Petersburgo. Es el sexto miembro de la Duma que corre esta suerte desde 1994. La Sra. Starovoitova era una entusiasta reformista y anticomunista.

Ante la inseguridad ciudadana, aparte de las policías estatales, regionales y locales, los servicios de seguridad privados se cuentan por miles.

La política exterior rusa

Todo parece indicar que el primer objetivo de la política exterior de Rusia es afianzar su influencia en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), creada tras la disolución de la Unión Soviética. Este sería el primer paso hacia la instauración de una Confederación de Naciones con predominio político y cultural ruso.

La añoranza del pasado es fuerte. Como afirma Mijail Gorbachov en sus memorias, "Rusia es la legítima heredera de la URSS y debe ser el núcleo de una nueva unión". Según él "la reintegración solo será posible si

encontramos una idea que permita a los pueblos situarse por encima de su "yo" nacional. Entendemos que somos diferentes a Europa y a Occidente y sentimos la necesidad de volver a unirnos". Gorbachov, que sostiene que la unión se podía y debía haber salvado, era partidario de empezar la reunificación por las tres repúblicas eslavas y Kazajstán.

El modelo que Gorbachov defendía era el que parecían tener en la mente los Presidentes de Rusia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirguizistan cuando el 29 de marzo de 1996 acordaron profundizar su integración económica y cultural, abriendo la vía a una futura reunificación. Ausente quedaba Ucrania, que se resistía a perder un ápice de soberanía.

Poco después, Rusia y Bielorrusia crearon la llamada Unión de Repúblicas Soberanas, cuyos lazos han ido estrechándose. El tratado concertado entre ellas establece una ciudadanía común, la reagrupación de las Fuerzas Armadas de ambos países y una política exterior convergente. El Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha llegado a declarar que ambos países deberían reunificarse. En enero de 1998 Rusia y Bielorrusia dieron un paso más desarrollando los principios básicos de una política militar común y la organización de la defensa de la Unión.

La firma de este último Acuerdo, el 22 de enero de 1998, coincidió con la celebración de una importante Cumbre de estados ribereños del Báltico a la que asistió el Primer Ministro Ruso. Dicho Acuerdo fue, sin duda, la réplica a la "Carta de Asociación" de los EE UU con las tres Repúblicas bálticas ex-soviéticas, firmada en Washington unos días antes. "Carta de Asociación" que se puede interpretar tanto como premio de consolación como de paso previo a una futura integración de las tres Repúblicas en la OTAN.

Con Ucrania, Rusia ha conseguido solucionar tanto el empantanado problema del reparto de la Flota Soviética del Mar Negro y del status de la Base Naval de Sebastopol como el espinoso contencioso de la soberanía de Ucrania sobre la península rusa de Crimea. El Tratado de mayo de 1997, firmado por Boris Yeltsin y el Presidente de Ucrania Leonid Kutchman, significó el reconocimiento de Ucrania en sus actuales fronteras. Ucrania, salvo un breve período durante la Guerra Civil 1917-1921, siempre había estado unida a Rusia y era considerada por la mayoría de los rusos como parte integrante de ella. También se concertaron importantes acuerdos comerciales en 1997 entre Rusia y Ucrania muy favorables a esta última. Todo ello ha contribuido a un acercamiento de los dos estados eslavos más importantes de la antigua Unión Soviética. Ucrania es, sin duda alguna, la pieza más importante en el tablero geopolítico de la Europa del Este.

Rusia ha firmado conciertos comerciales y acuerdos militares bilaterales con todos los países de Asia Central, asegurándose “de facto” el control de todas las instalaciones estratégicas de la región. Entre ellas, el centro de lanzamiento y seguimiento espacial de Bailakur, en Kazajstán, cuyo Presidente Nursultan Nazarbaiev es ferviente partidario de la consolidación de la CEI. En estas repúblicas asiáticas, la asistencia militar rusa en la creación de sus nuevas Fuerzas Armadas se traduce en la presencia de asesores y en el mantenimiento de mandos de origen ruso en puestos claves. En Tayikistán, la intervención militar rusa consiguió imponer la paz y ahora apoya a un Gobierno impopular, afín a los intereses rusos.

En Georgia y Armenia, en la región del Cáucaso, para el mantenimiento de la paz bajo los auspicios de distintas organizaciones internacionales continúa habiendo tropas rusas.

Pero, pese a los esfuerzos hechos por Rusia para reunir en torno suyo a los países de la CEI, en las “Cumbres” que periódicamente convocan a todos estos estados, representados por sus Jefes de Estado y de Gobierno, se han puesto de manifiesto las profundas diferencias existentes respecto al concepto y alcance de una futura integración. En el fondo, todos desconfían de la sinceridad del “hermano mayor” cuando habla de una unión entre iguales.

Rusia, para contrarrestar la presión ejercida por la OTAN en el oeste, ha procurado estrechar sus relaciones con China, dando fin a los litigios existentes sobre el trazado de sus fronteras y concertando acuerdos sobre la reducción de las fuerzas militares desplegadas a ambos lados de ellas. Por otra parte, la llamada “Asociación Estratégica” entre Rusia y China ha propiciado la venta de armamento y la transferencia de tecnología de la primera a la segunda.

Pese a la retórica de las declaraciones oficiales, el alcance real de dicha asociación está por definir. Aunque ninguno de los dos países se resignan a aceptar “sine die” la hegemonía de los EE UU y abogan por un mundo multipolar, entre ellos hay intereses comunes y otros contrapuestos que no son fáciles de superar.

En Asia Central dichos intereses convergen. Rusia, con el consentimiento de China, ha aprovechado el marco de las negociaciones “cuatro más uno” sobre fronteras comunes, que ha reunido a Rusia, Kazajstán, Kirguizistán y Tayikistán por una parte y a China por otra, para consolidar su posición geopolítica en la región a cambio de ofrecer a China la pre-

vención del activismo y proselitismo étnico y religioso que se hace desde estos países de la CEI a los habitantes de la provincia china de Sikiang, donde el 50 por ciento son de etnia uighur, de religión musulmana y de habla turca, y donde también hay minorías de kazajskos y kirgueses. Las afinidades lingüísticas y étnicas a ambos lados de la frontera constituyen para China motivo de preocupación.

En cambio, en la Siberia Oriental los entes autonómicos rusos se oponen a las cesiones de terreno a China que Moscú pretende llevar a cabo para cumplir los acuerdos de frontera y temen tanto al contrabando de los traficantes chinos a través de la larga frontera común como a la emigración clandestina a unos territorios muy poco poblados que están perdiendo habitantes de etnia rusa, mientras las provincias limítrofes chinas experimentan un crecimiento continuo de población. Vladivostok, el antiguo puerto ruso a orillas del mar del Japón, podría llegar a ser una población de mayoría china en unos cuantos años si se mantiene la tendencia actual. Algunos Gobernadores autónomos de esta región amenazan con no cumplir los compromisos contraídos a nivel estatal entre Moscú y Pekín. El más vociferante y radical es el Gobernador de Primorskii que ha amenazado con no ceder territorios "llenos de tumbas de soldados rusos".

En las Repúblicas asiáticas de Kazajstán y Turkmenistán y en la de Azerbaiyán en el Caúcaso se han descubierto nuevos e importantes yacimientos de hidrocarburos cuya producción, según los expertos, podría superar dentro de diez años a la de Arabia Saudí. Como consecuencia, los Estados indicados están siendo cortejados por las compañías petrolíferas occidentales. En Bakú (Azerbaiyán) y en Tashkent (Uzbekistán) los EE UU mantienen embajadas cuya principal misión es procurar que estas regiones se mantengan abiertas al libre comercio. La influencia occidental en general, y la norteamericana en particular, tanto en la región del Caúcaso como en Asia Central despierta los recelos rusos. Azerbaiyán, pese a Rusia e Irán, ha firmado contratos con compañías occidentales para la explotación de los nuevos yacimientos del mar Caspio y en Kazajstán operan, entre otras, las multinacionales Chevron y Mobil. Rusia juega la baza de que casi todas las rutas comerciales, oleoductos y gasoductos que tienen su origen en estos países discurren por territorio ruso, lo que le permite no quedar marginada del negocio petrolero, al menos mientras que esta servidumbre de paso no la eluda mediante tendidos alternativos a través de Irán y Turquía. Rusia también puede subir los aranceles aduaneros con Kazajstán principalmente.

China, aliada de Rusia en Asia Central, posiblemente llegará a ser la mayor consumidora de los recursos energéticos de esta región. Actualmente, el petróleo kazajsko viaja por tren a China por la línea férrea Alma Ata-Pekin. Las exportaciones rusas a China manifiestan una acusada tendencia a aumentar.

Aparte de los litigios fronterizos con China, en el Extremo Oriente, Rusia tiene pendiente con Japón la resolución del contencioso de las islas Kuriles que quedaron en poder de Rusia al final de la II Guerra Mundial y que el Japón pretende recuperar. El arco de las Kuriles cierra el Mar de Ojotsk, donde se encuentra la base naval de Nikolayev Norte y el puerto de Magadan, de mucha menor importancia que la base de submarinos nucleares de la Flota rusa del Pacífico situada en Kamchatka, con salida libre a dicho océano. En las reuniones que tuvieron lugar en abril de 1998 de Boris Yeltsin con el Presidente del Gobierno japonés, Ruyturo Hashimoto, este no obtuvo lo que pretendía. Rusia y Japón técnicamente aún están en guerra, ya que todavía no han firmado el Tratado de Paz, Amistad y Cooperación que solicita Rusia. Posiblemente, la devolución de las Kuriles se haga a cambio de substanciales contraprestaciones económicas, lo que la crisis japonesa no permite a corto plazo.

Rusia sigue mostrando su voluntad de mantener, cueste lo que cueste, sus ambiciones en la aeronáutica espacial, pese a sus grandes limitaciones financieras. Sin embargo, los sucesivos tropiezos de la estación orbital MIR son prueba de la pérdida de su supremacía en una tecnología en la que mantenía el primer lugar. Esta gigantesca nave, que lleva más de doce años en el espacio, siete más de su esperanza de vida inicial, está previsto que caiga al mar en junio de 1999. Será el final de una histórica etapa de la carrera espacial y el paso a la de la Estación Espacial Internacional, proyecto en el que Rusia, sumida en una pavorosa crisis económica, no podrá tratar a los EE UU de igual a igual.

Prueba del interés de Rusia en mantener su protagonismo en el plano internacional son sus posturas unilaterales y disconformes en las crisis de Irak y Kosovo. En esta última, en octubre de 1998, Rusia se opuso a la intervención militar de la OTAN en Serbia por considerar que la Resolución 1199 del Consejo de Seguridad de la ONU no proporcionaba base legal para un ataque aéreo armado. El Ministro ruso de Asuntos Exteriores llegó a insinuar que su Gobierno tenía en mente la posibilidad de ofrecer ayuda militar a Yugoslavia (Serbia y Montenegro) si se producían ataques de la OTAN y que la necesidad de créditos occidentales no haría que Rusia modificara su política exterior.

La capacidad militar rusa

Pese a las reducciones llevadas a cabo los últimos años, entre militares de uniforme y personal civil hay actualmente mas de tres millones de personas en las Fuerzas Armadas y demás organizaciones de carácter militar: Tropas del Ministerio del Interior, Guardia de Fronteras, Fuerza de Protección de la Federación, Servicio Federal de Seguridad y un largo etcétera.

Actualmente se está llevando a cabo una reforma militar que comporta una drástica reducción de efectivos y la supresión del servicio militar obligatorio en el futuro. Reforma que no avanza al ritmo previsto por diversas causas. Entre ellas, la escasez de recursos económicos y las pugnas políticas entre Ministerios y Organismos Estatales afectados.

Todos coinciden en que la economía del país no permite sostener fuerzas armadas tan numerosas como las existentes sin que peligre el nivel de adiestramiento, el mantenimiento del material y la obtención del armamento más moderno, que es necesario para sustituir al que se va quedando obsoleto.

Pese a la cacareada "Glasnost", la opacidad continua siendo la característica distintiva de la política militar rusa, no sabiéndose a ciencia cierta cual es la capacidad operativa real de las FAS rusas, aunque todos los indicios apuntan a que es muy baja.

En lo que atañe a la Fuerza de Disuasión Nuclear, el Kremlin sigue apostando porque Rusia siga siendo la segunda potencia nuclear del mundo, con un arsenal de unas 6.000 cabezas de combate que, si se ratificara el Tratado START II, se reducirían a la tercera parte. En cualquier caso significaría que la potencia nuclear rusa continuaría siendo mayor que la de China, India, Pakistán, Reino Unido y Francia reunidas.

El Estado Mayor Ruso, ante la inevitable reducción de la capacidad operativa convencional de las FAS rusas, confía principalmente en su capacidad nuclear para disuadir a los EE UU, a la OTAN o a China de cualquier agresión, fuera nuclear o convencional. Aunque admite que actualmente dicha hipótesis es muy improbable, no descarta que pudiera serlo menos en el futuro.

Si se admite el supuesto de que si las FAS rusas no fueran capaces de controlar un conflicto limitado en su periferia con armas convencionales, Rusia podría recurrir, en primera instancia, a las nucleares para evitar una derrota.

El Estado Mayor Ruso percibe que la ampliación de la OTAN hacia el este constituye una amenaza para el país, ya que acerca las fuerzas militares de la Alianza a sus fronteras y deja a los principales centros de mando, administrativos, industriales y urbanos de Rusia dentro del radio de acción de la aviación táctica aliada, amenaza que actualmente solo puede conjurar el efecto disuasivo de su capacidad nuclear, dado el desequilibrio existente entre la capacidad convencional de Rusia y la de la OTAN. Esta es una de las razones que, hasta ahora, ha esgrimido la Duma para negarse a ratificar el Tratado START II.

En el haber de la capacidad militar de Rusia hay que contar sus sistemas de comunicaciones y reconocimiento por satélite, así como los de guerra electrónica y navegación de precisión. En este campo, Rusia solo es superada por los EE UU. Aunque muchos de estos sistemas son de uso compartido, en virtud de los tratados suscritos con otros estados de la CEI, el control de todos ellos está en manos rusas, así como la propiedad de las constelaciones de satélites.

El sector industrial militar sigue siendo de suma importancia en la economía de Rusia, pese a la disminución de la producción en los últimos años, con la consiguiente reducción de personal. Pese a todo, la venta de armas al exterior reportó unos beneficios de 4 billones de dólares en 1997. Sin embargo, en 1998 no se podrá alcanzar esta cifra por la recesión económica de los mercados asiáticos.

De cualquier forma, la venta de armas seguirá siendo una buena fuente de ingresos para la maltrecha economía rusa. Entre ellas, la de misiles de medio alcance, a cuya proliferación tan sensibles se muestran los EE UU y todos sus aliados occidentales tras la experiencia de los lanzamientos de los SCUD contra Israel durante la Guerra del Golfo. Rusia se encuentra limitada por ser país miembro del llamado "Régimen de Control de la Tecnología de Misiles", pero, según su propia interpretación, no de su venta a determinados clientes.

Los militares en la política interna de la Federación Rusa

Tras la reducción de efectivos y de asignaciones económicas para la Defensa, derivadas de la disolución de la Unión Soviética y de sus Fuerzas Armadas, el antes mimado Cuerpo de Oficiales quedó descontento y traumatizado.

Hoy, las percepciones e inclinaciones de la mayoría de los componentes de los Cuerpos de Oficiales en activo podrían resumirse así: considerarse preteridos por todas las instituciones políticas del país; manifestarse sumamente críticos con Boris Yeltsin, al que consideran culpable de la precaria situación actual de las FAS rusas; preocuparles, más que a los civiles, la falta de respeto a la Ley y la precariedad del orden público reinante; añorar a la Unión Soviética y abogar por la restauración de una nueva unión, fundamentalmente entre las repúblicas eslavas de la CEI, y percibir a Occidente y en particular a los EE UU como una amenaza potencial, por lo que no debe bajarse la guardia nuclear.

En general los oficiales rusos se encuentran divididos entre los de tendencia reformista moderada y los conservadores radicales, muchos inclinados hacia el ultranacionalismo, que entienden que la política exterior de Rusia debe encaminarse a recuperar el rango de superpotencia que tuvo la URSS.

Aunque ninguno de los oficiales generales con mando parece abrigar ambiciones bonapartistas, sí existe la posibilidad de que pudieran intervenir con las fuerzas a sus órdenes a favor de un político de prestigio cuyo programa les resultara atractivo.

El ex general Liebed, por su pasado, ideología y ambición política, pudiera arrastrar tras sí, en último extremo, tanto a las fuerzas armadas como a una multitud de civiles desesperados dispuestos a asirse a un nuevo salvador.

Liebed ha declarado que se opondría a la ampliación de la OTAN y restablecería el orgullo y poder de Rusia lo que, evidentemente, a medio plazo es una utopía.

Liebed podría llegar a alcanzar el poder por procedimientos legales, si contara con el apoyo de la nueva oligarquía que lidera Boris Berezonsky. En este sentido, la cadena de televisión ORT controlada por este magnate ruso y sus socios, suele dar a Liebed una cobertura muy favorable.

LA AMPLIACIÓN DE LA OTAN HACIA EL ESTE DE EUROPA

En la Cumbre de la OTAN que se celebró en París en mayo de 1997 quedó abierta la vía para su ampliación hacia el este de Europa, admitiendo como estados miembros a todos aquellos países de Europa Central y del Este que decidieran libremente adherirse al Tratado del Atlántico Norte y reunieran las condiciones de idoneidad requeridas.

Esta línea de acción política es consecuente con la vocación de la OTAN de constituirse en el máximo garante de la seguridad y estabilidad de Europa. Desaparecido el Pacto de Varsovia y disuelta la Unión Soviética, la OTAN, para subsistir, tenía que definir un nuevo objetivo, ya que los pactos militares no suelen durar más que la amenaza que los originó.

No parecía que la participación en operaciones de mantenimiento e imposición de la paz “fuera de área” pudiera aceptarse como principal razón de ser de la Alianza, sino que hacía falta señalar un objetivo de mayor alcance político: constituirse en marco institucional organizado que garantizara la seguridad de Europa con la participación de los EE UU. Para ello contaba con una estructura político-militar sólida y experimentada.

Consecuente con la finalidad perseguida es la ampliación hacia el este de la Alianza, acogiendo en su seno a aquellos estados que busquen seguridad y estabilidad.

No obstante, lo anteriormente indicado es solo un término de la ecuación de la seguridad de Europa, el otro es Rusia, con la que había que crear, para que no se sintiera excluida y mucho menos amenazada, un vínculo particular de cooperación. De ahí la firma del “Acta Fundacional” de las relaciones de Rusia con la OTAN.

Hay quien piensa, principalmente en Rusia, que el papel que se ha arrogado la OTAN podría desempeñarlo la OSCE que, indudablemente, ha cosechado logros importantes. Pero ésta, pese al cambio de nombre, no es una organización sino una “conferencia”. De ahí que su estructura orgánica se reduzca a una Secretaría. Por otra parte, la OSCE la constituyen cincuenta y cuatro estados soberanos de Europa, Asia Central y América del Norte que tienen derecho de veto. Siendo países de regiones tan distintas e intereses tan dispares, lograr un consenso sobre cuestiones conflictivas de seguridad no es fácil. Por ello, la OSCE, pese a lo que sostiene Rusia, no puede servir como institución principal de la seguridad de Europa.

Los EE UU consiguieron imponer su criterio de que la ampliación de la OTAN se redujera inicialmente a tres estados: La República Checa, Polonia y Hungría. Dado el relativo alejamiento de la frontera oeste de Rusia, este primer paso hacia el este de la Alianza Atlántica, a los ojos de los rusos podía tener un carácter menos provocativo. Los EE UU son plenamente conscientes de los recelos de Rusia, que no comparte la teoría de la estabilidad europea garantizada por la OTAN y que considera que su

ampliación hacia el este no es más que una política concebida por Norteamérica para extender su influencia en Europa Central y del Este y procurarse una posición geoestratégica futura más ventajosa que la existente, aprovechando la debilidad actual de Rusia.

Las negociaciones de la OTAN con los tres países indicados se han iniciado y siguen su curso. También lo están los trámites de ratificación de lo acordado por parte de los parlamentos nacionales respectivos. El ingreso de los tres tendrá lugar, posiblemente, en 1999, coincidiendo con el L Aniversario de la firma del Tratado del Atlántico Norte. Dicho año se designará un nuevo grupo de actuales candidatos con Eslovaquia y Rumania a la cabeza de los elegidos.

La ampliación de la OTAN no presenta tantas dificultades como la de la UE ni por motivos de financiación, ya que su coste es mucho menor, ni por requerir cambios institucionales dentro de la OTAN que, por otra parte, está llevando a cabo una reorganización de su estructura integrada de mando, en lo que van a participar estos nuevos miembros

Norteamérica ha propuesto que los gastos que supone la ampliación se repartan entre los nuevos socios, los EE UU y los aliados europeos, pero, por ahora, estos últimos no se avienen a aceptar la distribución propuesta. Como el monto no es elevado, y se repartiría durante diez años, el problema de fondo no es encontrar una solución aceptable sino la insistencia de los EE UU en un reparto de cargas (el insistente "burden sharing") más equitativo entre los aliados.

El tema de la financiación de la ampliación ha sido debatido en profundidad en el Senado Norteamericano con motivo de su ratificación. En los EE UU se ha previsto que los gastos de defensa crezcan los próximos cinco años solamente lo suficiente para compensar la inflación, lo que impide financiar todos los programas de inversiones presentados, por lo que el coste adicional que conlleva la ampliación de la Alianza Atlántica hacia el este puede dar lugar al aplazamiento o cancelación de programas aprobados considerados de mayor prioridad.

Por ello, en opinión de los senadores norteamericanos, sus aliados de la OTAN deberían sufragar una proporción mayor de los costes de la ampliación. Entienden que si en Europa se invierten recursos norteamericanos para suplir lo que no aportan los aliados de la OTAN, los intereses de seguridad de los EE UU pueden verse afectados negativamente

Es evidente que en el seno de la OTAN se va incrementando la diferencia existente entre la capacidad militar norteamericana y la de todos los demás aliados, con la consiguiente dependencia de ella de los EE UU.

Aunque la mayoría del Senado Norteamericano aprobó la ampliación, hubo senadores que se mostraron contrarios a ella, no solo por su precio —se calcula una inversión de entre 40 y 60 billones de dólares en sistemas de defensa aérea y de comunicaciones y en la interoperatividad del armamento— sino por considerar que carece de sentido invertir en las fuerzas armadas de los nuevos socios cuando ya no existe la amenaza soviética y Rusia es un país amigo. Otros opinaron que la ampliación originaría tensiones innecesarias con Rusia y en el interior de Rusia. Prevalecieron sin embargo las razones de que la ampliación había sido debida a una iniciativa norteamericana, que el voto eslavo sería muy importante en las elecciones legislativas de noviembre de 1998 y que las ganancias que pudiera obtener la industria de armamento del país no serían despreciables.

Por los motivos que con anterioridad hemos señalado, Rusia ha firmado con la OTAN la llamada “Acta Fundacional” de las relaciones entre ambas partes.

Pese a la trascendencia que se ha pretendido dar a este documento, el contenido real del Acta es mas bien enteco. No se trata de un “tratado” legalmente vinculante en derecho internacional, como pretendían los rusos, sino solo de un “acuerdo” a nivel de Gobiernos. Un Consejo Conjunto Permanente reúne al Representante de Rusia con los de los países de la OTAN, pero ello no le impedirá a esta tomar decisiones sin el asenso ruso, ya que no se accedió a la pretensión rusa de tener en dicho Consejo derecho de veto. No es un secreto que el Gobierno de Yeltsin firmó el Acta Fundacional con reticencia, coaccionado por influyentes círculos financieros e industriales interesados en estrechar los lazos de Rusia con Occidente.

El Acta Fundacional estipula que la OTAN no desplegará armas nucleares en los territorios de los nuevos miembros ni estacionará en ellos “fuerzas substanciales de combate” extranjeras. Interpretar que es lo que se entiende por “substanciales” y otras ambigüedades del texto pudieran ser motivo de futuras controversias. Rusia ya ha presentado quejas de que la OTAN ha tomado decisiones importantes sin su conocimiento.

En este sentido, cabe señalar que el representante ruso en la OTAN abandonó Bruselas el 16 de junio de 1998 en señal de protesta por las

maniobras aéreas realizadas por la OTAN en Albania y Macedonia como advertencia a los serbios. Según el Ministro de Defensa de la Federación Rusa, general Igor Sergueyev, la Alianza Atlántica no comunicó a Rusia, con la antelación debida, la realización de dichos vuelos, faltando con ello al espíritu del Acta Fundacional.

Otras concesiones hechas a Rusia han sido la revisión del Tratado CFE en el sentido que esta deseaba y la propuesta del nuevo Tratado START III, que no solo reduciría aún mas los arsenales nucleares sino que haría desaparecer las desventajas percibidas por los rusos en el contenido del START II, que dificultan su aprobación por la Duma.

Aunque Rusia se ha visto forzada a aceptar el hecho consumado de la ampliación de la OTAN a los países primeramente seleccionados de Europa Central, ha dejado sentada su postura respecto a futuras adhesiones. En este sentido, el Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia advirtió en la Cumbre de Madrid que la cooperación de su país con la OTAN cesaría en cuanto esta negociara el ingreso en la Alianza Atlántica de cualquier República de la ex-Unión Soviética. Con ello, Rusia ha definido con precisión lo que pretende sea su zona de influencia en Europa, que incluye, aparte de a los países europeos de la CEI, a las tres bálticas, que desean librarse por completo de la tutela rusa ingresando tanto en la UE como en la OTAN.

Ucrania también ha firmado con la OTAN un acuerdo preferencial que le confiere un status bilateral parecido al de Rusia, diferenciado del de los demás estados que integran el "Consejo de Asociación Euroatlántico" o pertenecen a la "Asociación para la Paz". En la "Carta de Cooperación" establecida se considera la creación de un órgano permanente de consulta, el envío de una misión permanente ucraniana a Bruselas y el mantenimiento de encuentros regulares a alto nivel. Ucrania ha permitido la realización en su suelo y en sus aguas de maniobras combinadas de países pertenecientes a la "Asociación para la Paz"

Esta política de cooperación con la OTAN no ha impedido a Ucrania la firma de importantes acuerdos con Rusia, como hemos dicho, muy favorables para Ucrania.

En la visita oficial hecha por el Presidente de Ucrania a Rusia en febrero de 1998, que tenía un marcado acento económico, Moscú se encargó de dejar en segundo plano los importantes acuerdos comerciales concertados, sacando a colación el tema de la ampliación de la OTAN.

Según el Kremlin, el Presidente ucraniano Kutchma se había comprometido con el ruso Yeltsin a no solicitar el ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica. Kiev, ni ha ratificado ni desmentido esta noticia.

En Occidente, la ampliación de la OTAN hacia el este tiene partidarios y detractores: los primeros aducen que generará estabilidad en un espacio geopolítico históricamente inestable; los segundos temen las consecuencias que pudiera tener en la situación interna de Rusia el sentimiento de impotencia y humillación que pudiera producir la integración en la OTAN de países que formaron parte de la Unión Soviética, cuya disolución muchos rusos todavía lamentan, así como la sensación de inseguridad que originaría respecto a la integridad futura de la propia Federación Rusa.

Rusia aboga por el establecimiento de un cinturón de estados neutrales entre los de la OTAN y los europeos de la CEI, neutralidad garantizada tanto por la OTAN como por Rusia según, propuesta de Yeltsin en 1993.

Contrasta la actitud de los países de Europa Central y bálticos que han solicitado su ingreso en la OTAN por considerarlo único remedio a su seguridad y estabilidad con otros países de la UE de tradición neutralista. Así, en el libro blanco de la Defensa presentado al Parlamento de Finlandia, el 17 de marzo de 1997, se dice: "Finlandia no constituye blanco de ninguna amenaza militar cuya prevención o rechazo nos obligue a contar con las garantías de seguridad que proporcionan las alianzas militares". De forma parecida se ha pronunciado Austria que, por ahora, pese a estar rodeada por países de la OTAN, sigue en su tradicional línea neutralista. Así, el Canciller Austríaco Kilma manifestó el 7 de abril de 1998 que "no sería apropiado, en términos de política de seguridad, establecer desde hoy mismo el objetivo de nuestra pertenencia a la OTAN".

Según todos los indicios, limitada y aplazada en el tiempo la admisión de nuevos socios, el problema es establecer las perspectivas que les quedan a los países que no se conviertan en miembros de la OTAN. Es evidente que la pertenencia al Consejo de Asociación Euroatlántico y a la Asociación para la Paz, que muchos consideran como una forma de hacer méritos para ingresar en el futuro, no les satisface, por no colmar las garantías de seguridad que estiman les proporcionaría la OTAN. Tampoco les complace plenamente el ingreso exclusivamente en la UE, cuya PESC no acaba de madurar y cuyo brazo armado, la UEO, carece de la musculatura que tiene la OTAN.

De las ex-repúblicas europeas de la extinta Unión Soviética, las bálticas, como hemos dicho, son las que más insatisfechas podrían sentirse si no se respondiera favorablemente a sus ardientes deseos. Quizás por ello, los EE UU se hayan apresurado a firmar una "Carta de Asociación" con estas tres repúblicas en enero de 1998.

Que Bielorrusia se inclina decididamente hacia Rusia no ofrece duda alguna, al menos mientras se mantengan en el poder sus actuales dirigentes políticos. Con menos certeza podemos vaticinar la fidelidad de Ucrania hacia Rusia, renunciando a solicitar su ingreso en la OTAN, aunque hay que considerar que una política decididamente pro-OTAN de Ucrania podría poner en peligro su integridad territorial, dadas las divergencias existentes en este estado independiente de nuevo cuño.

Resultan significativas las sibilinas palabras del Presidente Clinton en Berlín en mayo de 1998 en que, aludiendo a la ampliación de la OTAN, pidió que no se olvidaran los intereses tanto de Rusia como de Ucrania, con quienes la actual colaboración debe mantenerse y reforzarse.

En este sentido, el Ministro de Defensa ruso, Igor Sergueiev, en octubre de 1998 reiteró la oposición de Rusia a la ampliación de la OTAN y advirtió que si se cruza la "raya roja" que la separa de las antiguas Repúblicas soviéticas (más en concreto las bálticas) Moscú reconsideraría todo el marco de sus relaciones con la OTAN.

Sopesados inconvenientes y ventajas, antes de proceder a futuras ampliaciones la prudencia aconseja obrar con cautela, por lo menos hasta que no se clarifique la oscura y difícil situación política, social y económica que Rusia atraviesa.

LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

La adhesión a la UE está prevista en el articulado del Tratado de la Unión, que establece que cualquier país europeo podrá solicitar el ingreso como miembro y que las condiciones de la admisión serán objeto de un acuerdo ente la UE y el estado solicitante.

En junio de 1993, el Consejo Europeo de Copenhague acordó los criterios de admisión, conociéndose a partir de entonces como "Criterios de Copenhague". Estos son: identidad europea, sistema de gobierno democrático y respeto a los derechos humanos.

Con el tiempo se ha ido ampliando el marco legal, económico y político de la UE, lo que trajo consigo que se reconsiderara la capacidad del candidato para aplicarlos. De ahí que actualmente, cuando se va a iniciar el proceso de la ampliación de la UE hacia el este de Europa, las condiciones para la admisión pueden resumirse así: disponer de instituciones estables que garanticen la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y la protección de las minorías. Tener establecida una economía de mercado capaz de hacer frente a la competencia y a la presión comercial de la UE. Estar capacitado para asumir las obligaciones de todos los miembros, incluyendo la adhesión a la Unión Económica y Monetaria.

La regla de oro de toda negociación de ingreso es la aceptación por el candidato de todo el acervo comunitario: tratados firmados, legislación promulgada, jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia, resoluciones aprobadas y acuerdos internacionales suscritos por la Unión.

El candidato ha de aceptarlo todo. No es posible por tanto una integración "a la carta". Sin embargo, pueden establecerse exenciones temporales y acuerdos transitorios, nunca permanentes.

En la Cumbre de Luxemburgo de diciembre de 1997 se decidió iniciar las negociaciones con Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre, lo que se está llevando a cabo tras una valoración del grado de preparación de estas naciones. Lo más probable es que las primeras adhesiones se lleven a cabo en el año 2003.

El segundo grupo de países solicitantes, formado por Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, Letonia y Lituania, aunque teniendo las puertas abiertas, iniciaran sus negociaciones con la UE en una fase posterior. Mientras tanto tendrán la consideración de países asociados.

Si la UE se ampliase abarcando a todos estos países, su superficie aumentaría en un 34 por ciento y su población en un tercio, pero el PIB comunitario solamente se incrementaría en un 8 por ciento.

Rusia también ha pretendido adherirse a la UE pero, pese a su pretendida vocación europea, no deja de ser un país en sus tres cuartas partes asiático. Su demografía, extensión territorial y sobre todo su inestabilidad política y crisis económica no son avales para su admisión en la UE, lo que ha propuesto Yeltsin insistentemente. Incluso superada su actual crisis económica, la integración de Rusia como miembro, dadas sus características geopolíticas y particular mentalidad, tan diferente de la de

la Europa Occidental, desequilibraría a la UE y pondría en peligro su propia existencia.

Las ventajas de su ampliación hasta las fronteras de la CEI son obvias: constituirían un paso decisivo en el objetivo geopolítico de lograr una Europa unida con mayor peso en las relaciones internacionales, mayor seguridad y estabilidad en el continente y un mercado común comunitario más amplio.

Los inconvenientes son su coste económico y la necesidad de introducir en la UE importantes y polémicas reformas institucionales.

La Comisión del Consejo Europeo que ha estudiado el coste de la ampliación calcula que esta podría alcanzar los 75.000 millones de ecus. Constituye pues, para los nuevos socios, un verdadero "Plan Marshall".

La Conferencia Europea celebrada en Londres en marzo de 1998 reunió a veintiséis estados: los quince miembros y los once candidatos. Turquía fue la gran ausente. Entre las razones de su autoexclusión está el problema de Chipre, donde ha iniciado el proceso de integración en Turquía de su parte norte habitada por turcos. Chipre, que figura en el grupo de países de cabeza, pudiera complicar la ampliación, ya que los turcochipriotas se niegan a participar en las negociaciones. Solo quieren representar a su zona como entidad estatal.

La batalla rendida por la futura financiación de la ampliación entre los estados de la UE es una pugna en la que los intereses nacionales, tanto de los países pobres como de los ricos, han prevalecido hasta ahora sobre el primer objetivo geopolítico europeo.

Si se mantiene el actual techo del 1.27 por ciento del PIB de los actuales miembros como aportación a las arcas comunitarias, la UE tiene dos opciones: o se hace frente a la ampliación con unos recursos escasos, que habría que repartir entre mayor número de países en detrimento de los fondos estructurales y de cohesión, o se llega a una solución de compromiso entre ricos y pobres a costa de retrasar la entrada de los nuevos socios.

Tantas o mayores dificultades ofrece la reforma institucional: ponderación de los votos en función de la población de los estados, número de comisarios y definición de los criterios de decisión en los asuntos que requieran unanimidad (no es lo mismo conseguirla con quince que con veintiséis) y en aquellos en que sea suficiente una mayoría simple o cualificada de votos.

Actualmente hay cuatro países que aportan el 71.8 por ciento de los gastos de la UE: Alemania 30 por ciento, Francia 18 por ciento, Italia 12.4 por ciento y el Reino Unido 11.4 por ciento. Por consiguiente, si se estableciera que la aprobación de los gastos se decidiera por el criterio de mayoría relativa, pudiera darse el caso de imponer a los que más contribuyen una resolución tomada por quienes menos lo hacen que, además, pudieran ser beneficiarios de los fondos de cohesión.

A todos estos obstáculos para el ingreso de los países indicados hay que añadir la postura de determinados miembros respecto a la ampliación. Grecia, por ejemplo, amenaza con que si se frena la admisión de Chipre vetará la de cualquier país de Europa Central y del Este. El Presidente francés Chirac, por su parte, ha declarado que se opone a la ampliación sin una reforma institucional previa y que no acepta la reforma de la política común agraria. En lo que atañe a esta última, en octubre de 1998 la Comisión Europea rechazó la propuesta alemana, apoyada por Holanda y Suecia, de que cada país cofinanciará con cargo a sus propios presupuestos una cuarta parte de las ayudas directas a la agricultura.

Alemania, que considera que aporta demasiado, sostiene que los países que han logrado cumplir los criterios de convergencia han alcanzado un nivel económico que hace innecesario seguir ayudándoles, sin tener en cuenta las diferencias de renta que, por ejemplo, en nuestro caso, sitúan a España un 25 por ciento por debajo de la media europea.

Todo parece indicar que la intención de determinados países es la de financiar, en gran medida, la ampliación a costa de los que, por su menor riqueza, reciben los fondos estructurales y de cohesión.

La ampliación también suscita temores por la posibilidad de que pudiera producirse una incontenible corriente migratoria de personas procedentes del este que buscaran trabajo en países más prósperos de la UE, con los consiguientes problemas de tipo laboral. Contra este temor se suele argumentar que, tras su ingreso en la Comunidad, la mejora del nivel de vida en España y Portugal hizo disminuir el número de trabajadores ibéricos más baratos existentes en otros países más ricos de la UE.

Como con un tope máximo de aportación del 1.27 por ciento del PIB no se van a poder mantener los actuales programas de solidaridad en una UE ampliada, España se encuentra en difícil tesitura: aunque ferviente partidaria de la consolidación de la EU y de su ampliación a aquellos países que se sientan identificados con la idea de una Europa unida capaz de

acortar distancias, en todos los terrenos, con los EE UU, no puede hacer concesiones desviadas de lo que pudiera ser una financiación equitativa de la ampliación.

Además, se da la paradoja de que los países que más beneficios económicos pueden obtener de la ampliación de la UE son los que pretenden no pagarla e, incluso, ahorrarse algún dinero.

En general, los obstáculos que se oponen al logro de este atractivo objetivo geopolítico, o al menos lo retardan, son principalmente el egoísmo de los países ricos, el nacionalismo de los miembros que no se avienen a perder nuevas parcelas de soberanía y la resistencia de los atlantistas a ultranza a fortalecer la PESC europea.

En el año 1998, a la Presidencia británica de la UE, durante el primer semestre, le ha sucedido la austríaca en el segundo, que prepara la llamada "Agenda 2000", cuyo contenido abarca, entre otros, temas tan espinosos como la reforma institucional, la composición de la Comisión Europea, los votos correspondientes a cada país en el Consejo y las aportaciones financieras

En noviembre de 1998, la Comisión Europea presentó un proyecto que implicaría la reducción de los fondos estructurales y de cohesión en un 18 por ciento, haciéndose eco de la pretensión de varios países ricos de la UE de reducir sus contribuciones en contra de la política de solidaridad hasta ahora mantenida. Tal propuesta parece tener por objetivo inducir a España a aceptar el tope del 1.27 por ciento del PIB, que no admite hasta tener la certeza de que bastará para pagar todas las actuales políticas comunitarias y, además, hacer frente a todos los gastos de la ampliación.

Todos los indicios apuntan a que el ingreso del primer grupo de candidatos se retrasará más de lo inicialmente establecido tanto por el ritmo de progreso de los aspirantes como por los problemas internos de la UE.

CONSIDERACIONES FINALES

No todos los expertos están de acuerdo sobre las causas del fracaso económico de Rusia donde el PIB ha ido decreciendo de año en año desde la desintegración de la Unión Soviética.

Los indicadores macroeconómicos demuestran que las reformas introducidas no han dado los resultados esperados, pese a las cuantiosas ayu-

das recibidas del exterior, principalmente, del FMI y del Banco Mundial, para la transición de una economía estatal dirigida a otra de libre mercado. Rusia ha sido un pozo sin fondo.

Este fracaso suele achacarse al error del gradualismo o aproximación paulatina a la economía de mercado. Esta tesis se centra en que, en casos como el de Rusia, las reformas deben ser radicales. Así, en países donde fue aplicada esta terapia de choque, como en Hungría y en Polonia, se pudo superar con éxito la transición, mientras que en los que se recurrió al gradualismo, como en Rusia, en Ucrania, en Rumanía y en Bulgaria, la situación económica no ha mejorado.

El gradualismo fue la política seguida por Chernomirdin durante los cinco años que fue Primer Ministro y la que parece va a ser seguida por Primakov. La radical fue la emprendida por el defenestrado Kiriyenko, adalid de la reforma en profundidad del sistema económico ruso. Pero la aplicación de las reglas del libre mercado acarrea un coste social que el poder político no siempre puede afrontar.

Consecuencia de ello ha sido que actualmente el pueblo ruso culpe de sus desdichas a las reformas impuestas y no al hecho de que se haya vacilado en llevarlas a cabo de forma decidida.

Por otro lado, no todos los males de Rusia provienen de su enferma economía sino, fundamentalmente, de las carencias de un Estado de Derecho muy imperfecto. Sin el debido respeto a las leyes vigentes, con leyes contractuales imprecisas y sin un eficaz sistema fiscal un Estado arriesga su subsistencia.

La burocracia estatal, regional y local en Rusia no ha logrado desenredar la malla tejida en tiempos soviéticos. La corrupción contamina a la practica totalidad de la administración y a todas las esferas del poder, y la actividad del crimen organizado es omnipresente. Pero lo peor no es que exista la corrupción, sino que los políticos sean corruptos y mantengan contactos con la nueva oligarquía.

Occidente creyó que podía exportar a Rusia el sistema democrático imperante en esta parte del mundo, pero Rusia no es Occidente y la occidentalización de Rusia solo parece desearla una minoría ilustrada. Muchos ciudadanos rusos perciben incluso que de Occidente provienen muchos de sus males.

La creación de partidos políticos y la celebración de elecciones libres no han bastado para implantar una verdadera democracia ya que no existe

conciencia de sus valores ni sentido de la responsabilidad popular, y estas cualidades ciudadanas no se improvisan de repente y por primera vez en toda la Historia de Rusia. Por otra parte, la clase dirigente carecía de experiencia democrática y, de hecho, los que se han encargado de edificar el nuevo orden no fueron ajenos al sistema fenecido sino participes del mismo, como Yeltsin y el actual Primer Ministro Primakov en Rusia, el Presidente de Ucrania Kutchman y el de Bielorrusia Lukashenko.

Así, la celebración de elecciones alzó a candidatos que una vez en el poder se comportan como autócratas, ante la pasividad e indiferencia de la mayoría de sus votantes.

En Rusia, la privatización mal controlada de empresas estatales ha creado una oligarquía que no constituye una elite empresarial de nuevo cuño sino que es la vieja "nomenklatura" reconvertida al capitalismo. Un capitalismo basado en amistades, comunidad de intereses e influencias políticas. En Rusia, más que una economía de mercado propiamente dicha lo que existe es un mercado controlado por especuladores relacionados con la oligarquía. El resultado de todo ello ha sido una exigua minoría cada vez más rica y una mayoría cada vez más pobre, que añora el sistema comunista.

Los países occidentales en general, y Norteamérica en particular, cometieron el error de levantar a Boris Yeltsin como muro de contención a la involución comunista. Yeltsin tenía en su haber la demolición de la Unión Soviética por su rivalidad con Gorbachov y haber disuelto el Soviet Supremo a cañonazos. Impulsivo, valiente, atrabiliario, poco preparado, bebedor y, desde hace tiempo, gravemente enfermo, no ha sido capaz de llevar a buen término la transición política y económica, pese a concentrar en su persona todos los poderes que tamaña empresa requería. Presidente demócrata de la Federación Rusa por referéndum, volvió a ganar unas reñidas y amañadas elecciones presidenciales en 1996. Antes, en 1993, consiguió que se aprobara una Constitución presidencialista a su medida, que es la actualmente vigente. Tras haberse impuesto repetidamente a la Duma, dominada por comunistas y ultranacionalista, al final ha sido derrotado y humillado por ella, ya que en septiembre de 1998 no se atrevió a disolverla por temor a tener que afrontar una situación extrema como la de 1993. Actualmente, su pérdida de poder y de prestigio es evidente y su incapacidad física manifiesta.

Con la Constitución vigente, que se intentará cambiar, se armó al ejecutivo contra el legislativo que ha sido a lo largo de todos estos años fuerza paralizadora de las reformas.

Aparte de todo ello, en el seno de la Federación Rusa soplan vientos disgregadores. Los entes autonómicos se oponen a cualquier medida de Moscú que consideren centralizadora. Muchos se resisten a pagar los impuestos recaudados que deben a la Federación y algunos han llegado a prohibir, ante la escasez de víveres, la salida de productos alimenticios fuera de sus límites regionales. Las clases políticas autonómicas manifiestan mayor cohesión que las federales y son más conscientes que estas últimas de sus intereses colectivos.

La situación de Rusia a principios del año 1999 podría concretarse así:

- Crisis económica de difícil contención, con alto índice de inflación y falta de inversiones privadas externas durante mucho tiempo, tras la reciente huida de capitales.
- Peligro de disolución de la Federación Rusa, con intervención “in extremis” del Ejército si se produjeran graves brotes secesionistas.
- Estructuras estatales y administrativas necesitadas de profundas reformas.
- Partido Comunista crecido y agresivo, que pretende la involución y que tiene actualmente en el gobierno de Primakov mas representación que los partidos reformistas y liberales.
- Añoranza de los más desfavorecidos del “bienestar soviético”.
- Un ultranacionalismo que intenta abrirse camino aprovechando el malestar que provoca la tremenda crisis económica que asola al país, ultranacionalismo que goza de simpatías en algunos miembros de las FAS.
- Impopularidad creciente de Boris Yeltsin, al que tildan de muñeco de Occidente.

Previstas elecciones legislativas en 1999 y presidenciales en el 2000, se puede decir que pocos países se han jugado tanto su futuro en tan poco tiempo.

Las opciones de Primakov son muy limitadas. Si de aquí a las elecciones los ciudadanos no perciben efectos beneficiosos, es probable que Rusia inicie el próximo milenio con un giro más o menos acentuado hacia el pasado. Lo malo para el Gobierno de Primakov es que, para poner en marcha las reformas, la situación tiene necesariamente que empeorar, antes de mejorar. Un ejemplo significativo, es que si la imprescindible reforma fiscal se lleva a cabo y las empresas deudoras satisfacen al Estado sus impagos, para subsistir tendrían que regular el empleo con los consiguientes despidos de personal.

La sucesión de Boris Yeltsin es incierta y preocupante. Los candidatos a la presidencia son por ahora: Chernomirdin, rechazado por la Duma y freno de las reformas; Ziuganov, comunista demagógico que está capitalizando el descontento; el populista alcalde de Moscú, Luzhkov, oportunista favorecedor de una política proteccionista contra los "dictados occidentales"; y el ex-general Liebeb, que pretende restaurar el orden y la dignidad nacional frente a las concesiones a Occidente.

Pese a su precaria situación, no se atisban indicios de que Rusia haya renunciado a recuperar el papel de gran potencia que desempeñó la Unión Soviética antes de su desmembración. De ahí sus posturas disconformes en las crisis de Kosovo e Irak en 1998.

Rusia cuenta en su haber, en el plano internacional, con su condición de segunda potencia nuclear, el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los restos de una industria de armamento capaz de producir y exportar sistemas sofisticados de armas tácticas y de largo alcance. Sus inagotables recursos naturales (en Siberia se han descubierto nuevos yacimientos de gas) le han permitido su asistencia como observador a las reuniones del Grupo G-7; en febrero de 1998, a la celebrada en Londres.

Rusia también tiene a su favor la repercusión que podría tener su quiebra financiera en la globalizada economía mundial y sobre todo el temor de que el caos interno hiciera peligrar el control estatal de su abundante arsenal de armas de destrucción masiva.

Las relaciones de Rusia con la OTAN y su postura hacia la ampliación de esta hacia el este se ha pormenorizado con anterioridad.

Sumida en un auténtico caos político, bancarrota económica y crisis social, mitad reaccionaria y mitad nostálgica, cabe preguntarse qué salidas le quedan a Rusia a principios de 1999.

No parece probable una guerra civil generalizada en la totalidad del país, ya que no existen en la población dos partes enfrentadas entre reformistas y no reformistas. Los primeros, actualmente, son minoría. Sí pudiera estallar algún conflicto con una región o en una región secesionista.

Tampoco parece probable la implantación de una dictadura militar, por la prudente actitud de los mandos militares e inexistencia entre ellos de vocación bonapartista. El ex-general Liebeb sí podría tener respaldo militar, si empeorara la situación y se obstaculizara su acceso al poder por procedimientos legales.

Lo más probable es que, en las elecciones de 1999, la candidatura comunista sea la mas votada, como ha ocurrido en Ucrania y Moldovia en 1998. De la composición de la Duma dependerá que el giro a la izquierda sea más o menos acentuado sin volver ni mucho menos al marxismo-leninismo, ni poner en peligro el reconocimiento de la propiedad privada.

En general, no parecen probables actos políticos de violencia. Elecciones más o menos amañadas serán el procedimiento seguido para acceder al poder en el futuro próximo. Es muy probable que los poderes actuales del Presidente sean recortados, potenciándose los del Parlamento.

De cualquier forma, el destino de Rusia siempre tendrá gran influencia en el destino del Mundo. Rusia representa para Occidente una amenaza de mayor magnitud pobre, hundida, debil y caótica que compacta, saneada y desafiante, al menos a medio plazo. Los misiles con cabeza nuclear están más seguros con un Gobierno fuerte, aunque con resabios comunistas, que con otro débil sin autoridad, más aún con la ideología democrática occidental de tan difícil implantación en Rusia.

Falta decir que, aparte de los problemas y calamidades que hemos ido desgranando, Rusia tiene en su haber una posición estratégica dominante en el corazón de Eurasia, una rica historia, recursos naturales inmensos e inagotables, potencial humano único por su capacidad de sufrimiento y resistencia a la adversidad, destacados logros científicos, técnicos, culturales y artísticos y un sentimiento de amor patrio que impele a los rusos a sentirse hijos de una gran nación que más tarde o más temprano recuperará el rango que tuvo antaño.

La posición de España ante la situación de Rusia es expectante y de disposición favorable, tanto a la cooperación bilateral como dentro de la UE o de cualquier otra institución internacional, con el fin de que se recupere y sirva de contrapeso al creciente poder de su colosal vecino asiático. En principio, a Europa siempre le será mas fácil entenderse con los rusos que con los chinos.

En lo que atañe a las reformas en el Centro y Este de Europa para España debe tener prioridad la ampliación de la UE hacia el este, para acoger en su seno a los hermanos separados de dicha región, siempre que ello no sea al precio de promover diferencias o suponga aflojar los vínculos existentes entre los miembros occidentales de la UE. La ampliación hacia el este de la OTAN, con el consiguiente desplazamiento hacia oriente de su centro de gravedad, tiene menos interés para España.

CAPÍTULO CUARTO

LA ESTABILIDAD EN EL MEDITERRÁNEO

LA ESTABILIDAD EN EL MEDITERRÁNEO

Por PEDRO LÓPEZ AGUIRREBENGOA

CONSIDERACIONES GENERALES POLÍTICO-ESTRATÉGICAS

La situación del Mediterráneo ha continuado durante 1998 sin modificaciones sustanciales en su entorno general, con pautas muy similares a las del año anterior, que fueron objeto de análisis en el Panorama Estratégico 1997-98.

En una geopolítica mediterránea es preciso tener presente las realidades que confluyen en este espacio, desde su continuidad a través del Mar Negro, la periferia del Golfo y del resto del mundo árabe. También la presencia de fuerzas estratégicas globales que trascienden la región.

En este plano, los Estados Unidos son la potencia militar más importante del área, en la que tienen intereses que consideran vitales. Su postura resulta clave para cualquier negociación global sobre desarme y seguridad en la región, así como con respecto a los recursos estratégicos del Oriente Medio, donde tienen una influencia dominante en el proceso de paz. Se puede decir que es también el caso de Rusia, aunque con presencia y potencial temporalmente menguados.

Los Estados Unidos vienen mostrando un mayor interés por el proceso euro-mediterráneo y en este sentido cabe recordar la visita realizada en junio de 1998 por el Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Económicos, Sr. Eizenstat a Tunes y Marruecos, en la que formuló la propuesta de una asociación económico-comercial con países del área. Sin embargo, su esquema parece por el momento limitado y en el enfoque pesa más la

visión horizontal que tiene Washington de sus relaciones con la zona, básicamente bilaterales, con puntos fuertes como Israel y Egipto, que la dimensión vertical y multilateral que caracteriza la percepción europea. La distancia física de los EEUU hace que su problemática en el área sea distinta a la que tiene Europa por su vecindad, aunque ambos coincidan en las grandes líneas del encuadre occidental.

Por su parte, la Federación Rusa sigue con atención dicho proceso y ha expresado el deseo de ver mejorado su papel de invitado a las Conferencias Ministeriales Euromed.

En términos globales, los conflictos y tensiones aún persistentes en el área permanecen activos o larvados y los procesos de solución de los mismos no acaban de encauzarse hacia una solución definitiva.

El proceso de paz en el Oriente Medio (PPOM) ha permanecido estancado en los últimos 18 meses, a pesar de los esfuerzos desplegados por los EEUU, secundados por la Unión Europea y con el apoyo de Egipto y otros países del área. Sólo en la banda israelo-palestina se ha logrado finalmente, con las conversaciones de Wye Plantation (15-23 octubre) y la firma del Memorándum de Entendimiento y otros documentos asociados, un relanzamiento importante, aunque objeto de distintas valoraciones en los ámbitos internos israelí, palestino y árabe. Su trascendencia real vendrá dada por la capacidad de aplicación y cumplimiento de las partes.

Algo parecido ocurre con la cuestión de Chipre y persiste la volatilidad en los Balcanes, como lo ha evidenciado la crisis de Kosovo, a la postre afortunadamente contenida por la acción de la OTAN, y la aparición de tensiones en Albania, que parecen haber encontrado un cauce de solución con la Conferencia Internacional allí celebrada el 30 de octubre.

En el Magreb, la Unión del Magreb Arabe (UMA) sigue paralizada en su desarrollo. La situación argelina y las subyacentes tensiones con Marruecos, junto con el aislamiento de Libia, no auguran un pronto relanzamiento, aunque Túnez y Mauritania se muestran particularmente interesados en ello. El proceso sobre el Sahara Occidental, como veremos, mantiene su frágil andadura en la aplicación del Plan de Arreglo de las Naciones Unidas, revitalizado con la acción mediadora del ex-Secretario de Estado norteamericano, James Baker. Se ha avanzado en la identificación de votantes, cara a la realización del previsto referéndum, pero todo el proceso acusa un preocupante retraso y son muchas las incógnitas que todavía se ciernen sobre el mismo.

En el plano político-económico, un factor a tener en cuenta es que la baja de los precios del petróleo crea problemas presupuestarios a los países productores del área.

En los aledaños mediterráneos, la cuestión de Irak sigue generando tensión y controvertidas posturas, aunque el mundo árabe se muestra cada vez más inclinado a desvincular los aspectos derivados de la invasión de Kuwait y subsiguiente conflicto, es decir, el cumplimiento por Irak de las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas, en lo que el consenso de base se mantiene, de la política de contención aplicada por los Estados Unidos con relación a Irak, Libia e Irán.

La ausencia de avances decisivos en el PPOM ha avivado la desconfianza árabe e islámica hacia los Estados Unidos y el sentimiento de que practica una política de doble rasero, que mira en primer término a los intereses de Israel. Esto, en cierto grado modificado por los logros de Wye Plantation, es particularmente percibido por lo que se refiere a las posturas de las Cámaras norteamericanas. En todo caso, persiste el convencimiento de que el papel de los EEUU continúa siendo clave, tanto por su condición de única superpotencia actual como porque se supone que es el único capaz de persuadir a Israel.

El clima de impaciencia árabe ante este estado de cosas ha acentuado la petición de una mayor y más decidida implicación política de la Unión Europea en el PPOM, que ya es el mayor contribuyente en la asistencia económica a los palestinos. Pero, y en esto hay un realismo árabe a la vez que una cierta paradoja, el sentimiento dominante es que debe de hacerlo colaborando con las iniciativas norteamericanas y su papel rector del proceso. La Unión Europea, vinculada a los EEUU por los fuertes lazos de la relación Transatlántica, apoya este esquema, aunque desearía un papel político más en consonancia con sus intereses y esfuerzo en el proceso de paz. Washington e Israel, cada uno por sus razones, quieren la aportación europea, incluso incrementada, en lo económico y en las bandas multilaterales del proceso, pero pervive su reticencia a un mayor protagonismo político.

Otro foco larvado de tensión, que ha sufrido un recalentamiento, es el de las relaciones entre Siria y Turquía. Junto a factores históricos y el sentimiento sirio por la amputación en favor de Turquía de la provincia de Iskenderut, realizada en 1939 bajo mandato francés en un polémico referéndum, pesan todavía elementos del reciente pasado político en la época de la bipolaridad — Turquía como avanzada de la OTAN versus el bloque

del Este en cuya afinidad se apoyaba Siria en su lucha frente a Israel— e intereses estratégicos fundamentales, como lo es para Siria el suministro de agua del Eúfrates. En lo más inmediato, el acercamiento de Turquía a Israel, que se plasmó en el Acuerdo de cooperación militar de 1996, ha avivado los recelos de Siria, y en buena parte del mundo árabe e islámico. Jordania, que se esfuerza en mantener unas relaciones satisfactorias con Israel tras la firma del Acuerdo de Paz, ha tenido sin embargo que tomar distancias, tras un inicial aparente decantamiento en favor de participar en el trazado de ese nuevo eje regional, que se supone inspirado también por los EEUU y que recuerda el CENTO, pero ésta vez no con el objetivo de cerco de la ex-URSS, sino mirando hacia el Este islámico y el Sur árabe. También, probablemente, a los intereses energéticos derivados de la salida del crudo del Caspio.

Con este trasfondo, Turquía acusa a Siria de dar cobijo y apoyo material a los rebeldes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Similar imputación ha hecho Ankara en el pasado a Grecia, cuyo gobierno socialista del PASOK ha tenido siempre, desde los primeros tiempos del difunto Papandreu, una relación de afinidad con Siria. Se supone que en ambos casos se instrumentaliza el tema kurdo como elemento de presión sobre Ankara.

El Presidente Demirel lanzó el 2 de octubre pasado una seria advertencia a Damasco, sin excluir el “derecho de represalia”, acusando a Siria de incitar a los países árabes contra Turquía y de apoyar activamente al PKK. Esta tensión afloraba en un momento en que la cuestión kurda vuelve a la actualidad tras el acuerdo suscrito por los dirigentes de la oposición iraquí, Barzani y Talibani, en Washington, donde, por otra parte, se presentaba y aprobaba en el Congreso una proposición de ley (“Iraq liberation act”) con claros propósitos de inducir el derrocamiento de Sadam Hussein. La reacción siria hacia Turquía ha sido de moderación contemporizadora, con un llamamiento al diálogo para resolver las cuestiones bilaterales pendientes y reiterando su deseo de mantener buenas relaciones con Ankara, a la que sin embargo sigue pidiendo reconsidere sus lazos estratégicos con Israel. La firma del Acuerdo sirio-turco de Adanha (20 de octubre), facilitado por Egipto e Irán y en el que Damasco da satisfacción a las demandas de Ankara, sobre todo en lo relativo al PKK, ha puesto fin, al menos de momento, a la peligrosa tensión, cuyo estallido violento hubiese acarreado graves consecuencias para toda la región.

Por lo que respecta a Irán, en cambio, el nuevo liderazgo parece confirmar una mayor moderación y una actitud más positiva en sus relaciones

con el mundo occidental, aunque la tensión con los talibanes afganos podría acabar abriendo una nueva y peligrosa brecha en la estabilidad del área.

No cabe tampoco ignorar el factor introducido por las iniciativas nucleares de Pakistán e India que, si miran hacia la paridad entre ellos y el equilibrio estratégico de esta última con respecto a China, también deben ser vistos desde el prisma del panorama del Oriente Medio, donde la necesidad de llegar a acuerdos efectivos para crear una zona libre de armas nucleares y de destrucción masiva resulta cada vez más urgente. La actitud israelí es en este aspecto determinante, pues su supuesto potencial, real o utilizado como instrumento de disuasión, así como su doctrina defensiva, apoyada por los EEUU, de mantenimiento de una superioridad estratégica militar sobre sus vecinos, constituye un elemento que favorece la proliferación de armamentos convencionales y no convencionales en la región. Así, aunque haya tenido que renunciar a ello al desaparecer el apoyo material que le daba la ex-URSS, la política armamentista de Siria buscaba la paridad, en la probablemente justificada creencia de que sin ella cualquier negociación con Israel estaría desequilibrada. El riesgo del eventual acceso de grupos radicales a armamento no convencional agrava la amenaza terrorista y la preocupación que el futuro inspira.

Con todo, puede decirse que aunque no se ha avanzado mucho en la estabilización del entorno mediterráneo, tampoco se ha deteriorado en forma significativa ni, por el momento, han aparecido riesgos de nuevos conflictos armados entre Estados. Los riesgos de seguridad se centran, sobre todo, en los focos de tensión que perviven y en las relaciones Sur-Sur, así como la situación interna de algunos países del área, mientras que no se aprecia posibilidad de amenazas graves y directas, de carácter militar, para Europa.

Cabe concluir que el Mediterráneo, como espacio unitario que abarca a las dos riberas, continua requiriendo un marco de estabilización que contemple la seguridad de una forma global, tomando en cuenta los elementos políticos, económicos y sociales necesarios para encarar los riesgos que se derivan del carácter interactivo de todos ellos y que permitan profundizar en la senda de creación de confianza y gradual construcción de una seguridad cooperativa y de un desarrollo conjunto.

El proceso de Barcelona y los principios incorporados a su Declaración constituyen un innovativo marco cuya revitalización, como veremos, ofrece renovadas esperanzas a largo plazo. Al mismo tiempo, los diversos diálo-

gos mediterráneos abiertos por la OTAN, la OSCE, la UEO y otras instituciones como el mismo Consejo de Europa, ofrecen cauces paralelos coadyuvantes, cada uno desde su propia identidad y perspectivas específicas, que pueden complementarse aportando su experiencia. El Mediterráneo es, por otra parte, un espacio inmediato y cuenta entre las prioridades para la construcción de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea, aunque de momento no haya logrado alcanzar la consistencia y determinación necesarias. Los países ribereños de la Unión, y entre ellos España, tienen, por vocación histórica, vecindad e intereses compartidos, un importante papel promotor, como ya lo hicieron en el alumbramiento del proceso de Barcelona.

Por su parte, la OSCE, en sus operaciones en Bosnia, Herzegovina y Albania, así como en su labor en Croacia, ha mostrado su capacidad para responder efectivamente a retos políticos a gran escala, mientras que la OTAN ha asumido un importante papel instrumental en las operaciones destinadas a contener el enfrentamiento balcánico y restaurar la paz.

El Consejo Europeo de Luxemburgo (12-13 diciembre 1997) adoptó decisiones de magnitud sin precedente para el futuro del continente europeo, lanzando el proceso de adhesión de 11 candidatos, entre ellos los mediterráneos Bulgaria y Eslovenia, lo que previsiblemente ampliará en un porvenir el ámbito del proceso de Barcelona.

EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL Y EL MAGREB

Al constituir parte del inmediato entorno de España, el interés por su estabilidad ha sido una constante de nuestra política en el área, como ocurre con Francia e Italia, lo que ha llevado a un creciente diálogo y colaboración con los vecinos norteafricanos, que estuvo en la raíz del proceso que finalmente condujo al marco más amplio de la Declaración de Barcelona.

Nuestra histórica polarización en el Magreb ha perdido exclusividad, aunque haya aumentado sustancialmente en entidad; nuestra cooperación global se ha extendido igualmente al Mediterráneo oriental y a los Balcanes; y nuestra potencialidad política, en toda la cuenca, sin duda alcanzó patente virtualidad y dimensión de futuro en la Conferencia de Madrid de 1991.

Hoy, el Magreb está colectivamente inmerso en un proceso de rápidos cambios que requieren urgentes adaptaciones en los planos político, eco-

nómico y social. Se ha abierto así una etapa en la que las esperanzas van parejas con las incertidumbres propias de toda transición. Confiamos se impongan pronto las primeras y el desvanecimiento de las segundas, si en ambas riberas demostramos encontrarnos a la altura del desafío.

LA UNIÓN DEL MAGREB ARABE (UMA)

Llamada a recoger y traducir en realidades las aspiraciones de todos los pueblos magrebíes, la UMA (Unión del Magreb Arabe) posee el potencial necesario para realizar una valiosísima aportación a la Asociación Euromediterránea si, gracias a la voluntad de sus miembros, lleva a cabo la integración en su dimensión meridional.

En la actualidad, este esquema de integración regional que incluye a Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania, se encuentra paralizado, por las circunstancias ya apuntadas. Esta parálisis no es buena para los países magrebíes ni para los socios europeos, habida cuenta del potencial integrador que dicha organización podría ofrecer con vistas a la Asociación Euromediterránea, en la que la dimensión sur-sur resulta imprescindible. La integración de las economías del sur es un imperativo insoslayable, por lo que parece deseable que se lleve a efecto por impulso de los países firmantes del Tratado de Marrakech, completado por la dinámica de la Asociación en la que cada uno de ellos se relaciona a título individual con la U.E.

Las relaciones entre Marruecos y Argelia atraviesan un momento bajo desde 1994, tras el incidente del atentado de Marrakech y las sospechas de implicación argelina. Rabat impuso la exigencia de visados para los nacionales argelinos. Argel respondió inmediatamente cerrando las fronteras terrestres con Marruecos, situación que se mantiene en la actualidad.

MARRUECOS

Marruecos ha iniciado resueltamente en los años 90 una nueva y prometedora fase de su historia, ampliando sus instituciones para dar mejor cabida a una sociedad crecientemente plural en la manifestación de sus aspiraciones, para asentar el régimen político sobre bases más amplias e institucionalizadas. Un elemento fundamental de este proceso fue la reforma constitucional, aprobada en referéndum el 13 de septiembre de 1996, que introdujo el sistema bicameral. La reforma también instaura un

Estado descentralizado, sobre todo a través de la Región como entidad administrativa. La Ley sobre la Región, de abril de 1997, crea los Consejos Regionales, especie de Parlamentos en ese ámbito, con importantes atribuciones, entre otras, en materia financiera, de las dieciséis regiones en que ha quedado dividido Marruecos, incluyendo en tres de ellas el Territorio del Sáhara Occidental. Otro de los objetivos fundamentales de la reforma constitucional es la incorporación de la oposición a las tareas de gobierno. Las elecciones a la Cámara de Representantes de 14 de noviembre de 1997 dieron la victoria a la Unión Socialista de Fuerzas Populares. Por bloques, la Kutla ganó los comicios, seguida por la Wifaq y el Centro, aunque por escaso margen. En las elecciones a Consejeros de la Cámara Alta del día 5 de diciembre, el triunfo fue para el Centro. Sin embargo, la complejidad del proceso electoral y la falta de suficiente cultura política siguen propiciando una dispersión del voto, con lo que el panorama político se presenta sensiblemente atomizado.

El Rey dio encargo para formar gobierno al líder de la USFP y antiguo opositor y exiliado político, Abderramán Yussufi. El resultado ha sido un Gobierno de coalición articulado fundamentalmente en torno a la Kutla (USFP, Istiqlal, PPS y los partidos próximos a dicha coalición FFD y PSD), con el refuerzo de dos partidos de centro (RNI y MNP). En la primera reunión del Gabinete, el día 25 de marzo de 1998, se fijaron los criterios de actuación prioritarios de la acción gubernamental: refuerzo de las bases del Estado de Derecho y de la práctica democrática con una mayor atención a los derechos humanos; actuación con parámetros éticos; búsqueda de la eficacia de la administración pública; y adopción de una política de desarrollo basada en la promoción del empleo, el incremento de las inversiones y la instauración de una auténtica solidaridad social. También se percibe un componente nacionalista más marcado, que se manifiesta prioritariamente en la cuestión del Sáhara.

La Ley de Presupuestos, aprobada en agosto de 1998, es un instrumento de transición inspirado en criterios de austeridad. Sus previsiones son que el límite del déficit público se situará en el 3 por ciento del PIB, el crecimiento para 1998 se estima en un 6,8 por ciento y del 7 por ciento en el 99, siempre que la cosecha lo permita, fijando el objetivo de inflación en el 2 por ciento. Aunque la citada Ley manifiesta privilegiar y subrayar la lucha contra el paro y las desigualdades sociales, para lo que aumentan del 10 al 50 por ciento las partidas correspondientes a los Ministerios sociales, de hecho se mantiene en la ortodoxia monetaria de anteriores ejercicios.

CEUTA Y MELILLA

La celebración del V Centenario de Melilla incrementó en 1997 el nivel de reivindicaciones públicas marroquíes respecto a las dos ciudades autónomas españolas con diversas manifestaciones que, sin embargo, no tuvieron carácter oficial ni excesivo apoyo popular. La moderación del Rey Hassan II atemperó considerablemente las reacciones de los partidos políticos.

Las declaraciones del nuevo Gobierno marroquí sobre Ceuta y Melilla podrían constituir un indicio de reactivación del tema en el futuro. En la 53 Asamblea General de las Naciones Unidas la representación marroquí, como es usual, insistió en sus argumentos en favor de la apertura de un proceso de reflexión conjunta con España.

La conocida postura española de principio se combina con la idea de que, en el marco de las fundamentales, positivas e intensas relaciones bilaterales, complementadas con su pertenencia conjunta al proceso de Barcelona y otras iniciativas en el marco mediterráneo, las dos ciudades autónomas españolas de Ceuta y de Melilla no deben ser un factor de conflicto entre ambos países, sino todo lo contrario, un factor de cooperación. Existen numerosos contactos entre ambas ciudades españolas y las marroquíes próximas que permiten su desarrollo.

ARGELIA

El proceso de edificación institucional desarrollado por las autoridades del país ha venido desenvolviéndose en un clima de violencia insoportable que conmueve a la opinión pública internacional, ensombreciendo la puesta en práctica del proyecto político que España y la UE apoyan y que ha cristalizado, por primera vez, en un Parlamento donde comparten espacio islamistas, laicos y representantes de la clase política tradicional argelina. Paralelamente, el gobierno de ese país se ha esforzado en cumplir sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional, promoviendo una apertura de su economía y una liberalización cuyos resultados justifican cierto optimismo a la hora de contemplar el futuro a medio y largo plazo.

Sin embargo, el largo problema interno de Argelia ha continuado su zig-zagueante curso sin que se acabe de ver una salida fruto del consenso interno. Su raíz es compleja y a lo largo de los pasados años de crisis ha sido objeto de muy diversas y contrapuestas interpretaciones.

En síntesis, tiene un fondo común con la crisis de identidad que ha afectado a buena parte del mundo árabe en la estela de la etapa post-colonial. Ya en 1975, Anouar Abdel el Malek señalaba en su obra sobre el pensamiento árabe contemporáneo que todas las retóricas de la emancipación, penosamente elaboradas tras las independencias nacionales, se habían visto deslegitimadas. La consiguiente desarticulación social trascendió a la política y muchas capas marginadas recurrieron al islamismo como vía para encauzar sus reivindicaciones y restaurar el perdido sentimiento de comunidad.

En el caso de Argelia, puede aducirse que su menor vertebración histórica como Estado, en comparación con sus dos vecinos magrebies, unida a las características de una ocupación francesa que acabó desembocando a principios de este siglo en su anexión como departamento, sin por ello integrar a la población musulmana en plano de igualdad ciudadana, contribuyó a ahondar ese vacío de identidad. La unión creada con la guerra de independencia en torno al FLN y su doctrina política nacionalista, de marcado tono laico al principio, acabó diluyéndose con el cambio del entorno internacional en que se movía y su incapacidad de dar una respuesta estructurada y eficaz al reto del desarrollo. Un retorno a la referencia religiosa, en una sociedad donde tiene un destacado papel, fue dominando el comportamiento político de amplios sectores de población. Sin embargo, esta utilización de la religión por grupos políticos que luchan por el poder ha menguado su valor. De hecho, desde mediados de los años 80 la descomposición del poder político en Argelia habría de seguir una espiral.

El Frente Islámico de Salvación (FIS), que inicialmente era apoyado por el gobierno como forma de debilitar a otras fuerzas, se volvió en su contra. Las elecciones de 1991 dieron la victoria a los islamistas, pero los militares no la aceptaron y el proceso de transición democrática quedó comprometido, reforzándose el integrismo. Ello dió paso a una espiral de violencia, en la que se enfrentaron dos formas de autoritarismo, incapaces de encauzar un reparto democrático del poder.

En una visión retrospectiva puede pensarse que el único poder real que ha existido en Argelia desde su independencia ha sido la cúpula militar, que en la actual crisis se ha mostrado contraria al compromiso con los grupos radicales. Su política erradicadora de los mismos ha sido respondida con acciones cada vez más espectaculares del GIA. Las negociaciones entre poder militar y FIS —organización con prestigio en amplios sectores

de población— buscaban cortar la justificación política de la acción del primero. El GIA se ha atomizado como consecuencia de las disensiones surgidas en su seno a partir de 1996. Su impotencia para atacar instalaciones militares o para tender emboscadas a fuerzas del orden, como ocurría en el pasado, le ha llevado a centrar su acción en la población civil, tratando de aterrorizarla.

Cabe preguntarse si la situación argelina ha podido beneficiar políticamente la posición relativa de otros países del área, al disminuir la capacidad de acción exterior y liderazgo que tenía antaño el gobierno de Argel. Pero aunque esto fuera así, preocupa fuertemente la dificultad de controlarla a corto plazo y la amenaza de que, incluso, conduzca a una desestabilización más amplia, si no se encara una solución interna negociada con los sectores que reniegan de la violencia. Al mismo tiempo, impide el funcionamiento de la cooperación subregional a través de la Unión del Magreb Árabe (UMA).

La cierta normalidad a que había vuelto Argelia este año, tras un sangriento mes de Ramadán, se vió de nuevo alterada al principio del verano por acciones de violencia indiscriminada en núcleos urbanos. Ello refleja que, pese a la efectividad de las acciones policiales y las ofensivas del Ejército en zonas rurales, los grupos terroristas, aunque cada vez más aislados y fragmentados, conservan todavía suficiente capacidad operativa.

Las nuevas instituciones parlamentarias argelinas deberán dar prueba de su talante democrático con los debates que se avecinan en torno a temas tan importantes como el Código de la familia o el de la información, cuya reforma demanda una sociedad en rápida mutación y que espera respuestas de unas instituciones que, por primera vez, tuvieron ocasión de elegir.

Un paso nuevo y significativo en el proceso de reforma política y económica puesto en marcha por el Gobierno argelino ha sido, este año, la decisión del Presidente Zeroual de acortar su mandato, convocar elecciones presidenciales para principios de 1999 y de no presentarse a las mismas. El propósito gubernamental de dotarlas de mayor transparencia, sin excluir la concurrencia de observadores internacionales y entablando un diálogo al respecto con representantes de diferentes partidos políticos, es un signo positivo, pese al desconcierto inicial causado por el anuncio del Presidente.

El diálogo entre Argelia y la UE ha registrado un cierto estancamiento hasta el verano, por variadas razones, entre ellas el tratamiento en Gine-

bra por la Comisión de Derechos Humanos de la situación argelina al respecto, tema que despierta una fuerte sensibilidad. Si por un lado la búsqueda de una solución a la violencia en Argelia debería asentarse en el diálogo con todas las fuerzas políticas que la rechacen, por otro requiere el evitar tomas de posición que deslegitimen a las autoridades argelinas en su lucha contra el terrorismo. Argelia participa activamente en el marco del proceso de Barcelona, estando en curso de negociación el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

A los efectos propios de la larga crisis interna se han venido a añadir factores circunstanciales o exteriores que dificultan el panorama económico. Parece que la economía argelina —el dato varía según las fuentes—, habría registrado en 1997, en contra de lo que se esperaba, un crecimiento solo próximo al 0.5 por ciento o negativo de hasta un -1 por ciento, mientras que el paro sigue situado, según cifras oficiales, en un 28-29 por ciento. La producción agrícola disminuyó en 1997 en un 24 por ciento, lo que se atribuye a la sequía que afectó al país. La producción industrial registró una caída, en 1997, del 7,2 por ciento, salvo en el sector del gas e hidrocarburos, donde se ha registrado un crecimiento. Sin embargo, la evolución a la baja del precio del petróleo, como ocurre con otros países productores, hace que la situación futura pueda verse afectada, dificultando ulteriormente el proceso de transición económica.

TÚNEZ

Con la perspectiva de las elecciones Presidenciales y Legislativas en 1999, nada hace prever que dichas consultas electorales vayan a traer cambios o sobresaltos de importancia en la vida política tunecina. Formalmente, existe un pluralismo político y el régimen ha puesto en marcha reformas constitucionales para aumentar el número de escaños de la oposición.

Los derechos de carácter económico y social priman sobre los de índole política, respecto de los cuales la actitud del régimen está muy condicionada por la estrategia de estabilidad para hacer frente al integrismo islámico. Por ello, la situación de los Derechos Humanos en el país sigue siendo el principal motivo de fricción con la UE. La actitud de Túnez es de no abordar, en el marco del diálogo político regular derivado del Acuerdo de Asociación con la UE, sino las líneas generales relativas a los DDHH y no casos individuales, que estima son asuntos internos en los que no cabe injerencia externa.

Con una estructura económica crecientemente diversificada y coordinadas macroeconómicas razonablemente satisfactorias, Túnez es un importante socio comercial para la UE en el Magreb y a ella se dirigen la mayor parte de los flujos comerciales del país norteafricano. Además, Túnez cuenta con una amplia clase media y la renta per cápita más alta del Norte de África, a excepción de Libia. Todo ello hace de Túnez un país con buenas expectativas y una estabilidad política y económica muy valiosa en el contexto magrebí. Túnez, junto con Marruecos, es el único país del Magreb que ha firmado de momento un Acuerdo de Asociación con la UE (1995), que entró en vigor el primero de marzo de 1998.

La consolidación del pluralismo político y de los valores democráticos debería permitir continuar, con perspectivas favorables, su proceso de desarrollo.

Las relaciones hispano-tunecinas están enmarcadas en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, firmado en 1995 y fijada en sólidos anclajes forjados por la historia, la presente comunidad de intereses y una representación similar del porvenir.

La República Tunecina ha puesto rumbo a la asociación euromediterránea con una encomiable determinación, que no deja lugar a dudas con respecto a la posición que desea ocupar en la comunidad internacional del siglo XXI.

LIBIA

Un esquema global para la región mediterránea debe contar con el apoyo y el concurso de todos los países ribereños. A largo plazo resultarán evidentes las carencias que cualquier mecanismo de integración que no incluya el componente libio. Su cooperación con las Naciones Unidas en aras de una resolución de los conflictos pendientes y fin de las sanciones internacionales, lo que motivó que Libia no pudiese participar en el proceso de Barcelona, permitiría una pronta reincorporación de Libia a todos los foros en los que se decide la suerte de nuestra región.

Mediante la Resolución del Consejo de Seguridad 1192, de 27 de agosto, Naciones Unidas aceptó la propuesta formulada en su día por la Liga Árabe y por la propia Libia de que los dos sospechosos de haber perpetrado el atentado del avión de la Pan-Am sobre Lockerby sean entregados a un tercer país y juzgados en él por un tribunal escocés bajo el imperio de la ley escocesa.

La posibilidad de llegar a un acuerdo para la celebración de un juicio a los sospechosos del caso LOCKERBY en un tercer país supone un giro considerable de la política mantenida en relación con este asunto, tanto por Washington como por Londres en los últimos años. Supone una sustancial flexibilización de las exigencias, probablemente inducida por la falta de resultados de la política mantenida hasta hoy y las crecientes dificultades para mantener el régimen de sanciones del CSNU dada la cada vez más extendida oposición a las mismas entre los países árabes y africanos y la mayor flexibilidad mostrada por otras capitales occidentales, aunque en el marco del pleno respeto a las decisiones del CSNU.

El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe (El Cairo, 15 y 16 de septiembre) endosó con menos contundencia de lo esperado la demanda libia de mayores presiones sobre los EEUU y el Reino Unido. En todo caso, los socios árabes del proceso de Barcelona vienen reiterando con insistencia la incorporación de Libia al mismo en cuanto su situación internacional lo permita.

SAHARA OCCIDENTAL

De acuerdo con el Plan de Arreglo de NNUU para el Sahara Occidental y los Acuerdos de Houston (16 de septiembre 1997) el proceso de identificación de votantes se completó el pasado 2 septiembre, con el resultado de 147.350 censados, con excepción de los solicitantes pertenecientes a los grupos tribales controvertidos y varios centenares de residentes en extranjero. Se confía que se avance en la identificación de estos últimos así como, simultáneamente, en la tramitación de los recursos de los identificados pertenecientes a las tribus no controvertidas. En Houston se llegó a un compromiso: los individuos pertenecientes a las agrupaciones tribales controvertidas (identificados con las claves H41, H61 y J51/52) podrían presentarse individualmente para la identificación sin que ninguna de las dos partes (Marruecos y Frente Polisario) pudiesen patrocinarles, pero tampoco impedir activamente su presentación ante la Comisión de Identificación de la MINURSO. También hay que tener en cuenta que un solicitante identificado no adquiere automáticamente la condición de votante, sino que es interrogado por la Comisión de Identificación competente para determinar su elegibilidad para participar en referéndum.

La cuestión de los controvertidos sigue estancada. La exigencia marroquí de identificar a los 65.000 miembros de estas agrupaciones tribales es

interpretado por el Polisario, que desconfía, como una vía para ganar tiempo y perpetuar el status quo, ya que obligaría a un ejercicio poco menos que imposible de encuadrar las agrupaciones en centenares de subfracciones. El Secretario General de la ONU ha expresado su preocupación en torno a este extremo en sus últimos informes al Consejo de Seguridad, por el riesgo de bloqueo del proceso si esta cuestión no se soluciona.

La conclusión del proceso de identificación de votantes acercará el momento más delicado para las partes de encarar las siguientes etapas de la preparación del referéndum.

En el caso de que se superen las dificultades en torno a la identificación de los conflictivos, las fases siguientes tampoco resultan sencillas. El ACNUR prosigue con los trabajos preparatorios para repatriación de refugiados según el Plan de Arreglo, aunque no sin dificultades en su misión. La operación de repatriación, cuya duración inicial se estimaba en 15 semanas, se podría prolongar por espacio de varios meses. Tampoco se ha resuelto la cuestión del asentamiento de los refugiados una vez repatriados. Todo ello hace previsible una ulterior demora en los plazos contemplados para la realización del referéndum.

En relación con el conflicto del Sahara Occidental, España siempre ha mantenido que se trata de un problema derivado de la descolonización, que sólo se resolverá de manera definitiva cuando el pueblo saharauí pueda pronunciarse sobre su destino en un referéndum de autodeterminación libre, justo y con las debidas garantías internacionales. España mantiene su postura de total neutralidad y de apoyo sin reservas a la labor de la ONU. Esta neutralidad no quiere decir indiferencia, y por ello España sigue dispuesta a colaborar con la ONU en todo aquello que se nos solicite, siempre que cuente con la conformidad de las partes.

Ya se han concretado varias vías de colaboración (envío de dos expertos en las tareas de identificación en misión de carácter exclusivamente técnico el pasado mes de mayo, y la puesta a disposición del Hospital Militar de Las Palmas a los miembros de la MINURSO). Además, España ha dado 4 millones de dólares al ACNUR para contribuir a las tareas de repatriación en el marco del Plan de Arreglo de NNUU.

En cualquier caso, lo importante es la aplicación íntegra del Plan de Arreglo para que pueda por fin celebrarse el referéndum en condiciones de libertad, transparencia y justicia. La mediación del Enviado Personal del

Secretario General de la ONU, James Baker, sólo tendrá sentido si es capaz de persuadir a las partes, con el apoyo de la comunidad internacional, para proseguir con la aplicación del Plan de Arreglo y los Acuerdos de Houston.

GIBRALTAR

A pesar de las razonables propuestas españolas, la situación de este contencioso permanece virtualmente estancada. La postura española es bien conocida. La situación de Gibraltar constituye un anacronismo colonial, una situación anacrónica surgida de las guerras dinásticas de principios del siglo XVIII, al que debe ponerse fin. La descolonización sólo puede realizarse, de acuerdo con Utrecht y la doctrina de Naciones Unidas, mediante la retrocesión del territorio a España. Ello es particularmente relevante ante los recientes intentos unilaterales por alterar el status actual de Gibraltar mediante una modificación de su Constitución otorgada de 1969. Por ello, Gibraltar supone un elemento desestabilizador, no sólo en las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y España, sino dentro de la propia UE, en este último plano debido al continuo intento de las autoridades locales de la Colonia por asumir competencias que no les corresponden en virtud del Art. 227.40 del Tratado de las Comunidades Europeas, y pretender convertirse en un cuasi Estado miembro; y al negarse incluso a aplicar acuerdos a los que han llegado el Reino Unido y España, por ejemplo, sobre la utilización conjunta del aeropuerto.

En diciembre de 1997, y dentro del Proceso de Bruselas, España realizó una propuesta de contenido político para la solución del contencioso. Las autoridades locales gibraltareñas la han rechazado sin más. Para Londres, sin embargo, continúa en estudio y sigue siendo válida como elemento de negociación.

En su intervención ante la 53 Asamblea General de las Naciones Unidas, el Ministro español de Asuntos Exteriores recordaba que la histórica labor de la Organización en materia de descolonización no podrá considerarse completa mientras persistan situaciones como la de Gibraltar. Todos los años la Asamblea General renueva sus llamamientos a España y al Reino Unido para que continúen sus negociaciones con vistas a poner término a la situación colonial de Gibraltar. El actual proceso negociador parte de la llamada Declaración de Bruselas de 1984, en la que los Gobiernos de España y el Reino Unido se comprometieron a establecer un proceso

negociador. Durante la ronda de negociaciones de 1997 se presentó por parte española una propuesta que permitiría a España recuperar la soberanía sobre Gibraltar, manteniendo las actuales ventajas de sus habitantes, otorgándoles un grado de autonomía política en el marco del Estado Autónomo español mayor de la que actualmente disfrutan, y aceptando, como garantía adicional de la buena fe española, el mantenimiento de una soberanía compartida por el Reino Unido y España durante un largo período transitorio. Esa propuesta debería poder constituir la base de un Acuerdo que, de una vez por todas, resolviese este doloroso conflicto para España.

EL ORIENTE MEDIO

El proceso de paz

En la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 se sentaron los principios en los que debe inspirarse el Proceso de Paz, entre los que destacan las Resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que prevén la retirada israelí de los Territorios Ocupados a raíz de la Guerra de los Seis Días, en 1967, y que, en definitiva, vienen a consagrar el principio de "paz por territorios". Asimismo, se creó la arquitectura del Proceso de Paz, mediante el establecimiento de negociaciones bilaterales directas entre Israel y cada uno de los Estados árabes (Jordania, Siria y Líbano) y entre israelíes y palestinos.

Paralelamente, se ideó una estructura de negociaciones multilaterales para abordar cuestiones de interés regional en cinco grupos de trabajo (seguridad y desarme, refugiados, desarrollo económico regional, agua y medio ambiente).

Se combinaba así la exigencia israelí de un cauce bilateral, con la cobertura internacional. Aunque el núcleo central de los acuerdos de paz debe ser alcanzado por las partes, el papel de los copatrocinadores y otros contribuidores internacionales, así como de la labor en la banda multilateral, actuando como catalizadores, es esencial. Cabe pensar que habría sido muy difícil para las partes, por sí solas, asumir tan complejo reto y mantener su impulso.

La filosofía de Madrid partía de un enfoque gradual que permitiera ir avanzando hacia una solución final del problema palestino y que, entretanto, fomentara la confianza entre las partes. Así nacen los denominados

“Acuerdos de Oslo” (Declaración de Principios de 1993 y Acuerdo Interino de 1995), que establecen una fase provisional o de autonomía para los Territorios Palestinos, durante la que se llevará a cabo la retirada de tropas israelíes de estos Territorios y se transferirán las competencias en materia civil a la Autoridad Palestina. Según los Acuerdos, esta fase provisional tendrá cinco años de duración y, después, se negociará el Estatuto Final, en el que se abordarán temas como el futuro de Jerusalén, los refugiados, los asentamientos y las fronteras.

El Proceso de Paz en Oriente Medio avanzó con rapidez durante los cinco primeros años, a pesar de sus dificultades intrínsecas, gracias a la determinación de muchos de los dirigentes políticos de la región, incluido el Primer Ministro israelí, Yizthak Rabin, que pagó con su vida su valiente apuesta por la paz.

Desde que en mayo de 1996 llegara al poder la coalición del Partido del Likud con partidos nacionalistas y religiosos, el gobierno dirigido por el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, ha adoptado una política más rígida e intransigente que, hasta el reciente Memorandum de Wye, había impedido progresos en el Proceso de Paz más allá de la retirada de tropas de Hebrón efectuada en enero del pasado año. El actual Primer Ministro israelí insiste en la absoluta prioridad de garantizar la seguridad de Israel, sobre una base en la que prima el componente territorial, a la par que su coalición rechaza la posibilidad de un Estado palestino, opción que la plataforma laborista israelí no excluye desde el pasado año.

En 1998 la UE ha continuado expresando su profunda preocupación por la falta de progreso en el proceso de paz en el Oriente Medio y la amenaza que ello supone para la paz y la estabilidad en la región. A través de los esfuerzos desplegados por su Enviado Especial para Oriente Medio, el diplomático español Miguel Angel Moratinos, así como a través de sus relaciones diplomáticas con las partes implicadas e interesadas y su contribución económica, la UE se ha esforzado en contribuir al relanzamiento del proceso, aportando ideas y propuestas. Los contactos con los Estados Unidos y el apoyo a su iniciativa, cuyos sucesivos pasos ha seguido con atención, han sido significativos. Entre otros datos cabe recordar la reunión de Londres en mayo y las visitas al Oriente Medio de los Presidentes del Consejo y de la Comisión.

Paralelamente al papel político que desempeña la UE (Unión Europea), hay que destacar su esencial contribución económica y financiera al Proceso de Paz, como principal donante de ayuda al pueblo palestino (aprox.

1437 millones de dólares USA en los últimos cinco años). Esa ayuda tiene un importante cometido político en el caso de los palestinos, cual es permitirles disminuir la desigualdad intrínseca que, como parte, tienen con respecto a Israel, facilitando así una mayor capacidad de negociación.

El Consejo Europeo de Cardiff (15-16 junio 1998) formuló un apremiante llamamiento a Israel para que reconociese el derecho de los Palestinos al ejercicio de la libre determinación, sin excluir la opción de un Estado, a la par que solicitaba del pueblo palestino la reafirmación de su compromiso con el legítimo derecho de Israel de vivir dentro de fronteras seguras y reconocidas. Recordaba también la oposición de la UE a los asentamientos israelíes en los territorios ocupados y su compromiso con la cooperación en materia de seguridad, que debe ser total, constante y sin reservas. Igualmente, expresaba su preocupación por la falta de avances en las bandas siria y libanesa del proceso de paz, insistiendo en la necesidad de su reactivación para lograr una paz global basada en el principio de paz por territorio y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Aún dando la bienvenida a la aceptación israelí de la Resolución 425 del Consejo de Seguridad, renovaba su llamamiento para una retirada plena e incondicional de las fuerzas israelíes del Sur del Líbano. Finalmente, reafirmaba su intención de continuar colaborando, a través de su Enviado Especial, sus relaciones diplomáticas e implicación económica y a través de sus relaciones de amistad con las partes interesadas, tanto dentro como fuera de la región, para restaurar la confianza y reforzar el proceso de paz.

Los ojos están ahora puestos en el cumplimiento de lo acordado en Wye, con la esperanza de que se genere también un avance en las otras bandas del proceso.

CHIPRE Y TURQUÍA

El contencioso chipriota no solamente afecta a las relaciones de la Unión Europea con ese país, sino también a las relaciones de la Unión Europea con Turquía, a las relaciones greco-turcas y a la estabilidad del Mediterráneo Oriental. Por ello, Chipre se presenta con frecuencia más como objeto que como sujeto de los contenciosos que polarizan su entorno. Los factores históricos y anímicos que concurren, que a veces se presentan con tintes apasionados que dejan poco margen a la lógica política, no hacen sino acentuar los perfiles de divergencia.

La Unión Europea sigue firmemente comprometida con el objetivo de lograr un arreglo político y pacífico de la cuestión de Chipre, sobre la base de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, a fin de que se pueda poner término a la división de la isla. La postura de la UE es que se debe conseguir la federación bicomunitaria y bizonal de dos entidades políticamente iguales. La adhesión de Chipre se contempla desde esa perspectiva de paz civil y reconciliación, como lo indicó el Consejo Europeo de Luxemburgo. Sin embargo, en el momento del inicio de las negociaciones de adhesión de Chipre, en marzo de 1998, la UE hubo de tomar nota con sentimiento de que no se había podido lograr un acercamiento a una solución política mutuamente aceptable. La comunidad turcochipriota respondió negativamente a la invitación del Gobierno de Chipre para que enviase representantes a las negociaciones, aunque el ofrecimiento permanece abierto. Al mismo tiempo continuaba la preocupación por el excesivo nivel de armamentos en Chipre, lo que contribuye a aumentar la tensión en la región. En consecuencia, deben redoblar los esfuerzos para que todas las partes implicadas entiendan y aprecien los beneficios que obtendría la Isla unificada con su ingreso en la Unión Europea. Del mismo modo, no cabe duda de que para contribuir a la solución del contencioso chipriota se requiere seguir impulsando las relaciones entre la Unión Europea y Turquía.

De Turquía se espera por muchos que decida entre las opciones europea o asiática, laica o islámica, oriental u occidental. Sin embargo, es preciso valorar su carácter específico como puente entre diversas culturas, que constituye una de sus mayores riquezas en todos los ámbitos y respetar y alentar sus opciones dirigidas a la consolidación de su sistema democrático, condición necesaria para su integración progresiva en Europa, de la que es aliado en la OTAN. Su doble condición europea y asiática le da un valor estratégico difícilmente igualable. Turquía puede desempeñar el papel de lugar de encuentro entre Europa y Oriente Próximo, el Cáucaso y el Asia Central y de centro irradiador de estabilidad y prosperidad, en unos momentos en los que el interés energético en la zona del Caspio cobra una señalada importancia internacional.

Estas primeras expresiones se fueron matizando en las semanas siguientes, sin que por ello deba considerarse que la situación se ha recompuesto.

La UE ha reiterado su marcado interés por la estabilidad política, económica y social de Turquía, a la que considera como un factor de estabili-

zación en toda el área. El Consejo Europeo de Luxemburgo (14 de diciembre 1997) confirmó la elegibilidad de Turquía para ser miembro de la Unión, en base a los mismos criterios aplicados a otros candidatos, elaborando una estrategia al efecto. En parte es comprensible la decepción que mostró Ankara, que anunció que “no habrá más diálogo político entre Turquía y la Unión Europea”, según declaró el Primer Ministro Yilmaz, al tiempo que añadía que se seguiría adelante con el proceso de integración del norte de Chipre en Turquía en paralelo a las negociaciones de adhesión de la República de Chipre a la Unión.

En marzo de 1998, la Comisión formuló diversas propuestas para promover el desarrollo de las relaciones sobre una base sólida y evolutiva. A pesar de las diferencias surgidas en cuanto a la futura adhesión y el hecho de que Ankara declinó participar en la Conferencia de Londres, a la que se invitó a asistir a todos los candidatos, existe una manifiesta voluntad de mejorar las relaciones bilaterales en beneficio mutuo, aunque ello requiere también una cooperación activa por parte de Ankara y una positiva actitud de acercamiento en cuanto a la cuestión de Chipre. Permanece la esperanza de que Turquía acepte asistir a la II Conferencia que debe desarrollarse bajo la actual presidencia de Austria y reactive su diálogo con la UE.

LOS BALCANES

Ex-Yugoslavia

Si por un lado se va consolidando el proceso de separación e independencia de Croacia, Serbia y Eslovenia, la paz en Bosnia-Herzegovina avanza con lentitud en el marco de los Acuerdos de Dayton, incluso con incertidumbres preocupantes. Las elecciones del pasado mes de septiembre se han saldado con un reforzamiento de los partidos políticos ultranacionalistas dirigidos por Radovan Karadzic. Sin embargo, la reelección de Alija Izetbegovic como representante bosnio en la presidencia colegiada, que permite contemplar una continuidad en la aplicación de los acuerdos de Dayton, y la elección del moderado Zivko Radisic como representante serbobosnio en la misma, junto con la ausencia de Momcilo Krajisnik, son datos positivos.

La Consolidación de la paz en la ex-Yugoslavia y su desarrollo institucional, reconstrucción y retorno de los refugiados ha constituido una de las prioridades de la UE durante el pasado año, continuando con una asistencia por un importe de más de 250 millones ECU. El papel de la UE

como primer contribuyente a la asistencia internacional quedó ratificado en la cuarta Conferencia de Donantes para Bosnia y Herzegovina (Bruselas 7-8 mayo 1998). La asistencia humanitaria ha sido objeto de especial atención. Sin embargo, a pesar de algunas mejoras, los acontecimientos en la región y en especial la crisis de Kosovo pueden conducir a más graves retos.

En términos generales, las relaciones de la UE con los países de la zona (Bosnia y Herzegovina, Croacia, RF de Yugoslavia, ex-República Yugoslava de Macedonia y Albania) han continuado en las directrices de las Conclusiones del Consejo de abril de 1997, ratificadas el 28 de abril de 1998. A finales del presente año se decidirá respecto a la continuación en 1999 del régimen comercial, teniendo en cuenta el cumplimiento de los condicionantes políticos establecidos. Las relaciones con la RFY han estado dominadas por el desarrollo de la crisis de Kosovo y las sucesivas gestiones cerca del Presidente Milosevic para poner fin al uso indiscriminado de la violencia, junto con los similares llamamientos al liderazgo albanés de Kosovo. En junio de 1998, el Consejo Europeo de Cardiff requirió al Presidente Milosevic para que: pusiese fin a las operaciones de las fuerzas de seguridad contra la población civil y retirase las fuerzas de seguridad utilizadas para la represión; facilitase la supervisión internacional en Kosovo, el retorno de los refugiados y el libre acceso de las organizaciones humanitarias; y avanzase en el diálogo político con el liderazgo albanés de Kosovo. En otro caso, se advertía, la comunidad internacional tendría que optar por una acción mucho más contundente. Al mismo tiempo, se adoptaban una serie de medidas complementarias (embargo de armas y material, denegación de visados, congelación de créditos de exportación y prohibición de nuevas inversiones, así como prohibición de vuelos entre la RFY y la UE). La UE se opone a la independencia de Kosovo, pero está en favor de un status especial, con amplia autonomía, dentro de la RFY. En cuanto a Croacia, la postura de la UE continua basándose en el Acuerdo de Paz Dayton/París, y respecto a Bosnia Herzegovina, en los objetivos establecidos en el Consejo de Aplicación de la Paz de Bonn (diciembre 1997).

ALBANIA

Por lo que atañe a Albania, la UE ha reactivado su diálogo político con Tirana y ha continuado prestando ayuda para superar la crisis política, económica y financiera del pasado año.

MALTA

Tras la suspensión por Malta de su solicitud de adhesión a la UE en 1996, lo que ha impedido su probable inclusión en el paquete de candidaturas prioritarias adoptado en Luxemburgo, se celebró un Consejo de Asociación en abril de 1998, en el cual ambas partes acordaron continuar el futuro desarrollo de sus relaciones (Declaración Conjunta sobre Diálogo Político). Posteriormente, las elecciones generales de Malta han dado paso a un nuevo Gobierno que ha vuelto a situar entre los objetivos el relanzamiento de la solicitud de adhesión.

LA SEGURIDAD DE EUROPA Y LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DEL MEDITERRÁNEO

Por lo que se refiere al potencial de conflicto en el Mediterráneo, los análisis coinciden en que, como ocurre en otras partes del mundo, en esta nueva era que ha sucedido a la guerra fría y la bipolaridad se ha producido un sensible cambio de pautas. El riesgo de conflictos armados entre Estados ha decrecido, también en el Oriente Medio desde los Acuerdos de Camp David de 1979 y el Tratado de Paz entre Israel y Egipto, así como el más reciente con Jordania y los Acuerdos suscritos con los palestinos, aunque el peligro es todavía comparativamente elevado ante el bloqueo del Proceso de Paz. En cambio, existe un riesgo aumentado de conflictos internos que, casi siempre, tienen repercusiones internacionales de mayor o menor alcance. Esto representa un complejo reto de seguridad.

En las sociedades en transición, como ocurre en la ribera Sur del Mediterráneo, las viejas fuentes de conflicto, como los antagonismos culturales, étnicos o religiosos se ven potenciadas por factores nuevos como la falta de adecuado gobierno, los problemas demográficos, la escasez o mal uso de los recursos naturales, la degradación medio ambiental o la proliferación de armamentos. Los remedios ante esta problemática son tan complejos como sus causas. Implican la necesidad de un esfuerzo continuado que combine una variedad de instrumentos. Se trata de una tarea que requiere la participación de organizaciones internacionales, así como la cooperación multilateral y bilateral entre los Estados. La dimensión preventiva, encaminada a desactivar la tensión, detener la violencia inmediata, o aplicar políticas preventivas que encaren las causas subyacentes de conflicto (construcción de la paz) es una cuestión clave. Una vez que han eclosionado, los conflictos son mucho más difíciles de resolver.

La construcción a largo plazo de la estabilidad y la seguridad incluye, además del diálogo político reforzado y de medios clásicos de seguridad, elementos como la cooperación, el comercio, el apoyo a la democratización, el buen gobierno, y el reforzamiento de la sociedad civil. La diversidad de instrumentos subraya la necesidad de enfoques coherentes y globales que integren esos varios elementos en una perspectiva global y a largo plazo.

La prevención de conflictos a corto plazo puede incluir medidas que van desde la mediación/negociación a las presiones diplomáticas o económicas, apoyadas en caso necesario por la disposición a recurrir a medios militares (p.e. la estrategia aplicada en la ex-Yugoslavia). Por otra parte, la prevención y posibilidad de acciones en plazos breves presupone una adecuada alerta temprana. Ello implica el análisis de las tendencias a largo plazo y de los factores de violencia subyacentes, así como el seguimiento de eventos a corto plazo, desencadenadores de la misma.

Desde su responsabilidad como uno de los actores fundamentales para la estabilidad internacional y por evidentes razones, incluida la proximidad, la Unión Europea está llamada a jugar un papel activo en el Mediterráneo, ayudando a prevenir o gestionar las crisis. Esto tiene que ser realizado en estrecho contacto con otros países de la región, con la ONU, con otras organizaciones internacionales o regionales competentes que tienen una dimensión mediterránea o han establecido un diálogo en la zona (Consejo de Europa, OSCE, UEO, OTAN, pero también la Liga Árabe o la UMA en el Magreb). Una estrecha concertación con los Estados Unidos, según lo establecido en el Plan de Acción Transatlántico, es esencial.

A título de síntesis, puede decirse que la mayor dificultad para los países a ambos lados del Mediterráneo es cómo asegurar una solución pacífica y negociada de sus diferencias, basada en la cooperación y en la necesidad de encuadrar un destino común, en un período de transición que, con diferente extensión y contenido, les afecta a nivel individual como Estados así como a nivel regional y subregional.

El interés por la seguridad y la cooperación en el Mediterráneo se ha incrementado considerablemente a lo largo de los pasados años, dando lugar a diversas iniciativas europeo-occidentales. Todas ellas tratan de buscar los medios para aportar una contribución específica a la estabilidad de las regiones vecinas.

Se trata de una aproximación gradual que debe tener en cuenta las sensibilidades de los países de la ribera Sur, que manifiestan recelos ante

lo que pudiera presentarse como un intento por parte europea de proyectar en ese ámbito sus propios esquemas y desean que tales iniciativas desemboquen en un verdadero diálogo, para construir conjuntamente un sistema de estabilidad y seguridad en la zona, teniendo en cuenta también sus intereses y sus compromisos en el contexto de otras instituciones regionales a las que algunos pertenecen, como la Liga Arabe o la OUA.

La globalidad con la que los países de la ribera Sur contemplan la estabilidad y seguridad del área debe de ser valorada y entendida. Para muchos de ellos, como se refleja en su postura en el marco de los diversos diálogos mediterráneos en curso, los factores socio-económicos, culturales o ambientales, por ejemplo, constituyen duras realidades que tienen que encarar y consiguientes riesgos de seguridad interna o en el contexto de las relaciones subregionales, tan o más importantes en lo inmediato como los de la seguridad en sentido tradicional. Se pide con insistencia no sólo que Europa lo tenga suficientemente en cuenta en tales diálogos y en la cooperación global con ellos sino igualmente en su propio esquema de seguridad a nivel europeo.

EL PROCESO DE BARCELONA COMO INICIATIVA INNOVADORA PARA LA CREACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO DE UNA ZONA DE ESTABILIDAD Y PROSPERIDAD COMPARTIDA

En el "Panorama Estratégico 1997-98" elaborado por este Instituto se realizaba un análisis más pormenorizado del proceso euro-mediterráneo que condujo a la Conferencia y Declaración de Barcelona de 27 de noviembre de 1995. Partiendo de ese análisis, corresponde ahora, en esta nueva edición, realizar, sobre todo, una evaluación y prospectiva de sus desarrollos inmediatos.

Como síntesis y recordatorio cabe señalar que en el proceso de Barcelona, los países mediterráneos europeos de la UE, y entre ellos no cabe pasar por alto la acción española, jugaron un papel promotor clave. Fue la consecuencia de la maduración desde los años setenta y ochenta, al filo de la incipiente cooperación política europea (hoy Política Europea de Seguridad y Cooperación, más conocida por las siglas PESC), de la necesidad de una relación global y multilateral que completase el tradicional marco de relaciones bilaterales entre los países de la UE y sus asociados del Sur. Su ventana de oportunidad política llegó con los profundos cambios en la política mundial y el escenario europeo registrados en la primera

mitad de esta década, seguidos de la crisis de Kuwait y los avances en el Proceso de Paz en el Oriente Medio (PPOM) tras la Conferencia de Madrid de 1991 y los Acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos. El objetivo era promover la paz y la estabilidad en el Mediterráneo, en la estela de los mencionados cambios geopolíticos y de los nuevos retos emergentes, a través de una asociación innovadora capaz de contribuir decisivamente a resolver las muchas y complejas cuestiones de la región. Su lógica estribaba en que la cooperación política, económica y social, conducente al desarrollo, la modernización y la creación de un espacio de prosperidad compartida, serían los pilares de la estabilidad y lograrían la paz en la zona.

Desde esta filosofía, Barcelona era concebida en relación con el Oriente Medio como un proceso "post pacem", en un momento en el que el PPOM parecía estar encauzado y con solución al alcance de la mano. Barcelona pretendía ayudar, a través de la creación de una sinergia positiva, a la resolución de los conflictos y tensiones en la región, pero no trataba de sustituirse a los procesos ya existentes en la misma. Al mismo tiempo se suponía que la globalidad del proceso de Barcelona era, a largo plazo, de tal envergadura e importancia para todos sus miembros que ello lo colocaría, de alguna forma, supra partes.

Los efectos negativos sobre el proceso de Barcelona del estancamiento del Proceso de Paz en el OM se hicieron claramente visibles, especialmente en el capítulo político de Barcelona, pero también en otros aspectos, como la posibilidad de desarrollar la cooperación subregional. La lógica de la postura de los miembros árabes de Barcelona era que su aceptación de participar con Israel en el mismo era una consecuencia del avance del PPOM y la cooperación que entrañaba constituía una compensación. Detenido el PPOM, no era lógico que Israel obtuviese dicho beneficio. Esa misma lógica se aplicaba a los cauces propios del PPOM, en su banda multilateral, como la Conferencia Económica MENA.

La II Conferencia Ministerial Euromed en Malta (1997) fue por ello, y por haberse tratado erróneamente de aprovecharla para relanzar el PPOM, un punto álgido pero, a pesar de sus dificultades, constituyó igualmente una ocasión de reflexión. Se empezó a desarrollar a ambos lados del Mediterráneo la conciencia de los peligros que se derivaban de convertir el proceso de Barcelona en un rehén permanente del PPOM, cuando sin ignorar la inevitable conexión, su globalidad y alcance deberían situarlo en otro plano, para que pudiese desarrollar los principios y objetivos com-

partidos formulados en la Declaración y el Programa de Trabajo. La Conferencia Ministerial ad hoc de Palermo, celebrada en junio de 1998 y encargada de evaluar la andadura del proceso, evidenció una clara y compartida voluntad política de mantener sus avances y llevarlo a ulteriores desarrollos. Los intereses comunes, globales y a largo plazo dan al proceso un fundamento de renovada solidez.

La lógica de Barcelona combina el amplio abanico de elementos incorporados a sus tres Capítulos y su Programa de Trabajo. Son dimensiones interdependientes y que se deben reforzar mutuamente. En conjunto, deben proveer una mayor confianza, una gradual convergencia y la base para construir entre todos sus miembros, gradualmente, un sistema específico euromediterráneo de estabilidad y seguridad multilateral o colectiva que puede beneficiarse de otras experiencias previas positivas, como las derivadas del proceso europeo, y de un nuevo concepto para la relación inter-regional.

En ese sentido, los mismos Acuerdos de Asociación entre la UE y los países del Sur, que Barcelona pretende complementar con una cooperación multilateral, constituyen un poderoso instrumento para promover dicha convergencia.

Las incertidumbres y dificultades son todavía importantes y el camino largo, pero se puede decir que el proceso de Barcelona es, para sus miembros, la mejor opción disponible. Durante décadas de inestabilidad en la región nunca se había intentado o sido posible algo similar.

El objetivo es promover no sólo una relación integral Norte-Sur, cuyo ambicioso propósito inmediato está en la creación para el 2010 de una zona de libre comercio —como instrumento clave de esa construcción euromediterránea de un área de prosperidad compartida pero no como su objetivo último—, sino también una asociación subregional, que es más necesaria en la medida de la asimetría existente en este respecto en relación con Europa, su evolución y nuevas realidades. Una de ellas es la conciencia de la indivisibilidad esencial de los procesos políticos, la seguridad y el desarrollo socio-económico, tanto a nivel nacional como internacional.

Para hacer frente a este reto, las ideas de base incorporadas a la Declaración de Barcelona requieren:

- Un suficiente grado de consenso sobre la universalización y consolidación de los valores democráticos.

- Un nuevo concepto global de la seguridad en la región basado en relaciones pacíficas, cooperación, y un sistema de garantías y controles recíprocos.
- Una política social orientada al aperturismo y la tolerancia de los valores de los demás, junto con la búsqueda de un común denominador.
- La reducción de la asimetría existente entre los niveles de integración y desarrollo socio-económico en los ejes Norte-Sur y Sur-Sur.
- Una sinergia positiva y convergencia entre los procesos existentes en el área, trabajando para lograr una mayor cooperación y la integración de las políticas en los diversos campos.

El concepto de estabilidad invocado en Barcelona no tiene un sentido estático sino dinámico, asociado al desarrollo de las directrices incorporadas a la misma. Entre ellas, cabe recordarlo, se incluyen: el respeto mutuo y de las obligaciones derivadas del derecho internacional y de los instrumentos regionales de los que los miembros son parte; la igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en asuntos internos; la igualdad de derechos de los pueblos, incluyendo el derecho a la autodeterminación; el Estado de derecho y los principios democráticos esenciales así como las libertades fundamentales políticas y civiles, que no pueden dissociarse de un modelo de desarrollo más equilibrado para la región; la diversidad, pluralismo y tolerancia; la solución pacífica de conflictos.

Desde esta perspectiva, el Capítulo I de la Declaración de Barcelona incorpora importantes objetivos y medios para el reforzamiento del diálogo político y el logro de la estabilidad y la paz. Sin embargo, falta todavía un lenguaje estratégico común en la región, por lo que es preciso desarrollar una base conceptual conjunta que aborde los principales elementos.

El proyecto/objetivo de una Carta de seguridad y estabilidad debe ser concebido como un marco flexible, basado en una percepción compartida de los principios y fines acordados en Barcelona que constituya un instrumento político voluntario y de carácter evolutivo y que, sin obligar jurídicamente, implique un compromiso moral destinado al desarrollo de dichos principios, proporcionando la estructura apropiada para la contrucción progresiva de la asociación en este ámbito.

La tarea no es fácil por diversas circunstancias, que van desde la pluralidad conceptual a las situaciones políticas o los conflictos que todavía perviven en la zona, cuya solución requiere una reconciliación.

Otros obstáculos tienen raíces históricas, anímicas, socio-económicas y culturales que precisan de la gradual construcción de la asociación, buscando una confluencia de percepciones sobre los principales riesgos para la estabilidad y la creación de una seguridad común, teniendo en cuenta la diversidad de tradiciones y valores que conforman la respectiva identidad. Entre estos riesgos figuran: el terrorismo, el crimen organizado, la violencia política y social, los problemas económicos, los conflictos culturales — incluidas las cuestiones religiosas— y las tensiones migratorias. En algunos aspectos habrá que esperar a que concurran las condiciones políticas necesarias para que la convergencia pueda producirse. Será también necesario compatibilizar los compromisos que se derivan de la pertenencia de los países miembros de Barcelona a diversas organizaciones regionales con proyección en la materia. Finalmente, se precisa una mayor transparencia, intercambio de información y creación de confianza, ya que pervive a veces en el Sur la sospecha de que Europa trata de proyectar e imponer sus propios esquemas de seguridad, más que construir conjuntamente uno nuevo, adaptado a las circunstancias y necesidades específicas de la región euro-mediterránea.

Sólo desde esa perspectiva, participativa y colectiva, que proporciona el marco multilateral, es posible concebir con cierto optimismo el futuro del Mediterráneo, que por supuesto deseamos pacífico y armónico. Sólo a través de él cabe augurar con cierta confianza la necesaria convergencia de los diversos sistemas ideológicos, atenuar en lo posible las importantes disparidades socioeconómicas, atemperar los excesos de los nacionalismos exaltados y sus secuelas y, en definitiva, hacer frente a la múltiple conflictividad que pone en entredicho la paz, la estabilidad y la prosperidad de toda la región.

Después del momento crítico representado por la Segunda Conferencia Ministerial Euromed (Malta, abril de 1997), el Proceso de Barcelona ha quedado revitalizado en la Conferencia Ministerial ad-hoc de Palermo del pasado mes de junio, que, como consideran todos los países miembros, europeos y árabes, reafirmó el espíritu de Barcelona y dió un nuevo impulso al Partenariado.

En Palermo se han logrado enfocar los conceptos de seguridad y estabilidad desde un punto de vista global, incluyendo en los mismos las ideas de estabilidad económica y social. Asimismo se ha vuelto a aclarar la complementariedad del Proceso de Barcelona y del PPOM, que han de ser considerados paralelos pero interactivos con una positiva influencia del primero, pero sin quedar como rehén del segundo.

Palermo supo concretar decisiones específicas que han sido unánimemente consideradas como alentadoras (diálogos sobre migraciones y terrorismo, avances en los trabajos para redactar la Carta para la Paz y la Estabilidad, aprobación del proyecto español de Conferencia sobre la Cooperación Regional, entre otros temas) tanto por parte de los Asociados del Sur como de los países europeos más involucrados e interesados en un eficaz desarrollo de la Asociación Euromediterránea.

Por lo que se refiere a las perspectivas inmediatas, en abril de 1999 tendrá lugar en Stuttgart la III Conferencia Ministerial Euromed —de gran importancia también por coincidir con la renovación de los presupuestos MEDA— que, según las prioridades hasta ahora fijadas, deberá reforzar el concepto global de seguridad y estabilidad, desarrollando ulteriormente el contenido sustantivo de la Asociación Euromed.

A la confirmación y consolidación de un clima general positivo emanado de la Conferencia ad hoc de Palermo, para lograr el objetivo propuesto de que empuje un mayor y equilibrado e interactivo desarrollo del proceso de Barcelona en sus tres Capítulos, se une un renovado espíritu de participación y menos desconfianza de los asociados, unidos a una mayor disposición de verdadero diálogo y sensibilidad hacia los planteamientos de los anteriores por parte europea. Se aprecia una actitud árabe más pragmática y flexible en la que, sin renunciar a la conexión del proceso de Barcelona con el PPOM ni a mantener su postura al respecto, pesa más el convencimiento de la necesidad de preservar la globalidad de perspectivas e intereses comunes que se desprenden del primero.

EL FORO MEDITERRÁNEO

Precursor, a menor escala, del proceso de Barcelona, agrupa a 11 países (España, Italia, Francia, Grecia, Portugal, Malta, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Turquía). La Sesión Ministerial de Ravello (1996), seguida de la de Argel (1997), confirmaron la importancia de su mantenimiento como foro informal y flexible, laboratorio de ideas mediterráneas, orientado especialmente, desde entonces, sin merma de su carácter específico, hacia una aportación más sustantiva al proceso Euromediterráneo de Barcelona. Desde Argel y hasta la Sesión Ministerial de Palma de Mallorca (20-21 de abril de 1998) ha correspondido a España la presidencia del Foro. Durante ese período se ha logrado llevar a cabo una labor importante dentro de esa línea conductora, que ha ayudado a trasladar al marco

de Barcelona iniciativas como el inicio de sendos diálogos sobre terrorismo, migraciones y circulación de personas, así como aportaciones conceptuales a las tareas relativas a la seguridad, la estabilidad y diversas áreas de cooperación en los capítulos económico y socio-cultural. Esa aportación, en último término reflejada en las Conclusiones de Palma de Mallorca, quedó proyectada en la reunión ministerial ad hoc Euromed de Palermo a que ya se ha hecho referencia y continua, bajo la actual presidencia maltesa del Foro, cara a la III Conferencia Ministerial Euromed de Stuttgart.

LOS OTROS “DIÁLOGOS MEDITERRÁNEOS”

La mayoría de los miembros de la Unión Europea lo son a su vez de la OTAN que, junto con la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, el Consejo de Europa y la Unión Europea Occidental, tienen dimensiones de diálogo mediterráneo de mayor o menor entidad. Por el Sur no podemos olvidar las instituciones a que pertenecen sus ribereños: Liga Árabe y Unión del Magreb Árabe sobre todo, aunque esta última esté en un letargo por las razones políticas conocidas. Finalmente, en el marco específico del proceso del Oriente Medio está, en lo económico, la Conferencia Económica para el Norte de África y Oriente Medio (MENA). En el de la seguridad regional no hay que olvidar las conexiones con acuerdos de control de armamentos y desarme TNP (Tratado de No Proliferación), CWC (Tratado de Armas Químicas), BWC (Tratado de Armas Biológicas Tóxicas) y el CTBT (Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares).

Esto plantea la pregunta de cuál ha de ser la aportación de éstas y otras entidades u organizaciones internacionales (UNESCO o Unión Interparlamentaria, por ejemplo) al diálogo mediterráneo y su conexión con el Proceso de Barcelona, teniendo en cuenta las diversas características y contenidos de tales instancias.

Desde la perspectiva de la Unión Europea, es este último el que centra y debe centrar, por su globalidad, el esfuerzo de diálogo euromediterráneo. Sin embargo, todas las aportaciones pueden coadyuvar, si se mantiene el principio de complementariedad y coherencia entre iniciativas que a veces tienen contenidos similares pero componentes y cometidos institucionales distintos, de tal forma que se apoyen mutuamente, sin interferirse.

En este sentido, la misma España ha inspirado con fuerza el diálogo mediterráneo de la Nueva OTAN, desde el Concepto Estratégico de la

Alianza, aprobado en la Cumbre de Roma de 1991 y la Declaración de la Cumbre de Bruselas de 1994 hasta el acuerdo al respecto adoptado en el Consejo ministerial de Sintra, refrendado en la Cumbre de Madrid. Se ha elevado dicho diálogo con la creación del Grupo de Cooperación Mediterráneo. Sus primeros contactos con los seis países (Egipto, Marruecos, Túnez, Jordania, Israel y Mauritania) que participan actualmente en el diálogo 16+1 son alentadores.

Sin embargo, es preciso tener presente las sensibilidades que, por diversas razones, perduran en los países árabes con respecto a las iniciativas mediterráneas de las organizaciones europeo-occidentales de seguridad. En este sentido y para menguar esas desconfianzas, por parte europea se ha venido desarrollando una labor explicatoria sobre aspectos como las EUROFOR, EUROMARFOR, o la fuerza anfibia hispano-italiana creada en la Cumbre bilateral del 10 de septiembre de 1997.

EL DIÁLOGO MEDITERRÁNEO DE LA OSCE

El establecimiento de relaciones de la OSCE con los países no miembros es incluso anterior al Acta Final de Helsinki de 1975, ya que las recomendaciones de las consultas de Helsinki de 1973 establecían que la CSCE debía conocer los puntos de vista de "los Estados situados en las regiones vecinas, en particular los Estados mediterráneos". Desde el fin de la bipolaridad en Europa, la OSCE ha dedicado considerables esfuerzos al desarrollo de sus relaciones con tres categorías de países no europeos, entre ellos el grupo de los Países Mediterráneos Socios para la Cooperación (PMSC), que incluye a Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel y Jordania. Los otros dos grupos son el asiático y el que abarca a países del Próximo y Medio Oriente.

Las directrices de la Reunión Ministerial de Copenhague, que forman la base de los trabajos sobre la Carta, evocaron nuevamente las relaciones con los Países Socios para la Cooperación reiterando su conciencia de la invisibilidad de la seguridad y afirmando que el reforzamiento de la seguridad y la cooperación en las regiones vecinas, especialmente en la del Mediterráneo, es un factor importante para la estabilidad de la región de la OSCE, por lo que contempla una cooperación más estrecha "a fin de promover las normas y valores compartidos por los Estados miembros de la OSCE".

Desde la visión de la Unión Europea, las actividades desarrolladas en el seno del Grupo de Contacto con los PMSC, creado al efecto en la Cum-

bre de la OSCE de Budapest de 1994, la acción de la OSCE se enfoca como un complemento específico, de acuerdo con la Plataforma de seguridad cooperativa, como foro de diálogo sobre la seguridad en Europa. El Grupo no tiene un carácter cerrado y es susceptible de ampliación futura, como ha ocurrido con la decisión adoptada este año de incorporar a Jordania.

Se contempla por ello dar más sustancia al Grupo de Contacto, por ejemplo aprovechando la experiencia de la OSCE en los mecanismos de prevención de conflictos, dimensión humana, cooperación regional, o medidas de confianza y seguridad en el ámbito político-militar (i.e. Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos del Hombre o el Centro de Prevención de Conflictos). Desde un enfoque de verdadero diálogo, es importante promover un mejor conocimiento de la OSCE y su labor a nivel de dirigentes y opinión, aumentar el intercambio de información e incentivar a los Asociados a presentar temas de análisis y participar en determinadas reuniones o actividades concretas de la Organización.

CAPÍTULO QUINTO

IBEROAMÉRICA

IBEROAMÉRICA

Por JOSÉ SÁNCHEZ MÉNDEZ

El año 1998 puede considerarse generalmente positivo para Iberoamérica, si bien los excelentes resultados, en datos macro económicos, hayan sido inferiores a los alcanzados en 1997. Pero la mayoría de los habitantes de la región considera sin embargo que el futuro no es nada alentador, al menos eso es lo que se desprende de una gigantesca encuesta efectuada por Corporación Latinobarómetro, entidad sin ánimo de lucro con sede en Santiago de Chile, que inició sus actividades con ayuda de la Unión Europea. Más de 17.500 entrevistas en 17 naciones de la zona, (con alguna ausencia notoria, como la de Cuba) han permitido obtener una buena radiografía del subcontinente, toda vez que es la tercera vez consecutiva que se ha realizado esfuerzo tan señalado. Desde el Río Grande hasta la Tierra de Fuego a los ciudadanos iberoamericanos la situación les parece preocupante, pues el 77 por ciento cree que su país está en decadencia o estancado. Cabe por consiguiente preguntarse si las instituciones iberoamericanas son lo suficientemente fuertes y estables para soportar una desilusión cada vez más notoria, si bien cuentan todavía con los respaldos de la mayoría, con una media del 63 por ciento en México y Suramérica y de un 66 por ciento en Centroamérica. Pero los habitantes de la región expresan su desencanto con el funcionamiento del sistema democrático, con el cual un 65 por ciento no se encuentra nada satisfecho, excepto en Uruguay y Costa Rica, naciones con destacadas tradiciones de participación ciudadana, donde un 60 por ciento de la población está de acuerdo con el desarrollo de la democracia.

Quizás sea a ello a lo que se debe una creciente actitud de los ciudadanos en favor de gobiernos autoritarios, incluso en países donde se venía prestando un apoyo formal a los usos democráticos, tal como es el caso de México, donde en tan sólo un año los partidarios del autoritarismo han superado el 30 por ciento de la población, creciendo ocho puntos en relación con el año anterior. Pero este avance del autoritarismo va unido a la creencia generalizada de que sus gobiernos cada vez mandan menos, cayendo del 60 al 48 por ciento, con referencia al año anterior, la opinión de que el Gobierno era la institución que disponía de mayor poder. Así mismo, ha disminuido en cinco puntos la creencia de que las multinacionales y las grandes empresas sean otra gran fuente de poder, al descender al 44 por ciento. ¿Quiénes han aumentado su influencia o poder en el continente? Hay opinión unánime en la región de que son los partidos políticos y los militares, aunque en Centroamérica la ciudadanía ha percibido una pérdida de influencia de las Fuerzas Armadas (del 28 al 18 por ciento), como consecuencia de cierta normalización democrática, debido a los devastadores conflictos bélicos ocurridos en la década pasada.

ASPECTOS POLÍTICOS

Para James Petras, sociólogo y profesor de la universidad neoyorquina de Binghamton, dos de los principios básicos de la transición a la democracia en Iberoamérica, la alternancia y que los partidos gobernantes no pudieran utilizar los recursos del Estado para perpetuarse en el poder, se encuentran hoy día gravemente amenazados. En su opinión, si bien el principio de la alternancia política persiste, ha perdido gran parte de su significado para muchos electores, que han mostrado su creciente desinterés y absentismo electoral, motivado por la incapacidad de los partidos y dirigentes políticos para implantar procedimientos que realmente aseguren el cumplimiento de las reglas del juego democrático por parte de todos durante las campañas electorales y eviten que, aunque cambien los partidos y los líderes en el poder, se lleve a cabo la misma política.

Según Petras, la segunda amenaza es la reaparición del continuismo, si bien lo ha hecho dentro del marco electoral y no en el contexto de un régimen militar. Desde siempre, en Iberoamérica se ha mantenido el criterio de que los abusos del Estado contribúan a la formación de una cultura política autoritaria, no sólo en la perpetuidad de la concentración de poder personal sino en el institucional de las Fuerzas Armadas, con la reducción de posibles candidatos a la sucesión. Para el conocido sociólogo la exis-

tencia de determinados intereses facilitaba la corrupción política, por lo que era necesario eliminar una de las claves del *continuismo*, la reelección presidencial. Sin embargo, varios gobiernos han iniciado reformas constitucionales para perpetuarse en el poder con recursos e influencias estatales y asegura Petras que más de la mitad de la población iberoamericana vive en la actualidad bajo *regímenes continuistas*. Concluye el profesor diciendo que ello supone desviarse considerablemente de las normas y prácticas de la democracia y que dichos regímenes autoritarios de carácter civil han nacido en un principio en circunstancias de abierta competencia política y con el objetivo o excusa de garantizar que no volvería a imponerse en el país un régimen militar, pero que sus semejanzas en forma y contenido con el pasado hacen inútiles los esfuerzos para marcar una clara ruptura con el mismo, por lo que de hecho facilita un retorno a la militarización de la política, de la mano del nuevo autoritarismo electoral.

En su edición del "*Strategic Survey*" de 1998, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres expresa la convicción que en Iberoamérica, los militares, si bien han regresado a sus cuarteles, no han renunciado a influir u obtener el poder, aunque sea para ello utilizando el juego democrático establecido. Cita como ejemplo la designación del general Hugo Banzer como presidente de Bolivia en mayo de 1997, realizada dentro de unas limpias elecciones, pero que permitieron al antiguo dictador recuperar el poder y participar nuevamente en la vida política del país. Tras enumerar otros casos similares de diversos militares en diferentes repúblicas iberoamericanas, el IISS advierte que antiguos y actuales oficiales de las Fuerzas Armadas están emergiendo no solamente como aspirantes al poder presidencial sino también actuando en la sombra, como elementos muy influyentes en gobiernos civiles elegidos democráticamente. Argumenta el caso del general Augusto Pinochet, quien tras su abandono en marzo de 1998 como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, por su nombramiento como senador vitalicio de acuerdo con las previsiones constitucionales de 1980, elaboradas durante su presidencia, puede participar e influir sobre los presupuestos económicos y otras importantes decisiones políticas.

El citado instituto londinense continua afirmando el caso de otros militares que intentan asumir cuotas notables de poder, pero por caminos menos constitucionales, y toma como referencia el de las Fuerzas Armadas mexicanas, al incrementar su influencia y adquirir mayor protagonismo en la lucha contra las guerrillas zapatistas y los cinco grandes cárteles de la droga cada vez mas poderosos en la vida del país. Cita así mismo el

caso de Colombia, donde el Ejército ha alcanzado un influyente poder a nivel regional y local, con la excusa de combatir a la guerrilla, los narcotraficantes y los escuadrones paramilitares, y añade a la lista a Ecuador, donde considera a las Fuerzas Armadas como una de las instituciones más populares del país, prestigio adquirido por su papel modernizador cuando los buenos años de los ingresos del petróleo en la década de los 70. El IISS menciona también a Perú, en el que Alberto Fujimori se apoya en los militares para fortalecer su posición, sobre todo a partir de la operación de rescate de los rehenes capturados por la guerrilla en la embajada japonesa, acción realizada en abril de 1997. El IISS finaliza su análisis insistiendo que en Iberoamérica la amenaza a la estabilidad democrática no procederá en el futuro de golpes militares sino de oficiales capaces y deseosos de llenar vacíos de poder institucional, social y político en una región con cierta estabilidad democrática e índices notables de crecimiento económico, pero también gravemente afectada por la escalada del crimen organizado, muy vinculado a su vez al narcotráfico y el fermento no erradicado de la guerrilla, particularmente en Colombia, México y Perú.

A comienzos de septiembre de 1998 se celebró en Panamá la XII Cumbre de jefes de Estado y de gobierno de las catorce naciones integrantes del Grupo de Río, a la que no asistieron los primeros mandatarios de Argentina, Brasil y Uruguay, debido, entre otras razones de índole doméstica, a los graves reveses sufridos por sus economías durante la crisis internacional del verano de 1998. En la actualidad, este grupo está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, más dos países que, con carácter rotatorio, representan a Centroamérica y el Caribe. En la Cumbre, los cuatro socios del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) más Perú condicionaron la incorporación al Grupo de Río como miembros de pleno derecho de los demás países centroamericanos y caribeños que la habían solicitado a una discusión a fondo sobre la oportunidad, conveniencia y características de esta ampliación. Como razón principal adujeron que la suma de miembros a la agrupación nacida en 1986, supondría la creación de una nueva Organización de Estados Americanos, aunque sin Estados Unidos y Canadá. En mi opinión, esta actitud es un craso error porque si Iberoamérica debe y tiene que hacerse oír con fuerza y sin tutela ni presiones ante los dos poderosos vecinos de Norteamérica, ha de hacerlo en bloque y con una sola voz, al igual que la Unión Europea. En Ciudad de Panamá, Iberoamérica demostró el avance en la consolidación

de los procesos democráticos, pero también retrasos en la puesta a punto de mecanismos capaces de generar confianza y amortiguar las consecuencias de la crisis económica surgida en el verano de 1998. Una deuda externa de 640.000 millones de dólares consume una gran parte del ahorro interno, influye en los presupuestos, programas de desarrollo y en el combate contra la pobreza y el paro. En Panamá, el Grupo de Río instó al Fondo Monetario Internacional a un mayor control multilateral del flujo de capitales especuladores que volatiza capitales y castiga a los más débiles.

LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA

Violencia urbana, guerrilla, confrontación indígena, narcotráfico y diferencias fronterizas continúan siendo los más graves problemas que dañan la estabilidad del subcontinente iberoamericano.

Violencia Política

En la 39 Asamblea Anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias del 12 al 18 de marzo de 1998, se advirtió que la *violencia política* alcanza unos niveles muy superiores a los de la tasa media mundial, que se traduce en un profundo impacto en la vida social y económica de la región. En el informe sobre "Epidemiología económica de la violencia urbana", elaborado por el economista Juan Luis Londoño para el BID, se señala que anualmente hay en la región unos 140.000 homicidios, que cada iberoamericano pierde al año una media de tres días de trabajo a causa de la violencia y que 28 millones de familias sufren un robo o un hurto cada año, estimando que la violencia es en Iberoamérica cinco veces más alta que la que se produce en el resto del mundo. La violencia tiene enormes costes económicos pues la destrucción de bienes equivale a un 14,2 por ciento del producto interior bruto regional y en capital humano se pierde el 1,9 por ciento del PIB iberoamericano, equivalente al gasto total en la enseñanza primaria, llegando a perderse el 4,8 por ciento del PIB en recursos de capital. En opinión de diversos expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, la oleada de violencia evita que la economía iberoamericana crezca entre dos y tres puntos más respecto al PIB cada año. Pocos son los que discrepan de este coste, si bien los especialistas, los *violentólogos*, no coinciden en las causas y posibles soluciones del problema pues, mientras Londoño y el BID lo achacan a la falta de educación,

posesión de armas y consumo de drogas y de alcohol, otros economistas, entre ellos el peruano Adolfo Figueroa, consideran que el único factor causante es la pobreza y la desigualdad social.

La guerrilla

Como comentábamos el año pasado en la edición de Panorama Estratégico 1997-1998, la desaparición del bloque socialista dejó a la *guerrilla* sin ideología ni modelo social, por lo que su mensaje se vió reducido y perdió su credibilidad. Por otro lado, los largos años de clandestinidad llevaron a cierta profesionalización del guerrillero, que ha convertido las llamadas vacunas o impuesto revolucionario, el secuestro y su participación en el narcotráfico en una forma de vida cómoda y rentable que no está dispuesto a abandonar tan fácilmente, razón por la cual gran parte de los grupos revolucionarios iberoamericanos se resisten a desaparecer tras el final de la “guerra fría”. A su vez, la *guerrilla* se ha convertido en reemplazo o sustitución del Estado en muchas regiones, principalmente en lo que se refiere a servicios sociales y asistenciales, por lo que la Autoridad del Estado ha desaparecido en amplias regiones de varios países iberoamericanos.

Al mismo tiempo, como advierte el conocido politólogo Román Ortiz, la continuada acción guerrillera, junto a la incapacidad de las Fuerzas Armadas respectivas para neutralizar sus actividades y frenar su extensión, ha llevado consigo la proliferación de grupos paramilitares, pasando estos últimos de ser grupos de extremistas a convertirse en auténticos ejércitos privados y señala que entre los factores más importantes de autoalimentación de la *guerrilla* están la pobreza y la fragilidad del Estado. En opinión del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el uruguayo Enrique Iglesias, la incidencia de la pobreza y sus niveles absolutos continúan siendo más altos que en 1980, golpeando de manera especialmente fuerte a las zonas rurales. Por ello, sostiene Iglesias, corregir esa situación a través de una mayor estabilidad social y política y un mayor crecimiento económico constituye el gran desafío de la región para el comienzo del siglo XXI, toda vez que en la actualidad la pobreza crea un clima sociopolítico extremadamente tenso, al proporcionar una masa de desposeídos dispuestos a unirse a movimientos armados de distinto signo. Igualmente, en numerosas ocasiones los gobiernos no pueden garantizar el funcionamiento de determinados servicios básicos tales como la seguridad pública o la administración de justicia, amén de otras prestaciones, como la de la seguridad social. Prueba palpable de ello, asegura Román Ortiz, es que el

90 por ciento de los delitos que afectan a la seguridad ciudadana quedan impunes en los distritos periféricos de ciudades como Bogotá, Lima, México o Caracas. Esta fragilidad de la Administración, en concreto la de la justicia, crea las condiciones necesarias para que proliferen la violencia, pues la falta de autoridad del Estado crea un vacío que grupos guerrilleros o paramilitares tienden a ocupar. También, en muchas ocasiones, la guerrilla sustituye a la Administración en la realización de determinadas funciones, pasando a ser la base social que todo grupo armado necesita para sobrevivir. A todos estos factores hay que sumar la complicada geografía del subcontinente, que dificulta la cohesión del Estado, ya que los recursos nacionales no pueden superar las dificultades naturales que presentan selvas, grandes ríos, orografía imposible o desiertos.

Un aspecto muy notable a considerar es la compleja relación entre la guerrilla y la población indígena, en la que se entremezclan las fuerzas de seguridad y, como veremos más adelante, los narcotraficantes. Los grupos guerrilleros suelen operar en las regiones más remotas, en medio de las fronteras internacionales, justo las que habitan los indios, ya que son los mejores lugares para evadir al Estado, realizar acciones ofensivas y posteriormente cruzar la frontera. Como consecuencia, al compartir el terreno con la guerrilla, y a veces con los narcotraficantes, en particular en Colombia, Guatemala y Perú, deben luchar por mantener un difícil equilibrio con los diversos grupos armados de la región. Por otro lado, los gobiernos nacionales pretenden identificar, dentro del cuerpo social, aquellos grupos vulnerables a la influencia subversiva y las comunidades indígenas suelen ser señaladas como uno de estos grupos.

Desde el comienzo de la guerrilla, los indios han luchado en Colombia por independizarse del FARC, el M-19, el ELN y otras formaciones guerrilleras rurales, intentando evitar la infiltración de los insurgentes y verse forzados a prestarles su apoyo, mientras desde el otro bando las fuerzas de seguridad acusaban a los indios de connivencia con la guerrilla. En Perú, los indígenas se encontraron entre dos fuegos, por una parte las tropas peruanas y por la otra a Sendero Luminoso, siendo millares los asesinados, asumiendo cada lado que los que se titulaban campesinos neutrales apoyaban a la otra parte, hasta que los militares peruanos cambiaron la actitud al comprobar la falsedad de sus afirmaciones. Millares de ashininka se vieron forzados a unirse a Sendero Luminoso o facilitarles un apoyo económico, que incluía en ocasiones la producción de hoja de coca, y si bien en los comienzos de la década de los 90 consiguieron expulsar de su territorio al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), hacerlo con

Sendero Luminoso parece algo imposible. En opinión de la socióloga peruana María Isabel Remy, las comunidades indígenas resisten cada vez con más fuerza la dominación e intimidación de Sendero Luminoso, aliándose poco a poco con los militares.

Las Fuerzas Armadas guatemaltecas consideraron en un principio que una gran parte del pueblo maya constituía un apoyo para los antiguos guerrilleros que hoy militan en el partido político URNG o Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca. La URNG no es un movimiento indígena y su ideología no contempla las reivindicaciones políticas y sociales de los mayas, pero la represión de los indios por los militares llevó a millares de ellos a unirse a dicha Unidad Revolucionaria. Pequeños grupos armados desgajados del movimiento Katanista de origen indígena dieron pie en Bolivia a que las fuerzas de seguridad iniciasen una seria ofensiva para erradicarlos, ante el temor de que fuesen penetrados por Sendero Luminoso, aunque según el antropólogo Xavier Albó, dichos grupos, si bien utilizaban lemas y nombres indígenas para atraer el apoyo campesino, nunca han estado integrados por los indios bolivianos. Similar situación vivió en Ecuador la guerrilla Puka Anti, en quechúa Sol Rojo, violentamente reprimida por el ejército, que consideraba estaba influida igualmente por Sendero Luminoso, pero en la cual nunca militaron indígenas, toda vez que su base la integraba la población estudiantil de Guayaquil.

Para la indigenista Donna Lee Van Cott, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) representa una anomalía tanto entre los grupos guerrilleros como en los movimientos indígenas en Iberoamérica, por las circunstancias que dieron lugar a su nacimiento y posteriormente a su transformación, la extraña mezcla de sus integrantes y apoyos y el conjunto de demandas étnicas culturales e izquierdistas de base nacionalistas. Según Van Cott, el EZLN mexicano surgió por la fusión de dos grupos; uno compuesto por intelectuales de ideología maoísta, no originarios de Chiapas ni indígenas, y antiguos miembros de organizaciones guerrilleras izquierdistas de México, pero que posteriormente se trasladaron cerca de Chiapas; el segundo lo formaban un pequeño grupo de activistas indígenas que se disgregó del movimiento indio pacifista de Chiapas y que huyeron a la selva Lacandón. La terrible bajada de los precios del café en el mercado internacional, a principios de los 90, que arrastró a la quiebra a muchas cooperativas campesinas, junto con la suspensión de los subsidios estatales, fomentó el descontento entre los indios del Estado. De la fusión de ambos grupos nacería una organización con la estructura, la estrategia y los símbolos militares que conjugaban la ideología de un movi-

miento marxista armado y ciertas características indígenas, entre las que están: demandas básicas de los indígenas pacíficos de Chiapas, la llamada a la dignidad, la autodeterminación, el respeto por la cultura e identidad indígena y con un significado número de afiliados mayas, muchos de los cuales solamente conocen los idiomas indios. Pero aunque el movimiento indianista y el EZLN son incompatibles, hoy por hoy van de la mano a fin de obtener beneficios mutuos.

CONFRONTACIÓN INDÍGENA

La *confrontación indígena* con el Estado en los últimos años ha agravado la frustración de los indios que pretenden formular sus reclamaciones políticas. Altercados violentos importantes han ocurrido recientemente en Bolivia, Ecuador y México, como expresión del desafío de las comunidades indígenas a la autoridad estatal, debido a las continuadas violaciones de sus derechos territoriales y humanos. Mientras que en algunas naciones iberoamericanas han logrado el reconocimiento y protección mediante reformas legales y constitucionales, continúan siendo desproporcionadamente los más pobres de los pobres y víctimas frecuentes de innumerables abusos.

En una conferencia pronunciada en la National Defense University norteamericana, Donna Lee Van Cott decía que una mejor comprensión de los conceptos de Seguridad y Defensa, desde el punto de vista de las comunidades indígenas, nos ayudaría a valorar con mayor rigor cómo las políticas nacionales desempeñan un papel que puede agravar o ayudar a la solución del conflicto interétnico en Iberoamérica. Aunque desde las perspectivas nacionales, las relaciones indígenas-Estado difieren notablemente dentro de la región, sin embargo los aspectos relativos a la Seguridad Nacional son coincidentes en términos generales, defensa de la soberanía nacional e integridad territorial y lucha contra el narcotráfico y los movimientos armados. Pero el significado Seguridad Nacional es diferente para las comunidades indígenas, gobiernos o fuerzas armadas, lo cual incide notablemente en sus relaciones recíprocas.

Los pueblos indígenas se consideran a sí mismos como naciones y su concepto de *Seguridad nacional* va unido intrínsecamente a su supervivencia. Además de la seguridad física —defensa frente a la coacción y violencia del exterior— pugnan por proteger su seguridad cultural como instrumento de conservar a la nación indígena como una entidad social,

territorial y política. La diversidad étnica y cultural de los 40 millones de seres humanos que componen las decenas de grupos indígenas diversos existentes en Iberoamérica representa una barrera, a veces infranqueable, para su integración, toda vez que prefieren conservar una forma propia de ver el mundo —ni mejor ni peor, simplemente distinta— y ajena al concepto de desarrollo de la sociedad industrial. Debemos aceptar que la precaria economía de subsistencia de las comunidades que los rodean, las enfermedades que su sistema inmunológico no está preparado para combatir, junto a las formas de vida occidental, no son factores ni circunstancias que permitan romper su aislamiento voluntario como forma de mantener su propia identidad. Los indígenas no conocen el concepto de fronteras ni de propiedad y para ellos el aspecto de seguridad más importante es, además de retener las tierras que han dominado por generaciones, mantener el derecho a regirlas como bienes comunales. La tierra no es simplemente un recurso económico para los indios, es también garantía de gobierno autóctono y de autonomía, la base de la comunidad indígena como organización social, el instrumento por el que transmiten a sus descendientes su cultura y su identidad. En un durísimo comunicado publicado el 13 de enero de 1998, la Iglesia católica denunciaba a las empresas petrolíferas y madereras que expropiaban las tierras de los indios, muchas veces “con complicidad de los poderes públicos”. Según el Vaticano, los indígenas son considerados “inversores de sus propias tierras” y “despojados de ellas y de su cultura” y, contra lo habitual, apuntaba directamente a los responsables: “la élite terrateniente y las grandes empresas de explotación de los recursos madereros y mineros”. Estas multinacionales, decía el Vaticano, “no han tenido reparo en instaurar un clima de terror, con métodos intimidatorios, detenciones ilegales y hasta reclutando a grupos armados para deshacerse de aquéllos que defienden a los más débiles”.

Las amenazas directas a la posesión, invasiones o incursiones por sus territorios en busca de caza y tierras cultivables, talas de árboles próximos, perforaciones petrolíferas o traficantes de drogas suelen ser rechazadas con graves enfrentamientos en los que normalmente llevan la peor parte. Cuando se han organizado como grupos armados casi siempre lo han hecho para defenderse de los intentos violentos de expulsarlos de sus tierras ancestrales o para enfrentarse a políticas de los gobiernos de anular sus derechos territoriales previamente amparados por leyes anteriores. Es necesario contemplar la propiedad de la tierra desde la óptica de los pueblos indígenas, que recientemente quieren proyectarse como nacionalidades, exigiendo el derecho de autonomía protegido por la ley internacional.

Comprender sus aspiraciones, sus tradiciones y sus valores culturales es totalmente imprescindible para valorar hasta qué nivel de violencia podría llegar la confrontación indígena en el futuro y qué garantías podría ofrecer para funcionar como etnia y grupo social autónomo. Como resultado de continuos y largos encuentros entre líderes indígenas y antropólogos habidos durante la década de los setenta, surgió en Iberoamérica una corriente indianista de carácter intelectual, dirigida a potenciar los valores culturales de las civilizaciones indias, en base a sentar las diferencias entre su concepto de sociedad y el del resto de los pueblos del continente. El indianismo pretende la autonomía política, el respeto a su sistema económico y a sus autoridades tradicionales, en especial en los territorios que consideran como propios. Nace como antítesis del indigenismo, concepto estatal destinado a su integración en la cultura occidental, a través de una aparente protección de sus derechos. A su vez, se opone el marxismo revolucionario por considerar este que el enfrentamiento del indianismo al Estado no obedece a la diferencia cultural. Igualmente es conveniente distinguir las diversas corrientes y tendencias políticas entre los distintos grupos indígenas y también la manera en la que los cambios sociales habidos en los países iberoamericanos junto a las diferencias ideológicas han afectado a los pueblos indios. La protección de su idioma, cultura, autonomía y de sus tierras son factores que afectan a la seguridad del subcontinente, pero por otro lado hay que profundizar en las complejas relaciones entre los indígenas, fuerzas armadas, guerrilla, paramilitares y narcotraficantes.

Igualmente son muy graves las repercusiones sobre las poblaciones indígenas iberoamericanas del control de los recursos naturales en algunos países del hemisferio, debiendo resaltarse los efectos de la política brasileña sobre la Amazonia. En esta región se concentra el 90 por ciento de la población indígena de Brasil, estimada entre 250.000 a 300.000 habitantes e integrada por 200 grupos étnicos separados que hablan 170 lenguas y dialectos, siendo los grupos más numerosos los guaraníes, tikunas, yanomanis, makusis, y kayapós, mientras que el 77 por ciento restante de los indios pertenece a grupos étnicos de menos de 1000 individuos. Cerca de 110 lenguas cuentan con menos de 400 parlantes. Por mucho tiempo Brasil ha mantenido una fuerte presencia militar en la Amazonia para proteger sus fronteras y controlar la explotación de sus recursos minerales y madereros, lo que a veces ha originado la movilización de diversas agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales para evitar la deforestación tropical, tanto por las grandes talas de arbolado como por la quema de grandes extensiones para la cría de ganado y la agricultura

comercial. Así mismo se han movilizado para proteger a los indígenas y sus territorios de las predaciones ilegales y de los buscadores de oro o *garimpeiros* y de otros aventureros que invaden con plena impunidad las tierras indígenas. Hay que entender que dos de los grupos indígenas más importantes, los yanomani y los macuxi, que habitan a lo largo de las fronteras de Venezuela y Guyana, sean una preocupación, para los militares brasileños ante el temor de que se unan a sus vecinos, con los que tienen vínculos étnicos, para intentar constituir una nación india independiente. No es de extrañar pues que una de las directrices de la Política de Defensa Nacional brasileña, aprobada por el presidente de la nación en 1996, exprese: "*proteger a Amazônia brasileira, com o apoio de toda a sociedade e com a valorização da presença militar*". Sin embargo, ello no debe ser un serio obstáculo para comprender y respetar la actitud de estos pueblos, que solamente piden se reconozcan sus derechos y vivir en paz y libertad dentro de unos territorios que consideran como propios desde muchos siglos atrás y que su contacto con la civilización occidental ha hecho, de acuerdo con cifras recientes del gobierno brasileño, que 130.000 indígenas puedan hallarse infectados por el virus del sida. Entre otras regiones muy conflictivas pueden citarse la cabecera del río de Las Piedras, en Perú, habitada por los mashco-piro y amenazada por la compañía Móbil, y la región colombiana de los u'wa, que niegan la entrada en su territorio a la Compañía Petrolera Occidental y han amenazado al gobierno con el suicidio colectivo, mientras que en Ecuador los tagaeri se oponen, con sus vidas, a cualquier tipo de contacto.

Podemos inferir que los gobiernos deben ser más sensibles y comprensivos con los problemas de los indígenas y aprovechar el clima de cooperación regional actualmente existente para promover el diálogo, ante el impacto que las políticas nacionales de orden social, económico y cultural tendrán sobre los indios y en los que el derecho a la posesión de sus tierras jugará un papel fundamental. De esta forma, se contribuirá a la estabilidad política y a la Seguridad Nacional del continente.

EL NARCOTRÁFICO

Es cierto que el *narcotráfico* ha crecido y se ha desarrollado en naciones dotadas de gobiernos débiles, pero también otros factores económicos y sociales, tales como la pobreza, la incultura y falta de educación han tenido una importancia esencial en su expansión.

Pero no mucho menos importantes fueron el derrumbamiento de los

precios agrícolas a nivel mundial y las reformas neoliberales que eliminaron el apoyo del Estado a la agricultura campesina durante las dos últimas décadas. Millares de campesinos se ganan ahora la vida en Iberoamérica cultivando marihuana, la amapola y la hoja de coca, como única alternativa posible para subsistir. El cultivo representa para los agricultores una ganancia neta de 4 a 34 veces la del cacao o maíz, los productos agrícolas alternos. Valga como ejemplo una reciente información publicada por *"The Economist"*, según la cual, mientras una hectárea de tierra cultivable con cacao produce una cosecha valorada en unos 400 dólares, otra de la misma tierra dedicada a la plantación de coca puede superar los 10.000 dólares. Por ello, los compradores van directamente a los agricultores, eliminándoles así el problema de tener que transportar el producto hacia el mercado por carreteras estrechas, de difícil trazado y con firmes deteriorados, y además muchos narcotraficantes pagan al contado y por adelantado. De esta forma, los campesinos están a merced de la mayoría de los traficantes de droga del subcontinente, a veces de acuerdo con elementos paramilitares y con la propia policía y que junto a los vínculos entre la guerrilla y el narcotráfico vienen a complicar aún más la mezcla de intereses en la zona. Sirva como muestra que Sendero Luminoso ha escogido las regiones altas del valle peruano de Huallaga como objetivo estratégico para controlar la producción de coca de la región, por otro lado ideal para su cultivo, protegiendo a los 300.000 agricultores de las operaciones antidrogas del gobierno de Fujimori y cobrándoles altas sumas a los traficantes de drogas por cada vuelo para entrar en la zona y recoger los cargamentos, tal como asegura David Scott Palmer en *"Journal of Interamerican Studies and World Affairs"*.

Situaciones de este tipo producen en muchas ocasiones acciones violentas de las Fuerzas Armadas y medios policiales contra los indios, no como expresión de discriminación sino por el hecho de que, en el caso de los países de la región andina, la mayoría de los cultivadores de amapola, coca y marihuana son indígenas. Aún cuando no están involucrados en calidad de cultivadores, son igualmente objetivo de la violencia de los paramilitares y de los cárteles de la droga, porque se ven envueltos en enfrentamientos en tierras que ocupa el cártel, sea legal o ilegalmente, razón por la cual estas disputas sobre las tierras son el origen principal de los violentos altercados entre los indios y los que no lo son. La etnicidad no es la causa inicial de esta violencia relacionada con la droga, porque es importante imaginar una solución al problema: los gobiernos deben comprender los factores culturales que están involucrados en la violencia con-

tra los indígenas por sus lazos no deseados con el mercado de la droga. Algunos países han resaltado la conveniencia de cultivar productos agrícolas alternos en la lucha contra la droga, postura en abierta confrontación con la de Estados Unidos, que se inclina por la erradicación. Es cierto que se ha producido una notable caída de los precios de la hoja de coca, debido entre otras causas al aumento del consumo de las drogas de diseño, pero el tráfico de drogas sigue siendo decisivo, no solamente para la economía doméstica o la pequeña economía rural sino también para las economías nacionales, en particular las de la región andina. En Colombia, por ejemplo, el narcotráfico proporciona a la economía nacional cerca del 6 por ciento del producto interior bruto, de acuerdo con el último *Informe Anual del Observatorio Geopolítico de Drogas*, lo cual ha venido a trastocar la estructura productora del país. Para Kevin Healy, los grupos de traficantes en estupefacientes más ricos y fuertes, y no los agricultores, son el obstáculo principal al tratar de erradicarles, y cita el caso de Bolivia, donde el comercio de la droga representa el 75 por ciento de las exportaciones legales del país, lo que supone una incidencia en su economía mayor que en la de Colombia o Perú. Healy calcula alrededor de 500.000 los campesinos indígenas que están involucrados en el comercio de la coca, dándose el caso en Bolivia de que los cultivadores de la coca, donde es legal cosechar su hoja con fines medicinales, están representados por un sindicato bien organizado y militante, el ANAPCOCA o Asociación Nacional de Productores de Coca. En tanto que el aprovechamiento agrícola alternativo es aparentemente la única opción de liberar a los cultivadores de coca de su dependencia del mercado de la droga, la selva colombiana de Chaparare, donde se cosecha la mayoría de la hoja de la coca y a donde los campesinos de todo el país han emigrado en busca de tierras agrícolas, es una selva tropical impropia para la agricultura clásica y comercial. Por la escasez de oportunidades en otras partes del país para las más de 800.000 familias que viven en el Chaparare, no es probable que la situación cambie en el futuro cercano.

Pero el narcotráfico tiene otra influencia, no menos importante, en la vida de muchas de las naciones iberoamericanas y en su capacidad de corrupción, que llega a afectar con una increíble facilidad a sectores importantes de la organización del Estado, incluidos altos cargos responsables de la lucha antidroga. De esta manera, la mafia del narcotráfico ha corrompido a políticos, mandos de las Fuerzas Armadas responsables de los órganos policiales o magistrados, con unos niveles tan peligrosos que ha llevado a que esta lacra se haya convertido en una de las más graves

amenazas a la estabilidad y seguridad en Iberoamérica. En esta línea de penetración, el narcotráfico ha sabido evolucionar para hacer frente a la lucha antidroga, en concreto fragmentándose en bandas o grupos independientes de los grandes cárteles y procesando su propia cocaína en base a nuevas tecnologías, lo que ha venido a dificultar aún más su desarticulación.

Los importantes recursos económicos que genera el narcotráfico permiten a sus promotores ofrecer a bandas armadas grandes sumas de dinero a cambio de protección, lo que ha hecho que ciertos grupos guerrilleros y paramilitares se hayan introducido en el mercado de la droga. Esto quiere decir que debe profundizarse en los vínculos entre narcotraficantes, paramilitares y guerrilla para llegar a conocer sus conexiones políticas y sociales, que impiden la estabilidad interna de una gran parte de los países iberoamericanos, por lo que la represión del mercado de la droga es natural que resulte poco atractiva para los miembros de las Fuerzas Armadas, en particular en unos momentos en los que en algunos países se discute todavía cual debe ser el papel de los militares en una sociedad democrática y su subordinación a las autoridades civiles. El Ejército desea mantener su papel legal y constitucional, la defensa y la seguridad exterior de la nación, pero puesto que el narcotráfico se está convirtiendo ya en una amenaza global al conjunto iberoamericano, desde Colombia, Perú a México y extendiéndose a Brasil, Argentina o Venezuela, es natural que igualmente se plantee sus ámbitos de actuación en la lucha antidroga. ¿Qué beneficios podrían obtener las Fuerzas Armadas en este campo? En principio parece deducirse que sus presupuestos podrían verse aumentados, en unos años en los que han sufrido recortes dramáticos, a fin de ser equipados con las últimas innovaciones tecnológicas y que su personal pudiera mantener de esta forma una completa actividad.

Sin embargo, los militares consideran que más allá de estas o de otras posibles ventajas, existen serios inconvenientes y riesgos, entre los que los más graves son la posible corrupción y el verse obligados a intervenir en el mantenimiento del orden público, lo que podría conducirles a reasumir un cierto papel represivo, felizmente ya superado con la llegada de la democracia. Quizás, el cometido de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la droga podría ser exclusivamente de apoyo operativo y logístico a las Fuerzas de Seguridad, con misiones de inteligencia, vigilancia del narcotráfico, adiestramiento en la contraguerrilla, análisis y estudio del material que se capture, control de fronteras y traducción de documentos incautados o de las grabaciones de las escuchas e intervención de las telecomu-

nicaciones, si bien habría que delimitar con claridad las fronteras entre vigilancia e inteligencia sobre el tráfico de drogas y otras materias relacionadas con asuntos internos de carácter político y social.

En la llamada Declaración de Guayaquil, firmada tras la clausura del X Consejo Presidencial Andino, el 5 de abril de 1998, los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela expresaron que la lucha contra el narcotráfico es uno de los espacios de cooperación en la región que, con sus diferencias en cada nación, afecta a todos por igual. El documento señala que la lucha antidroga debe realizarse mediante acciones de carácter multilateral y no a través de iniciativas unilaterales que puedan afectar las relaciones entre los estados. Así mismo, destaca que "la lucha contra la producción, tráfico, distribución, uso indebido de las sustancias sicotrópicas y delitos relacionados" debe realizarse de conformidad con los principios del derecho internacional y con el pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

No es de extrañar, por consiguiente, que exista una fuerte división entre los políticos y militares iberoamericanos ante este complejo problema y ante el cual la posición norteamericana resulta difícil y contradictoria, ya que mientras presionan a las Fuerzas Armadas a involucrarse en la represión del narcotráfico, por otro lado pretenden comprometerlas con la democracia y la defensa de los derechos humanos. Pero una de las principales aspiraciones de las naciones iberoamericanas en la lucha contra la droga, el fin de la certificación unilateral de los Estados Unidos, fue alcanzada en la II Cumbre de las Américas celebrada a mediados de abril de 1998 en Santiago de Chile, acordándose que en lo sucesivo corresponderá a la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de las Drogas, CICAD, establecer un proceso único de evaluación gubernamental y de carácter multilateral, para seguir el progreso individual y colectivo de los países participantes en las cumbres en el tratamiento del problema. En Santiago se acordó también crear en Panamá un centro multinacional antidroga, conforme al plan de Washington de establecerlo en la Base Aérea de Howard, en la Zona del Canal, en el que podrían recibir instrucción los militares iberoamericanos e igualmente mandos y agentes policiales, bajo autoridad norteamericana. Este plan estadounidense, sin embargo, está dirigido a conservar su posición estratégica en el Canal y al mismo tiempo poder efectuar vuelos de reconocimiento sin necesidad de reabastecer a los aviones en el aire. El dilema continúa, mientras tanto, ante una amenaza cada vez más creciente y con un carácter de dimensiones ya hemisféricas.

LAS DISPUTAS FRONTERIZAS

Aunque con cierta lentitud, las naciones iberoamericanas continuaron en 1998 haciendo notables progresos en la solución de los contenciosos fronterizos, culpables en gran medida de la carrera armamentística que había venido padeciendo la región en las últimas décadas. El más grave de estos conflictos es el que venía enfrentando a Ecuador y Perú por la disputa de una franja fronteriza de 68 kilómetros en torno al río Zenepa, que permanecía por deslindar. El momento más delicado ocurrió en enero de 1995, cuando se produjo un enfrentamiento armado que pudo detenerse gracias a la mediación de los cuatro países garantes del Protocolo de Río, que desplegó una Misión de Observadores Militares en Ecuador y Perú (MOMEPE), integrada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Cuando estalló la guerra ente Ecuador y Perú, en 1995, la remota posibilidad de un conflicto armado entre dos naciones iberoamericanas se convirtió ese año en una triste y amarga realidad, sobre todo para los millares de indígenas que vivían a ambos lados de la frontera, quienes soportaron el impacto de meses de violentos combates entre las fuerzas armadas de los dos países, siendo el más grave el que afectó a la comunidad shuar, que se vió obligada a evacuar de la zona a más de 8.000 habitantes. A mediados de agosto de 1998, las conversaciones fueron progresando, para lo cual Ecuador había retirado sus demandas territoriales y Perú aceptado que no hubiera veto por parte de ambos contendientes a las propuestas de los mediadores, que en opinión de Bruce St. John, autor del libro *"La Política Exterior de Perú"*, constituirán la mejor oportunidad para conseguir una solución permanente, sin necesidad de que ninguno de los dos países se pudiera ver abocado a un absurdo e innecesario rearme. De todas formas, la solución al conflicto no se presentaba fácil, pues la zona en disputa es rica en recursos petrolíferos, por lo que fue utilizada en la década de los 80 por los militares ecuatorianos como fuente de obtención de divisas. En la actualidad, oficiales ecuatorianos retirados, según asegura Donna Lee Van Cott, son dueños de grandes extensiones de terreno en el Amazonas y se han beneficiado de la producción de petróleo, razón por la cual se ha producido una gran militarización en esta región, que posee una fuerte densidad de población indígena. Durante el pasado verano, ambas naciones fueron desactivando cada una de las siete bases fronterizas asentadas en dicho sector de la Cordillera del Cóndor, así como la separación de fuerzas de la zona de litigio, bajo la vigilancia de la MOMEPE. Posteriormente, a principios de septiembre, los presidentes Fujimori y Mahuad celebraron

en la ciudad de Panamá, con motivo de la XII Cumbre del Grupo de Río, una larga reunión con el fin de acelerar el proceso de paz y anunciaron una próxima reunión en Brasilia bajo la coordinación del presidente brasileño Henrique Cardoso, en un intento de encontrar una solución definitiva del diferendo. Ambas partes se comprometieron a una inversión binacional de carácter social y en infraestructuras en la zona por un montante de 3.000 millones de dólares. Como consecuencia del encuentro mantenido en la capital de Brasil, el 16 de octubre los parlamentos peruano y ecuatoriano aprobaron por amplia mayoría la propuesta de línea fronteriza acordada por los cuatro países garantes, Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, con lo que se ha eliminado uno de los contenciosos más graves y difíciles en Iberoamérica. Unas semanas más tarde, el 26 de octubre, los presidentes ecuatoriano, Jamil Mahuad, y peruano, Alberto Fujimori firmaron en Río de Janeiro el acuerdo de paz que pondría punto final a 170 años de disputas, 56 años de negociaciones y tres enfrentamientos armados entre ambas partes. El acuerdo de paz fue suscrito ante los presidentes de Argentina, Brasil, y de Chile y de un representante del presidente de los EEUU por ser los cuatro países garantes del tratado y de dos invitados de excepción, los Reyes de España, a quienes el presidente Carlos Henrique Cardoso calificó como "el mayor símbolo de la admirable herencia iberoamericana". También asistió al acto el cardenal prefecto de la Congregación del Clero, emisario especial de SS Juan Pablo II. En virtud del acuerdo de paz, que se denominará Acta de Brasilia, se reconoce la soberanía de Perú sobre la zona de litigio (una franja de 220 kilómetros de extensión, alrededor de 78 kilómetros de frontera), situada en plena Amazonia, y Ecuador tendrá soberanía sobre una superficie de un kilómetro cuadrado, donde se erigirá un monumento en memoria de los soldados muertos durante el conflicto.

Colombia y Venezuela continúan manteniendo diferencias sobre los límites de las aguas territoriales en el Golfo de Venezuela, principalmente porque la zona posee grandes reservas petrolíferas, y si hasta la fecha no ha llegado a adquirir la gravedad del enfrentamiento ecuatoriano se ha debido a que mantienen contactos regulares donde se estudia una solución satisfactoria. Por otro lado, la política de armamentos de Colombia está dirigida principalmente a la compra de helicópteros que le permita hacer frente con éxito a la guerrilla y narcotraficantes, más que a la adquisición de avanzados y costosos aviones de combate o de modernos medios acorazados. Sin embargo, a veces se producen situaciones tensas entre ambas naciones, debido a que en sus acciones de persecución con-

tra los grupos guerrilleros y narcos se ven cuasi forzados a penetrar en territorio venezolano.

Paralelamente, Venezuela mantiene sus reivindicaciones territoriales ante Guayana sobre toda la región al oeste del río Essequivo, pero sin el carácter intimidatorio de los últimos años, mientras que Nicaragua discute y porfía con Colombia por la posesión del archipiélago de San Andrés.

Clive Shofield, director adjunto de la Unidad de Investigación de Fronteras Internacionales de la Universidad británica de Durham, considera que hay pocas probabilidades de que todas estas disputas desemboquen en conflictos armados y cita como ejemplo los deseos bolivianos de obtener una salida al Pacífico, como consecuencia de la pérdida de la región de Atacama por la derrota sufrida ante Chile en 1884. Para encontrar un compromiso que pueda satisfacer a las partes, las dos naciones han establecido una comisión bilateral permanente que estudie la manera cómo las mercancías y el comercio boliviano podrían circular a través de territorio chileno hasta la costa, si bien las autoridades chilenas mantienen el criterio de que esa franja está y estará siempre bajo su control y soberanía, pues como dice Schofield, de no ser así sería como si "México exigiese ahora la devolución de California". Otra muestra de la desactivación de un conflicto potencial es el contencioso entre Argentina y Chile, que merced a las discusiones y negociaciones habidas está permitiendo que se llegue a un feliz desenlace. En opinión del analista Patrice Franko, experto en temas iberoamericanos del College Colby, del estado norteamericano de Maine, antes del advenimiento de la democracia había entre Chile y Argentina 28 disputas fronterizas distintas; ahora solo queda una sobre una franja de 13 kilómetros entre ambas partes. Aunque ninguno de los dos parlamentos nacionales ha aprobado todavía el arreglo sobre este último tema, el analista pone de relieve la buena voluntad de ambos gobiernos para reducir la tensión y pacificar el Cono Sur.

Argentina, por su parte, mantiene las reivindicaciones territoriales sobre las islas Malvinas, las Sandwich del Sur y la de Georgia del Sur, pero tras el conflicto armado que mantuvo con Gran Bretaña ha decidido solicitar la devolución ante los organismos internacionales y los cauces diplomáticos, renunciando al empleo de la fuerza. Quedan algunas otras diferencias pero de orden menor, aunque los sectores más nacionalistas de vez en cuando pretenden alimentar la tensión, como son algunas pretensiones de Bolivia, Chile, y Perú en pequeñas zonas fronterizas o los viejos recelos entre Bolivia y Paraguay, si bien estos últimos obedecen más a fantasmas

de la Guerra del Chaco de los años treinta que a reivindicaciones reales. Podría decirse que estos contenciosos y disputas fronterizas, que han amenazado seriamente a la paz y la seguridad de Iberoamérica, continúan siendo factores que pudieran poner en peligro la estabilidad de la zona, pero conforme van apareciendo foros de consulta y negociación y estableciéndose alianzas económicas intrarregionales es de esperar que las posibles crisis que pudieran surgir sean reconducidas hacia soluciones pacíficas.

NO SE HA PRODUCIDO LA ANUNCIADA CARRERA DE ARMAMENTOS

A principios de julio de 1998, fuentes del Departamento de Estado norteamericano confirmaban que, a pesar de los vaticinios de analistas especializados, no había indicaciones que vinieran a confirmar que en Iberoamérica se hubiese producido una carrera de armamentos, después del levantamiento decretado por Bill Clinton en el verano de 1997 del embargo establecido por el presidente Carter veinte años antes.

Voces internacionales muy autorizadas se habían manifestado en contra de dicho levantamiento, temerosas de que el rearme de la región significase un aumento de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. Entre tales voces estaba la del expresidente de Costa Rica y Premio Nóbel de la Paz de 1987, Oscar Arias, que ha dedicado una gran parte de su actividad pública a promover un código ético internacional sobre la venta de armamentos y quien, junto a otras personas e instituciones laureadas con el Premio Nóbel de la Paz, expuso en Nueva York en 1996 los contenidos de dicho código, con la esperanza de que sea asumido por las Naciones Unidas.

En 1998, Oscar Arias reafirmaba su posición en un artículo que recogía el diario español "El Mundo", y advertía que, aunque Iberoamérica ha sido la región que más se ha desarmado tras finalizar la Guerra Fría, ello no significaba que debería ser utilizado como argumento para adquirir armas de avanzada tecnología susceptibles de desatar una onerosa carrera armamentística. El político costarricense había propuesto el año anterior, en la ciudad norteamericana de Atlanta, una moratoria de dos años para la compra de modernos sistemas de armas, tiempo que debería ser aprovechado para negociar un tratado que comprometiese a los gobiernos de la región a proscribir permanentemente ese tipo de armas en

sus territorios. Así mismo, se quejaba de que todavía existían en el subcontinente arsenales y contingentes exagerados e innecesarios y cuyo mantenimiento son una lamentable desviación de recursos que podrían ser destinados a la satisfacción de otras necesidades más básicas y acusaba a las transferencias de armamentos de ser fuente de corrupción y de firmas de contratos influidos por la presión política de los países vendedores.

En un informe presentado al Congreso de los Estados Unidos el 25 de junio de 1998, el Departamento de Estado manifestaba que solamente algunos países iberoamericanos estaban efectuando la modernización de sistemas de armas prácticamente obsoletos y en muy pocos casos su sustitución "*less than one-for-one*", sin que ello significase un incremento en la entidad de la fuerza. El informe proseguía afirmando que el gasto de armamentos en la región continuaba siendo el más bajo del mundo.

La publicación estadounidense especializada en política y temas de armamento y de carácter semanal "*Defense News*", en un "dossier" sobre la defensa en Iberoamérica publicado en la primavera de 1998, confirmaba la desaceleración en la adquisición de nuevos sistemas de armas de moderna tecnología. Dicho semanario citaba como ejemplo de sus aseveraciones la retirada del servicio del portaaviones argentino "*Veinticinco de Mayo*", sin que hubiese ningún plan para su sustitución, por lo que sus aviones "*Dassault Super Etendard*" tendrán que operar desde bases terrestres. La evolución del esfuerzo de defensa se expone en el cuadro de la página siguiente, donde pueden observarse las cifras que existían en 1985 y en el presente año 1998. Hay dos excepciones notables, Brasil y Colombia: mientras el primero se sitúa a la cabeza en términos relativos y absolutos en el aumento del gasto, la segunda se ha visto forzada por la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico. Cuatro naciones tienen ligeros incrementos, Ecuador (debido al conflicto que mantenía con Perú), Chile, México y Venezuela, mientras que el descenso es más notable en Argentina, Cuba, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La evolución puede observarse con mayor fiabilidad si observamos los porcentajes del PIB, debido al crecimiento económico habido en los últimos años.

Las naciones iberoamericanas habían sido receptoras de armamento estadounidense de segunda mano y anticuado desde el final de la II Guerra Mundial, y como consecuencia del embargo del presidente Carter se vieron obligadas a modernizar y actualizar dicho armamento o a recurrir a suministradores europeos e incluso a Israel. Tales circunstancias se dieron

EL ESFUERZO DE DEFENSA EN IBEROAMÉRICA

	<u>Presupuestos de Defensa (precios constantes)</u>						<u>Fuerzas Armadas (miles)</u>	
	<u>Totales (miles dólares)</u>		<u>Per capita</u>		<u>% del PIB</u>		<u>1985</u>	<u>1998</u>
	<u>1985</u>	<u>1998</u>	<u>1985</u>	<u>1998</u>	<u>1985</u>	<u>1998</u>		
Cuba	2.275	700	225	62	9.6	3.2	162	55
R. Dominicana	75	72	11	9	1.1	1.0	22.2	24.5
Costa Rica	40	70	16	19	0.7	0.8	(param.)	8.4
El Salvador	360	90	75	15	4.4	1.0	41.7	24.6
Guatemala	168	140	21	12	1.8	1.1	31.7	31.4
Honduras	195	35	23	5	5.1	0.8	16.6	18.3
Nicaragua	315	30	96	6	17.4	1.2	62.9	17.0
Panamá	130	125	59	44	1.8	1.4	(param.)	11.8
Argentina	5.160	3.500	169	99	3.8	1.1	108.0	73.0
Bolivia	180	185	28	21	2.0	2.0	27.6	33.5
Brasil	3.350	14.200	25	84	0.8	2.4	276.0	313.25
Colombia	605	2.700	21	74	1.6	3.5	66.2	146.3
Chile	1.770	2.100	147	142	3.8	2.7	101.0	94.3
Ecuador	405	575	43	46	1.8	2.8	42.5	57.1
México	1.770	2.300	22	24	0.7	0.9	129.1	175.0
Paraguay	85	110	23	20	1.3	1.2	14.4	20.2
Perú	915	840	49	34	2.5	1.4	128.0	125.0
Uruguay	340	325	113	100	2.5	2.4	31.9	25.6
Venezuela	1.175	1.300	68	56	2.1	1.8	49.0	79.0

principalmente en las Fuerzas Aéreas, donde la de Argentina se ha visto obligada a conformarse con la modernización de 36 "A-4" procedentes de los excedentes de la Navy norteamericana, mientras que Brasil y Chile estudian programas de rejuvenecimiento de sus aviones "F-5E/F". Por otro lado, la venta de aviones de combate franceses, realizada a partir de 1977, ha llevado consigo que igualmente se lleve a cabo la modernización de distintos tipos de aviones "Mirage" en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, sumándose a esta política de actualización los "Mig-29" y "Sukhoi" adquiridos por la Fuerza Aérea peruana. Solamente pudiera haber una excepción, en lo que se refiere a la adquisición de sistemas de armas aéreos más modernos, y es el caso de Chile y Ecuador. En el primero, la retirada del servicio de los viejos 39 "Hawker Hunter" iniciales obliga a la Fuerza Aérea chilena a su sustitución, estando la duda

en la compra de tan solo 12 aviones de segunda mano "F-16" o "F-18" norteamericanos, "Mirage 2000" franceses o "Jas-39 Gripen" suecos, tal como se desprendía de la exhibición realizada por dichos aviones en la Feria Internacional del Aire y del Espacio Chilena, (FIDAE), de 1998. Sin embargo, en el mes de junio el Gobierno chileno canceló el proyecto de sustitución. En el segundo caso, el enfrentamiento militar con Perú en 1995 puede llevar a Ecuador a potenciar su arsenal aéreo, posiblemente con "Mig-29". Igualmente, las Marinas de los países iberoamericanos, que tradicionalmente habían sido dotadas con viejos cruceros, destructores y submarinos norteamericanos, buscaron su sustitución a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90 en los astilleros europeos, principalmente alemanes e italianos, así como en los franceses y españoles. Pero hoy día ya no se conforman con barcos de segunda mano, si bien los recursos presupuestarios son reducidos: pretenden adquirir un número inferior de buques pero más modernos y capaces, y cuando se trata de Argentina, Brasil, y Chile, que la compra incluya compensaciones industriales y la transferencia de nuevas tecnologías.

Para muchos comentaristas el levantamiento del embargo norteamericano tiene segundas lecturas: el excedente sin salidas de sus reservas de armamento como consecuencia de la desaparición de la Guerra Fría, más recientemente, la crisis asiática que ha frenado la compra de armamentos en estos países, y el avance de la industria de la defensa europea en un mercado tradicionalmente estadounidense. Sin embargo, la actual situación económica de la región no permite vaticinar gastos extraordinarios para modernizar y potenciar las Fuerzas Armadas, excepto en aquellas naciones que precisan de sistemas capaces de contrarrestar las nuevas tecnologías de los narcotraficantes, pero en ningún caso debe suponer el inicio de una carrera de armamentos.

ASPECTOS ECONÓMICO-SOCIALES

En el informe anual la 39 Asamblea Anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo celebrada en marzo de 1998, y ya citada anteriormente, se recogía con gran satisfacción que Iberoamérica había registrado en 1997 un gran crecimiento económico y menos desempleo. El crecimiento económico de la región se elevó al 5.2 por ciento, tasa que se sitúa en segundo lugar entre las más altas desde 1980, debido en gran medida al rápido crecimiento habido en Argentina y México, que actuaron como grandes motores y donde el Producto Interior Bruto real aumentó un

7.8 y un 7.1 por ciento respectivamente. También registró un vigoroso crecimiento la República Dominicana, que llegó al 7 por ciento, al igual que Perú. En Brasil se pasó del 3 por ciento de 1996 al 3.5 por ciento, como consecuencia de las medidas monetarias y crediticias adoptadas por las autoridades para evitar una intensificación de los desequilibrios internos. El crecimiento aumentó en 10 países, superó el 4 por ciento en 14, aunque no llegó al 3 por ciento en Costa Rica. Por su lado, la temida "gripe asiática", no provocó más que una leve recaída en la zona.

Como consecuencia de la recuperación económica, el informe del BID dice que el desempleo bajó en Iberoamérica por primera vez desde 1988, con una disminución notable en Argentina, donde descendió del 18 por ciento habido durante la recesión de 1995 a menos del 14 por ciento en el segundo semestre de 1997. En el mismo período, el paro disminuyó en México del 6.3 al 3.2 por ciento, mientras que otros siete países registran descensos, aunque de menor cuantía.

Las inversiones reales registraron un crecimiento firme en la mayor parte de la región, de más del 10 por ciento de promedio, resaltándose que Argentina con un 26 por ciento, y Ecuador, México y la República Dominicana, que llegaron al 20 por ciento. A su vez las exportaciones también registraron un gran dinamismo, con un aumento alrededor del 10 por ciento a precios constantes y de un 12 por ciento en dólares. Como consecuencia de la expansión de la actividad económica y de la demanda, las importaciones también crecieron de forma rápida, lo que motivó un aumento del déficit por cuenta corriente de la región. A su vez, la inflación continuó descendiendo en 1997, hasta el punto que el promedio bajó al 11 por ciento, habiendo sido todavía alta en Venezuela, un 35 por ciento. Hubo también una tendencia inflacionista en República Dominicana y Ecuador, donde en este último país fue superior al 10 por ciento.

Esta favorable coyuntura económica, sin embargo, no será igual en 1998, pues los más optimistas se conformarían con que el crecimiento medio en Iberoamérica pudiera estar entre el 2.5 y el 3 por ciento. Las causas de ese descenso, señala el economista jefe del BID Ricardo Hausmann, son la "gripe asiática" o "efecto sake", la crisis del rublo, la caída del precio de materias básicas para la región (petróleo, pulpa, papel, cobre, ...) y una posible lentificación de la economía a nivel mundial. En este sentido, hay que tener presente que el precio de las materias primas supone un 2.6 por ciento del PIB para Brasil, un 17.6 para Chile, el 19.1 para Ecuador y un 21.9 por ciento para Venezuela. De todas formas, comenta Hausmann,

la tormenta debe ser pasajera, pues las perspectivas económicas de la región hay que considerarlas a largo plazo. En este sentido, dice, el aumento de las inversiones, la persistencia de una posición fiscal relativamente disciplinada, la continuación de reformas estructurales y la reciente disminución del desempleo deben ser motivos de optimismo. En este punto, el presidente del BID, Enrique Iglesias, ha recordado que lo primero e imprescindible es lograr un consenso entre los políticos y la sociedad, y luego acompañar las reformas económicas con reformas laborales, invertir más en capital humano e incrementar la productividad del trabajador y su remuneración, perfeccionar los sistemas de seguridad social, adoptar medidas de apoyo especiales para la mujer y las comunidades indígenas y potenciar la pequeña y mediana empresa, y sobre todo combatir la desigualdad social, la pobreza y la violencia.

En 1994, la crisis económica de México, también conocida como "efecto-tequila" arrastró la tasa de crecimiento del PIB iberoamericano del 5.7 por ciento al 0.8 por ciento en 1995, razón por la cual se teme ahora con mayor razón que la debilidad de las economías asiáticas, en particular la japonesa y la situación del rublo, pudieran tener una consecuencia más negativa aún que lo que se venía suponiendo en un principio. Las medidas que puedan adoptarse para contrarrestar o mitigar sus efectos vendrán a perjudicar, como siempre, a las clases sociales más desfavorecidas, como se están ya notando las aplicadas a finales de 1997 ante el comienzo de la crisis asiática, para evitar la fuga de capitales, como fueron la elevación de tipos de interés y mayores restricciones fiscales. Como advierte la vicepresidenta del BID, Nancy Birdsall, debe establecerse una tasa sobre los movimientos de capitales a corto plazo para prevenir la repetición de la fuga de capitales que se ha producido en Iberoamérica en esta década, lo cual inevitablemente traerá consecuencias negativas para el crecimiento y para los objetivos sociales de la región.

Pero a finales de agosto de 1998, la crisis económica que atraviesa Japón, junto a la de los países emergentes asiáticos, el empeoramiento de la situación en Indonesia y sobre todo el derrumbamiento del rublo provocó unas fuertes bajadas de los mercados bursátiles mundiales, que se vieron acentuadas en los mercados iberoamericanos al dispararse los rumores de posibles devaluaciones en cascada de las monedas venezolana, brasileña, mexicana e incluso la de Chile, lo cual ha venido a confirmar aún más la globalidad de la economía. Exceptuando México, el resto de los países del área mantiene regímenes cambiarios ligados al dólar, lo que puede dar lugar a bruscas devaluaciones, ofreciendo importantes riesgos a los inver-

sores y grandes oportunidades a los especuladores. Por ello, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Michel Camdessus, convocó a los ministros de Economía de las nueve repúblicas iberoamericanas más importantes el 3 de septiembre en Washington para analizar la situación en la región y obtener del organismo multilateral respaldo para recobrar la confianza internacional de sus economías. Tras dos días de conversaciones de los directivos del FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial, con los ministros de Economía de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, las autoridades financieras y monetarias internacionales respaldaron las reformas estructurales realizadas por dichos países, expresaron su confianza en que estos continuarán registrando un crecimiento positivo y bajas tasas de inflación y pidieron a los mercados financieros mundiales que diferencien claramente la crisis en los países asiáticos y en Rusia de la situación actual en Iberoamérica. A pesar de ello, las agencias internacionales de calificación de crédito revisaron, durante la reunión, a la baja la calificación de Argentina, Brasil, México y Venezuela, lo que motivó que los ministros de Economía de estas naciones criticasen duramente a dichas organizaciones acusándolas de actuar contra las economías y Bancos de Iberoamérica, recordando que los principales estados de la región cuentan con sólidos fundamentos macroeconómicos y con reservas internacionales en máximos históricos para defender sus divisas. Sin embargo, las consecuencias del desbarajuste ruso-asiático han hecho su efecto, tal como afirmó el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para Iberoamérica (Cepal), José Antonio Ocampo, que ha previsto una disminución del crecimiento económico de la región para 1998, estimando que estará entre el 2 y el 3 por ciento, cuando tales valores debían situarse alrededor del 7 u 8 por ciento si se quiere afianzar un crecimiento sostenido. Las previsiones de crecimiento hasta fin de 1998, según *The Economist Intelligence Unit*, favorecen en primer término a Argentina, con un aumento entre el 4.6 y el 5.1 por ciento, seguida de Chile, con una horquilla entre el 4.1 y el 5.1, y de México, con el 4.3. Entre los países que forman parte de los distintos bloques económicos (Pacto Andino, Mercosur y Mercado Centroamericano), la renta per cápita más alta la tiene también Argentina con 6.910 dólares y la más baja Bolivia con 911. Argentina, sin embargo, va a la cabeza del crecimiento del número de pobres, lo cual es confirmado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que refleja para Argentina un incremento en los últimos años del porcentaje de miseria, con una subida del 7 al 19 por ciento, seguida de Perú, que pasó del 26 al 34 y de Paraguay que superó el 53 por ciento para llegar al 60 por ciento.

LA ECONOMÍA IBEROAMERICANA (fuente FMI)

	<u>PIB</u>		<u>IPC</u>	
	<u>1997</u>	<u>1998</u>	<u>1997</u>	<u>1998</u>
Argentina	8.6	5.0	0.8	1.3
Brasil	3.2	1.5	7.9	5.0
Chile	7.1	4.5	6.1	5.4
Colombia	3.1	2.7	18.5	19.5
Rep. Dominicana	8.1	6.0	8.3	5.0
Ecuador	3.4	1.5	30.6	33.6
Guatemala	4.1	4.5	9.2	6.5
México	7.0	4.5	20.6	15.3
Perú	7.2	3.0	8.5	7.5
Uruguay	5.1	4.0	19.8	10.2
Venezuela	5.1	- 2.5	50.0	37.0

En el área de la cooperación interregional, el mencionado X Consejo Presidencial Andino aprobó el compromiso de constituir el Mercado Común y reforzar sus relaciones con otros bloques supranacionales; y con la suscripción del Acta o Declaración de Guayaquil, los presidentes andinos pretenden iniciar una nueva etapa de refuerzo de su unidad interna que pueda llevarles a una liberalización total de sus mercados. En el Acta se definen mecanismos para vigorizar la integración de las cinco naciones, así como para proyectarlas hacia otros bloques comerciales como la Unión Europea, con la que mantienen unas relaciones que califican como un modelo de vinculación bloque a bloque. En dicha reunión se concretó el marco general para la creación de la Zona de Libre Comercio con Panamá y se establecieron plazos para la libre circulación de las personas.

También decidieron afrontar conjuntamente los efectos del fenómeno climático de El Niño, lo que representa un espíritu integrador, pese a que Ecuador y Perú son los más afectados. Sin embargo, los temas ecológicos no fueron abordados, ni tampoco se trató el tema de la deuda externa. La Comunidad Andina, que nació hace 29 años, ha pasado por graves momentos de desunión y aislamiento, pero ahora parece que se han sentado unas bases más firmes para afrontar los desafíos cara al siglo XXI, habiéndose fijado para 1999 la próxima cumbre andina, que tendrá lugar en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

Pocos días más tarde, el 16 de abril, los dos grandes bloques económicos suramericanos, el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y el Can (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) firmaron en Buenos Aires un acuerdo para levantar todas las barreras aduaneras a partir del año 2000, que fue suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio de ambos grupos y que afecta a una población de 300 millones. El PIB de esta futura zona de libre comercio iberoamericana equivale al 13 por ciento del total de todo el continente, incluidos Canadá y Estados Unidos. El Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones pusieron de relieve su voluntad de negociar como un solo bloque la configuración del Acta de Libre Comercio de las Américas, ALCA que sería tratada en la II Cumbre de las Américas que comenzó en Santiago de Chile dos días después. Dos etapas de negociaciones deberán facilitar la puesta en marcha de un programa de reducción gradual de aranceles de todos los productos incluidos en el listado aduanero, a partir del 1 de enero de año 2000. Estas negociaciones se llevarán a cabo bajo los compromisos de promover la libre competencia y rechazar las prácticas restrictivas del comercio. El intercambio comercial entre los dos bloques se aproximó en 1997 a los 4.000 millones de dólares, con un saldo de 30 millones a favor del grupo andino. Mientras tanto, Chile, que no forma parte de ninguno de ambos bloques, firmó durante la II Cumbre de las Américas tres acuerdos por separado, uno con México otro con cinco países centroamericanos y el tercero con el Mercosur, para facilitar el proceso de integración hacia la creación del ALCA.

LA SEGUNDA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

A mediados de marzo se reunieron en San José, Costa Rica, ministros de 34 países americanos con el fin de confirmar la denominada Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, que debería recibir un firme espaldarazo en la II Cumbre de las Américas convocada en Santiago de Chile para un mes más tarde. Pero en San José se pusieron en evidencia las diferencias que todavía mantienen estos países respecto al plan de integración, donde los Estados Unidos parecen muy volcados hacia asuntos como el de la propiedad intelectual, mientras que Bolivia, Chile y los cuatro países del Mercosur consideran más fundamental la supresión de aranceles y el libre acceso a los mercados. En la reunión se acordó que Miami se convierta en la primera sede del futuro mercado común interamericano a partir del año 2005, así como que la capital y presidencia del mismo

sigan un turno rotatorio cada dos años, por lo que en su momento Miami cederá su puesto a Panamá y está a su vez a México. En este sentido Canadá ostentará inicialmente la presidencia, para hacerlo a continuación Argentina y Ecuador.

Durante los días 18 y 19 de abril tuvo lugar la II Cumbre de las Américas, a la que asistieron los jefes de estado o de gobierno de las 34 naciones del continente, excepto Cuba, con una agenda de trabajo que comprendía lo que se ha dado en llamar reformas de segunda generación: acceso a la educación de todos los sectores de la población, erradicación de la pobreza, lucha contra el narcotráfico, terrorismo, corrupción, defensa de una justicia independiente, democracia y liberalización económica.

Estados Unidos, país impulsor de la creación de este foro con la primera cumbre celebrada en Miami en 1994, consideraba que continúa ejerciendo el liderazgo de América y que la relación que mantiene con el resto del continente es la mejor en una década, a pesar de los desacuerdos sobre Cuba y las dificultades en el proceso de integración económica destinada a crear la mayor zona de intercambio comercial sin barreras arancelarias de todo el mundo, con un mercado de casi 800 millones de consumidores. Pero Estados Unidos llegó a esta II Cumbre en una posición más débil, debido a la continuada negativa del Congreso norteamericano de autorizar al presidente Clinton el fast track o vía rápida para que facilite la creación del Área de Libre Comercio de las Américas. La falta de esta vía rápida ha impedido también que Estados Unidos haya podido firmar nuevos tratados de libre comercio, entre ellos uno con Chile. Por ello, se ha hablado ya de un nuevo "consenso de Santiago", para reemplazar al viejo "consenso de Washington", con el que se abre una nueva era de relaciones entre Iberoamérica y el poderoso vecino del Norte, en la cual debe primar la igualdad entre todos, poniéndose de relieve la voluntad de esas naciones de negociar como bloque y no bilateralmente, como siempre ha favorecido a Washington. De confirmarse esta situación, Estados Unidos habría perdido la oportunidad de lograr la integración a través de la incorporación progresiva individual al Tratado de Libre Comercio. Contrasta, por otro lado, que junto a la pérdida de protagonismo estadounidense emerge con fuerza la nueva actitud de Canadá, un país que hasta ahora había concentrado su interés en Europa.

Pero además existe otro factor que hace persistan diferencias entre Iberoamérica y Estados Unidos, y es el tema sobre Cuba. Washington se opone a la incorporación de La Habana a las Cumbres de las Américas y

como miembro de pleno derecho de la Organización de Estados Americanos mientras no se convierta en una democracia. Frente a esta posición está la de algunas naciones, como Perú, donde el presidente Fujimori declaró "no hay derecho a que un país que no representa amenaza alguna para el continente sufra como consecuencia de un bloqueo que no es sufrimiento para su gobierno, sino para diez millones de cubanos". En parecidos términos se manifestaron otros mandatarios, si bien pusieron ciertas condiciones a Fidel Castro, como la liberación de los presos políticos y un avance hacia el sistema democrático. Por otra parte, algunas naciones no se pronuncian sobre las relaciones con Cuba, si bien es conocido su apoyo. Pero el problema se agudizó al hacerse público que el primer ministro de Canadá iba a viajar a Cuba la semana siguiente a la celebración de la cumbre. Igualmente, varias naciones manifestaron su intención de invitar a Cuba a que asista, dentro de cuatro años, a la próxima reunión que se celebrará en Ottawa.

En la clausura de la conferencia se acordó seguir impulsando el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y se elaboró lo que se conoce como Plan de Acción y Declaración de Santiago. Aunque el Plan de Acción contiene 170 puntos, carece en muchos aspectos de objetivos claros, recursos y mecanismos adecuados para su seguimiento, y en opinión de diversos especialistas tiene muchas más iniciativas de las que el sistema interamericano puede asumir seriamente. El documento expresa en primer lugar un claro compromiso de defensa de la democracia y de ampliación de sus espacios, si bien no contiene una cláusula democrática para el futuro del ALCA, tal como existe en la Unión Europea, en el Mercosur y en la Carta de la OEA. Otros puntos importantes se refieren a la erradicación de la pobreza, la educación y los derechos humanos, para lo cual se incluyó una financiación de 45.000 millones de dólares, procedentes en créditos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y del Departamento de Ayuda al Desarrollo de los Estados Unidos, proponiéndose que en el año 2000 todos los niños del continente tengan acceso a la educación básica y tres de cada cuatro adolescentes a la enseñanza media, y que un número significativo de los 50 millones de empresas pequeñas y medias tengan más fácil acceso a la banca en el año 2000, así como mejorar la sanidad y la nutrición. El Plan plantea lograr antes del año 2002 una igualdad jurídica entre hombres y mujeres y la promoción de medidas para combatir el tráfico de menores, la prostitución y la pornografía infantil, y un compromiso para modernizar la justicia y velar por los derechos de los emigrantes.

Uno de los temas más debatidos fue la lucha contra el narcotráfico, donde, como ya se señaló anteriormente, se acordó el fin de la certificación unilateral de los Estados Unidos. También se ratificaron en la necesidad de combatir la corrupción con fondos requisados a mafias y al tráfico de drogas y convocaron una Segunda Conferencia Especializada Interamericana para evaluar la lucha contra el terrorismo. Asunto igualmente recogido fueron los medios de comunicación social, pues en los últimos dos años cerca de doscientos periodistas han sido asesinados, por lo cual se acordó constituir una agencia que controle el libre ejercicio de sus funciones y realice un seguimiento de la situación. Para evaluar los progresos que se vayan obteniendo se constituyó un Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres, formado por los cancilleres que deberá reunirse dos o tres veces al año. Sin pronunciamiento sobre Cuba, sin embargo el presidente de Brasil reclamó su presencia para próximas cumbres diciendo: "un país está ausente, tiene un gran desarrollo en educación y salud y no veo razón para que no se integre en la comunidad democrática". Como comentario final debemos señalar que para la próxima cumbre, en el año 2002, deberá cambiar sustancialmente la actitud norteamericana, pues los países del Mercosur prosiguen su diálogo con la Unión Europea, la Comunidad Andina se fortalece interiormente y todos, individualmente, incrementan sus relaciones bilaterales.

Una de las mayores sorpresas que este año han deparado las relaciones interamericanas ha sido la política de Canadá hacia los países al sur de Río Grande, que se ha materializado con el viaje del primer ministro, Jean Chrétien, a México, Brasil, Argentina y Chile a principios de año para, como se mencionó con anterioridad, hacer otro a Cuba a continuación de la II Cumbre de las Américas. A finales del pasado año, el Secretario de Estado canadiense para Iberoamérica, David Kilgour, decía que su país: "es un país de América, hecho geográfico que ahora es confirmado por la historia" pues, aunque parezca obvio, la pertenencia política de Canadá al continente es muy reciente, se efectuó en 1990 al ocupar su puesto en la Organización de Estados Americanos, OEA, la institución más importante en el ámbito regional. El gobernante canadiense estuvo en su gira acompañado por lo que se conoce "Team Canada 98", mezcla de misión diplomática y comercial creada hace pocos años, en el que figuran 500 hombres de negocios. Por esta razón, ya en 1995 el gobierno de esta nación definió a Iberoamérica como una región de especial interés estratégico y ejemplo de ello es que, en los últimos cuatro años, las exportaciones canadienses a esta región se incrementaron de 260.000 millones de pesetas a

500.000, cifra que supera las exportaciones de Alemania y Francia, además de otros 200.000 millones en contratos que se están negociando en estos meses. Si México es considerado en Ottawa un cliente clave (hay que recordar que esta nación pertenece al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá), con Chile está en vigor desde 1997 un acuerdo de características similares y ahora los ojos se dirigen con detenimiento al Mercosur. Pero este incremento de relaciones económicas también ha beneficiado a su política exterior. Con el apoyo iberoamericano, Canadá ha podido sacar adelante algunos de sus proyectos, como el tratado de prohibición de minas antipersonales, la prolongación del cuerpo de paz en Haití o la oposición a la ley Helms-Burton que penaliza el comercio con Cuba. Y fue precisamente el viaje de Chrétien a La Habana lo que desencadenó el enfado de Bill Clinton, que intentó persuadir al político canadiense, sin conseguirlo, que anulase su visita a la isla caribeña. En un intento de contrarrestar esta irrupción canadiense, a principios de mayo fuentes norteamericanas hicieron público que el conjunto de las inversiones estadounidenses en Iberoamérica se elevaba a 76.400 millones de dólares, equivalente a casi 11 billones de pesetas, de acuerdo con las cifras ofrecidas por la Reserva Federal.

LA VIII CUMBRE IBEROAMERICANA

A diferencia de las ediciones anteriores, la VIII Cumbre Iberoamericana, que se celebró en la ciudad portuguesa de Oporto, durante los días 17 y 18 de octubre, tuvo un formato más reducido y la novedad principal fue la supresión de los discursos que pronunciaban los veintitrés jefes de Estado y de Gobierno participantes, que hacían que las sesiones fueran poco prácticas, facilitándose así la posibilidad de mayores contactos entre los mandatarios y más frecuentes las conversaciones de carácter bilateral, lo que se tradujo en un documento final más corto, más incisivo y con mayor impacto político. Este nuevo formato se ajustaba mejor al espíritu y a los objetivos que se pretendían alcanzar en estas cumbres.

Igualmente, el impulso de España y de otras naciones iberoamericanas para que las cumbres fuesen más ágiles y operativas y se pudiese efectuar un seguimiento más detallado de los proyectos de desarrollo que fuesen siendo aprobados en estos encuentros, resultaría plenamente eficaz con la creación de una Secretaría de Cooperación de carácter permanente. Ello no supone la desaparición de la Secretaría "pro t mpore", de la que forman parte los representantes del pa s que ese a o ejercen la Pre-

sidencia, de los países que la tuvieron el año anterior y de los que la ejercerán al año siguiente. España es partidaria de dotarla de un gran peso político, por lo que considera que debería estar al frente de la misma una personalidad de reconocido prestigio que haya ocupado cargos de responsabilidad en alguna nación iberoamericana.

La Declaración de Oporto, referida a *"los desafíos de la globalización y de la integración regional"*, destaca la creación de la Secretaría de Cooperación, señalada anteriormente, cuya estructura y funcionamiento será propuesta por los responsables de Cooperación y Coordinación Iberoamericanos y presentada durante la IX Cumbre que se celebrará en La Habana en 1999. El documento reitera "el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, el pluralismo político, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales", y en este aspecto hay que destacar que Fidel Castro puso su firma cuando en su régimen no se garantiza el derecho de reunión o asociación o en el que existen más de trescientos presos de conciencia. La Declaración consagra, en su apartado segundo, "los principios de soberanía y de no intervención y el derecho de cada pueblo a construir libremente en paz, estabilidad y justicia su sistema político" y la existencia de "un sistema justo de cooperación y de relaciones internacionales". Igualmente se señala que "la actuación de nuestros Gobiernos debe tener como objetivos la búsqueda de la justicia social, la elevación de los niveles de bienestar de las sociedades, la promoción de políticas de apoyo a los sectores más vulnerables y el refuerzo de la cooperación internacional". También se hace hincapié en la necesidad de adoptar "medidas más eficaces por parte de la comunidad internacional y especialmente de los países del G-7 y los organismos financieros" que propicien la estabilidad de los acuerdos para el crecimiento económico duradero y subraya que debe impulsarse la ayuda entre los Estados, ya sea en el plano bilateral o por mediación de organizaciones internacionales e igualmente se exhorta a la solidaridad en asuntos como la renegociación de las deudas externas o las iniciativas de eliminación de minas antipersonas en América Central.

El apartado octavo del documento destaca que "la convivencia internacional exige el respeto a los principios y normas del Derecho Internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a la soberanía de los Estados. Por eso, los países iberoamericanos rechazamos enérgicamente la aplicación extraterritorial de leyes nacionales. En este contexto, reiteramos nuestra exhortación al Gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin a la aplicación de la Ley Helms-Burton". La claridad y contun-

dencia de esta exigencia se considera un triunfo de Fidel Castro y una concesión, ya que en 1999 se celebrará en Cuba la IX Cumbre Iberoamericana. Los estadistas iberoamericanos reafirmaron su apoyo al Tribunal Penal Internacional como “paso importante” y destacaron “la gravedad que reviste el problema de las drogas, en la medida que tiene un efecto profundamente nocivo sobre los individuos y las sociedades y repercute negativamente en el funcionamiento de las instituciones democráticas y en las economías”, haciéndose un llamamiento para que se desarrollen mecanismos de coordinación aptos para hacer frente a la destrucción de la naturaleza y a la creciente degradación de los ecosistemas, la cooperación judicial y la lucha contra la corrupción, terrorismo y el crimen organizado.

La Declaración destaca, en el apartado 12, que es de suma importancia la Cumbre entre Iberoamérica y el Caribe con la Unión Europea, que se celebrará en Río de Janeiro en junio de 1999, defendiéndose el papel de la integración regional en un mundo globalizado y apoyar las iniciativas regionales. Así mismo, señala que es preciso “intensificar la cooperación bilateral y multilateral en los campos de la cultura y la educación”. Se exhorta igualmente “al apoyo de los Programas y Proyectos de cooperación aprobados por las sucesivas cumbres, para que contribuyan a potenciar un espacio iberoamericano”. Dos éxitos colaterales realzaron el éxito global de la cumbre de Oporto, el anuncio de la solución del conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú y el respaldo firme e incondicional del recién elegido presidente de Colombia, Andrés Pastrana, al proceso de pacificación que abrió tras llegar al poder en agosto del 98.

Uno de los grandes triunfadores de la Cumbre fue el presidente del Gobierno español, José María Aznar, quien reiteró el compromiso de nuestra Patria con los países iberoamericanos y nuestra voluntad de apoyar en todos los foros que les ayude a superar la crisis financiera, de la que no se les considera responsables. El presidente español señaló que la situación económica internacional no debe ser una razón para apartarse del modelo económico basado en la liberalización, la estabilidad y la competitividad y expuso la necesidad de restablecer el acceso normal a los mercados de capitales por parte de Iberoamérica. Comunicó la decisión de su Gobierno de aportar 3.000 millones de dólares para nuevas iniciativas de apoyo financiero que el FMI pudiera acometer en Iberoamérica y que plantearía la necesidad de la solidaridad con Iberoamérica en el Consejo Europeo, en la reunión que se celebraba una semana más tarde en la localidad austríaca de Pörschach. Por otro lado, la Cumbre puso de manifiesto la buena

situación de las relaciones hispano-cubanas, que propiciaron reuniones de S.M. el Rey y de José María Aznar con Fidel Castro, en las que se abordó la visita de los Reyes de España en la primavera de 1999, previa a la IX Cumbre Iberoamericana de La Habana.

A pesar del espíritu de entendimiento reinante y del éxito de la Cumbre, el ambiente de la misma se vió afectado por la decisión del juez español Baltasar Garzón de solicitar el enjuiciamiento del ex-presidente chileno, general Augusto Pinochet y hoy senador vitalicio de su país, que estaba entonces convaleciente en Londres de una operación quirúrgica. El impacto de la noticia empañó el protagonismo e imagen de la VIII Cumbre Iberoamericana.

LAS NACIONES IBEROAMERICANAS

Para *Centroamérica*, 1998 será un año difícil de olvidar debido al desastre y desolación causados por el huracán Mitch, el segundo más destructor que ha azotado la zona en este siglo. El huracán, que arrasó El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, se cebó particularmente en los dos últimos países, causando un número de muertos que pudiera superar las 20.000 víctimas. Junto a la tragedia de las pérdidas humanas están los graves daños causados a las infraestructuras, agricultura, viviendas, industrias y servicios de la región, estimando los especialistas que la devastación ha retrocedido la vida de estos países en más de 20 años. Cuando los análisis iniciales pusieron de relieve la magnitud de la catástrofe, surgió un gran sentimiento internacional de solidaridad, particularmente en España y los países de la Unión Europea. Tanto a nivel oficial como de las ONG,s, la ayuda a estas naciones ha alcanzado unos niveles impresionantes, habiendo sido condonada por la mayoría de los miembros de la UE la práctica total de la deuda de los países afectados y aprobado por la Unión un completo plan para la reconstrucción. Conviene tener presente que, según fuentes del Banco Mundial, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua deben al mundo en conjunto 17.000 millones de dólares.

Antes de la tragedia, Centroamérica venía desarrollando una vida muy activa, destacando la puesta en marcha de la *Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas*, CFAC, que había sido constituida a finales de noviembre de 1997 por los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esta Conferencia tiene por objeto la integración y cooperación militar en la región, la elaboración de una Reglamento para unifi-

car procedimientos en los campos logísticos, educativos y enseñanza, inteligencia y otros aspectos militares. En este ámbito de la Defensa han continuado en 1998 los programas de reducción de los efectivos de las fuerzas armadas en la mayoría de las naciones de la zona. En *El Salvador* se han reducido a 24.600 sus efectivos, *Guatemala* a 31.400 y *Honduras* a 18.300. Mientras, *Nicaragua* continúa manteniendo 17.000 soldados después del nivel que había alcanzado la guerra civil finalizada en 1991, cuando llegó a tener cerca de 70.000 personas encuadradas en sus ejércitos. *Costa Rica* y *Panamá* no disponen de fuerzas armadas, habiendo incrementado la primera ligeramente el número de las fuerzas de seguridad en 1.400, en tanto que Panamá no ha registrado variación alguna, manteniendo el nivel de 11.800 efectivos que tenía en 1997. Precisamente estas dos últimas han sido las únicas de la región que han experimentado un aumento de sus presupuestos de seguridad, al subir la primera a los 70 millones de dólares (un 20 por ciento más que el año anterior) y la segunda hasta los 125 millones, que significa un 10 por ciento respecto a 1997. La necesidad de encontrar una paz estable, tras los años turbulentos de la década pasada, llevó a estas naciones a una significativa reducción de las fuerzas armadas, pero a la vista del aumento espectacular del crimen organizado, algo casi lógico en las sociedades después de conflictos, quizás esa desmovilización se produjo demasiado rápido pues afectó a todas ellas y particularmente a El Salvador y Colombia.

En lo que a la vida nacional se refiere, hay que destacar la elección, como nuevo presidente de *Costa Rica*, del socialcristiano Miguel Angel Rodríguez, en los comicios que se celebraron el 1 de febrero, en una jornada sin traumas y a cuya toma de posesión asistió el Príncipe de Asturias. El 9 de febrero comenzó la XIV edición del Grupo de San José para fomentar el diálogo entre la Unión Europea y los seis países centroamericanos. Sin embargo, la vida de *Guatemala* se vería profundamente sacudida por el asesinato del Arzobispo Juan Gerardi, creador de la oficina de Derechos Humanos de su país. En el ámbito internacional, el 27 de enero el Gobierno anunciaba la normalización de las relaciones con Cuba. En la misma medida, la violencia sacudió a *Honduras*, donde Orlando Fúnez dirigente del principal partido de la oposición y ex-ministro de Coordinación, Planificación y Presupuesto del ex-presidente Rafael Callejas fue asesinado en las calles de Tegucigalpa. A finales de enero asumió la Presidencia Carlos Roberto Flores, asistiendo igualmente a su investidura el Príncipe de Asturias. En *Panamá*, el 30 de agosto, el presidente Ernesto Balladares ganó el referéndum que le permitirá aspirar a la reelección

inmediata. A mediados de febrero se celebró la VIII reunión del Grupo de Río y la UE, con la asistencia de 23 cancilleres. En el área de la cooperación política y económica regional hay que recordar la XII Cumbre del Grupo de Río, que se celebró a principios de septiembre de 1998, que además facilitó el acercamiento de posiciones entre Ecuador y Perú, que les conduciría al acuerdo de paz entre las dos naciones.

Como se aventuraba en la edición anterior de *"Panorama Estratégico"*, la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba hay que valorarla como el suceso más importante de 1998 para la isla caribeña. La visita de Su Santidad, realizada entre el 21 y el 25 de enero, convirtió a Cuba en el centro de la atención mundial y los medios de comunicación internacionales, representados por unos cinco mil periodistas, pudieron dar testimonio de la calurosa bienvenida dispensada por centenares de miles de isleños, fuesen cristianos, santeros o ateos revolucionarios. El hecho de que antes de la visita papal el cardenal arzobispo de La Habana, monseñor Ortega y Alamino (que a finales de los años sesenta fue obligado a 10 años de trabajos agrícolas en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción), pudiera dirigirse sin trabas y cortapisas a través de la televisión cubana a toda la nación, tras 39 años de censura total, era muestra de que tras la llegada de Juan Pablo II ya no sería todo igual en Cuba. El afecto y respeto con los que Fidel Castro distinguió al Pontífice pareció indicar cierta simpatía recíproca entre ambos, aunque el discurso de bienvenida de Fidel Castro en el aeropuerto tuviera un descarado matiz de mitin político, en el que descalificó a la Iglesia por los errores del pasado, y estuvo desafortunado en el repaso a la descolonización española. Pero Juan Pablo II aprovechó todas las ocasiones que tuvo de hablar en público para recordar a Fidel Castro y a los cubanos la falta de libertad, carencias materiales, el dolor y la miseria de una gran parte de la población y criticar el sistema educativo y la despenalización del aborto. Para entender la clave de la visita papal, hay que recordar las frases que se intercambiaron en el Vaticano en la primera entrevista celebrada en 1996 entre Fidel Castro y Su Santidad. "No puedo abrirme al mundo porque tengo una pistola en la sien", dijo Castro. A lo que respondió el Papa, "Tú ábrete al mundo, que yo te quitaré la pistola". Juan Pablo II ofreció al líder cubano su mediación desinteresada para que se levante el embargo norteamericano, que fue duramente criticado por el Pontífice, y exhortó a Fidel Castro a que "Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba". Fruto inmediato de la visita papal fue la liberación de 299 presos cubanos, indultados a petición del Vaticano, aunque el canciller cubano Roberto Robaina se apresurase a advertir que ello no signifi-

caba una apertura política y como muestra estaba la negativa a liberar a 70 presos políticos.

La descalificación pública de la ley Helms-Burton por el Papa tuvo un amplio eco internacional, en particular en las naciones iberoamericanas y en la Iglesia católica. Algunos cancilleres, como el chileno José María Insulza, se pronunciaron a favor de una postura conciliadora norteamericana hacia Cuba, pues “no representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos ni de nadie”. Por su parte, el presidente del Comité episcopal de política internacional de los obispos norteamericanos, monseñor Theodore McCarnik reclamó que “ya era hora de promover la reconciliación entre nuestros pueblos” y solicitó a su Gobierno que se pudiera hacer llegar a la isla alimentos y medicinas. Igualmente, la Iglesia en Alemania sugirió a sus dirigentes políticos el establecimiento de “una cooperación bilateral con Cuba”. La condena al embargo estadounidense ha continuado recibiendo adhesiones en todo el mundo, muy particularmente dentro de Norteamérica, donde políticos y empresarios abogan por un levantamiento, llegando a reconocer la propia Casa Blanca por medio de su portavoz Mike McCurry que la controvertida ley Helms-Burton no ha alcanzado los resultados que esperaban. Por parte española, el Consejo de Ministros aprobó el 13 de febrero un proyecto de ley para proteger a los españoles que inviertan en Cuba, de acuerdo con el mandato de la Unión Europea, por el que cualquier ciudadano que se vea afectado por la ley Helms-Burton recibe compensaciones económicas. La actitud europea obligó a que el número dos del Departamento de Estado, Stuart Eizenstat, viajase en febrero a Bruselas y ofreciese una paz comercial sobre la citada ley. En este sentido, el 19 de marzo el Gobierno de Washington anunció ciertas medidas que suavizaban el embargo: autorización de vuelos directos por motivos humanitarios, aumento de remesas de divisas de cubanos residentes en Estados Unidos y envío de medicamentos y artículos de primera necesidad.

En un informe presentado al Congreso, el Secretario de Defensa, William Cohen, manifestó el 30 de marzo que Cuba ya no representa una amenaza para los Estados Unidos, pues “las Fuerzas Armadas Revolucionarias han quedado gravemente disminuidas y gran parte de su material inservible” y se restaba importancia a los peligros que pudieran plantear las armas químicas o bacteriológicas que supuestamente pudiera poseer el régimen de Fidel Castro. Para el Pentágono, el mayor riesgo lo representa la posibilidad de una masiva emigración cubana, como ocurrió cuando en 1994, 20.000 balseiros llegaron a suelo norteamericano.

Aunque la Comisión de Derechos Humanos de la ONU rechazó el 21 de abril un proyecto de resolución de Estados Unidos, por el que se acusaba al Gobierno de Fidel Castro de violar los derechos humanos, el primer ministro de Canadá, Jean Chretien, en su visita a Cuba tras la II Cumbre de las Américas, insistió ante el mandatario cubano en la excarcelación de presos políticos y el respeto de la Declaración de los Derechos Humanos. El 18 de mayo, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron un acuerdo por el que se exime a las inversiones europeas en Cuba de las sanciones contempladas en la ley Helm-Burton, pero no contra los ejecutivos y accionistas de las empresas, porque ello depende de la autorización del Congreso. El 10 de octubre, el ex-secretario de Estado Henry Kissinger exigió públicamente una revisión de la política de su país con Cuba.

Pero para España, el suceso más significativo ha sido la normalización de las relaciones con Cuba, tras la designación de Eduardo Junco Bonet como embajador en La Habana, que tuvo lugar el 2 de abril y que ponía fin a la crisis diplomática de casi 500 días de duración, iniciada cuando el gobierno cubano retiró el placet al entonces embajador designado José Coderch. España impuso dos condiciones previas: que el embajador tuviera libre contacto con todos los sectores sociales, así como libertad de movimientos, y un estricto control de los refugiados etarras y de los narcotraficantes que buscaran escondite en la isla. La nueva situación ha abierto el camino para que los Reyes de España puedan visitar oficialmente Cuba el año 1999, independientemente de la visita obligada ese mismo año que tendrán que realizar posteriormente con motivo de la IX Cumbre Iberoamericana. Por otra parte, se han intensificado las relaciones comerciales y contactos políticos entre las dos naciones. Muestra de ello fue la llegada a La Habana el 16 de abril de una delegación de 97 empresarios españoles, encabezada por el presidente de la CEOE, José María Cuevas, que entre otros objetivos tenía la renegociación de la deuda cubana, que se eleva a 138.000 millones de pesetas, y la apertura de una oficina de asesoría para las empresas españolas. Fidel Castro mantuvo una larga reunión con los directivos de la CEOE y se firmó un protocolo entre la CEOE y el Gobierno cubano para enmarcar las relaciones de la organización empresarial con la isla. Posteriormente, en la madrugada del 4 de junio, Fidel Castro asistió a la recepción ofrecida por el comandante del buque escuela "Juan Sebastián Elcano", con motivo del viaje a la isla, que se efectuaba cien años después del fin de la guerra del 98. De gran importancia sería la visita realizada por el ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, entre el 21 y 25 de junio, acompañado por altos cargos de su departamento, los presi-

dentes de Endesa, Iberia, Indra, Ebro, Red Eléctrica y ejecutivos de otras empresas, Telefónica, Roca, Iberdrola, Renfe, Dragados y un largo etcétera. Piqué tuvo la oportunidad de entrevistarse varias veces con Castro. Así mismo, otros políticos españoles visitaron la isla, destacando entre ellos el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga.

En el ámbito internacional, el líder cubano asistió el 22 de agosto en la República Dominicana al Foro del Caribe (Cariforum), invitado como observador, y en el que participaron los 15 Jefes de Estado y de Gobierno de los países caribeños. El presidente dominicano Lionel Fernández manifestó que Cuba formaba parte de la región y “no podíamos tener un encuentro de esta naturaleza con su exclusión”.

La ya citada Cumbre Iberoamericana de Oporto puso en evidencia el buen estado de las relaciones hispano-cubanas, como se desprende de las reuniones mantenidas por el Rey y el presidente del Gobierno con Fidel Castro. Consecuencia de estos encuentros fue el viaje oficial a La Habana del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, realizado entre el 8 y el 11 de noviembre, y cuya agenda comprendía la preparación y fijación de las fechas de la visita de los Reyes en 1999, la renegociación de la deuda, firma de varios acuerdos (entre ellos uno de cooperación mutua sobre el tráfico de drogas) y la excarcelación de cuatro opositores del Grupo de Apoyo de la Disidencia Interna, acusados de sedición y que llevaban 14 meses de prisión sin juicio.

Aunque el Procurador General de la *República Dominicana* confirmaba el 1 de abril que estaba estudiando la extradición de la etarra Belén González, que había sido solicitada por el Gobierno español, a finales de octubre, días antes de las elecciones autonómicas del País Vasco, ella y su compañero Angel Iturbi Abásolo lograron escapar del país. En las elecciones parlamentarias y municipales celebradas el 16 de mayo, el Partido Revolucionario Dominicano logró 25 de los 30 escaños del Senado y la mayoría de diputados y cargos municipales. Hecho histórico fue la visita del presidente Leonel Fernández a Haití, pues desde 1934 ningún mandatario dominicano había viajado al país vecino. La visita, iniciada el 20 de junio, tenía entre otros muchos objetivos el abordar el grave problema migratorio que plantea la presencia de más de medio millón de trabajadores haitianos. El Foro del Caribe, al que asistieron 15 jefes de Estado de la región, se reunió en Santo Domingo del 21 al 22 de agosto.

El año 1998 podría ser considerado para *Argentina* como el de la reorganización de sus Fuerzas Armadas, merced a la tramitación por parte del

Congreso y el Senado de un proyecto de ley que algunas fuentes militares han calificado como una amplia directiva operativa, que define las líneas políticas, orgánicas y funcionales de su organización militar. El padre de la ley 24948 es el político José H. Jaunarena, que la concibió para potenciar la capacidad militar argentina a fin de alcanzar los objetivos de la Seguridad Nacional, incluyendo el apoyo a la estabilidad internacional y a las operaciones de mantenimiento de la paz. Por primera vez las Fuerzas Armadas tienen un mandato político que apoye sus misiones fuera de las fronteras nacionales, que fue completado con otras dos leyes, la 23554 sobre la nueva Defensa Nacional y la 24059 de la Seguridad Interior, con las que se cubre todo el posible espectro de las operaciones militares. Sin embargo, hay que advertir que la ley de Seguridad Interior prohíbe que las fuerzas armadas participen contra objetivos domésticos, cuya responsabilidad es propia de las fuerzas policiales, si bien contempla que puedan prestar ciertos apoyos, como podría ser en la lucha contra el narcotráfico o contra grupos armados dentro del territorio nacional. Por otro lado, la posibilidad de establecer un marco regional de seguridad entre Argentina, Brasil, y Chile, basado en medidas de confianza y operaciones militares combinadas, permiten una proyección internacional de sus fuerzas armadas que va más allá de la participación en operaciones de mantenimiento de la paz.

El territorio nacional se dividirá en áreas estratégicas, con un mando militar conjunto cada una, con lo que las cadenas militares de mando existentes se verán reducidas. Las unidades operativas dentro de cada área serán agrupadas de forma que exista un mejor aprovechamiento de las instalaciones y del entrenamiento, lo que facilitará un ahorro considerable, que podrá reflejarse en una mejora de las retribuciones del personal. En tiempo de paz, las Fuerzas Armadas estarán integradas por personal en activo y reservistas, con énfasis en la rápida disponibilidad más que en la entidad de la fuerza. Así mismo, el sistema militar de enseñanza se integrará en el sistema educativo nacional. En lo que al material y equipo se refiere, se procurará unificar aquéllos que puedan tener una utilización común y todas las adquisiciones en el exterior deberán llevar transferencias tecnológicas, compensaciones industriales y, cuando proceda, incluirán medios de entrenamiento tales como simuladores. Las industrias de defensa serán privatizadas y las inversiones extranjeras en el sector serán bienvenidas.

Por vez primera, las fuerzas armadas poseerán un presupuesto plurianual, con un incremento del tres por ciento para 1999, de los 3.505 millo-

nes de dólares previstos para 1998, porcentaje que se mantendrá durante los próximos cuatro años. “No es mucho”, dice Jaunarena, “pero al menos se invertirá la anterior tendencia a la baja”. La ley contempla entre 1999 y el año 2003 una inversión de mil millones de dólares en la modernización del material, incluida la compra de nuevos equipos, y la financiación deberá proceder mayormente de la venta de instalaciones y propiedades militares. Igualmente se definirá qué material se conserva, cuál debe ser modernizado y el que será dado de baja. La implementación de la ley será supervisada por un comité de seis senadores y seis diputados pertenecientes a las respectivas comisiones de defensa de las dos Cámaras. A los tres meses de entrada en vigor de la ley, el Ministerio de Defensa debe informar al comité del cumplimiento de objetivos, tales como nuevas estructuras operativas y de apoyo, propuestas de reducción de personal, cambios en el sistema de pase a retiro y nuevas retribuciones. Al año de entrada en vigor deberán estar definidos los requisitos de las fuerzas de reservistas, los presupuestos y programas a largo plazo, plan de movilización nacional e identificación de las instalaciones que serán vendidas. Tres años más tarde deberá estar finalizado el estudio para integrar la enseñanza militar en el sistema educativo nacional, completado el diseño de una red informática militar, etc. Los legisladores pretenden que todo el desarrollo del marco de la reforma deberá estar concluido en el plazo de cinco años. Sin embargo, todo ello llevará consigo aspectos dolorosos, pues el objetivo de disponer de una fuerza más capaz y operativa tiene como contrapartida la reducción de su entidad, que ya de por sí es pequeña, pues hoy día los componentes de las Fuerzas Armadas son tan sólo 74.000, de los cuales 10.000 son soldados y el resto cuadros de mando. Una reducción de un veinte por ciento podría ser traumática y excesiva.

La vida nacional siguió viéndose sacudida por el tema de los desaparecidos. El arresto del teniente general Jorge Rafael Videla, ordenado por el juez Roberto Marquovich, por el presunto robo y cambio de identidad de algunos bebés de prisioneras políticas, y su ingreso en la prisión de Caseros llevó cierta inquietud al estamento militar. Pero más graves fueron las consecuencias de la decisión del juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, para “que comparezcan en Madrid 200 militares argentinos, nueve de ellos con orden de captura recomendada”, pues como dijo el presidente Carlos Menem “me ha colocado en la necesidad de asumir la tarea de desbaratar esta maniobra de acoso judicial a las fuerzas armadas argentinas por parte de aquéllos que no entienden el proceso de pacifi-

cación y que tanto daña a las relaciones hispano-argentinas". Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente en la base naval de Puerto Belgrano, 980 kilómetros al sur de Buenos Aires, ante un grupo selecto de mandos de la Marina de Guerra, ante quienes aseguró, "ser el presidente que más cerca ha estado de las Fuerzas Armadas y estoy honrado por eso. Siempre van a tener a este presidente de su lado y espero que este mensaje les sirva de aliento". En relación con el tema de los desaparecidos, el Parlamento argentino se mostró a favor de derogar las leyes de amnistía de Punto Final y Obediencia Debida, pero sin carácter retroactivo, lo que permitirá juzgar las violaciones de derechos humanos que puedan producirse en el futuro.

Sobre su presentación a una nueva reelección, el presidente Menem, en un discurso pronunciado en el mes de julio de 1998, anunció que no se presentará a un segundo mandato consecutivo, para evitar fracturas en el seno de la comunidad e insistió en su disposición a presentarse ante la justicia cuando abandone el poder el año próximo, y que a partir de ese momento comenzaría a trabajar para regresar a la Presidencia en el año 2003. Ante la grave situación económica internacional desencadenada en el verano de 1998, el presidente advirtió que la nación contaba con reservas de divisas suficientes para afrontarla y que mantendría la paridad del peso con el dólar a capa y espada. Sin embargo, Argentina se enfrenta a tasas de desempleo del 14 por ciento y una subida del PIB del 5 por ciento frente al 8.6 prevista doce meses antes, temiéndose que el fuerte endeudamiento perdure durante todo 1999, a pesar de las medidas adoptadas. El 24 de julio finalizó la XIV Cumbre de Mercosur, a la que asistieron los presidentes de Bolivia y Chile como asociados a la zona de libre comercio.

A finales de octubre, el presidente efectuó el primer viaje oficial de un mandatario argentino a Gran Bretaña después de la guerra de las Malvinas. En su visita, Carlos Menem pidió a las autoridades británicas que sumen su buena voluntad a la de su país para encontrar una solución amistosa al diferendo sobre las islas del Atlántico Sur, 16 años después del conflicto armado.

En enero de 1998 se presentó en *Bolivia* el plan quinquenal contra la droga, cuyo objetivo es eliminar 38.000 hectáreas de cultivos ilegales, invirtiendo 952 millones de dólares, desplazando a 15.000 familias y ofreciendo proyectos alternativos a otras 20.000. Asimismo, el plan preveía aportaciones económicas por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos y del Fondo para el Desarrollo de las Naciones Unidas. A pesar de que

los indicadores económicos bolivianos eran esperanzadores para 1998, si bien con un ligero repunte de la inflación, a principios de abril la Confederación Obrera Boliviana, COB, convocó una huelga general en demanda de mejoras salariales que derivaría en graves incidentes al tratar el ejército de evitar que los cocaceros de la región de Cochabamba bloqueasen la carretera general, produciéndose algunos muertos. El Gobierno acusó a los narcotráficantes de la provocación de estos incidentes, pues a los cosechadores de la hoja de coca se les ha reducido el 40 por ciento del bono de unos 2.300 dólares que el Gobierno les pagaba por la eliminación de cada hectárea cultivada, por lo que los comerciantes de la droga intentaban prolongar su actividad lo más posible. A raíz de la detención del general Augusto Pinochet en Londres, algunos sectores políticos encabezados por el Movimiento Nacional Revolucionario pretenden que el presidente Hugo Bánzer sea juzgado por crímenes contra la Humanidad, por considerar que estuvo implicado en la llamada *Operación Cóndor* de los años 70, en la que dictadores suramericanos coordinaban sus acciones contra los grupos izquierdistas.

A principios de 1998 se conocieron los planes de *Brasil* de revitalizar la aviación naval embarcada en el portaaviones Minas Gerais, con la posible compra a la fuerza aérea de Kuwait de 23 A-4 Skyhawk, por un importe de 70 millones de dólares. Desde tiempo atrás, la Marina brasileña viene preparándose para utilizar aviones embarcados y en los últimos ejercicios ARAEX, aviones argentinos Super Etendard estuvieron operando desde el mencionado portaaviones, así como un S-2E Tracker igualmente argentino. La Marina argentina viene cooperando con la brasileña en este campo desde hace pocos años, habiendo formado a dos aviadores de este país y prestado un A-4Q para estudio de compatibilidad. Caso de que Brasil adquiriera los Skyhawk sería el único país del continente, excepto Estados Unidos, con capacidad de aviación embarcada.

Sin embargo, tres acontecimientos han venido a marcar la vida nacional brasileña a lo largo de 1998 y que cronológicamente han sido: un devastador incendio en la Amazonia, la crisis económica mundial y la reelección del presidente Fernando Henrique Cardoso. El año comenzó con la continuación del incendio forestal que venía asolando la región amazónica de Roraima desde noviembre de 1997 y que durante los primeros meses de 1998 había devastado una zona de casi 40.000 kilómetros cuadrados, una superficie más grande que Galicia. Las autoridades brasileñas rechazaron el ofrecimiento reiterado de ayuda de Naciones Unidas, porque juzgaban que era un problema interno que debía ser resuelto con sus

medios nacionales, en contra de la opinión de la ONU que considera la Amazonia como la mayor reserva mundial de la biosfera, con sus seis millones de kilómetros cuadrados de selva forestal. La presión internacional obligó al presidente Cardoso a aceptar las ayudas argentina y venezolana y a principios de abril fuertes lluvias ayudaron a controlar el incendio. Pero la deforestación de la Amazonia es prácticamente continua, pues tan sólo en los últimos 20 años han ardido 370.000 kilómetros cuadrados. Pero lo más grave es que la deforestación es rentable, una hectárea desbrozada cuesta 23.000 pesetas y una de bosque tropical autóctono solamente 2.300. Además, el incendio llevó consigo una tragedia aún mayor, la destrucción de los cultivos de los indios *Yanomani*, una de las doce tribus que habitan Roraima, según informes del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), que ha denunciado reiteradas veces que a pesar de las garantías constitucionales que prohíben la ocupación de las tierras indígenas, la realidad es otra bien diferente, pues la mayoría de esas tierras está ya invadida por grupos económicos.

A mediados de agosto de 1998, la grave crisis económica mundial, ya comentada anteriormente, llevó a Brasil a una difícil situación que puso en peligro la estabilidad económica de toda Iberoamérica. A finales de 1997 la mayor economía iberoamericana fue la primera que se vió afectada por la depreciación de las monedas de Indonesia, Malasia y Tailandia, por lo que fue el principal objetivo de los especuladores. Razón por la cual el gobierno brasileño se vió obligado a tomar medidas contundentes a comienzos de 1998, tales como la contención del gasto público y la elevación de los tipos de interés por encima del 40 por ciento, para evitar la devaluación del real.

Ello trajo consigo una recuperación de la confianza internacional y el regreso de los flujos financieros que permitieron reducir los tipos al 20 por ciento y llegar en mayo de 1998 a su máximo histórico de reservas de divisas hasta los 70.000 millones de dólares. Pero tales medidas tuvieron un elevado coste político-social y motivaron la ocupación de tierras, el saqueo de supermercados y el asalto a camiones de transporte de víveres, lo que obligó a intervenir al Ejército para restaurar el orden público. Ante estos hechos, la mayor parte de los obispos brasileños, en particular su ala más progresista, criticó las medidas represivas gubernamentales, advirtiendo al Gobierno que en vez de fuerzas antidisturbios deberían enviar cestas con alimentos y cuestionando que hubiera democracia en el país.

En la visita oficial que el presidente Cardoso hizo a España a mediados de mayo dijo que el llamado Movimiento sin Tierra pretendía explotar polí-

ticamente la situación. Pero la fuerte caída de las bolsas internacionales en el verano del 98 hizo perder a Brasil en tan sólo quince días más de 15.000 millones de dólares, llevando al país a un nivel de reservas similar al que tenía en octubre del año anterior y a pesar de las medidas de ajuste fiscal continuó la masiva fuga de capitales, disminuyendo las reservas nacionales hasta llegar el nivel a los 45.000 millones de dólares.

Entre las medidas de emergencia, el Banco Central de Brasil elevó los tipos de interés al 49,75 por ciento anual y revaluó las medidas de ajuste económico del plan de estabilización, anunciando el presidente Cardoso en plena campaña electoral presidencial un severo ajuste del gasto público a los presupuestos de este año y del año próximo. Consecuencia de todo ello ha sido que el Banco Central brasileño admitió que el país tendrá este año un crecimiento inferior al 2 por ciento del PIB, cerrará 1998 con un déficit del 7.3 por ciento del Producto Interior Bruto, el segundo mayor del mundo, sólo superado por el de Suecia (7.7 por ciento) y con una deuda superior a los quinientos mil millones de dólares.

Para atajar la grave crisis, el Gobierno solicitó del Fondo Monetario Internacional y del G-7 una ayuda alrededor de 40.000 millones de dólares, que le ha sido concedida pero que comportará al mismo tiempo un severo plan de austeridad que evite el desmoronamiento de su economía y la devaluación de su moneda, que de llegar a ocurrir llevaría a toda Iberoamérica a una profunda y larga recesión.

El 4 de octubre se celebraron las elecciones generales, en las que se presentaba a reelección el presidente Cardoso como candidato de la coalición de centro-derecha, que ganó con amplia mayoría de votos, superando en más de un 20 por ciento al aspirante que postulaba la izquierda, Luiz Ignacio Lula da Silva, obteniendo igualmente mayoría en las elecciones para gobernadores de los 26 Estados y del Distrito Federal. El triunfo de Cardoso fue acogido con satisfacción en la práctica totalidad de las cancillerías americanas y europeas, así como en las instituciones y organismos internacionales, por considerar que era una victoria de las reformas económicas adoptadas a raíz de la crisis internacional habida, en agosto y septiembre, y que solamente podría llevar a la práctica el recién elegido presidente. Posteriormente, el 25 de octubre se celebraron las elecciones para la segunda vuelta de aquellos gobernadores que no lograron la mayoría absoluta en las elecciones del 4 de octubre y con los que Cardoso deberá contar obligatoriamente para aplicar su plan de ajuste. Con estas elecciones se cerraba el último capítulo del proceso de renovación de

autoridades locales y nacionales, que convalidaba por segunda vez a Cardoso al frente de la Presidencia, renovaba un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Diputados y actualizaba los cargos legislativos regionales.

El 26 de octubre se firmó en Brasilia el acuerdo de paz que puso fin al enconado diferendo fronterizo entre Ecuador y Perú, con la asistencia de los Reyes de España y de cinco jefes de estado iberoamericanos, debiendo destacarse el protagonismo del presidente Cardoso por haber jugado un importante papel en las negociaciones habidas al actuar como coordinador de las cuatro naciones garantes, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos y de los dos países enfrentados.

Durante 1998 *Colombia* ha vivido marcada por el continuo enfrentamiento entre el Gobierno y la guerrilla, por lo que en la visita del presidente Ernesto Samper a España, a principios de febrero, José María Aznar ofreció que Madrid pudiera ser el escenario donde se celebrasen conversaciones de paz, a fin de solucionar un conflicto que en los últimos 30 años se viene cobrando diez vidas por día. Ello permitió alcanzar un preacuerdo en Madrid, llamado Preacuerdo de Viana, entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda guerrilla en importancia del país y liderada por el ex-sacerdote español Manuel Pérez, pero que no llegó a un fructífero final puesto que en el mes de abril el grupo guerrillero acusó a las autoridades de utilizar el pacto con fines electorales y favorecer al aspirante del partido gobernante a la presidencia, el liberal Horacio Serpa, al mismo tiempo que se conocía la muerte del curaguerrillero. El domingo 31 de mayo se celebraron las elecciones presidenciales para elegir los dos candidatos que el 21 de junio se disputarían la presidencia, y, tras el recuento, los dos vencedores fueron Serpa por el partido liberal y Andrés Pastrana por el conservador, quedando descartado el candidato independiente Noemí Sanín, que así y todo se aproximó a los tres millones de votos. A pesar de la vigilancia del Ejército y de la Policía, hubo graves atentados y secuestros de los guerrilleros que habían anunciado que no interferirían el proceso electoral. Al día siguiente, el ELN descongelaba el Acuerdo de Paz de Viana y aceptaba la mediación del Premio Nóbel de Literatura Gabriel García Márquez, de España, Francia y Alemania.

Sin embargo, los atentados continuaron durante las tres semanas entre ambos comicios, conociéndose a principios de junio el último informe de Amnistía Internacional que señala que en 1997 hubo cerca de 30.000

mueritos, 114 masacres, 200.000 desplazados, 140 desaparecidos a manos de las fuerzas de seguridad, 600 secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el ELN y 40 aspirantes a alcaldías y concejales asesinados. En la segunda vuelta electoral, el 21 de junio, triunfó el conservador Andrés Pastrana y confirmó su oferta de dialogar con la guerrilla. Efectivamente, a principios de julio el presidente electo se reunió en una zona selvática del este del país, donde las FARC tienen su Cuartel General, con sus dos principales líderes, Manuel Marulanda *Tiro Fijo* y Jorge Briceño *El Mono Jo Joy* y se comprometió a desmilitarizar los cinco municipios que solicitaba el movimiento rebelde para que sirviese como posible escenario de las conversaciones de paz. Pocos días después, el ELN aceptó participar en una cumbre de paz que se iniciaría a partir del 12 de julio en la ciudad alemana de Maguncia con miembros de la llamada Comisión Nacional de Paz, entre los que se encontraban el Procurador General colombiano y el presidente de la Federación Nacional de Comercio, y firmaron la Declaración de Maguncia, que entre otros puntos aboga por la "humanización del conflicto".

Pero el miércoles 5 de agosto la guerrilla colombiana asestó a las Fuerzas Armadas uno de los golpes más demoledores de los últimos años, al arrasar su principal base antinarcóticos, situada en la localidad de Miraflores y que los rebeldes calificaron como "despedida del Gobierno de Ernesto Samper", que cedía el mando a Pastrana el 7 de agosto. En el choque murieron al menos 250 guerrilleros, militares y civiles y se produjeron cerca de 100 heridos. La arremetida guerrillera se extendió a otras provincias, donde también hubo un elevado número de víctimas. A pesar de ello, el presidente Andrés Pastrana reiteró la oferta de paz en su toma de posesión y anunció un profundo cambio político en el país que incluía la paz, la reforma política y el ajuste económico. El nuevo presidente estuvo acompañado por ocho Jefes de Estado y por el Príncipe de Asturias.

En el mes de septiembre, y con participación del embajador español Yago Pico de Coaña, continuaron las conversaciones entre el ELN y la Comisión Nacional de Paz, reunidos en el municipio colombiano de San Francisco, anunciándose que iniciarían una ambiciosa Convención Nacional el 13 de febrero de 1999, en la que se discutirían varios grandes temas, como Derechos Humanos, Fuerzas Armadas, corrupción, recursos naturales, democracia, economía, agricultura y narcotráfico. Mientras tanto, el presidente Pastrana inició una amplia remodelación de la cúpula de las Fuerzas Armadas y el 13 de octubre ordenó el repliegue militar en

una amplia zona sureña y concedió el tratamiento de partido a las FARC, informando que 42.139 kilómetros cuadrados quedarían bajo el dominio de la guerrilla como “un laboratorio de paz” y aseguró que la desmilitarización estaría vigente del 7 de noviembre al 7 de febrero de 1999 “para facilitar los diálogos que puedan conducir a un proceso de paz consolidado y firme”. Pocos días más tarde, el Senado aprobaba una propuesta para que los líderes de las FARC, del EZL y del Ejército Popular de Liberación, EPL, accedieran el 16 de diciembre al órgano legislativo para que expusieran sus ideas sobre la reforma política que iba a acometer el parlamento y cuyo último fin era dar carpetazo a tantos años de guerra civil, siendo aceptada la propuesta por las tres formaciones guerrilleras.

Pero la grave situación financiera internacional ocurrida a mediados del verano afectó seriamente a la economía colombiana, siendo el nuevo presidente el primer mandatario iberoamericano en adoptar medidas para hacer frente a la crisis y decidió devaluar el 2 de septiembre el peso en un 9 por ciento, a fin de evitar la salida de divisas, que en los 12 meses anteriores superaban los 1.300 millones de dólares. El duro plan de ajuste motivó grandes y masivas jornadas de protesta a lo largo de todo el país, que ocasionaron violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La crisis ocasionará que la economía de Colombia creciese en 1998 por debajo del 3 por ciento y que incluso haya habido un repunte de la inflación.

El 26 de febrero, los Estados Unidos levantaron las sanciones, que aplicaba contra Colombia desde hacía dos años, como premio a “los esfuerzos que hace este país para combatir el tráfico de drogas”. En este marco de la lucha antidroga, Colombia está negociando con Francia la ampliación de un acuerdo para controlar desde satélites las extensiones de los cultivos, y en una visita a dicha nación, España y Holanda del director de la lucha contra el narcotráfico, a finales de abril, reconocía que los guerrilleros disponen de capacidad para derribar aviones y helicópteros. Concretamente señaló que ya habían perdido tres de los primeros y siete aeronaves de alas giratorias.

La vida política nacional de *Chile* giró durante 1998 en torno a la figura del general y senador vitalicio Augusto Pinochet. Nada más comenzar el año, el Partido Comunista de Chile interpuso una querrela contra el general, que todavía era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por los delitos de “genocidio, secuestros seguidos de desaparición, asociación ilícita e inhumación ilegal de cadáveres”, acusación que sería admitida a trá-

mite por un juez de la Corte de Apelación de Santiago. Paralelamente, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, partido que forma parte de la coalición de gobierno, debatía la acusación constitucional contra Pinochet, propuesta por cinco de sus diputados, dirigida a evitar que fuese designado senador vitalicio, cargo que de acuerdo con la Constitución vigente tiene derecho a ocupar por haber sido presidente de la República más de seis años. Sin embargo, el Gobierno, por boca del ministro del Interior, advirtió que no apoyaría la acusación constitucional porque era considerada "inconveniente" para esos momentos de la transición en los que se preparaba el abandono de Pinochet de la comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas, previsto para una fecha entre el 26 de enero y el 11 de marzo. Frente a dicha acusación, el Gobierno propuso un referéndum para reformar la Constitución y acabar con la figura de los senadores vitalicios y designados.

Como respuesta a los incidentes habidos en la Cámara de Diputados a mediados de enero, que impidieron debatir la acusación constitucional, el general aplazó su retiro hasta la fecha límite establecida del 11 de marzo. Este retraso motivaría la dimisión del ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, presentada el 16 de enero. Pérez Yoma, que fue el hombre encargado a lo largo de la transición de actuar de puente entre las autoridades civiles y las Fuerzas Armadas, fue sustituido por Raúl Troncoso Castillo, quien declaró a los pocos días de su toma de posesión que Pinochet había hecho mucho por el país y lo calificó de defensor de la democracia. Por las mismas fechas, la Corte Suprema de Chile rechazó el exhorto del juez español García-Castellón por el que solicitaba antecedentes sobre la supuesta violación de los derechos humanos de ciudadanos españoles ocurrida durante el régimen del general Pinochet. El 2 de febrero, el presidente chileno, Eduardo Frei, inició una visita oficial a España, durante la cual criticó las indagaciones de la justicia española y pidió se respetase la transición democrática que estaba viviendo su país. En esos mismos días, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, manifestó que el escaño del anciano militar como senador vitalicio, tras su pase a retiro, era un "precio razonable a pagar" por la transición a la democracia.

El 8 de marzo, las Fuerzas Armadas declararon "comandante en jefe benemérito" a Pinochet, por su "trayectoria y labor cumplida" y para testimoniar "el impercedero reconocimiento a su gestión". Tres días más tarde el general juró su cargo de senador vitalicio en un acto precedido por numerosos incidentes en la Cámara Alta y que al mismo tiempo se repe-

tían en la de los Diputados. Por su parte, el Parlamento Europeo, tras una intervención del eurodiputado español de Izquierda Unida, Carlos Carnero, ratificó el rechazo del nombramiento como senador vitalicio de Augusto Pinochet. En un debate habido a principios de abril en el Parlamento chileno, sobre una nueva acusación constitucional contra el general, el presidente de la nación Eduardo Frei aseguró que "Augusto Pinochet no fue un obstáculo para la democracia y que las Fuerzas Armadas respetaron en todo momento la ley y el poder político legítimamente establecido".

Pero la tranquilidad de la vida chilena durante el paréntesis veraniego se vería gravemente sacudida por la decisión del juez español Baltasar Garzón de solicitar al Gobierno británico que se "garantizara la permanencia en suelo británico" del general Pinochet hasta que le pudiera tomar declaración, y que motivó el 17 de octubre su detención en un hospital de Londres, donde se recuperaba de una intervención quirúrgica. Garzón le acusaba de genocidio, terrorismo y torturas. El Tribunal Supremo de Londres sentenció la inmunidad soberana del senador vitalicio e invalidaba las órdenes de detención que pesaban contra él, lo cual fue recurrido por la Fiscalía en nombre del juez español. El 25 de noviembre, la comisión de apelación de la Cámara de los Lores británica rechazaba la inmunidad de Augusto Pinochet en una decisión histórica, que abría paso a su posible enjuiciamiento. Ello abrió una grave crisis política en Chile por lo que el presidente Frei inmediatamente convocó al Consejo de Seguridad Nacional y se dirigió por radio y televisión al país solicitando un comportamiento responsable y sereno a las instituciones y la ciudadanía. Seguidamente, la institución militar, que como es sabido mantiene significativa influencia en la vida de la nación, emitió un duro comunicado urgiendo al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias que permitieran al antiguo comandante en jefe su regreso a Chile. Al parecer, en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, los mandos militares exigieron al Gobierno la inmediata ruptura de relaciones diplomáticas con España y Gran Bretaña. El general Ricardo Izurieta, jefe del Ejército, convocó a 2.000 oficiales en Santiago a una reunión informativa para analizar la situación.

En el orden económico, el primero de junio Chile y la Unión Europea formalizaron la incorporación del diálogo político al Acuerdo Marco de Cooperación, suscrito en junio de 1996 y cuyo objetivo final es establecer una asociación política y económica. Más tarde, el 22 de julio, la Comisión Europea aprobó el mandato de creación de una zona de libre cambio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) y con Chile. La caída de los precios de las materias primas, como consecuencia de la crisis finan-

ciera internacional, hicieron disminuir las exportaciones de cobre chilenas, lo que obligaría a reducir el gasto público en 700 millones de dólares a mediados del verano, a fin de evitar un repunte de la inflación, que estaba siendo inferior en tres puntos respecto a 1997. Con relación a la adquisición de nuevos sistemas de armas, a principios de año la Fuerza Aérea ordenó la compra de 12 helicópteros UH-60 Blackhawk, mientras que suspendía la adquisición de modernos aviones de combate.

En *Ecuador*, las Fuerzas Armadas se han tenido que enfrentar a las presiones del sector privado, que pretenden desaparezcan sus privilegios de competir en el campo empresarial, con inversiones que incluyen hoteles, industria textil, agricultura, metalurgia, explosivos, granjas marinas de marisco, etc. así como percibir una parte sustancial de los beneficios de las exportaciones del petróleo. Los militares argumentan que ello permite ayudar a los presupuestos de defensa y que constituyen la institución mejor valorada de todo el país, así como mantener una amplia serie de programas sociales, enseñanza agrícola a los indígenas, electrificación rural y educación pública entre otros. Ecuador es uno de los pocos países iberoamericanos que viene incrementando su presupuesto de defensa, con toda seguridad motivado por el conflicto que mantenía con Perú y por la necesidad de controlar su frontera con Colombia para evitar la penetración de la guerrilla y de los narcotraficantes, pues además sus oleoductos se encuentran próximos a dicha zona.

El primero de marzo, el Tribunal Supremo Electoral convocó elecciones generales y presidenciales en medio de un clima enrarecido debido a los daños causados por el fenómeno climatológico "El Niño", que había devastado la región costera, y al enfrentamiento entre el presidente Fabián Alarcón y la Asamblea Nacional, al prorrogar ésta las fechas para reformar la Constitución. Las elecciones, que se celebraron el 31 de marzo, dieron el triunfo al Partido Social Cristiano, pasando a la segunda vuelta para las presidenciales el alcalde de Quito, Jamil Mahuad y el banquero populista Alvaro Noboa. El 12 de julio se impuso por un estrecho margen Jamil Mahuad, 51.16 por ciento frente al 48.83 de su adversario, y asumió la Presidencia, manifestando que sus prioridades serían la recuperación económica y la solución del conflicto con Perú. Las medidas de ajuste de la primera se vieron contestadas por una huelga general a primeros de octubre que motivó caos y violencia en varias ciudades, en particular Guayaquil, mientras que las largas negociaciones con Perú culminarían con el acuerdo de paz que se suscribió en Brasilia el 26 de octubre.

Los comienzos de 1998 en *México*, y prácticamente todo el año, han estado marcados por la honda conmoción nacional a consecuencia de la matanza de Acteal a finales de diciembre del año anterior. En enero, el recién nombrado Secretario de Gobernación (Ministro del Interior), Francisco Labastida Ochoa, efectuó una amplia remodelación de su departamento, que incluyó el cese del coordinador gubernamental en las conversaciones de paz de Chiapas y su sustitución por Emilio Rabasa. Al mismo tiempo, presionado por el deterioro progresivo de la situación, el nuevo gobernador del estado chiapaneco, Roberto Albores, solicitaba el apoyo del Ejército para reformar los cuerpos de policía y achacaba a intereses extranjeros todos los problemas registrados en la región. En esta misma línea, el Subsecretario de Gobernación, Fernando Solís, acusaba a los centenares de extranjeros llegados a Chiapas meses antes, (la mayor parte miembros de numerosas ONG,s) de "participar en manifestaciones, adoctrinamiento político e incitar a la rebelión", por lo que en la segunda quincena de abril se inició la expulsión de esos ciudadanos extranjeros, entre ellos varios españoles, que trabajaban como observadores de derechos humanos y a los que se acusaba de turismo revolucionario. Casi simultáneamente, diversos medios gubernamentales acusaban al obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, de estar vinculado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, lo que motivó la protesta de la jerarquía católica mexicana y los cuatro obispos de Chiapas advertían al Secretario de Gobernación, Labastida Ochoa, que México estaba en una dramática encrucijada, en la que "o bien se camina a la democracia o se dirige a la dictadura, la represión o la guerra".

La presencia creciente de unidades del Ejército en el estado sureño fue rechazada por el Episcopado mexicano, cuyo vicepresidente, el obispo José Guadalupe, pidió al Gobierno "la retirada del Ejército de las comunidades indígenas para evitar que pudiera provocar rechazo y un consiguiente aumento de la violencia". En este sentido, el EZLN amenazó con el empleo de las armas si se producían nuevos ataques de grupos paramilitares y rechazaba la presencia cada vez mayor de fuerzas militares y a su vez el Consejo Nacional Indígena reiteraba sus denuncias sobre que "las comunidades indias de México vivían en un ambiente de terror y exigimos al Ejecutivo que asuma íntegramente los Acuerdos de San Andrés Larrainzar sobre Cultura y Derechos indígenas, suscritos entre el Gobierno y el EZLN en 1996". Por otro lado, los medios de comunicación pedían el desmantelamiento de las estructuras regionales del poder político, que fueron calificadas de "criminales", para poder pacificar la región. Para evi-

tar el agravamiento de la situación, el Gobierno presentó el 17 de marzo un plan de paz, invitando al líder del EZLN, subcomandante Marcos, a retomar las conversaciones, quien respondió que el Ejecutivo debía aceptar la proposición de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación para Chiapas, COCOPA, basada en los mencionados Acuerdos de San Andrés. La propuesta gubernamental supone reformar siete artículos de la Constitución: reconocer que las comunidades indígenas pueden decidir de manera autónoma su organización social, económica, política y cultural; se garantiza su identidad cultural; se facilita la transmisión de su lengua por medios de comunicación propios; impartir justicia con su propia normativa; derecho de los indígenas para ser asistidos en juicios por intérpretes y abogados en su idioma; derecho a utilizar los recursos naturales de sus tierras; proteger el desarrollo de sus comunidades e impulsar una municipalización, teniendo en cuenta la ubicación geográfica indígena.

Con motivo de su visita a Chiapas a mediados de marzo como embajadora de la UNESCO, la premio Nóbel de la Paz Rigoberta Menchú manifestó que la tensión en la zona era manifiesta y que la fuerte presencia militar podría desencadenar choques violentos. Señalaba que las condiciones de pobreza y marginación de los indígenas de Chiapas se habían agravado en los últimos años y advertía que la incomunicación era total entre los actores principales, Gobierno, EZLN y COCOPA. La premio Nóbel consideraba que el peligro más grande estaba en la existencia y actuación impune de grupos armados vinculados a políticos locales y a caciques, y veía con gran preocupación el creciente número de tales grupos, por lo que para que pudiera fructificar cualquier esfuerzo de reconciliación era indispensable la desarticulación de los mismos. Igualmente Rigoberta Menchú aconsejaba que se consultara y tuviese en cuenta la opinión de las comunidades indígenas en toda iniciativa política que les afectase.

Dentro de una gira por Iberoamérica, en una visita de dos días iniciada el 21 de julio a México, el secretario general de la ONU, Kofi Annan exhortó al EZLN y al Gobierno del presidente Ernesto Zedillo para que establecieran un diálogo "sincero, honesto y continuado que conduzca a la paz" y destacó el papel de la sociedad mexicana que "debería compartir la responsabilidad de motivar a las partes para que negocien con seriedad y no incentiven el uso de la violencia". Annan señaló que el papel de la ONU será el de alentar un proceso de paz y reiteró que la ONU no mediaría en el conflicto, a no ser que lo solicitara el Gobierno mexicano.

En una encuesta hecha pública el 18 de agosto, realizada por la fundación Rosenblueth, el 70 por ciento de los mexicanos consideraba al Gobierno, a las autoridades de Chiapas y a grupos paramilitares próximos al PRI de ser los responsables de los crímenes de Acteal del pasado diciembre. El 73 por ciento justificaba el levantamiento indígena de 1994 y consideraba que el conflicto tenía repercusiones a nivel nacional, negando un 53 por ciento que el gobierno tuviera voluntad política de avanzar en una solución y que no se hubieran cumplido los acuerdos de San Andrés. Respecto a si el EZLN es un peligro para la paz, las opiniones se dividían en posturas contrarias, con un 40 por ciento aproximadamente por cada lado.

La oposición criticó duramente al presidente Zedillo que no mencionase el conflicto de Chiapas en su cuarto informe sobre el estado de la nación, hecho público a principios de septiembre, y de ocultar a la opinión pública la verdadera situación en esa zona. Mientras, un expediente llamado "la legalidad de la injusticia", publicado por la fundación Fray Bartolomé de las Casas, señalaba que desde la matanza de Acteal habían sido asesinadas en Chiapas 57 personas. El 14 de septiembre, diez obispos integrantes de la Comisión de la Paz y Reconciliación de la Conferencia Episcopal mexicana llegaron a Chiapas para completar la información facilitada por las fuentes gubernamentales, como parte de la preparación de la visita de SS Juan Pablo II a México, prevista para el 22 de enero de 1999.

La caída de los precios del petróleo obligó al gobierno de Zedillo a realizar varios recortes presupuestarios y además provocará una reducción adicional de los ingresos previstos superior a los 1.500 millones de dólares. A diferencia de 1986, cuando la economía mexicana dependía en un 75 por ciento de los ingresos del petróleo, ahora el crudo tan sólo representa el 37 por ciento, porcentaje aún elevado que podría audizar el grave déficit fiscal existente. Además, la crisis económica internacional acaecida en agosto, supuso otro factor de riesgo para México, que obligó a un alza de los tipos de interés que a final del verano estaban en torno a los 27 puntos. Todo ello se tradujo en una desaceleración del crecimiento que se teme sea por debajo del 4 por ciento, muy inferior del 7.1 del año precedente. Sin embargo, en el cuarto informe del Gobierno, antes citado, Zedillo defendió su política fiscal ante la caída de los precios del crudo, la crisis ruso-asiática y la depreciación del 20 por ciento del peso frente al dólar y denunció a los "criminales de cuello blanco" como responsables de la corrupción (entre los acusados está el gobernador del Banco Central de México, quien fue denunciado por el diario Reforma de un presunto des-

falco). El Fondo Monetario Internacional espera que México efectúe una reforma bancaria, ajuste la política monetaria y diversifique los ingresos de manera que contenga la desaceleración del crecimiento económico y la devaluación del peso, que en octubre alcanzó una pérdida del 32 por ciento respecto al dólar.

Nuevamente el narcotráfico ha tenido un triste protagonismo en la vida mexicana. La Fiscalía antidroga admitió que en el 20 por ciento de los 2.418 municipios del país se registran actividades relacionadas con el narcotráfico e informó que durante 1997 se localizaron y destruyeron 770 pistas de aterrizaje clandestinas, se erradicaron 41.000 hectáreas de cultivo de marihuana y amapola y se detuvieron 11.000 personas relacionadas con este negocio criminal. Por otro lado la Procuraduría General de la República arrestó al ex-director de la policía judicial federal, a quien acusó de estar vinculado al narcotráfico y de otros presuntos delitos durante su ejercicio en el cargo (1993-95). En lo que se refiere a la criminalidad urbana, millares de mexicanos se manifestaron contra la violencia, pues según algunos medios de comunicación se producen 694 delitos diarios solamente en la capital federal, estimándose que en 1998 en México DF se registrará un millón y medio de delitos, que dejará 1.100.000 víctimas. En la lucha contra el crimen organizado se detuvo a Daniel Arizmendi, quien lideraba una poderosa mafia autora de más de 200 secuestros, entre los que ha habido varios españoles, y a los que mutilaba las orejas para presionar a los familiares de las víctimas en el pago del rescate.

Es evidente que las Fuerzas Armadas mexicanas vienen desempeñando un mayor papel en las relaciones de poder en México y, a diferencia del resto de los países iberoamericanos, están incrementando el presupuesto de defensa y están efectuando cometidos dentro del orden interno de la nación. Este nuevo papel ha deteriorado su imagen e introducido nuevos elementos de tensión con los cuerpos policiales y con la ciudadanía. La detención del general Gutiérrez Rebollo en 1997, máximo responsable de la lucha antidroga por su vinculación con el narcotráfico, y que fue condenado el 3 de marzo de 1998 a 13 años y 9 meses de prisión, la impopular actuación del Ejército en Chiapas y la detención y condena a 14 años del general Gallardo Rodríguez por malversación y destrucción de archivos propiedad de las Fuerzas Armadas está afectando muy negativamente a la imagen de las mismas, lo que ha llevado al presidente Zedillo a adoptar medidas que alejen a los militares de los riesgos de verse mezclados en la corrupción y a restablecer su honorabilidad, dejando que sea

la Procuraduría General de la República la responsable de hacer frente al crimen organizado, a la corrupción y al narcotráfico.

La vida política de *Paraguay* estuvo marcada durante 1998 por el triunfo del Partido Colorado en las elecciones presidenciales y el "affaire" del general Lino César Oviedo, que había sido procesado por un intento de golpe de estado en 1996 y que, a la espera de que un Tribunal Militar Extraordinario dictase sentencia, se encontraba en prisión desde el 2 de diciembre del pasado año por orden del presidente Juan Carlos Wasmosy. El general, que había ganado los comicios internos del Partido Colorado, ANR, para elegir candidato a la Presidencia, fue condenado a diez años de cárcel por el Tribunal el 9 de marzo por un delito "contra el orden y la seguridad de las Fuerzas Armadas", sentencia que confirmaría la Corte Suprema un mes más tarde. La condena motivaría que el Tribunal Superior de Justicia Electoral inhabilitara al general Oviedo para presentarse a las elecciones que tuvieron lugar el 10 de mayo. De esta forma se cerraba una crisis política y militar que podía haber dado al traste con la transición política a la democracia pues, como afirmaría el escritor paraguayo Arturo Roa Bastos, ésta aún no había llegado a su patria, "un país que sigue siendo una isla rodeada de tierra".

Las elecciones presidenciales serían ganadas con un 54 por ciento de los votos por el candidato oficialista del ANR, Raúl Cubas, frente al 43 por ciento del aspirante de la opositora Alianza Democrática, Domingo Laíno. Las elecciones llevaban consigo los escaños que ocuparían 45 senadores, 80 diputados y 17 gobiernos de los departamentos que conforman el país, y a la cita electoral acudió el 80 por ciento del censo. La toma de posesión del nuevo presidente Raúl Cubas tuvo lugar el 15 de agosto y asistieron a la ceremonia de investidura el Príncipe de Asturias y siete jefes de Estado. Pero el martes 18 de agosto, Cubas conmutó la sentencia de diez años de prisión de su amigo y correligionario, el general Oviedo, por tres meses de prisión, que por llevar cumplidos ocho originó su puesta en libertad. La decisión presidencial sería reprobada por el Congreso, lo que abrió el camino hacia el juicio político contra el presidente, tentativa fallida, pues no alcanzaría el 60 por ciento de los votos necesarios y fue acompañada por el silencio de la clase militar. La iniciativa presidencial llevaría consigo una depuración en las Fuerzas Armadas.

En el aspecto económico ha habido unos resultados aceptables con la disminución de la deuda y la inflación, siendo reducido también el presupuesto de defensa en un diez por ciento para bajar a los 110 millones de

dólares, aunque la oposición acusara al Gobierno de que la corrupción supuso una pérdida al país de 2.000 millones de dólares.

Aunque el fenómeno “El Niño” castigó algunas zonas del *Perú* poco después de comenzar el año, un acuerdo con Ecuador estableciendo un calendario dirigido a la firma de un tratado de paz entre ambos países vino a compensar de alguna forma los daños causados por las inundaciones. Las fuerzas de seguridad se apuntarían un gran éxito cuando el 22 de abril fue detenido Pedro Quinteros, líder histórico y miembro del Buró Político y del Comité Central de Sendero Luminoso. Sin embargo, la dimisión a principios de junio del presidente del Gobierno, Alberto Pandolfi, contribuyó a incrementar el ambiente de crisis precisamente cuando se estaba negociando intensamente con Ecuador el acuerdo de paz, por lo que Alberto Fujimori designó en 24 horas un nuevo jefe del Ejecutivo, Javier Valle Riestra, un reconocido crítico del primer mandatario y enemigo de su reelección como presidente del país. El nuevo primer ministro advirtió en su primera comparecencia pública que pretendía “fortalecer la democracia y el respeto a los derechos humanos”, declarándose enemigo de todas las reelecciones, por lo que aseguró que su Gobierno sometería a consulta la candidatura para una segunda reelección de Fujimori en el año 2000. Pero a primeros de agosto Valle Riestra presentaría su dimisión justificándola porque sus esfuerzos para democratizar el país no eran viables, siendo sustituido por Alberto Pandolfi, quien dos meses antes había renunciado al cargo.

La destitución del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general del Ejército, general Hermoza, efectuada el 20 de agosto produjo un grave malestar entre los militares que habían depositado su confianza en el general que desempeñaba sus cargos desde hacía siete años. Le sustituyó el ministro de Defensa, general César Saucedo. Pocos días después, el 27 de agosto, el Congreso peruano se pronunció en contra de la celebración de un referéndum para determinar si el presidente Alberto Fujimori podía presentarse a un tercer mandato, con lo que se dejaba el camino libre para una nueva reelección. La oposición sólo había conseguido 45 votos de los 48 requeridos para derogar la ley que permite la reelección del presidente, si bien la convocatoria del referéndum había sido apoyada por el 73 por ciento de los ciudadanos. Fujimori encontró el apoyo de los Estados Unidos por su participación en la lucha contra el narcotráfico, que le ha facilitado modernos radares para detectar y controlar los aviones que transportan la droga, con lo que la Fuerza Aérea ha podido causar algunos derribos y debilitar

el "puente aéreo" con Colombia, disminuyendo así en cerca del 30 por ciento la producción de coca al caer los precios en el mercado de la droga.

En *Uruguay* el año comenzaba con la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores. En febrero la Cámara de Senadores, en sesión plenaria, se solidarizó con el pueblo español condenando los últimos crímenes de ETA. A mediados de mayo se celebró en Montevideo la IX Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos Iberoamericanos, a la que asistió por vez primera Cuba como miembro de pleno derecho, estando España representada por el presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo. El 18 de julio, un juez uruguayo negó a su colega español Baltasar Garzón la comisión rogatoria para interrogar a un oficial, retirado en 1971, sobre desapariciones de ciudadanos españoles en Argentina. En el área económica, la Comisión Europea aprobó en julio abrir negociaciones con los cuatro miembros de Mercosur para la creación de una zona de libre cambio, debiendo destacarse la fuerte disminución de la inflación que pasó del 19.8 por ciento al 10.2.

En *Venezuela* es donde el impacto de los factores económicos internacionales ha causado los efectos más dramáticos, porque además repercutieron muy fuertemente los precios del petróleo, que en el verano de 1998 cayeron por debajo de los 12 dólares por barril, muy lejos de los 21 fijados como meta por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a la que pertenece dicha nación. El petróleo es el principal producto de exportación de Venezuela y con la bajada del precio reducirá en más de 7.000 millones de dólares los ingresos nacionales en 1998. A pesar de los intentos más o menos coordinados de los países de la OPEP, y de otros no pertenecientes a la Organización, para reducir su producción con vistas a conseguir un alza del precio del crudo, el caso es que se situaron en su nivel más bajo desde hace diez años. Ante esta situación, el 18 de agosto los ministros de energía venezolano y mexicano coincidieron en rechazar nuevos recortes en la producción de petróleo, que había sido ya reducida en 525.000 barriles por día en Venezuela y 200.000 en México. Para evitar una macrodevaluación del bolívar, el gobierno venezolano permitió a finales de agosto una mayor fluctuación de su moneda dentro de las bandas cambiarias, que en realidad representaba una devaluación de facto. Y el deterioro de la economía ha hecho que haya sido el único país iberoamericano con crecimiento negativo y con un repunte del IPC que se situó en el 37 por ciento. El 14 de septiembre el Fondo de Garantías de Depósitos informó que los tipos de interés rondaban el 100 por cien, que

desde 1984 el bolívar se había devaluado en un 14.000 por cien y que en estos 14 años la inflación había subido un 89.000 por ciento.

En el campo político, un tribunal ordenó el 14 de abril el arresto inmediato del ex-presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de enriquecimiento ilícito, estableciendo su residencia en Caracas como lugar de reclusión, pues al rebasar los 70 años no podía ingresar en un centro penitenciario. Pero más importantes fueron las elecciones regionales y legislativas celebradas el 8 de noviembre, pues se consideraban esenciales para las presidenciales que tendrían lugar el 6 de diciembre. El triunfo lo alcanzó el ex teniente coronel Hugo Chávez, protagonista de la intentona golpista del 4 de febrero de 1992, apoyado por una coalición llamada Polo Patriótico, compuesta por el Movimiento Quinta República, que es su partido, por los socialistas, sector nacionalista y los comunistas, mientras que los partidos tradicionales recibieron un voto de castigo, lo que parece una muestra de la voluntad de los venezolanos por el cambio.

En el plano internacional, la Organización de Estados Americanos reunida en Caracas ratificó el primero de junio su compromiso de compartir un "destino común" en favor del fortalecimiento de la democracia en el continente, al inaugurar su XXVIII Asamblea General.

ESPAÑA EN IBEROAMÉRICA

La presencia española en Iberoamérica ha sido continua y creciente, tanto en el ámbito político como en el económico. El 15 de marzo, el presidente del Gobierno español iniciaba su sexto viaje a la región, antes de que se cumpliera su segundo año al frente del ejecutivo. En esta ocasión, la gira comprendía una visita a tres países, Bolivia, Uruguay y Chile, por este orden, y durante una semana. Fue un nuevo paso para reforzar la presencia cultural y económica de España en el Cono Sur del continente y dos mensajes: una demanda en favor de una mayor colaboración antiterrorista y un llamamiento en pro de la democracia. Al llegar a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, José María Aznar declaró que "lo importante es que ahora, con nuestras raíces, con nuestro pasado, seamos capaces de construir juntos un futuro". Durante su visita se suscribieron acuerdos por un total de 130 millones de dólares, que implican la canalización de recursos hacia el alivio de la deuda y los programas de impulso a la pequeña y mediana empresa. Entre los acuerdos destaca uno para fortalecer el Sistema de Defensa Civil Boliviano, centrado en combatir los efectos del fenó-

meno meteorológico de El Niño, otro para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y propiciar cultivos alternativos a la coca en la región de Chapare y otro para favorecer el desarrollo de los pueblos indígenas. Precisamente en la sede del Foro Indígena (institución creada en la Cumbre Iberoamericana de Madrid en 1992) reclamó a todos los países del Cono Sur el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y pidió para ellos el lugar que les corresponde en los parlamentos nacionales.

En Uruguay, su segundo destino en este viaje, centró su mensaje en la lucha contra el terrorismo, toda vez que en este país residen 13 integrantes de la banda ETA. España había ya alcanzado ciertos éxitos en ese terreno en esta nación, como fueron que el Senado suscribiese una declaración de condena del terrorismo y fuera el primer país en el que las autoridades hicieran público el vídeo elaborado por el Ministerio del Interior español para mostrar al mundo la verdadera cara de ETA.

Nada más pisar tierra chilena, José María Aznar instó a la Cámara de los Diputados, reunida en sesión plenaria en la ciudad de Valparaíso, a “diluir cualquier residuo autoritario” y a ejercitar día a día “el espíritu de concordia” y los principios del Estado de Derecho. En el segundo día de la visita lanzó un mensaje novedoso en su intervención ante el Parlamento, crear un espacio jurídico común iberoamericano, similar al que distintos gobiernos españoles han propuesto para Europa. Los diputados chilenos aclamaron al presidente cuando agradeció la cariñosa acogida a exiliados y emigrantes españoles “en épocas difíciles”. Ambos gobiernos asumieron un acuerdo tácito en virtud del cual España no haría ningún gesto que pudiera interferir el proceso chileno de tránsito a la democracia y Chile no efectuaría reclamaciones al presidente español por la actuación de la justicia española en relación con los españoles desaparecidos. José María Aznar, que fue acompañado en esta gira por un nutrido grupo de empresarios, llevaba también unos objetivos económicos, puesto que España es el primer inversor extranjero en Chile, país que cuenta con un tratado muy favorable de cooperación con la Unión Europea.

Igualmente, el viaje que el presidente de la Xunta de Galicia realizó por los países del Mercosur refleja la cooperación económica española con Iberoamérica.

Durante el mes de mayo, reanudó su visita a España el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso, iniciada en el mes de abril, pero que tuvo que ser interrumpida el 22 de dicho mes por la muerte de uno de sus más estrechos colaboradores. Cardoso vino acompañado por varios minis-

tros y un grupo de hombres de negocio a fin de estrechar unas relaciones económicas que han crecido de forma espectacular en los últimos años.

La Casa Real española, que presta una especial atención a Iberoamérica, estuvo representada por el Príncipe de Asturias en las tomas de posesión de cinco nuevos presidentes: a finales de enero y el 8 de mayo, a los de Honduras y Costa Rica, respectivamente, y más tarde, interrumpiendo sus vacaciones de agosto, el Príncipe viajó a Colombia para asistir a la investidura de Andrés Pastrana como primer mandatario del país; posteriormente viajaría a Ecuador, donde tomó posesión Jamil Mahuad, para a continuación trasladarse a Paraguay y representar a España en el acto de investidura de Raúl Cubas. Igualmente viajaría a Venezuela para asistir al V Centenario de la Llegada de Cristóbal Colón al continente americano.

A mediados del mes de septiembre el presidente Aznar efectuó su séptimo viaje a los países iberoamericanos, en este caso a Colombia y Perú. Nada más llegar a Cartagena de Indias, ofreció la mediación española en el proceso de paz que pretendía relanzar el recientemente elegido presidente de la República colombiana Andrés Pastrana, que incluía gestiones arbitrales de la diplomacia española y Madrid como sede neutral para las negociaciones con los grupos guerrilleros, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Conviene recordar que en Colombia se producen 30.000 homicidios de promedio cada año y la violencia ha obligado al desplazamiento y emigración de 150.000 personas. Aznar firmó varios convenios de cooperación bilateral y un programa de ayuda financiera, pero recordó garantías de respeto para los derechos humanos, si bien no puso condiciones a la ayuda española. Antes de trasladarse a Lima, el presidente español visitó la localidad amazónica de Iquitos, donde desarrolla una intensa actividad la cooperación española. Con Alberto Fujimori firmó un convenio por el que se establecen contactos anuales de alto nivel, con lo que el Gobierno español "llenaba el vacío" existente desde hacía seis años. Por otra parte, el aumento de la inversión española en Perú justificaba, en opinión de José María Aznar, el que se preste a esta nación apoyo político. Días después, la esposa del presidente español asistió como invitada especial a la I Conferencia de primeras damas de las Américas, que se celebró en Santiago de Chile, y que la inauguró con una conferencia sobre las reclusas, sector de la población que "sufre una dolorosa marginación".

Después de la Cumbre Iberoamericana de Oporto, se reunieron en la ciudad gallega de Bayona el 19 de octubre los dirigentes iberoamericanos

en el poder pertenecientes a la Internacional Demócrata Cristiana, IDC, que firmaron la Declaración de Bayona, por la que se comprometieron a rechazar toda forma de corrupción y cualquier tentación totalitaria o autoritaria, abogando por los valores universales del Humanismo Cristiano como fundamento para consolidar la democracia. En este encuentro participaron, además del presidente del Gobierno español, los Jefes de Estado de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador y el presidente del Partido Popular Europeo, Wilfried Martens. Simultáneamente, se celebraba en la ciudad española de Córdoba la III Reunión de Ministros de la Presidencia Iberoamérica, que fue inaugurada por el vicepresidente primero español Alvarez-Cascos, con el fin de dar respuestas globales a los problemas comunes. Mientras tanto, Fidel Castro realizaba una visita a Extremadura, para trasladarse a Madrid el 20 de octubre, donde celebraría varias entrevistas con José María Aznar.

Sin embargo, un incidente vino a empañar este año de gran impulso a las relaciones con Iberoamérica: la petición del juez Baltasar Garzón para enjuiciar al general Augusto Pinochet, a la que nos referimos al abordar al VIII Cumbre Iberoamericana. A pesar de los esfuerzos personales del presidente Frei y de José María Aznar para reducir la crisis a límites estrictamente jurídicos, la repercusión en las relaciones entre los dos países fue indudable, hasta el punto que el Gobierno chileno retiró a su embajador en Madrid y violentas manifestaciones alteraron la vida chilena, en las que banderas españolas fueron quemadas y nuestra residencia diplomática en Santiago objeto de demostraciones protestando por la decisión del Ejecutivo español de tramitar la solicitud de extradición a las autoridades británicas. Conviene tener en cuenta la gran presencia económica en Chile, donde la inversión pública y privada supera el billón de pesetas.

La política económica española en Iberoamérica ha continuado con una creciente inversión en 1998, hasta el punto que se superó el billón de pesetas que se había alcanzado en 1997.

Las inversiones españolas en *Argentina* ascienden ya a unos 400.000 mil millones de pesetas, si se tienen en cuenta negocios en forma asociativa esa cifra supera los 900.000 millones. Las principales operaciones en este país las han realizado Telefónica, Repsol, Endesa-Enher, Aguas de Barcelona y Campofrío, y entre los bancos más activos se encuentran el Santander, BBV, Español de Crédito y el Central-Hispano.

En *Brasil* destaca Telefónica, que en 1998 invirtió casi un billón de pesetas en la compra de Telesp y Tele Sudeste Celular. Y en cuanto a los

bancos, el Grupo Santander tiene una importante presencia, así como el BBV, que se ha consolidado en Brasil con la adquisición este año del Banco Excel.

El sector bancario español tiene también una fuerte presencia en Chile, donde el Grupo Santander ha conseguido en 1998 una cuota de mercado del 11.3 por ciento, y la inversión del Central-Hispano supera los 70.000 millones de pesetas y controla los dos principales bancos del país. Igualmente, Telefónica y BBV tienen una muy alta inversión, donde poseen alrededor del 45 por ciento de Telecomunicaciones de Chile y Banco Hipotecario de Fomento respectivamente, mientras Endesa es el primer accionista de Enersis, la mayor empresa de electricidad chilena.

México es otro gran centro de inversiones españolas, donde en 1998 se ha reforzado la actividad del Santander, Bilbao-Vizcaya y Central-Hispano, así como de Telefónica, Dragados, FCC, Entrecanales y Cubiertas, la sevillana Abengoa y la cadena hotelera Ríu.

En *Venezuela*, las inversiones han continuado principalmente por parte del BBV, Grupo Santander, Central-Hispano y Telefónica.

Cuba es otro de los focos para la economía española, habiéndose situado en primer lugar como país inversor, siendo el sector turístico el más importante, tanto en hoteles como con grupos de viaje. Además en los sectores de alimentación, construcción, tabaco y plásticos y en otros campos de la actividad económica, la presencia española ha proseguido durante 1998 con un índice creciente.

Pero el número de empresas españolas que está invirtiendo en Iberoamérica, así como el de naciones, va en aumento. Por ejemplo, el banco Bilbao-Vizcaya ha ampliado su presencia a *Colombia*, *Perú* y *Uruguay* y el Central-Hispano a *Bolivia*. Por su parte, Repsol ha realizado unas inversiones, con sus filiales, superiores a los 600.000 millones de pesetas y dispone de estaciones de servicio en *Argentina*, *Perú* y *Ecuador* y distribuye gas a *Bogotá*, *Buenos Aires*, *Monterrey* y *México capital*. La compañía Telefónica firmó un contrato con el Gobierno peruano en agosto de 1998 para poner fin al monopolio de las telecomunicaciones en el país, donde su inversión superaba los 300.000 millones de pesetas y ha comenzado una nueva inversión por un valor de 225.000 millones hasta el año 2001. El Grupo Prosegur, que ya tenía presencia en *Argentina*, *Chile*, y *Panamá*, ha efectuado su entrada en *Brasil*, *México* y *Venezuela*, y la empresa carrocera Irizar ha comenzado a producir autocares en Brasil en una "joint

venture” con la compañía local Gaio. Podemos resumir diciendo que España ocupa ya el primer puesto en Iberoamérica, no sólo por las grandes compañías y entidades financieras, sino también por las pequeñas y medianas empresas, habiendo cambiado la preferencia que había hacia otras naciones de la Unión Europea por los países iberoamericanos, aunque los créditos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial a nuestras empresas para invertir en Iberoamérica para 1998 no hayan experimentado un crecimiento significativo, 80.000 millones de pesetas, 2.500 millones más que en el año anterior.

En un gesto de espontánea solidaridad, la población española acudió en auxilio de los cuatro países centroamericanos, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, dramáticamente afectados por el huracán Mitch. A mediados de noviembre los ciudadanos españoles habían aportado más de 15.000 millones de pesetas, en tanto que el Gobierno había concedido 18.000 millones de pesetas en créditos FAD y condonado otros 8.500 millones de pesetas de deuda hasta el año 2001. El Príncipe de Asturias, acompañado del Vicepresidente Primero del Gobierno, Álvarez Cascos, viajó a la zona entre el 14 y 18 de noviembre. Además, unidades terrestres, navales y aéreas de las fuerzas armadas españolas fueron desplazadas a la zona en misión humanitaria.

EPÍLOGO

EPÍLOGO (Diciembre de 1998)

VISIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL 1998

Por FEDERICO FERNANDO DE BORDEJÉ Y MORENCOS

Como acontecimientos más significativos acaecidos desde que se cerró el trabajo a finales de diciembre, podemos señalar los siguientes:

Balcanes

Aunque en la IV Conferencia Internacional para la aplicación de los acuerdos de paz en Bosnia Herzegovina, celebrada en Madrid en diciembre, se pretendía —con el fortalecimiento de la democracia, regreso de los refugiados, establecimiento de una economía de mercado y creación de un sistema judicial independiente y multiétnico— la paulatina retirada de la comunidad internacional del país, la realidad es que la frágil situación existente no permite, de momento, dicha retirada, mientras no se llegue a una total tolerancia y reconciliación entre sus comunidades. La declaración final de Madrid sólo sirvió para reforzar el papel y los poderes del Alto Representante Internacional para Bosnia, Westendorp, quien recalcó que los dos próximos años serán cruciales para construir una Bosnia moderna y democrática.

En Kosovo, el día de Navidad la guerrilla UCK rompió la tregua unilateral que mantenía desde octubre, como consecuencia de la ofensiva lanzada por Serbia en el norte de la provincia. Ambas acciones significaron un nuevo reto para la comunidad internacional, pudiendo dar Belgrado un

grave golpe a la frágil paz mantenida desde octubre, sin que los observadores de la OSCE fueran capaces de frenar la crisis. Se mire como se mire, la misión de la OSCE queda en entredicho.

Oriente Medio

Las elecciones anticipadas israelíes, confirmadas el día 21 de diciembre por el Parlamento, provocaron el desmembramiento del bloque conservador del Likud, con la aparición de varios candidatos. Era algo explicable, dada la debilidad de la coalición gubernamental, incapaz de imponer en la clase política su visión del plan de paz con los palestinos, que incluía la negativa de Netanyahu a reconocer la proclamación de un estado palestino independiente en mayo del próximo año. A esa situación puede unirse la congelación de la retirada israelí de Cisjordania y la virtual desaparición de Washington en sus intentos de mediación, debido al descrédito que sufren los Estados Unidos en el mundo árabe y al proceso contra Clinton. Ambos factores permiten augurar un aumento de la violencia en tan delicada zona.

Irak

Como era de esperar, el 17 de diciembre el presidente Clinton ordenó una ofensiva aérea sobre Irak, secundada por la RAF británica. Fueron ataques sobre blancos muy seleccionados que se mantuvieron durante cuatro días, aún sin contar con el apoyo unánime de la comunidad internacional e, incluso, de gran parte de sus aliados. Con esa ofensiva quedó bien claro que los Estados Unidos, siempre que lo estimen, utilizarán la fuerza militar más que el régimen de inspecciones, como forma más adecuada y efectiva de controlar a Saddam. Este ataque marcó, asimismo, una ruptura de los esfuerzos de la diplomacia de la ONU, organismo al que Washington advirtió su decisión de utilizar el "veto" si levantaba el embargo. También debe reseñarse que la OTAN se desvinculó de esos ataques "al no tener nada que ver con la forma en que se está manejando la crisis", palabras que escondían un cierto malestar por no haber sido consultada la Alianza antes del Ataque.

Rusia

Rusia y Bielorrusia que, junto con Ucrania, animaron en su día el proceso de desintegración de la URSS, reafirmaron, en los últimos días del año, la iniciación del proceso de reunificación mediante una consulta popu-

lar en 1999. Esa declaración, se estima puede ocultar otros objetivos y confirmar que Minsk es la capital de un Estado inviable, tanto por su posición geoestratégica como para desarrollar y fortalecer una economía independiente, no mediatizada por sus grandes vecinos. En suma, nos aparece un país sin gran futuro.

Por otro lado Moscú anunció en esos mismos días la modernización de su arsenal nuclear de misiles estratégicos, lo que ha sido posible al no haber ratificado el Parlamento ruso el tratado "Start II" sobre reducción de armas nucleares estratégicas, ya aceptado por el Congreso norteamericano. La dificultad en la ratificación, según se proclama, es debido a la intervención de los Estados Unidos y Reino Unido contra Irak.

Japón

Se cerró 1998 conociéndose que el desempleo en Japón registró el nivel más alto de su historia, agravando su recesión económica, factor negativo al que se añade que los créditos problemáticos de las 17 mayores entidades financieras comerciales, hasta el 31 de marzo pasado, suman cerca de 61 billones de pesetas.

LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA

Por JAVIER PARDO DE SANTAYANA Y COLOMA

El mes de diciembre fue pródigo en acontecimientos relevantes para la Unión Europea. En una decisión coordinada, todos los países del club del Euro acordaron rebajar el tipo de interés al 3 por ciento, nivel que, según declaraciones de Duisenberg, debe ser mantenido en el futuro próximo.

La cumbre franco-alemana de Potsdam reveló cierta falta de entendimiento entre los dos países, aunque hubo coincidencia en algunos aspectos, como se deduce del deseo compartido de que la UEO se integre en la Unión Europea y de la posición en lo que se refiere al empleo, que fue objeto de una propuesta común presentada a la cumbre de Viena. Por su parte, España y Gran Bretaña confirmaron la línea de buena relación hasta ahora apuntada, y suscribieron también una propuesta conjunta sobre el empleo, hecho significativo si se tiene en cuenta la diferente ideología política de sus gobernantes. Una y otra propuesta fueron la base para la

redacción del correspondiente documento firmado en Viena. En esta cumbre volvió a ponerse de relieve la falta de consenso respecto al futuro de la financiación. España desarrolló una oposición activa a la idea de la congelación y también a la supresión directa, gradual o encubierta de los fondos de cohesión, consiguiendo que se retirasen las propuestas en tal sentido y se retornase a la Agenda 2000 como única referencia oficial.

Las conclusiones finales, que aplazan la decisión hasta la cumbre de marzo, respondieron al objetivo español de que desapareciese la palabra "estabilización" y determinaron que la base de la futura negociación sea precisamente la Agenda 2000, propuesta por la Comisión Europea. Uno de los aspectos más esperanzadores de las conclusiones finales es la posibilidad que en ellas se apunta de la búsqueda de la solución por otras vías que impliquen una mayor contribución de otros países "ricos", aparte de Alemania.

La atonía observada a lo largo del año, en lo que se refiere a las definiciones pendientes sobre la seguridad y la defensa europeas, se rompió espectacularmente en los últimos días del año. En efecto, iniciado ya diciembre, las propuestas de Francia y Gran Bretaña sobre el futuro de la Unión Europea Occidental fueron debatidas en la cumbre franco-británica de Saint Malo, para ser luego presentadas en Bruselas. Al terminar el año, contemplamos una situación en la que la postura británica se aproxima a la francesa y también a la española, al orientarse hacia el establecimiento de una identidad europea de defensa dentro de la UE mediante una fórmula que aproveche todo cuanto de válido tiene la UEO. Así, parece haber quedado descartada la desaparición de esta última organización, propugnada inicialmente, en términos prácticos, por la propuesta británica. La solución definitiva debe adoptarse antes de la cumbre de la OTAN de la próxima primavera, para evitar que posteriores decisiones sobre la identidad europea de defensa obliguen a revisar el nuevo concepto estratégico, que deberá aprobarse en esa fecha y ocasión.

En cuanto a la reunión ministerial de diciembre, el paso más significativo para la Alianza ha sido la aprobación del plan detallado de puesta en práctica de la estructura militar integrada.

En relación con el conflicto balcánico reseñaremos la celebración en Madrid de la conferencia para la aplicación de los acuerdos de paz para Bosnia, en la que se consolidó y reforzó la autoridad del Alto Representante Internacional y se señalaron como objetivos prioritarios la asignatura pendiente del retorno de los refugiados y desplazados, la estructuración

del entramado democrático y la modernización de la economía, para así poder ir reduciendo progresivamente la tutela exterior.

El último día del año quedó fijado el tipo de cambio entre el euro y las monedas nacionales según valores que serán ya irreversibles. El señalado para la peseta asciende a 166,386, que, aunque ligeramente inferior al esperado por los analistas, responde prácticamente a lo previsto ya desde el mes de mayo. No hubo, por tanto, sorpresas, como tampoco polémica. Ese mismo día el Ministerio de Hacienda español entregó en la sede del Consejo de Ministros de la Unión el Programa de Estabilidad para los próximos cuatro años correspondiente a nuestra nación.

EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE

Por RICARDO ÁLVAREZ-MALDONADO MUELA

Entre los acontecimientos que han tenido lugar al finalizar el año 1998 cabe destacar los siguientes:

La condena oficial de Rusia, con el apoyo unánime de todos sus dirigentes y distintas fuerzas políticas, a los ataques efectuados por las Fuerzas Armadas de los EEUU y del Reino Unido a objetivos seleccionados en territorio iraquí los días 16, 17 y 18 de diciembre, que el Presidente ruso Boris Yeltsin calificó de "grosera violación de la Carta de la Naciones Unidas y de los Principios del Derecho Internacional".

Como gesto de protesta, el Ministro de Defensa ruso no asistió a la reunión prevista en Bruselas del Consejo Conjunto OTAN-Rusia. Cabe interpretar que con dicha postura Rusia ha mantenido la línea seguida en política exterior, durante todo el año, de continuar recabando el papel de gran potencia que considera le corresponde como heredera de la Unión Soviética.

En la Cumbre de la UE, que tuvo lugar en Viena los días 11 y 12 de diciembre, quedaron aplazadas las resoluciones pendientes de los asuntos contenidos en la llamada "Agenda 2000", en particular los relativos a la financiación de la UE y su incidencia en la ampliación prevista, que posiblemente sufrirá mayor demora.

Las decisiones al respecto se tomarán probablemente en la próxima Cumbre que, bajo presidencia alemana, se prevé celebrar en marzo de

1999. En ella, España se jugará la percepción de los fondos estructurales y de cohesión que recibe, al menos, en su monto actual.

LA ESTABILIDAD EN EL MEDITERRÁNEO

Por PEDRO LÓPEZ AGUIRREBENGOA

Turquía

En los primeros días de diciembre, Bulent Ecevit (Partido de la Izquierda Democrática o DSP), viceprimer ministro del gobierno en funciones y líder del Partido Socialdemócrata, recibía el encargo de formar nuevo gobierno. Su fracaso, sin embargo, quedaba patente el 21 de dicho mes, por lo que el presidente encomendaba el cometido a Yalim Erez, diputado independiente y Ministro en funciones de Industria. Este, con una línea más aperturista que la de Ecevit, parecía dispuesto a lograr un ejecutivo que pudiese obtener amplio respaldo parlamentario, sin excluir contactos con los islamistas del partido Facilet. Sin embargo, tampoco lo lograba y el Presidente encargaba de nuevo el cometido a Ecevit el 8 de enero, tras el anuncio de Tansu Ciller (Partido de la Recta Vía o DYP) de que apoyaría la investidura de un gobierno minoritario del DSP, que se espera sea anunciado de inmediato. El plazo constitucional de 45 días para formar gobierno tenía su horizonte en el 9 de enero. A partir de esa fecha, de lograrse el empeño, el Presidente podía, en principio, nombrar un Primer Ministro de su elección sin que este tenga que someterse al voto de confianza del legislativo, lo que parece Ciller no estaba dispuesto a asumir.

Argelia

El nombramiento del nuevo Gobierno con Smail Hamdani, diplomático de carrera, como Primer Ministro, da la impresión de una continuidad con la línea de la anterior administración de Ouyahia. Sin embargo, el inicio del Ramadán podría conllevar el recrudecimiento de la violencia terrorista.

Sahara

El 29 de diciembre la Presidencia de la UE hacía pública una declaración en la que se reiteraba el pleno apoyo al Plan de arreglo de la ONU y

propuesta de mediación del Secretario General para resolver las diferencias que persisten entre las partes cara a la realización del Referendum, especialmente en lo relativo a la conclusión de la identificación de votantes y los tres grupos tribales litigiosos. Se expresaba igualmente la satisfacción por la Resolución 1215 del Consejo de Seguridad, de 17 de diciembre, prolongando el mandato de la Minurso hasta el 31 de enero, con la esperanza de que este plazo permita ulteriores consultas y el logro de un acuerdo.

Irak

El 12 de diciembre, el Consejo Europeo de Viena debatió la situación relativa a Iraq, condenando el no cumplimiento pleno de sus compromisos de cooperar con UNSCOM y formulando un nuevo llamamiento a Bagdad para que se ajustase a las Resoluciones del Consejo de Seguridad y prestase toda la cooperación necesaria para que este último, sobre la base de un informe del Secretario General de las Naciones Unidas, pudiese hacer un examen exhaustivo de la situación.

Confrontado con la “muerte lenta” por las sanciones y el acoso de la UNSCOM, cuya acción, bajo la dirección del Embajador Richard Butler, es percibida por Bagdad como instrumento manipulado por los EEUU para su perpetuación, hasta el logro de su declarado objetivo de derrocar a Sadam Hussein, el régimen iraquí parecía optar por la escalada en la agitación y la confrontación. El último y polémico informe de Butler sería el elemento desencadenante de la nueva crisis.

El 16 de diciembre los EEUU y Gran Bretaña iniciaban acciones aéreas de represalia contra Irak, que concluirían al filo del inicio del Ramadán y, curiosamente, el mismo día en que el Congreso norteamericano aprobaba el pase al Senado de la causa de destitución presidencial.

La acción de los aliados, justificada desde el contumaz incumplimiento iraquí de sus obligaciones internacionales en el marco de las resoluciones de la ONU —la exigencia de su cumplimiento y la condena por no hacerlo es objeto de general consenso—, sorprendía al Consejo de Seguridad cuando precisamente celebraba sesiones sobre la cuestión iraquí, lo que dejaba de alguna forma en entredicho el papel onusiano. Coincidía, además, con el citado proceso parlamentario norteamericano y justo después del regreso de Clinton de su visita a Gaza e Israel, con algunos logros sustantivos, especialmente para los palestinos, pero sin obtener un cambio de actitud que permita allanar definitivamente la aplicación del Memorandum de Wye.

Ello daría lugar a diversas lecturas y reacciones ante la crisis iraquí, que incluso afloraban en algunos medios políticos de los EEUU, así como interrogantes sobre la adecuación de la política norteamericana, para algunos carente del diseño estratégico global y sin los dobles raseros que requeriría el tratamiento de los factores de inestabilidad que inciden en la compleja área que va desde el Mediterráneo a la India.

El primer propósito declarado de los aliados era deteriorar al máximo las capacidades militares nucleares, biológicas y químicas iraquíes y evitar la posibilidad de que amenacen de nuevo a sus vecinos, pero no se ocultaba que iba más allá y que de una postura de “doble contención”, que de por sí trasciende el ámbito estricto de las resoluciones de la ONU sobre Irak, se ha pasado a un objetivo final que es el derrocamiento del régimen iraquí. Por otra parte, tales capacidades iraquíes son confusas y los resultados de la acción aliada, junto con el endurecimiento iraquí contra la perpetuación de las sanciones y el retorno de la UNSCOM en su antigua configuración, permiten prever un bloqueo de soluciones políticas y rebrotes de violencia. Los primeros días del año nuevo serían escenario de incidentes en las zonas de no sobrevuelo, y queda en el aire la razón por la cual no se aplica el mismo tratamiento a los arsenales de armas no convencionales de que, según “vox populi”, disponen otros países del área. El Secretario General de la ONU no dejaba de expresar su malestar, marcando distancias con la política norteamericana hacia Irak, al señalar que la Resolución 687 del CS (1991), que declaró el alto el fuego e impuso las sanciones quedaba ligado en la misma únicamente al cumplimiento de las obligaciones de desarme, sin ninguna otra condición, como las que sugieren los EEUU.

La preocupación de Jordania por la crisis se hacía de nuevo visible, por sus posibles consecuencias tanto en el plano interno y del suministro de petróleo como en la ulterior demora del PPOM. La destrucción de infraestructuras económicas iraquíes, como la refinería de Basora, justificada por parte americana por servir para canalizar exportaciones ilegales, podía dejar sin efecto la política de “petróleo por alimentos” aprobada por la ONU y dañar ulteriormente a la población iraquí reforzando su sentimiento nacionalista. Para algunos, la eventual eliminación de Sadam Hussein no haría sino abrir una etapa de lucha interna de imprevisibles consecuencias. Rusia se alineaba en las críticas a la acción militar unilateral aliada, no ocultando el sentimiento de que la crisis había sido artificialmente suscitada y criticando el papel de la UNSCOM (Informe Butler), como lo hacían China, y en términos más comedidos Francia, entre otros miembros del Consejo. Los dirigentes palestinos quedaban en una posición incómoda,

como buena parte de los del mundo árabe que, aunque opuestos al régimen de Sadam Hussein, tienen unas opiniones públicas cuya reacción de solidaridad de fondo con la población iraquí y ante lo que perciben como un abuso de la política de poder occidental cara al nacionalismo árabe, no ha desaparecido, aunque las protestas visibles hayan sido más atenuadas. Europa mostraba solidaridad con los aliados occidentales, a la par que evidenciaba dudas respecto al encuadre de la acción militar y sus consecuencias. En resumen, la crisis continúa larvada y la acción militar aleja la posibilidad de una solución política.

Balcanes Occidentales

El Consejo Europeo subrayaba la necesidad de un cumplimiento total e inmediato por las dos partes implicadas en la crisis de Kosovo de las Resoluciones 1160, 1199, 1203 y 1207 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el fin de alcanzar una resolución pacífica del conflicto. Lamentando la falta de compromiso de las dos partes a la hora de apoyar el proceso negociador, hacía un llamamiento al Gobierno de la RFY y a los líderes de los albaneses de Kosovo para que muestren flexibilidad en las conversaciones necesarias para alcanzar un acuerdo sobre el futuro estatuto de Kosovo. Confirmaba también la determinación de la UE de apoyar el proceso político, contribuir a los esfuerzos humanitarios y, en cuanto las partes hayan llegado a dicho acuerdo, ayudar a la reconstrucción de Kosovo, incluso mediante una conferencia de donantes.

Sin embargo, y coincidiendo con la Navidad, se reavivaban las acciones armadas, especialmente por parte serbia.

La reunión en Madrid (15 y 16 de diciembre) del Consejo de Aplicación de la Paz ofrecía perspectivas esperanzadoras hacia una normalización en Bosnia y Herzegovina.

Proceso de Paz en Oriente Medio

El Consejo Europeo de Viena acogía con satisfacción el Memorandum de Wye River de 23 de octubre de 1998 y, al tiempo que tomaba nota de los avances conseguidos por ambas partes en su aplicación, deploraba la reciente violencia, las recriminaciones mutuas y el establecimiento de nuevas condiciones (israelíes) que amenazan con desbaratarlo. Apela asimismo a las partes para que hagan gala de moderación, se abstengan de actos unilaterales y apliquen plenamente las disposiciones restantes. La histórica visita del Presidente norteamericano a Gaza, como se ha indi-

cado, suponía un espaldarazo para los palestinos, que cumplieran a través de su Consejo Nacional el compromiso de anular solemnemente las disposiciones de su Carta Nacional contrarias a Israel, y la apertura de una nueva era en sus relaciones con Washington. Sin embargo, ni en la entrevista tripartita con el Primer Ministro Netanyahu ni en la etapa de Jerusalén se lograría vencer la resistencia israelí a avanzar en la aplicación de las previsiones de redespiegue territorial y otros aspectos clave como liberación de prisioneros, asentamientos y actuaciones en Jerusalén Este. Las nuevas exigencias israelíes significaban una virtual paralización en la ulterior aplicación de los compromisos de Wye y Oslo.

El 21 de diciembre, la Knesset israelí aprobaba en primera lectura, posteriormente refrendada el 4 de enero, la ley que permite el adelanto de las elecciones para la misma y las del Primer Ministro. Se ha previsto que estas tengan lugar el 17 de mayo y 1 de junio de 1999. Por otra parte, el Gobierno había aprobado el 20 de diciembre, y presentado en la Cámara, las 5 nuevas condiciones a imponer a los palestinos para continuar la aplicación de Wye (como la renuncia pública a un Estado con capitalidad en Jerusalén), pero la moción fue derrotada. La decisión ha puesto ya en marcha el proceso pre-electoral y su inmediata consecuencia ha sido el anuncio de nuevas candidaturas a la presidencia del gobierno en los dos grandes partidos y proyectos de creación de nuevas formaciones centristas emanadas desde ambos. Las primeras encuestas no son favorables a una nueva candidatura de Netanyahu, pero el panorama electoral siempre da sorpresas en Israel; cinco meses en el Oriente Medio o no cambia nada o pueden ser una eternidad... En todo caso, en esta ocasión más que nunca, los programas electorales tendrán como punto focal, el proceso de paz, del que serán, quizás, la última oportunidad de entendimiento negociado.

Resulta previsible que el proceso de paz y la aplicación de Wye sufran las consecuencias paralizadoras, o quizás incluso radicalizadoras, del proceso electoral, con medidas unilaterales israelíes sobre el terreno, constituyendo ello motivo de especial preocupación palestina. El Gobierno Netanyahu, ahora en funciones, ya ha confirmado su intención de congelar el memorandum de Wye. Un primer atisbo ha sido igualmente la propuesta, adoptada en primera lectura por la Knesset, de una nueva ley que exigiría, para toda retrocesión de territorios en el Golán y Jerusalén Este, su aprobación por la mayoría absoluta de la Cámara, seguida de un referendium.

IBEROAMÉRICA

Por JOSÉ SÁNCHEZ MÉNDEZ

En el aspecto económico general, el Banco Mundial, en su informe Previsiones Económicas Globales para 1999, publicado a principios de diciembre, vaticinaba un crecimiento de las economías iberoamericanas de tan solo un 0.6 por ciento y que *Brasil*, ya en recesión a finales de 1998, continuaría con un crecimiento negativo para el año siguiente. A este respecto, a finales de diciembre el Gobierno brasileño admitía que incumpliría su compromiso con el Fondo Monetario Internacional de cerrar el ejercicio con déficit en las cuentas externas inferior al 4.2 por ciento del PIB. Por otro lado, la tendencia a la baja del precio del petróleo aumentó la pérdida de ingresos, derivada de su venta, a la *economía venezolana*, que superará los 8.000 millones de dólares. Sin embargo, el 27 de diciembre el *Gobierno hondureño* anunciaba la condonación del 65 por ciento de su deuda externa con las grandes instituciones financieras internacionales, lo que suponen 2.800 millones de dólares, lo que servirá para ayudar a la reconstrucción tras el paso del huracán Mitch.

Si bien la reunión entre los tres poderes del Estado con el principal grupo guerrillero de *Colombia*, celebrada a finales de noviembre en Caquetanía, al sur del país, no proporcionó los grandes resultados que se esperaban, tanto el presidente Pastrana como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, confirmaban que el 7 de enero se efectuará la reunión prevista entre el jefe del Ejecutivo y el de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tirofijo, con el fin de firmar la paz. Al finalizar el año se produjo un violento enfrentamiento armado entre miembros de las FARC y militantes de las paramilitares Autodefensas Unidas, AUC, en el que se produjeron decenas de muertos, sin que se confirmase la muerte del líder de estas últimas, Carlos Castaño.

Tal como se preveía, el exteniente coronel Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales *venezolanas* con cerca del 60 por ciento de los votos, confirmando que sus primeras prioridades serán la lucha contra el fraude fiscal, la renegociación de la deuda externa y una nueva política petrolera. Chávez, que se definió como un demócrata convencido, recibió a mediados de diciembre el visado para poder viajar a Estados Unidos, y realizó un viaje por Argentina, Brasil, Colombia y posteriormente a México.

Aunque el Ministro del Interior británico, Jack Straw, autorizó el inicio del proceso de extradición del *general Augusto Pinochet* y el 10 de diciem-

bre el juez español Baltasar Garzón dictó contra éste auto de procesamiento, la Cámara de los Lores aceptó el recurso de los abogados del militar chileno para que se anulase el veredicto anterior de la misma por el que se rechazó su inmunidad soberana, con lo que el largo procedimiento judicial volverá a repetirse a primeros de 1999. El tema Pinochet ha ensombrecido las relaciones hispano-chilenas. El canciller José Miguel Insulza acusó al gobierno español de infringir el punto octavo de la Declaración de Oporto de la VIII Cumbre Iberoamericana, en el que “se exige el respeto a la soberanía nacional de los Estados y se rechaza enérgicamente la aplicación extraterritorial de leyes nacionales...”, advirtiendo que “Chile se planteará el asistir a una instancia donde se firma un documento el 18 y se viola al día siguiente”. Al mismo tiempo, el Senado chileno aprobó una resolución por la que se expresaba “el rechazo más enérgico por la actitud del gobierno español al dar curso a la solicitud de extradición del senador Augusto Pinochet”. Ello, sin embargo, no fue obstáculo para que el presidente de la Cámara Alta chilena visitase oficialmente España días más tarde y se entrevistase con José María Aznar.

En *Paraguay* el general Lino Oviedo podría volver a prisión al anular la Corte Suprema de Justicia el decreto del presidente Raúl Cubas por el que le concedía la libertad, lo cual puede desatar un grave conflicto de poderes, ya que Raúl Cubas ha expresado la inconstitucionalidad de la medida judicial porque lesiona las facultades del presidente de la República.

El año 1998 terminó con un nuevo gesto de *Fidel Castro* hacia Juan Pablo II, al declarar festivo para siempre el Día de Navidad, tras 29 años de prohibición.

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

Coordinador: D. JAVIER PARDO DE SANTAYANA Y COLOMA
Teniente General del E. T.

Secretario: D. ALEJANDRO CUERDA ORTEGA
Capitán de Navío

Vocales: D. RICARDO ÁLVAREZ-MALDONADO MUELA
Vicealmirante

D. FEDERICO FERNANDO DE BORDEJÉ Y MORENCOS
Contraalmirante

D. PEDRO LÓPEZ AGUIRREBENGOA
Embajador en Misión Especial para Asuntos del Mediterráneo

D. JOSÉ SÁNCHEZ MÉNDEZ
General de División del E.A.

ÍNDICE

	<i>Página</i>
SUMARIO	7
INTRODUCCIÓN	9
<i>Capítulo I</i>	
VISIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL 1998	13
Perspectivas en el nuevo orden mundial	15
Avances substanciales en la construcción de Europa	18
Las nuevas misiones de la OTAN	23
Norteamérica se afianza como única potencia mundial	26
De una aparente normalidad al recrudecimiento de la violencia en los balcanes	30
La encrucijada turca	34
Un difícil año para Rusia y su mundo	36
África mediterránea entre el fanatismo y la estabilidad	42
El Oriente Medio, foco permanente de tensiones, rivalidades y conflictos	46
Del auge regionalista en la India a la quiebra Indonesia	54
La búsqueda de nuevos modelos en el Extremo Oriente	56
Paulatina consolidación de la democracia y el desarrollo en Iberoamérica	61
Lucha de influencias en el África Subsahariana	66
<i>Capítulo II</i>	
LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA	73
Balance del año 1998	75
El Euro	80
La cumbre de Cardiff y la informal de Pörschach	84
La reforma institucional	87
La Identidad Europea de Seguridad y Defensa	88

Los EEUU ante el proceso de construcción europea	91
Rusia y la construcción de Europa	93
La conflictividad en Europa	96
El año estratégico español en el marco de la construcción europea .	99

Capítulo III

EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE	107
Introducción. Marco del estudio	109
Europa Central	109
Los países bálticos	113
La Comunidad de Estados Independientes (CEI)	114
— Ucrania	114
— Bielorrusia	116
— Moldavia	117
La Federación Rusa	117
— Composición y organización política	117
— Situación interna	119
— La política exterior rusa	124
— La capacidad militar rusa	129
— Los militares en la política interna de la Federación Rusa	130
La ampliación de la OTAN hacia el este de Europa	131
La ampliación de la Unión Europea	137
Consideraciones finales	141

Capítulo IV

LA ESTABILIDAD EN EL MEDITERRÁNEO	147
Consideraciones generales político-estratégicas	149
El Mediterráneo Occidental y el Magreb	154
La Unión del Magreb Árabe (UMA)	155
Marruecos	155
Ceuta y Melilla	157
Argelia	157
Túnez	160
Libia	161
Sáhara Occidental	162
Gibraltar	164

El Oriente Medio	165
— El Proceso de paz	165
Chipre y Turquía	167
Los Balcanes	169
— Ex-Yugoslavia	169
Albania	170
Malta	171
La seguridad de Europa y la estabilidad y seguridad del Mediterráneo	171
El proceso de Barcelona como iniciativa innovadora para la creación en el Mediterráneo de una zona de estabilidad y prosperidad com- partida	173
El Foro Mediterráneo	178
Los otros “diálogos mediterráneos”	179
El diálogo mediterráneo de la OSCE	180
Capítulo V	
IBEROAMÉRICA	183
Aspectos políticos	186
La Seguridad y la Defensa	189
— Violencia política	189
— La guerrilla	190
Confrontación indígena	193
El narcotráfico	196
Las disputas fronterizas	201
No se ha producido la anunciada carrera de armamentos	204
Aspectos económico-sociales	207
La segunda Cumbre de las Américas	212
La VIII Cumbre Iberoamericana	216
Las naciones iberoamericanas	219
España en Iberoamérica	244
EPÍLOGO	251
COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO	265
ÍNDICE	267



CUADERNOS DE ESTRATEGIA

- | Nº | TÍTULO |
|-----|---|
| 01 | La industria alimentaria civil como administradora de las FAS y su capacidad para la defensa estratégica. |
| 02 | La ingeniería militar de España ante el reto de la investigación y el desarrollo en la Defensa Nacional. |
| 03 | La industria española de interés para la defensa ante la entrada en vigor del Acta Única. |
| 04 | Túnez: su realidad y su influencia en el entorno internacional. |
| 05 | La Unión Europea Occidental, (UEO) (1955-1988). |
| 06 | Estrategia regional en el Mediterráneo Occidental. |
| 07 | Los transportes en la raya de Portugal. |
| 08 | Estado actual y evaluación económica del triángulo España-Portugal-Marruecos. |
| 09 | <i>Perestroika</i> y nacionalismos periféricos en la Unión Soviética. |
| 10 | El escenario espacial en la batalla del año 2000 (I). |
| 11 | La gestión de los programas de tecnologías avanzadas. |
| *12 | El escenario espacial en la batalla del año 2000 y (II). |
| 13 | Cobertura de la demanda tecnológica derivada de las necesidades de la Defensa Nacional. |
| 14 | Ideas y tendencias en la economía internacional y española. |
| *15 | Identidad y solidaridad nacional. |
| 16 | Implicaciones económicas del Acta Única 1992. |
| 17 | Investigación de fenómenos belígenos: Método analítico factorial. |
| 18 | Las telecomunicaciones en Europa en la década de los 90. |
| *19 | La profesión militar desde la perspectiva social y ética. |
| 20 | El equilibrio de fuerzas en el espacio sur europeo y mediterráneo. |
| 21 | Efectos económicos de la unificación alemana y sus implicaciones estratégicas. |

Nº	TÍTULO
*22	La política española de armamento ante la nueva situación internacional.
23	Estrategia finisecular española: México y Centroamérica.
*24	La Ley Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, (cuatro cuestiones concretas).
25	Consecuencias de la reducción de los arsenales militares negociados en Viena, 1989. Amenaza no compartida.
26	Estrategia en el área iberoamericana del Atlántico Sur.
27	El espacio económico europeo. Fin de la guerra fría.
28	Sistemas ofensivos y defensivos del espacio (I).
29	Sugerencias a la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT).
30	La configuración de Europa en el umbral del siglo XXI.
*31	Estudio de «inteligencia operacional».
32	Cambios y evolución de los hábitos alimenticios de la población española.
33	Repercusiones en la estrategia naval española de aceptarse las propuestas del Este de la CSBM, dentro del proceso de la CSCE.
34	La energía y el medio ambiente.
*35	Influencia de las economías de los países mediterráneos del norte de África en sus respectivas políticas de defensa.
36	La evolución de la seguridad europea en la década de los 90.
37	Análisis crítico de una bibliografía básica de sociología militar en España. 1980-1990.
38	Recensiones de diversos libros de autores españoles, editados entre 1980-1990, relacionados con temas de las Fuerzas Armadas.
39	Las fronteras del Mundo Hispánico.
40	Los transportes y la barrera pirenaica.

Nº

TÍTULO

- 41 Estructura tecnológica e industrial de defensa, ante la evolución estratégica del fin del siglo xx.
- 42 Las expectativas de la I+D de Defensa en el nuevo marco estratégico.
- 43 Costes de un ejército profesional de reclutamiento voluntario. Estudio sobre el Ejército profesional del Reino Unido.
- 44 Sistemas ofensivos y defensivos del espacio (II).
- *45 Desequilibrios militares en el Mediterráneo Occidental.
- 46 Seguimiento comparativo del presupuesto de gastos en la década 1982-1991 y su relación con el de Defensa.
- *47 Factores de riesgo en el área mediterránea.
- *48 Las Fuerzas Armadas en los procesos iberoamericanos de cambio democrático (1980-1990).
- *49 Factores de la estructura de seguridad europea.
- *50 Algunos aspectos del régimen jurídico-económico de las FAS.
- 51 Los transportes combinados.
- *52 Presente y futuro de la Conciencia Nacional.
- *53 Las corrientes fundamentalistas en el Magreb y su influencia en la política de defensa.
- 54 Evolución y cambio del este europeo.
- 55 Iberoamérica desde su propio sur (la extensión del Acuerdo del Libre Comercio a Sudamérica).
- 56 La función de las Fuerzas Armadas ante el panorama internacional de conflictos.
- 57 Simulación en las Fuerzas Armadas españolas, presente y futuro.
- 58 La sociedad y la Defensa Civil.
- 59 Aportación de España en las Cumbres Iberoamericanas: Guadalajara 1991-Madrid 1992.
- 60 Presente y futuro de la política de armamentos y la I+D en España.
- 61 El Consejo de Seguridad y la crisis de los países del Este.

- 62 La economía de la defensa ante las vicisitudes actuales de las economías autonómicas.
- 63 Los grandes maestros de la estrategia nuclear y espacial.
- 64 Gasto militar y crecimiento económico. Aproximación al caso español.
- 65 El futuro de la Comunidad Iberoamericana después del V Centenario.
- 66 Los estudios estratégicos en España.
- 67 Tecnologías de doble uso en la industria de la defensa.
- 68 Aportación sociológica de la sociedad española a la Defensa Nacional.
- 69 Análisis factorial de las causas que originan conflictos bélicos.
- 70 Las conversaciones internacionales Norte-Sur sobre los problemas del Mediterráneo Occidental.
- 71 Integración de la red ferroviaria de la península Ibérica en el resto de la red europea.
- 72 El equilibrio aeronaval en el área mediterránea. Zonas de irradiación de poder.
- 73 Evolución del conflicto de Bosnia (1992-1993).
- 74 El entorno internacional de la Comunidad Iberoamericana.
- 75 Gasto militar e industrialización.
- 76 Obtención de los medios de defensa ante el entorno cambiante.
- 77 La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea (UE).
- 78 La red de carreteras en la península Ibérica, conexión con el resto de Europa mediante un sistema integrado de transportes.
- 79 El derecho de intervención en los conflictos.
- 80 Dependencias y vulnerabilidades de la economía española: su relación con la Defensa Nacional.
- 81 La cooperación europea en las empresas de interés de la defensa.
- 82 Los *cascos azules* en el conflicto de la ex Yugoslavia.

Nº

TÍTULO

- 83 El sistema nacional de transportes en el escenario europeo al inicio del siglo XXI.
- 84 El embargo y el bloqueo como formas de actuación de la comunidad internacional en los conflictos.
- 85 La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) para Europa en el marco del Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares (TNP).
- 86 Estrategia y futuro: la paz y seguridad en la Comunidad Iberoamericana.
- 87 Sistema de información para la gestión de los transportes.
- 88 El mar en la defensa económica de España.
- 89 Fuerzas Armadas y Sociedad Civil. Conflicto de valores.
- 90 Participación española en las fuerzas multinacionales.
- 91 Ceuta y Melilla en las relaciones de España y Marruecos.
- 92 Balance de las Primeras Cumbres Iberoamericanas.
- 93 La cooperación Hispano-Franco-Italiana en el marco de la PESC.
- 94 Consideraciones sobre los estatutos de las Fuerzas Armadas en actividades internacionales.
- 95 La unión económica y monetaria: sus implicaciones.
- 96 Panorama estratégico 1997/98.
- 97 Las nuevas españas del 98.
- 98 Profesionalización de las Fuerzas Armadas: los problemas sociales.
- 99 Las ideas estratégicas para el inicio del tercer milenio.

* Agotado. Disponible en las bibliotecas especializadas y en el Centro de Documentación del Ministerio de Defensa.

